

Causa Rol N° 45.376

Sentencia dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Álvaro Mesa Latorre.

Temuco, treinta de mayo de dos mil veinticinco. -

VISTOS:

ÍNDICE

Relación de la Sentencia..... 2 -6

Resumen ejecutivo..... 6

Actuarios de tramitación y dato técnico..... 6-7

En cuanto a la Acción Penal:

Declaraciones 7 -68

Documentos 68 -80

Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal..... 80-84

Calificación jurídica de los hechos..... 84-91

Concepto de Lesa Humanidad..... 91-94

Declaraciones indagatorias y sus respectivos análisis..... 94- 131

En cuanto a las Defensas..... 131- 132

Consideraciones previas al análisis de las defensas:

Resumen ejecutivo del auto acusatorio..... 132-134

Estado de Derecho..... 134- 139

Obligación de Investigar..... 139-157

Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos
(Delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por Tribunales alemanes
..... 157-168

Convenios de Ginebra..... 168-169

Análisis de las defensas específicas..... 169-174

Reflexiones de lesa humanidad..... 174-181

Adhesión a la acusación fiscal y análisis.....	181-182
Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal:	
Atenuante de responsabilidad penal.....	182
Determinación de la Pena.....	183-185
Beneficios de la Ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.....	185-193
En cuanto a la Acción Civil:	
Demanda civil.....	193-196
Contestación de la demanda civil.....	196-202
Análisis de la contestación de la demanda civil....	202-217
Acreditación probatoria del daño moral.....	217-219
Montos; reajustes e intereses de las sumas demandadas.....	220-221
Aspectos Resolutivos	221-224

RELACIÓN DE LA SENTENCIA:

Que se ha iniciado esta **causa rol N° 45.376** del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, para investigar los delitos de detención ilegal, apremios ilegítimos y asociación ilícita en las personas de Pedro Ñirripil Paillal, Juan Segundo Tralcal Colileo, Ceferino Millalén Peralta, Luis Fernando Tralcal Huenchún, determinar la responsabilidad que en tales hechos le ha cabido a:

1. DOMINGO ANTONIO CAMPOS COLLAO, R.U.N. 2.582.797-K, chileno, natural de Ovalle, viudo, 88 años, Sargento 1° en situación de retiro de Carabineros de Chile, domiciliado en domiciliado en Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, camino Quilapilún, parcela 25 s/n, comuna de Til Til, región Metropolitana, extracto filiación y antecedentes de fs. 783 a fs. 788 (Tomo III)

Se inició la causa por querella criminal de David Alberto Morales Troncoso, que consta a **fs. 7 a fs. 12 (Tomo I)**, por los delitos de detención ilegal, apremios ilegítimos y asociación ilícita en las personas de Pedro Ñirripil Paillal, Juan Segundo Tralcal Colileo, Ceferino Millalén Peralta y Luis Fernando Tralcal Huenchún, en

contra de todos aquellos que resulten responsables y en definitiva condenarlos y aplicar el máximo de las penas legales, con costas.

A fs. 477 (Tomo II), del 16 de octubre de 2018 se ordena agregar copia autorizada de la querella presentada en causa rol N° 114.086 de ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, a objeto que se investigue en esta causa los hechos relatados por don Octavio Renato Catalán Lincoleo

A fs. 479 a fs. 492 (Tomo II), querella criminal de Jorge Enrique Silhi Zarzar, por los delitos de secuestro y aplicación de tormentos en la persona de Octavio Renato Catalán Lincoleo, en contra de todos aquellos que resulten responsables y en definitiva condenarlos y aplicar el máximo de las penas legales, con costas.

A fs. 515 (Tomo II), 04 de junio de 2019 resolución que ordena agregar y desglosar declaración de Manuel Martínez Ulloa de causa rol N° 45.353 de ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, para que se investigue los hechos narrados por el Martínez Ulloa en la presente causa.

A fs. 577 (Tomo III), el 21 de julio de 2021, se dictó resolución que ordena agregar y desglosar antecedentes relacionados a Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos y Carlos Antonio Navarro Schifferli, en causa rol N° 45.357 de ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, para que se investiguen los hechos narrados en la presente causa.

A fs. 872 a fs. 873 (Tomo III), el 06 de marzo de 2019, se dictó resolución que ordena agregar y desglosar los antecedentes relacionados a Tomás Raúl Catalán Lincoleo y doña Eliana del Carmen Catalán Lincoleo en causa rol 114.086 de ingreso criminal del Primer juzgado del Crimen de Temuco, para que se investiguen los hechos narrados en la presente causa.

A fs. 1.052 a fs. 1.070 (Tomo IV), con fecha 03 de septiembre de 2024, se sometió a proceso a Domingo Antonio Campos Collao como autor de los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos, en su carácter de lesa humanidad, en las personas de Pedro Ñirripil Paillal, Juan Segundo Tralcal Colileo, Ceferino Millalén Peralta, Manuel Martínez Ulloa, Octavio Renato Alarcón Lincoleo, Tomás Raúl Catalán Lincoleo y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, perpetrados en la comuna de Lautaro, desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante. Otorgándoles

la medida cautelar personal de arresto domiciliario total. Lo precedente fue confirmado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco rolante de fs. 1.102 (Tomo IV), el día 18 de octubre de 2024.

A **fs. 1.124 (Tomo IV)**, con fecha 26 de octubre de 2024, **se declaró cerrado el sumario.**

A **fs. 1.134 a fs.1.149 (Tomo IV)**, con fecha 26 de noviembre de 2024 se dictó auto acusatorio en contra de Domingo Antonio Campos Collao, en calidad de autor de los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos, en su carácter de lesa humanidad, en las personas de 1)Pedro Ñirripil Paillal, 2)Juan Segundo Tralcal Colileo, 3)Ceferino Millalén Peralta, 4)Manuel Martínez Ulloa, 5)Octavio Renato Catalán Lincoleo, 6)Tomás Raúl Catalán Lincoleo y 7)Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, perpetrados en la comuna de Lautaro desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante.

A **fs. 1.150 (Tomo IV)**, se dictó resolución del 02 de diciembre de 2024, se dictó sobreseimiento temporal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 409 N°2 del Código de Procedimiento Penal, respecto de Luis Fernando Tralcal Huenchún, Carlos Antonio Navarro Schifferli y Eliana del Carmen Catalán Lincoleo.

A **fs. 1170 a fs. 1179 (Tomo V)**, el abogado David Morales Troncoso en representación de Pedro Ñirripil Paillal, Juan Segundo Tralcal Colileo, Juana del Carmen Millalén Lepilao-Tralcal y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, se adhiere a la acusación fiscal en contra de Domingo Antonio Campos Collao, en calidad de autor de los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos en contra de Pedro Ñirripil Paillal, Juan Segundo Tralcal Colileo, Ceferino Millalén Peralta, Manuel Martínez Ulloa, Octavio Renato Catalán Lincoleo, Tomas Raúl Catalán Lincoleo y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos.

A **fs. 1170 a fs. 1179 (Tomo V)**, el abogado David Morales Troncoso, en representación de Pedro Ñirripil Paillal, Juan Segundo Tralcal Colileo, Juana del Carmen Millalén Lepilao-Tralcal y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, deduce acción civil en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por Diego Acuña Gálvez, abogado procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Temuco, solicitando se condene al demandado a la suma total de \$300.000.000 (trescientos

millones de pesos) para los demandantes civiles según se indica o la suma que el Tribunal determine en justicia, con reajustes, interés legales y las costas del juicio.

A **fs. 1181 (Tomo V)**, del 26 de diciembre de 2024 se tuvo por abandonada la acción del querellante Jorge Silhi Salazar en representación de Octavio Renato Catalán Lincoleo y Tomás Raúl Catalán Lincoleo.

De **fs. 1.190 de fs. 1.207 (Tomo V)**, el abogado Procurador Fiscal de Temuco, **Diego Acuña Gálvez**, en representación del Fisco de Chile, **contesta la demanda civil** deducida por el abogado David Morales Troncoso solicitando tener por contestada la demanda y, en definitiva, acoger las excepciones o defensas opuestas (Falta de legitimación activa de la demandante Juana Millalén Lepilao-Tralcal, en cuanto alega ser víctima por repercusión en calidad de hija de la víctima directa don Ceferino Millalén Peralta. En subsidio, improcedencia de la indemnización demandada por doña Juana Millalén Lepilao-Tralcal, por limitación de la justicia transicional y por haber sido ya reparada en la forma que se expresará. Excepción de reparación satisfactiva. Improcedencia de las indemnizaciones reclamadas por haber sido ya reparados los demandantes en conformidad a las leyes de reparación. Excepción de prescripción extintiva), negando lugar a dicha demanda en todas sus partes; y, en el evento improbable de que ella se acogiere, rebajar substancialmente el monto de la suma demandada por concepto de indemnización, de perjuicios, además de acoger la excepción que mira los reajustes e intereses y su cómputo, e improcedencia de condena en costas.

A **fs. 1.210 a fs. 1.213 (Tomo V)**, el abogado Rodrigo Cortés Carrasco en representación de **Domingo Antonio Campos Collao**, en lo principal de su escrito contesta acusación judicial, particular y adhesión a acusación fiscal; al primer otrosí: en subsidio atenuantes; segundo otrosí medios de prueba; al tercer otrosí beneficios legales; y al cuarto otrosí: privilegio de pobreza.

A **fs.1216 (Tomo V)**, con fecha 26 de febrero de 2025, se recibió la causa a prueba.

A **fs.1259 (Tomo V)**, el 24 de marzo de 2025, se certificó que el término probatorio se encontraba vencido.

A **fs. 1260 (Tomo V)**, del 24 de marzo de 2025, se trajeron los autos para efectos del **artículo 499 del Código de Procedimiento Penal**.

A **fs. 1278 (Tomo V)** se dictó sobreseimiento temporal y parcial respecto a los delitos de asociación ilícita y secuestro.

A **fs.1.261, fs. 1.277, fs. 1.288 y 1.296 (Tomo V)** se dictaron medidas para mejor resolver.

A **fs. 1.297**, se trajeron los autos para fallo.

Resumen ejecutivo:

EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL 1° al 30°: 1°) y 2°) En cuanto a la acción penal y elementos probatorios del proceso: Declaraciones y Documentos; **3°)** Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal; **4°) y 5°)** Calificación jurídica de los hechos; **6°) y 7°)** Concepto de Lesa Humanidad; **8°)** Declaraciones indagatorias de Domingo Antonio Campos Collao; **9°),10°)** Análisis de las declaraciones del acusado Domingo Antonio Campos Collao, corroboración con sus propios dichos y ponderación en relación a la prueba del proceso; **11°)** Defensa del abogado Rodrigo Cortes Carrasco en representación de Domingo Antonio Campos Collao; **Consideraciones Previas al Análisis de la Defensa: 13°)**. Resumen ejecutivo del auto acusatorio; **14°)** Estado de Derecho; **15°)** Obligación de investigar. **16°)** Jurisprudencia internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos (delitos de lesa humanidad) pronunciada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán; **17°)** Convenios de Ginebra; **18°)** Análisis de la Defensa Específica del acusado Domingo Antonio Campos Collao; **19°)** Reflexiones sobre lesa humanidad; **20°) y 21°)** Adhesión a la acusación fiscal y análisis del Tribunal; **Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal: 22°) y 23°)** Atenuante de responsabilidad penal y análisis del Tribunal; **24°), 25°), 26°), 27°)** Determinación de la pena; **28), 29°),30°)** Beneficios de la ley 18.216 y sus modificaciones posteriores;

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL 32° al 38°: 32°) Demanda Civil interpuesta por el abogado David Morales Troncoso en representación de Pedro Ñirripil Paillal, Juan Segundo Tralcal Colileo, Juana del Carmen Millalén Lepilao-Tralcal y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos; **33°)** Contestación de la Demanda Civil por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Diego Gálvez, en representación del Consejo de Defensa del Estado; **34°)** Análisis de la contestación de la demanda civil efectuada por el Fisco de Chile; **35°)** Acreditación probatoria del daño moral; **37°)** Montos; **38°)** Reajustes e intereses de la suma demandada.

Actuarios de tramitación y dato técnico:

a. Fecha de inicio de la causa: 30 de marzo de 2015

b. Actuario de Tramitación Sumario: Francisca Rosales Castillo, Cecilia Cruces Valdebenito.

c. Actuario de Tramitación Plenario: Leslie Villalobos Retamal y Francisca Rabié Figueroa.

d. Tomos V

Tomo I de fs. 1 a fs. 369

Tomo II de fs. 370 a fs.576

Tomo III de fs. 577 a fs. 918

Tomo IV de fs. 919 a fs.1.165

Tomo V de fs. 1.166 en adelante

Cuaderno reservado de fs. 1 a fs.27 (Tomo I).

Cuadernos separados de fs. 1 a fs. 1.092 (Tomo III).

e. Fojas: 231.

f. Considerandos: 38.

CONSIDERANDOS:

EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL.

1°) Que de **fs. 1.131 a fs. 1.149 (Tomo IV)**, con fecha 26 de noviembre de 2024, se dictó auto acusatorio en contra de Domingo Antonio Campos Collao, como autor de los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos, en su carácter de lesa humanidad, en las personas de 1) Pedro Ñirripil Paillal, 2) Juan Segundo Tralcal Colileo, 3) Ceferino Millalén Peralta, 4) Manuel Martínez Ulloa, 5) Octavio Renato Catalán Lincoleo, 6) Tomás Raúl Catalán Lincoleo y 7) Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos perpetrados en la comuna de Lautaro, desde la fecha del 11 de septiembre de 1973 en adelante.

2°) Que con el objeto de establecer en autos la existencia de los señalados ilícitos penales, se han reunido durante el curso de la investigación los siguientes elementos de convicción, además de los ya enunciados que se encuentran en el auto acusatorio de **fs. 1.131 a fs. 1.149 (Tomo IV)**, (que corren de **fs. 1 a fs. 1.130**), como las querellas deducidas antes individualizadas. Sin perjuicio, del análisis de las pruebas rendidas durante el plenario.

A. Declaraciones.

Los testimonios que a continuación se detallan corresponden a una síntesis de los aspectos sustanciales y pertinentes en relación a los hechos investigados, que los testigos expresaron:

- | | |
|--|---|
| 1. Juan Segundo Tralcal Colileo | 18. Luis Armando Larenas Catipillan |
| 2. Luis Fernando Tralcal Huenchún | 19. Héctor Gastón Báez Sanhueza. |
| 3. Juana Del Carmen Millalén Lepilao-Tralcal | 20. José Agustín Méndez Contreras |
| 4. Pedro Ñirripil Paillal | 21. Eduvina Patricia Millalén Lepilao-Tralcal |
| 5. Carmen Levimilla Carrillo | 22. Víctor Matus Vásquez |
| 6. Emilia Mañil Painequeo | 23. Manuel Martínez Ulloa |
| 7. Pablo Cheuquepán Cañiumil | 24. Irma Eliana Velozo |
| 8. José Segundo Yaufulem Pinto | 25. Filiberto Jara Gómez |
| 9. Jorge Enrique Schweizer Gómez | 26. Octavio Renato Catalán Lincoleo |
| 10. Ilda Teresa Morales Jaque | 27. Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos |
| 11. Carlos Antonio Navarro Schifferli | 28. Héctor Alejandro Pinilla González |
| 12. Levio Huaiquil Namoncura | 29. Mario Ponce Orellana |
| 13. Rosa Herminia Mulato Rañil | 30. Tomás Raúl Catalán Lincoleo |
| 14. Margarita Del Carmen Cuevas Navarrete | 31. Julia Mercedes Millalén Lepilao-Tralcal |
| 15. Pedro Huenul Huaiqui | 32. Pedro Francisco Antipe Ñanco |
| 16. Sergio Manuel Jara Sandoval | 33. Juan Mario Mila Millalén. |
| 17. Ángel Secundino Fuentes Pardo | |

A.1 JUAN SEGUNDO TRALCAL COLILEO (29 años para la época de los hechos), quien declaró de fs. 16 a fs. 18 (Tomo I), copia de fs. 35 a fs. 37 (Tomo I) y de fs.44 a fs.45 (Tomo I), de fs. 55 a fs. 56 (Tomo I) y de fs. 175 a fs. 176 (Tomo I).

En **declaración extrajudicial** con fecha 15 de mayo de 2015, **rolante de fs.16 a fs.18, copia de fs. 35 a fs. 37 y de fs.44 a fs.45 (Tomo I)**. Relata que para el año 1973, tenía la edad de 29 años, se encontraba casado con doña Delfina Huenchumán Paillal, con quién tenía siete hijos y vivía en el mismo inmueble que en la actualidad habita. Se desempeñaba como agricultor en el Asentamiento Fernando Tellier junto a Pedro Ñirripil, Elías Catalán, Juan Segundo Tralcal Huenchumán, entre otros. Anexa que la primera vez que fue detenido ocurrió después del golpe militar, en el asentamiento Femando Tellier, siendo aprehendido

por personal de Carabineros de Lautaro, entre ellos se encontraba un carabinero de apellido Ponce. Posteriormente fue trasladado hasta la Comisaría de Lautaro, donde permaneció alrededor de ocho días. En este lugar fue maltratado por personal de esa unidad, en donde los golpeaban en la cara, los desvestían y los golpeaban en todo el cuerpo, para luego mojarlos. Rememora que les aplicaban electricidad en la cabeza y en la sien, motivo por el cual está perdiendo la visión del ojo izquierdo. El motivo por el cual fue detenido fue porque pertenecía al Asentamiento Fernando Tellier, aludiendo que eran unos ladrones. Fue detenido una segunda vez por personal de Carabineros, recordando que en esa oportunidad se encontraba el carabinero Ponce, no recordando fecha exacta. Apunta que se trasladaron hasta Lautaro dentro de un camión en el cual había alrededor de cincuenta personas, siendo tratados igual que animales. En esta oportunidad, permaneció dos días al interior de la Comisaría, siendo nuevamente torturado, en todo momento los mantenían con la vista vendada. Dentro de sus torturadores rememora al carabinero Ponce, ya que lo conocía con anterioridad, además lo identifica perfectamente porque una vez retirado se dedicaba a realizar fletes donde vivía con su familia. Precisa que con posterioridad al año 1973, la casa en la que vivía con su familia se incineró, motivo por el cual, junto con su señora, doña Delfina Huenchún Paillaf, se dirigieron hacia Lautaro para comprar algunas cosas. Es así como mientras caminaban por la ciudad, fue detenido por personal de Investigaciones del que recuerda a un detective de apellido Figueroa, siendo conducido a la Unidad de Investigaciones de Lautaro, él lo torturó, sentándose en un asiento de acero, siendo encadenado a este, para así evitar que se moviera. En esta oportunidad le aplicaron electricidad hasta que su cuerpo casi no resistiera más, quedando mareado y adolorido. Después de un par de horas más, su señora lo fue a buscar y como pudieron se fueron a la casa. Indica que fue detenido una cuarta vez por personal de Carabineros, no puede precisar la fecha, empero fue trasladado hasta la Comisaría donde lo torturaron por cuatro días aproximadamente, para luego ser dejado en libertad. Musita que a los días que fue dejado en libertad los carabineros de Lautaro, llegaron hasta la casa de su primo Juan Tralcal Huenchumán, donde fue fusilado al interior del inmueble. En este acto, se dirigió cerca de la casa de su primo, a lo cual lo vieron los carabineros, gritándole "¿qué andas sapeando?". Acto seguido dispararon una ráfaga hacia su casa, en

donde se encontraba su cónyuge con sus hijos. Luego que los Carabineros se fueran del lugar, familiares de don Juan Tralcal Huenchuman, lo subieron a una camioneta con el objeto de trasladarlo hasta Hospital de Lautaro, ya que aún estaba con signos vitales. Al llegar al Hospital, Juan ya se encontraba fallecido, dejando su cadáver en la morgue de ese Hospital, posteriormente fue reclamado por su cónyuge. Durante el período de la dictadura, su primo Juan Tralcal Huenchumán y él, eran intensamente buscados, ya que eran tildados de miristas, comunistas y ladrones. Por esa razón tenía que andar escondido en casa de familiares, como vecinos, además de ir a esconderse varias veces en el bosque, a la orilla de canales, para no ser encontrado por Carabineros o Investigaciones. Finalmente, que por todas las veces que fue detenido y buscado por su familia entera, vivía atemorizada, es así que mientras su hijo Luis Fernando Tralcal Huenchún, asistía al colegio Blanco Lepín era sacado de clases por Carabineros, quienes insistentemente le ofrecían caramelos o le propinaban golpes con el objeto de sacar información acerca del paradero de Juan Tralcal Huenchuman o del deponente.

En **declaración judicial** con fecha 9 de septiembre de 2015, **rolante de fs.55 a fs.56 (Tomo I)**. Ratifica íntegramente su declaración extrajudicial rolante de fs. 35 a fs. 37 y que en ese acto le fue leída. Afirma que en ninguna de las detenciones de las que fue víctima, los carabineros o investigaciones le exhibieron alguna orden judicial, lo detenían así no más. Recuerda que también andaban carabineros de Pillalelbún, entre ellos Millanguir y otro que le decían patas planas. Narra que cuando los detuvieron, los subieron arriba de un camión de Fagalde, como a 40 a 50 personas, todos arriba como chanchos, algunos quedaron aplastados. Cuando llegaron a Lautaro a la Comisaría, les hicieron bajar y colocarse unos frente a otros, dándoles orden de que tenían que golpearse en la cara con fuerza unos a otros, El que no lo hacía fuerte, eran ellos los que los golpeaban. A él le tocó golpearse con Ñanco, Pedro Ñanco, ese es Antipe de apellido. Él lo golpeo despacio, así que un carabinero lo golpeo. Agrega que los hacían bañar donde les daban agua a los caballos, para que no se notaran los golpes. Agua les hacían tomar de ahí mismo. Los trataron como animales. A la pregunta, Figueroa, el que hoy es su vecino más encima, porque vive cerca de su comunidad, le aplicó corriente. Le dijo: "a usted era que lo queríamos ver aquí", mientras lo castigaba. A su mujer le dijo que porque estaba preñada no más no la iba a tocar, sino también

hubiese estado allí. A la pregunta, asevera que a su hijo Luis Fernando, lo iban buscar a la escuela para preguntarle por él o por su primo al que mataron Juan Tralcal Huenchumán. A la pregunta, Figueroa lo castigo en más de una ocasión. Después se fue a Santiago para no tener más problemas. Se fue con su vieja. Hasta casa llegaron a tener en Santiago. Su hijo vive actualmente en ella. Ahora estamos tranquilos en la casa, está jubilado, no saca mucho, pero algo hay pal mastique.

En **declaración judicial** con fecha 13 de abril de 2016, **de fs.175 a fs.176 (Tomo I)**. Asevera que en tres oportunidades fue torturado tanto por personal de Carabineros de la Comisaría de Lautaro y en una ocasión por personal de la Policía de Investigaciones de Lautaro. La primera ocasión fue detenido por personal de Carabineros de Lautaro en circunstancias en que él se encontraba en las afueras de su casa, esto es en la población Gineo de la comuna de Lautaro, momento en el cual llega un camión de Carabineros, lo golpean y lo suben arriba de un camión junto a otros detenidos, trasladándolos a la Comisaría de Lautaro, siendo torturado durante el transcurso de ocho días. Las torturas consistían en golpes de palos en diferentes partes del cuerpo. Recuerda como uno de sus agresores al carabinero Mario Ponce y a un carabinero apodado patas planas. Respecto a la segunda detención, indica que se encontraba en el asentamiento Fernando Tellier, lugar donde cuatro carabineros lo toman detenido y lo trasladan a la 1° Comisaria de Carabineros de Lautaro, lugar donde lo golpearon durante el trascurso de dos días, reconociendo como uno de sus agresores solo a Mario Ponce. A la consulta, sólo los cuatro carabineros que lo toman detenido lo golpean en dicha Comisaría. A la consulta, en esa oportunidad lo tomaron detenido conjuntamente con Pedro Antipe Ñanco. Puntualiza al respecto, que al llegar a la Comisaría de Lautaro, a los detenidos les ordenaron colocarse frente a frente, momento en el cual debían golpearse unos con otros, a él le tocó golpearse con Pedro Antipe Ñanco. En cuanto a la tercera detención señalada en autos, reconoce como uno de sus agresores al detective Figueroa. Sabe que es él pues lo conoce, él tiene una hijuela en Muco Bajo y vive en la comuna de Lautaro. Tiene conocimiento de que él aún vive. No sabe cuál es su nombre, pero si lo ve perfectamente lo podría reconocer. A la consulta, ese detective lo tomó detenido y lo traslado a la unidad de Investigaciones de Lautaro, lugar donde lo sentaron amarrado de pies, manos y cintura y le aplicaron corriente en la cabeza durante todo el transcurso de ocho días. Lo anterior fue en el

año 1973, no recordando a esas alturas la fecha exacta. A la consulta, en ese momento el detective Figueroa estaba junto a otros tres detectives, quienes también lo torturaron aplicándole corriente. A la consulta, respecto a la cuarta detención, precisa que se encontraba en el asentamiento Fernando Teillier antes referido, en su casa, momento en el cual cuatro carabineros de la Comisaría de Lautaro empujan su puerta, tomándolo detenido, trasladándolo a la Comisaría de la ciudad. A la consulta, su señora Delfina Huinchún presencié los hechos. En esa oportunidad, estuvo cuatro días detenido en la Comisaría de Carabineros de Lautaro, transcurso durante el cual los cuatro carabineros que lo tomaron detenido lo golpean intensamente, mediante golpes de puños y pie. Adopta que lo tomaban detenido toda vez que lo confundían con su primo Juan Segundo Tralcal Huenchuman, quien era intensamente buscado por ser tildado de comunista. Ostenta que, debido a esta persecución por parte de carabineros de Lautaro, en varias oportunidades se refugió en casa de su tía Dubina Guajardo, fallecida actualmente.

A.2 LUIS FERNANDO TRALCAL HUENCHÚN (6 años para la época de los hechos). Declaró de fs. 19 a fs. 20 (Tomo I), copia de fs. 40 a fs. 41 (Tomo I) y fs.48 (tomo I), fs.54 (Tomo I) y fs. 174 (tomo I).

En **declaración extrajudicial** con fecha 16 de mayo de 2015, **rolante de fs.19 a fs.20 (Tomo I), copia de fs. 40 a fs. 41 (Tomo I) y de fs.48 (Tomo I).** Atestigua que, a la fecha de los hechos investigados, tenía la edad de seis o siete años, residiendo en Lautaro, junto a sus padres, don Juan Tralcal Colileo y Delfina Huenchún Paillal, en Blanco Lepín, Lautaro. Junto a sus siete hermanos, siendo uno de los mayores. Durante el año 1973 y posteriores asistió a la Escuela Blanco Lepín, para cursar su educación básica. Manifiesta que mientras estudiaba en la Escuela Blanco Lepín, en el período comprendido entre el año 19f3 a 1975, después de ocurrido el golpe militar, personal de carabineros de Lautaro, Recordando claramente a Mario Ponce. Buscaban intensamente a su tío don Juan Tralcal Huenchumán desconociendo el motivo de ese acto. Es así que en varias oportunidades erróneamente detuvieron a su padre por el alcance del primer apellido. Relacionado con lo anterior, don Mario Ponce junto a otros carabineros del sector, iban hasta la Escuela Blanco Lepín y lo sacaban de clases para consultarle acerca del paradero y las actividades que su tío y padre realizaban. En ese sentido

le ofrecían comida y dulces para que él engañado entregara algún tipo de información al respecto. Todo lo anterior amparado por el director de la Escuela don Juan Bautista Huerta y la profesora Cremilda Jofré, partidarios de la ideología pinochetista, quienes lo castigaban en el colegio, obligándolo a sentarse sobre piedra con gravilla, lentejas o porotos por varias horas, dejándolo además sin almuerzo, negándole ir al baño durante las clases. Apunta que por lo sufrido durante el año 1973 en adelante, quedó muy atemorizado y traumatizado, por lo que tuvo que abandonar la escuela, dejando hasta ahí sus estudios.

En **declaración judicial** con fecha 9 de septiembre de 2015, **de fs.54 (Tomo I)**. Ratifica íntegramente su declaración extrajudicial rolante de fs. 40 a fs. 41 y que en ese acto le fue leída. Dice que se retiró cuando estaba en cuarto básico de la escuela, a causa del temor que vivió. Se fue a Santiago a trabajar lustrando zapatos, después se fue a trabajar a la vega de Lo Valledor de carretonero, con un carretón de mano. Allí creció en la vega. Para aprender a leer, compraba el diario y solo se esforzaba por aprender y lo pudo hacer. De esa forma aprendió a leer solo. A la pregunta, relata que Ponce y un carabinero que le decían "patas planas", también le preguntaban por su tío y su padre, y lo golpeaban. Nombra a un detective de apellido Figueroa, que andaba con ellos y que igual lo golpeaba. Los de Investigaciones hacían como que andaban de cazadores y de esta forma se metían a su casa, tratando de encontrar a sus mayores. Eran golpeados juntos con su hermano, cuando no encontraban a su papi. Su hermana mayor, Rosalía Tralcal, por temor a los carabineros, se tuvo que ir donde su abuelita Rosa Paillal, de la comunidad Antinao Paillal. Ella creció allí.

En **declaración judicial** con fecha 13 de abril de 2016, **de fs.174 (Tomo I)**. Precisa que los carabineros Gatica, Ponce y otro apodado patas planas de la Comisaría de Carabineros de Lautaro, concurrían constantemente a la escuela en la cual, él estudiaba en el año 1973, a sacarlo del horario de clase y proceder a golpearlo y castigarlo, a fin de que él aportara antecedentes respecto al paradero de su padre, Juan Segundo Tralcal Colileo. A la consulta, sabe que eran dichos carabineros los que lo apremiaban, puesto que el director de la escuela en la cual estudiaba, don Juan Bautista Huerta, nombraba al carabinero Gatica, patas planas y al Ponce.

A.3 JUANA DEL CARMEN MILLALEN LEPILAO-TRALCAL (8 años para la época de los hechos). Declara de fs. 21 a fs. 22 (tomo I), copia de fs.38 a fs. 39 (tomo I) y a fs.46 a fs.47 (tomo I), fs.57 (Tomo I), fs. 177 (tomo I) y de fs.326 (tomo I).

En **declaración extrajudicial** con fecha 16 de mayo de 2015, **de fs.21 a fs.22 (Tomo I), copia de fs.38 a fs.39 (Tomo I) y fs.46 a fs.47 (Tomo I)**. Descarga que para la fecha de los hechos investigados, tenía alrededor de 9 años y vivía junto a sus padres en Juan Bautista Guineo en Lautaro y sus cinco hermanos, siendo ella la mayor. Es así, que para el año 1973 aproximadamente, cuatro carabineros llegaron a su casa buscando a su padre Ceferino Millalén Peralta, aludiendo que tenía conocimiento acerca del paradero de don Juan Tralcal Huenchuman, intensamente buscado en el sector. Dentro de los carabineros que fueron a detener a su padre, estaba Mario Ponce, quién habría torturado a su padre durante su estadía en la Comisaría de Lautaro, esto se lo comentó su padre en una oportunidad. Atestigua que su padre estuvo detenido alrededor de tres días en la Comisaría de Lautaro, fue torturado por funcionarios de esa unidad. Le comentó que le pegaban con una luma por todo el cuerpo, además de aplicarle corriente. Puntualiza que don Juan Tralcal Huenchuman, en varias oportunidades se quedó a alojar en su casa, por este motivo los carabineros iban a su casa a preguntar por él, recordando que en una oportunidad, estos golpearon a su madre Rosa del Carmen Lepilao-Guajardo Tralcal, con un rebenque en la espalda, a lo que ella muy asustada se escondió debajo de una cama. Recalca que su padre Ceferino Millalén Peralta, fue detenido una segunda vez en su casa. En esa oportunidad, su padre asustado intentó arrancar, cayendo a un hoyo doblándose una rodilla, sin embargo carabineros lo detuvo de igual forma, llevándoselo a Lautaro por tres o cuatro días. Al regresar, estaba en pésimas condiciones físicas, comentando que nuevamente había sido duramente golpeado por carabineros. Cuando lo dejaron libre esa vez, por temor a ser detenido nuevamente no quiso ir al hospital. Producto de la caída al hoyo y a la brutal golpiza que sufrió, estuvo alrededor de seis meses enfermo, diagnosticándole posteriormente gangrena, debiendo ser amputado de una de sus piernas, falleciendo alrededor de un año después producto de todo lo sufrido.

En **declaración judicial** con fecha 9 de septiembre de 2015, **rolante de fs.57 (Tomo I)**. Ratifica íntegramente su declaración extrajudicial rolante de fs. 38

a fs. 39 y que en este acto le fue leída. A la pregunta, había otro carabinero que andaba de apodo "patas planas" y otro de apellido Gatica. Añade que eran cuatro carabineros.

En **declaración judicial** con fecha 13 de abril de 2015, **rolante de fs.177 (Tomo I)**. A la pregunta, en torno a la detención de su padre don Ceferino Millalén Peralta, fallecido producto de las torturas que recibió por parte de Carabineros de Lautaro, ella tenía alrededor de 9 años cuando carabineros de dicha ciudad abren la puerta de su casa a patadas y toman detenido a su padre. En esa oportunidad eran cuatro carabineros, lo anterior lo sabe, pues vio a estos cuatro funcionarios y se escondió debajo de la cama. No rememora las identidades de esos carabineros, puesto que ella solo tenía 9 años de edad. En la oportunidad antes señalada, en la cual tomaron detenido a su padre, se encontraba su hermano Oscar Millalén Lepilao-Tralcal, quien logró escapar en aquella oportunidad. A la consulta, Oscar vive actualmente en la reducción Contreras de la ciudad de Victoria y podría aportar más antecedentes de la causa, toda vez que él también fue víctima de torturas por parte del personal de carabineros de la ciudad de Lautaro. Evidencia que su padre fue detenido por parte de carabineros de Lautaro, no solo en la oportunidad antes señalada, fueron alrededor de dos o tres veces. Dichos funcionarios policiales, en todas las oportunidades en que fue detenido lo trasladaban a la Comisaria de Lautaro, lugar donde lo torturaban por algunos días. Dichas torturas consistían en golpes de luma, patadas y aplicación de corriente. Lo anterior lo sabe por comentarios de sus padres.

En **diligencia de careo con Gabriel Gatica Riquelme**, con fecha 15 de diciembre de 2016, **rolante de fs.326 (Tomo I)**. Afirma que no reconoce a la persona que esta su lado. El Tribunal lee, en lo pertinente, su declaración de fs. 57, a lo que la deponente ratifica aquella parte de su declaración, agregando que rememora a un carabinero de apellido Gatica, pero no es el carabinero Gatica que esta sentado a su lado. Se refería a Mario Gatica, a este último lo ubica solo de nombre. Soflame que cuatro carabineros concurrieron a su casa a pegarle a su padre, ella tenía tan solo nueve años y ese carabinero junto a los otros le tocaron todo el cuerpo. A Mario Gatica lo ubica de nombre, porque cuando estaba vivo su padre, él le señalo que así se llamaba uno de los carabineros que concurría a golpearlo. Se mantuvo en sus dichos.

A.4 PEDRO ÑIR RIPIL PAILLAL (33 años para la época de los hechos), quien declaró de fs. 23 a fs. 24 (tomo I), copia de fs.33 a fs.34 (tomo I) y fs.42 a fs.43 (tomo I), fs.52 a fs.53 (Tomo I) y de fs.171 a fs. 172 (tomo I).

En **declaración extrajudicial** con fecha 14 de mayo de 2015, **de fs.23 a fs.24 (Tomo I), copia de fs.33 a fs.34 (Tomo I) y de fs.42 a fs.43 (Tomo I)**. Narra que para el año 1973, tenía la edad de 33 años, se encontraba casado con Teresa Colli Millalén, tenían tres hijos menores de edad, y residían en el mismo inmueble que habita en la actualidad. Se dedicaba a la agricultura desempeñándose en el Asentamiento Fernando Teillier, no militando ningún partido político. Respecto a su detención, no precisa fecha exacta, pero tiene claro que ésta fue al mes del golpe de Estado y a manos de personal de Carabineros de la 1° Comisaría de Lautaro, identificando a sus aprehensores como los carabineros Campos, Ferrier y Ponce. Quienes lo detuvieron en su domicilio particular, siendo trasladado hasta el Regimiento La Concepción de Lautaro, donde estuvo ocho días detenido. Expone que una vez que fue entregado al Regimiento La Concepción, lo ingresaron a un sector que podría reconocer como las caballerizas, donde se encontró en calidad de detenido, al presidente del Asentamiento de nombre Juan Mila Ñirripil, percatándose también que, en otras dependencias de ese recinto había otros detenidos, dentro de los cuales pudo reconocer a su primo, Elías Catalán Paillal, quien desde esa fecha se encuentra desaparecido. Explica que fue torturado durante ocho días al interior del Regimiento, se le interrogaba respecto a su filiación política y a las identidades de aquellas personas del Asentamiento, que pudieran haber sido comunistas o miristas, hecho que siempre ignoró. Por esta razón los militares efectuaban los interrogatorios bajo la aplicación de corriente eléctrica, en distintas partes de su cuerpo, incluso en su cabeza, hecho que le generó la pérdida de la visión de su ojo izquierdo. Junto con esto se le propinaban golpes también en distintas partes de su cuerpo, con objetos contundentes. Manifiesta que nunca pudo ver el rostro de sus torturadores, porque andaban encapuchados y a la vez procedían a vendar su vista durante las sesiones de interrogatorios, los cuales tenían una duración entre tres a cuatro horas diariamente. Suma que después de cada sesión de tortura, los militares lo arrojaban a un pozo que tenía agua al interior, la cual le llegaba al cuello, donde lo tenían cerca de media hora, para posteriormente dejarlo en una celda. Después de ocho días de estadía en el Regimiento, fue

trasladado a la cárcel pública de Lautaro, donde estuvo ocho días más, siendo dejado en libertad al término de estos, ya que no pudieron comprobar su filiación política, dejándolo sujeto a firma semanal en ese recinto penal. Sustenta que a su primo Elías Catalán Paillal lo vio en muy malas condiciones físicas dentro del Regimiento y en ningún momento pudo hablar con él, ya que lo vio en momentos en que él era sacado de las caballerizas hacia otra dependencia del Regimiento. Indica que el militar, Modesto Paillavil Blanco lo vio detenido dentro del Regimiento, en ese momento le dijo que no podía ayudarlo, pero el año 2008 firmó un documento dando cuenta de su estadía en esa unidad militar.

En **declaración judicial** con fecha 9 de septiembre de 2015, **rolante de fs.52 a fs.53 (Tomo I)**. Ratifica íntegramente su declaración extrajudicial rolante de fs. 33 a fs. 34 y que en ese acto le ha fue leída. A la pregunta, el testigo que señala de nombre Modesto Paillavil Blanco, vive en el sector de calle del medio en la comuna de Lautaro y aún está vivo. Barbulla que los carabineros también los golpearon. Ferrier era el que ordenaba. Proclama que los carabineros al momento de su detención no le mostraron ningún papel que dijera que estaba requerido por algún tribunal. Le dijeron que él era un comunista directo y sabía todo. Él solamente era un obrero del Asentamiento. Lo golpearon y lo echaron casi a porrazos al furgón. Se dio cuenta después que estaba en el Regimiento, cuando le sacaron la venda los militares. Rememora que día por medio los sacaban para maltratarlos. Suma que cuando pedían agua, los militares les daban orina de caballo. Aproxima que Juan Mila entregó a Julio Lipin Paine, actualmente desaparecido. Fue el 5 de octubre de 1973. Fue a dar una declaración al cuartel de carabineros de Pillanlelbún. De esa fecha no se vio más el hombre. Lo entregó porque a Juan Mila le dijeron, que si quería salvarse debía entregar a alguien, producto de la tortura y por las amenazas de muerte que le habían hecho, hizo eso. Lo hizo junto con un chileno, que era el que enseñaba a trabajar en el Asentamiento, como trabajar en el campo. El nombre de este último no lo recuerda. Narra que le dijeron a Julio Lipin que no le iba a pasar nada, porque ellos mismos iban a conseguir que fueran a preguntar porque estaba siendo requerido por carabineros. Los ricos consiguieron esto porque a Julio Lipin lo tenían por ladrón. Entre estos estaban Pablo Yévenes y Arturo Kaiser, que era el que administraba el fundo. Anexa que el último día que él estuvo en el Regimiento, llegó su primo Elías Catalán Paillal, muy maltratado el hombre, al

igual que Julio Lipin Paine. A los dos él los vio antes de irse a la cárcel. Estaban harto maltratados. Se quedaron en el Regimiento. Trató de hablarles, pero por las condiciones en que ellos estaban, no pudieron hablarle. Estaban muy mal. A la fecha no se sabe que hicieron con ellos, están desaparecidos los hombres. A la pregunta, afirma que en la cárcel no lo maltrataron.

En **declaración judicial** con fecha 13 de abril de 2016, **rolante de fs.171 a fs.172 (Tomo I)**. Colige que en el año 1973 se encontraba en su casa, a saber en el asentamiento Fernando Teillier, lo tomaron detenido personal militar y lo trasladan hasta el Regimiento La Concepción, donde estuvo detenido 16 días. Allí lo torturaron tanto personal militar como personal de la 1º Comisaría de Carabineros de Lautaro, mediante la aplicación de corriente en la cabeza, golpes de pies y puños en diferentes partes de su cuerpo, además de dejarlos sin comida y sin agua durante largos periodos de tiempo. Urde que producto de dichos golpes y electricidad aplicada, perdió la visión de su ojo izquierdo. El deponente exhibió al Tribunal, una copia de un certificado, el cual señala que Modesto Paillavil Blanco, en su calidad de ex miembro del Ejército, desempeñándose como instructor del Regimiento La Concepción de Lautaro, fue testigo de cuando miembros del Ejército de su dotación, practicaron apremios físicos a don Pedro Ñirripil Paillal y a personas con vinculación al gobierno de la unidad popular, o ex Asentamiento y personas naturales. Certificado que el tribunal agregó al proceso mediante copia simple. En relación con el documento recién citado, don Modesto lo vio en el Regimiento cuando estaba siendo torturado, sin embargo, él no pudo hacer nada, razón por la cual, en el año 2008 fue su testigo de la declaración antes referida. Espeta que en el Regimiento fue torturado por los carabineros Campos, Ferrier y Ponce. Atestigua que podría reconocer perfectamente al carabinero Campos.

En **diligencia de careo con Domingo Campos Collao, de fecha 25 de abril de 2016, rolante de fs.197 a fs. 198 (tomo I)**, manifiesta que la persona que está a su lado es el Carabinero Campos, quien lo habría detenido ara 1973. Aclara que estuvo 8 días en el Regimiento La Concepción de la comuna de Lautaro y quien lo trasladó hasta allí fue el carabinero Campos. Carabineros de Lautaro lo detuvo y lo trasladó hasta el Regimiento La Concepción de esa ciudad, reconociendo a don Domingo Campos como uno de sus agresores en el Regimiento La Concepción de Lautaro. Afirma conocer al sr. Campos porque iba a citar a la gente al campo, era

una persona conocida, razón por la cual recuerda al sr. Campos. Se mantiene en sus dichos, agregando que los carabineros en el Regimiento La Concepción le preguntaban si era comunista, mirista y al no responder militares y carabineros lo agredían mediante puntapiés.

A.5 CARMEN LEVIMILLA CARRILLO (70 años para la época de los hechos). En **declaración judicial** con fecha 27 de febrero de 1991, **rolante a fs.69 (Tomo I)**. Manifiesta que convivió con José Julio Llaulén Antilao hasta el año 1974. Un día, cuya fecha no recuerda, mientras tomaba desayuno, llegaron a su casa dos carabineros, llamados Domingo Campos Collao y Mario Ponce, entraron a la cocina, detuvieron a su conviviente y se lo llevaron. Desde ese año no ha sabido más de él, ya que después no regresó a la casa. Pasado unos días trato de ubicar a su conviviente y como no obtuvo resultado alguno, nadie le daba noticias de él, no lo busco más. Agrega que cuando lo detuvieron, le dijeron los carabineros que estuviera tranquila, porque ellos solo le querían hacer preguntas, eso porque quiso quitárselas. En su presencia no castigaron a Julio Llaulén, ya que lo sacaron a la rastra, él se resistía a ser detenido. Supo por comentarios que a su conviviente lo subieron a una camioneta pero que esperaba lejos de su casa, en el camino, pero esto no le consta. Ella no sabía que estuvieran ahora reclamando por su conviviente, pero debe ser alguna hermana que lo está haciendo.

A.6 EMILIA MAÑIL PAINEQUEO (51 años para la época de los hechos). Depone de fs. 70 (tomo I), a fs. 103 (tomo I) copia de fs. 104 (tomo I) y a fs. 127 (tomo I).

En **declaración judicial** con fecha 5 de marzo de 1991, **de fs.70 (Tomo I)**. Proclama que su hijo Ceferino Mañil Painequeo, fue detenido junto a su marido José Segundo Yafulem Pinto, no recuerda si el año 1973 o 1974, en Lautaro. Posteriormente su marido fue dejado en libertad, no así su hijo Ceferino, estuvo preguntando en la Comisaría, cárcel y en Temuco, así en diferentes partes y no supo más de él. Ignora si está vivo o muerto. Sus hijos Miguel Eduardo y Oscar Romualdo ambos Yafulem Mañil, hijos de su matrimonio con José Segundo Yafulem Pinto, fueron detenidos en su casa un día en la tarde, por dos Carabineros, uno se llamaba Domingo Campos, no recuerda si el año 1973 o 1974, no recuerda año ni fecha, incluso ellos estaban dedicados a hacer carbón. Desde esa fecha no ha sabido más de sus hijos antes mencionados. También los busco en Lautaro, en

Temuco, en Carabineros, pero no tuvo resultado alguno. No sabe si sus hijos se encuentran vivos o muertos, esto quisiera saberlo para estar tranquila. Cuando fueron detenidos Miguel Eduardo y Oscar Romualdo, no se les encontró nada en su poder. Precisa que cuando fue detenido su hijo Ceferino Mañil Painequeo, estaba vendiendo carbón y tenía en su poder dinero, pero no sabría decir cuánto dinero portaba en el momento de ser detenido. Lo único que desea saber es el paradero de sus hijos.

En **declaración extrajudicial** con fecha 9 de enero de 1996, **rolante a fs.103 (Tomo I), con copia de fs.104 (Tomo I)**. Narra que es la madre de Ceferino Antonio, Miguel Eduardo y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, los cuales se encuentran desaparecidos desde el mes de junio de 1974. Funda que en los primeros días del mes de junio, no recuerda fecha exacta, su hijo Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, viajaron a Lautaro, con el propósito de vender carbón, actividad que realizaban regularmente. Como no llegó ese día en la tarde, su esposo José Segundo Yaufulem Pinto salió a buscarlo y también fue detenido por Carabineros. En el calabozo de la Comisaría estuvo con Ceferino Antonio, él le contó que ese mismo día al primer canto del gallo, sacaron a Ceferino y de ahí nunca más se supo de él. El día 11 de junio de 1974, alrededor de las 10:00 horas, llegaron hasta su casa, los Carabineros Mario Ponce y Domingo Antonio Campos entre otros que no conocía, los cuales procedieron a detener a sus hijos Miguel Eduardo y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil. Se los llevaron con las manos en la nuca y los hicieron caminar hasta el camino hacia Curacautín, donde los esperaba una camioneta, los subieron y se los llevaron hacia el río, donde procedieron a sumergirlos en el agua, después se los llevaron con destino desconocido. Respecto de sus hijos, puntualiza que a la fecha de su desaparición Ceferino Antonio tenía 23 años, Miguel Eduardo 25 años y Oscar Rumualdo 18 años. Todos jóvenes tranquilos y trabajadores, no tenían filiación política, tampoco eran cuatreritos como se decía. Los Carabineros no dijeron nada sobre el por qué se los llevaban. Con el propósito de obtener alguna información sobre el paradero de sus hijos, fue en reiteradas oportunidades a las Comisaría de Carabineros de Lautaro, Temuco, Victoria y Perquenco, como también en los diferentes regimientos, cárceles y Comisaria de Investigaciones que hay en la zona, sin obtener ningún dato que le permitiera saber sobre ellos.

En **declaración judicial** con fecha 15 de abril de 1996, **rolante a fs.127 (Tomo I)**. Ratifica en todas sus partes su declaración prestada ante Investigaciones (fs.103) y es la misma que se le leyó en ese momento.

A.7 PABLO CHEUQUEPAN CAÑIUMIL (60 años para la época de los hechos). En **declaración judicial** con fecha 13 de enero de 1975, **rolante a fs.75 (Tomo I)**. Musita que el día que Carabineros fue hasta su domicilio, él estaba en la casa y andaban tres funcionarios de uniforme, de los cuales reconoció a Domingo Campos y los otros dos eran de Perquenco, a quienes no les sabe sus nombres, además andaba el carabinero Mario Ponce, de civil y con una manta de castilla. Acompañaban en esa ocasión el administrador Enrique Salazar del fundo San Bernabé y varios de sus trabajadores. El vehículo que los transportaba era camioneta de color celeste y manejaba el propio Salazar, esto le consta porque lo vio personalmente y además los siguió hasta la ciudad de Lautaro y al preguntar en la Comisaría, solo ha sido tramitado. En esa ocasión había cuatro carabineros más en la casa de Rosa Panta, quienes estaban con varios detenidos y donde se juntaron con los que fueron a buscar a su hijo Juan Eleuterio. Precisa que ningún carabinero le ha dado los nombres de estos funcionarios, ya que él lo conocía, debido que estuvieron por largo tiempo en el Retén Dollinco y en varias ocasiones estuvieron en su casa.

A.8 JOSÉ SEGUNDO YAUFULEM PINTO (62 años para la época de los hechos). En **declaración judicial** con fecha 14 de mayo de 1991, **de fs.76 (Tomo I)**. Informa que al casarse con Emilia Mañil Painequeo, esta tenía un hijo llamado Ceferino Mañil Painequeo, quien no recuerda si fue el año 1973 o 1974, fue a Lautaro a vender carbón, siendo detenido por Carabineros. Al otro día lo detuvieron a él y diviso a su hijastro en la Comisaría de Carabineros de Lautaro. Estuvo detenido un mes, dejándolo en libertad. De Ceferino nunca más se supo, a pesar de que su mujer fue a la Comisaría a reclamarlo y también a Temuco. Habla que esa vez que fue detenido en su domicilio por el carabinero Domingo Antonio Campos. Posteriormente fueron detenidos sus hijos Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, en su domicilio por Domingo Antonio Campos, quien andaba solo. Desde esa fecha no han sabido de sus hijos, su mujer los estuvo buscando sin resultado alguno. En cuanto al tal José Domingo Yaufulem Mañil mencionado, no es hijo suyo ni lo conoce, ni sabe quien pueda ser. Debido a su

edad no recuerda bien las fechas en que sucedieron estos hechos, si fue el año 1973 o 1974.

A.9 JORGE ENRIQUE SCHWEIZER GÓMEZ (62 años para la época de los hechos), quien declaró de fs. 78 a fs. 79 (tomo I), fs. 114 a fs. 115 (tomo I), copia de fs. 761 fs. 762 (tomo III), fs. 145 (tomo I) copia a fs. 763 (tomo III), fs. 303 a fs. 305 (tomo I), fs. 742 (tomo III), fs. 754 a fs. 755 (tomo III), fs. 756 a fs. 760 (tomo III), fs. 764 (tomo III), fs. 765 (tomo III), fs. 766 (tomo III) y de fs.767 a fs.768 (tomo III).

En **declaración extrajudicial rolante de fs.78 a fs.79 (tomo I)**. Hace una breve reseña de su carrera funcionaria. En relación con el día 11 de Septiembre de 1973, en la unidad de Lautaro, estuvieron "retenidas" entre 30 y 40 personas, que eran traídas por personal de Ejército y Carabineros. Sin embargo, los cargos contra estas personas las realizaba el servicio del Ejército, para ser más preciso del Regimiento La Concepción de Lautaro. El control de estos "retenidos" lo llevaba el personal de guardia de su unidad, en el Libro de Novedades del Servicio de Guardia, donde quedaban consignados los ingresos y salidas de personas, tanto en libertad, como cuando eran puestos a disposición de la Fiscalía Militar de Temuco. Agrega que en ese punto que la confección del parte correspondiente, lo realizaba personal de inteligencia del Ejército. Respecto a los días que siguieron al 11 de septiembre de aquel año, tanto el servicio de inteligencia del Ejército, como el personal de Carabineros de su unidad, continuaron trayendo gente, algunos eran dirigentes políticos locales como sindicales, los cuales casi siempre eran traídos por personal del Ejército. Los nombres de estos "retenidos" se los llevaba el personal del Regimiento antes indicado, para chequearlos según tiene entendido. Entonces los que tenían cargos según ellos, eran puestos a disposición de la Fiscalía y los otros puestos en libertad. Se le pregunta por una víctima de otra causa.

En **declaración extrajudicial** con fecha 18 de enero de 1996, **de fs.114 a fs.115 (tomo I), copia de fs. 761 fs. 762 (tomo III)**. Proclama que en el mes de marzo de 1972, asumió funciones como Comisario de la 1° Comisaría de Carabineros de Lautaro, ostentando el grado de Mayor. Dicha función la realizó hasta el mes de noviembre de 1973, fecha en que fue trasladado a Temuco, con el grado de Teniente Coronel. Respecto de las personas por las cuales se le consultó, de nombres Samuel Huichallan Levian, José Domingo Llabulen Pilquinao, Ceferino Antonio, Miguel Eduardo y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, José Bernardino

Cuevas Cifuentes, Gervasio Héctor Hualqui Calviqueo, Juan Milla Montuy, Julio Manuel Paine Lipin, José Andrés Meliquen Aguilera y Domingo Huenul Huaiquil, blasona que no le son conocidas ni recuerda que hayan estado detenidas en la Comisaría de Lautaro en el período que permaneció en ella. Conjetura que es posible que hubiesen estado detenidas estas personas en la Comisaría, pero debido al tiempo transcurrido no lo recuerda. Destaca que los detenidos que llegaban al cuartel por razones de índole político eran chequeados por personal del Ejército y de ser importantes para ellos, eran trasladados a la Fiscalía Militar de Temuco. Los que no presentaban cargos, eran puestos de inmediato en libertad. Afirmar que durante su permanencia en Lautaro, no supo de ejecuciones de personas sin previo juicio de la Fiscalía. Por el tiempo transcurrido y a su corta permanencia en la unidad, no recuerda todos los nombres de sus subalternos, pero entre ellos el Capitán Marcial Vera, Cabos Campos, Ponce, Jara, Sargentos Ponce y Ferrier, entre otros. Blasona que todo detenido que ingresaba a la Comisaría, era registrado en el libro de guardia. Cuando estos eran conducidos a la Fiscalía Militar, tanto el detenido como la persona que lo retiraba debía dejar estampada su identificación y firma. Lamentablemente esta documentación se encuentra incinerada de acuerdo a reglamento.

En **declaración judicial** con fecha 23 de septiembre de 1996, **rolante a fs.145 (Tomo I), copia a fs. 763 (tomo III)**. Manifiesta que se desempeñó como Mayor Comisario de la Comisaría de Carabineros de Lautaro desde el mes de marzo de 1972 hasta el mes de noviembre de 1973, fecha en la cual fue ascendido a Teniente Coronel y trasladado a la Prefectura de Carabineros de Temuco como Subprefecto. Durante el periodo que se desempeñó en esa Comisaría, no recuerda que se hubiera detenido a algunas de las personas que se le mencionó de fs.2 vta. Además que por los años transcurridos no lo recuerda. Anexa que su estadía en esa ciudad como Comisario fue de poco más de año y medio.

En **declaración judicial** con fecha 17 de octubre de 2016, **rolante de fs.303 a fs.305 (Tomo I)**. A la pregunta, dice que en la Comisaría solo se identificaba a los detenidos. Eran administradores de los detenidos mientras estaban en la Comisaría y nada más. Y de esto quedaba constancia en la Comisaría del nombre del que lo conducía al Regimiento en el libro de guardia. Perquenco dependía de la Comisaría. Había una Tenencia y tres retenes. Los funcionarios

dependían de él mientras estuvo como jefe en Lautaro. A la pregunta, en ese momento no rememora el nombre de los funcionarios de Perquenco que estuvieron desde septiembre a diciembre de 1973. No recuerda a quien se le mencionó como funcionario de Perquenco de nombre Renato Rodríguez Rodríguez. A la pregunta, nunca permitió que Carabineros faltara a la normativa de la institución. Afirma que si hubiese sabido esto hubiera tomado las medidas reglamentarias. Nunca oyó que algún funcionario estuviese limpiando de cuatreritos el sector de Perquenco. Espeta que no conoce los nombres de Pedro Ñirripil Paillal, Juan Segundo Tralcal Colileo, Luis Fernando Tralcal Huenchún ni Ceferino Millalén Peralta. Ni supo si acaso estuvieron en la Comisaría de Lautaro. De haber ocurrido así, lo único que se hacía era tomar sus nombres, el nombre del aprehensor, del cual quedaba constancia en el libro, lo mismo que se hacía cuando salía de la Comisaría. Se le hacía firmar al detenido, que salía conforme y el nombre de quien lo trasladó, si acaso iba al Regimiento. Se refiere a hechos de causa de Benedicto Poo Álvarez. Recuerda al funcionario Víctor Matus como miembro de la Comisaría de Lautaro. Dice estar seguro de que Benedicto Poo quedó a disposición del Juzgado del Crimen de Lautaro, pues él firmó el parte. A la pregunta, no recuerda a una persona detenida en la Comisaría de Lautaro de nombre José Ignacio Beltrán Meliqueo. A la pregunta, el nombre de doña Gregoria Carilaf no le suena. Ahora, no recuerda que su hijo Juan Conejeros fuera intensamente buscado en la zona, puesto que ellos no hacían detenciones por carácter político.

En **diligencia de careo con Domingo Campos Collao** de fecha 9 de abril de 2014, **rolante de fs.742 (Tomo III)**. Reconoce a la persona sentada a su lado como el cabo Domingo Campos Collao, que trabajó con él fue Comisario. Respecto de los dichos de esta persona, no recuerda que el comandante del Regimiento La Concepción haya solicitado el listado a que hizo mención el señor Campos, pero si lo dijo, seguramente fue así. Sin embargo, por el tiempo transcurrido no lo recuerda. A la pregunta, el grupo que salía con el Teniente Huerta lo hacía en el jeep de la Comisaría que estaba a cargo del Sargento Ferrier, pero los demás no siempre eran los mismos, por cuanto se tomaba a los funcionarios que estuviesen disponibles al momento de ser requerida la ayuda de Carabineros.

En **declaración extrajudicial** con fecha 30 de junio de 2014, **rolante de fs.754 a fs.755 (tomo III)**. Para el año 1973, ostentaba el grado de Mayor de

Carabineros y era el oficial a cargo de la 1° Comisaría de Carabineros de Lautaro. Nombra que el oficial que le seguía en el mando era el Capitán Marcial Vera Ríos. Respecto a su estadía en la 1° Comisaría de Carabineros de Lautaro cumplió funciones en dicha unidad desde el año 1972, hasta el mes octubre de 1973, no recuerda muy bien las fechas esos momentos, solo que el mando de la unidad lo dejó en manos del Capitán Marcial Vera Ríos. Sobre la existencia de un grupo especial de Carabineros de la 1° Comisaria de Lautaro, estaba cargo de efectuar las pesquisas relacionadas con personas extremistas o terroristas opositoras al régimen militar, el cual estuvo a cargo del Teniente Huerta, quien tenía a cargo dos o tres Carabineros subalternos, este grupo se reportaba con él, cuando detenían a algunas de estas personas. Precisa que el Sargento Ferrier, quien era su chofer, perteneció a este grupo, ya que era el encargado de manejar el vehículo en que se movilizaba este grupo, también menciona como integrante de este grupo a Herminio Ponce Orellana. Agrega que a los detenidos de estos funcionarios no se le efectuaron interrogatorios en base a la aplicación de torturas. Sobre el reclamo de algunos familiares de esto detenidos, no tiene recuerdo alguno. Los detenidos del grupo especial generalmente eran alojados en los calabozos de la unidad y posteriormente eran entregados a personal de Ejército, quienes los trasladaban a la ciudad de Temuco, ya que en esa ciudad operaba la Fiscalía Militar. Apunta que dentro de los oficiales del Regimiento La Concepción, nombra al Capitán Del Río, a quien no recuerda haberle dado información alguna sobre las personas residentes de la ciudad que tenían antecedentes políticos o delictuales. Destaca que los subalternos Capitán Del Río, eran los que sacaban a los detenidos de su unidad y como dijo anteriormente, lo llevaban a Temuco, ante un Fiscal de apellido Podlech. Los funcionarios subalternos que componían el grupo especial al cual se refirió en párrafos anteriores, nunca le reportaron el fallecimiento de algún detenido, en alguno de los procedimientos.

En **declaración judicial** con fecha 28 de agosto de 2014, **de fs. 756 a fs. 760 (tomo III)**. Ratifica su declaración rolante de fs. 292 a fs. 293 de la causa rol 45.357 de ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro. A la pregunta, después del 11 de septiembre de 1973 empezaron a llegar detenidos por motivos políticos a la unidad, los que solo estaban en tránsito por la Comisaría, ya que después de su aprehensión y paso por la Comisaría, eran enviados hasta el

Regimiento de Temuco. Este traslado era realizado por personal del Regimiento La Concepción de Lautaro. Afirma que no le consta que los detenidos se hayan trasladado a Temuco, pero se presumía, ya que cuando sacaban a los detenidos de la unidad quedaba registro en los libros de egreso de la Comisaría, dejándose constancia del funcionario del Regimiento La Concepción que efectuaba ese traslado. Justifica que después del 11 de septiembre de 1973, hubo coordinaciones con el Capitán Del Río, para proceder al traslado de los detenidos desde la Comisaría hasta el Regimiento de Temuco. Acordaron que él sería quien se ocuparía del traslado de los detenidos desde la Comisaria de Lautaro hasta la Fiscalía en Temuco. A la pregunta, los detenidos que eran aprehendidos por el grupo del Teniente Huerta, entre los que estaba Ponce, Ferrier, entre otros, eran trasladados por el grupo del Capitán Del Río hasta Temuco. En la Comisaria de Lautaro hubo detenidos por el grupo de Huerta y por el grupo que disponía el Capitán del Río. Hubo una comunicación constante entre el Capitán del Río, del Regimiento la Concepción de Lautaro y el deponente, empero mayoritariamente era de forma telefónica. Desconoce haberse reunido periódicamente para coordinar traslados de detenidos políticos u otro tipo de coordinación. Espeta que en más de una ocasión lo llamó el Capitán Del Río para comunicarle que sus subalternos, de quienes no recuerda nombres, iban a buscar detenidos por motivos políticos a la Comisaría. Soslaya que el Capitán Del Río era el encargado de trasladar detenidos que eran aprehendidos por el grupo de Huerta. Suma que en la Comisaría hubo detenidos políticos por los militares del Regimiento La Concepción de Lautaro. Ignora si el Capitán Del Río era de algún grupo de inteligencia u otro tipo en el Regimiento de Lautaro. Lo que sí es cierto, es que solo lo recuerda a él como el enlace entre ellos y el Regimiento. No rememora la fecha exacta pero después de Lautaro lo trasladaron por ascenso hasta la Prefectura de Temuco, con el cargo de Subprefecto. El Tribunal lee en lo pertinente la declaración que rola de fs. 136 a fs. 138 de la causa rol 45.355 de ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro. Depone que es totalmente falso lo relatado por Marcial Vera, en el sentido de que haya integrado consejos de guerra. Del Capitán Del Río iba constantemente a la Comisaría a dejar y buscar detenidos, podría ser posible, pero que él lo haya recibido y el deponente haya estado en su oficina. El Tribunal lee en lo pertinente la declaración que rola de fs. 246 a fs. 247, ratificada a fs. 256 de la causa rol 45.362

de ingreso criminal del Juzgado de letras de Lautaro. Reconoce que lo relatado por Rabanal Romero, en el sentido que el Capitán Del Río llegó hasta la Comisaría a buscar detenidos, llegaba con suboficiales y soldados que eran parte de su grupo operativo. Recalca que los detenidos políticos estaban como máximo un día en la unidad, después egresaban de ella. Se enteró que los detenidos debían ser entregados al Fiscal Militar de apellido Podlech, porque él era el encargado de los detenidos por motivos políticos. Sabía que el Fiscal era de apellido Podlech, eso se comentaba en las unidades de Carabineros. Funda que no tuvo una comunicación directa con el Fiscal Militar. Destaca que durante su permanencia como Comisaría de Lautaro, no recuerda que familiares de detenidos políticos o de otra índole hayan concurrido a su presencia a averiguar sobre sus familiares. Desarrolla que en esa época tenían un jeep, marca Fiat, color blanco. Durante su permanencia en la Comisaria no se requisaron vehículos a instituciones públicas. Apunta que cuando el grupo de Huerta iba a lugares rurales a hacer averiguaciones por motivos políticos, utilizaban el jeep de la Comisaría, quedando sin vehículo la Comisaría. El Tribunal lee en lo pertinente declaración que rola de fs. 177 a fs. 178 en causa rol 45.357 de ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro. A lo precedente asevera que es cierto lo relatado por Caillet, en el sentido de que militares del Regimiento La Concepción de Lautaro, llevaban y traían detenidos a la Comisaría. El Tribunal lee en lo pertinente declaración que rola de fs. 242 a fs. 243 en causa rol 45.362 de Juzgado de Letras de Lautaro, es efectivo que hubo detenido políticos en Lautaro, pero estando en la Comisaría todos los funcionarios podían tener acceso a ellos, no había una prohibición para tener contacto con los detenidos. Los detenidos eran mantenidos en los calabozos y en las pesebreras de la Comisaría. Especula que en algunas oportunidades a ver a los detenidos políticos. No conversó con ellos, solo fue a verlos. Utiliza que solo el personal autorizado podía sacar a los detenidos por motivos políticos, a saber personal de guardia. Revela que el Capitán Vera Río tenía contacto con los militares, estaba interiorizado en todo lo que ocurría en la unidad, con respecto a detenido políticos y al contacto permanente con el Capitán del Río, quienes trasladaban detenidos desde la Comisaría hacia Temuco y además, de la permanencia de detenidos por el grupo del Capitán del Río. Él debía saber todo esto ya que era quien subrogaba cuando el deponente no estaba. Aclara que efectuaba patrullajes en la población, así que a veces no estaba en la unidad.

Atestigua que no rememora reclamos de detenidos, con posterioridad al 11 de septiembre, contra personal de Lautaro, por malos tratos. No vio personal de la Fuerza Aérea en Lautaro. Destaca que todos los hechos quedaban consignados en libros de guardia de la unidad, identificándose de forma completa el nombre de los aprehensores y del aprehendido, lo mismo sucedía al egresar o trasladar detenidos de la Comisaría. Se le pregunta por diferentes víctimas, respecto a las cuales blasona desconocer antecedentes.

En **declaración judicial** con fecha 9 de abril de 2014, **de fs. 764 (tomo III)**. Respecto a la consulta, nunca el Comandante del Regimiento La Concepción le pidió algún listado de personas contrarias al régimen, delincuentes habituales. Espeta que el grupo especial de Carabineros, al mando del Teniente Huerta no era fijo, por cuanto este oficial tomaba a los carabineros que estuvieran disponibles para cumplir las órdenes que se daban desde Regimiento La Concepción. En ese sentido Carabineros debían acudir a apoyar los allanamientos que el Ejército efectuaba hacia el campo donde los terroristas tenían tomas de terrenos.

En **diligencia de careo con José Agustín Méndez Contreras** de fecha 10 de abril de 2015, **rolante de fs.765 (Tomo III)**. No reconoció a la persona sentada a su lado. El Tribunal le dio a conocer que se trataba del Carabinero José Agustín Méndez Contreras. Basa que nunca se reunió con los oficiales de Ejército en su oficina para tratar temas de detenidos políticos. Tampoco existía un grupo permanente de Carabineros para tratar estos temas. Lo que podría a ver sucedido era que, seguramente el Teniente Huerta puede haber escogido siempre a los mismos funcionarios para salir a efectuar este tipo de misiones. Se mantuvo en sus dichos.

En **diligencia de careo con René Inocencio Rabanal Romero** de fecha 10 de abril de 2015, **rolante de fs.766 (Tomo III)**. No reconoció a la persona sentada a su lado. El Tribunal le dio a conocer que se trataba del Carabinero René Inocencio Rabanal Romero. Relata que los detenidos que llegaron a la unidad bajo su mando fueron ingresados a la sala de guardia donde se les individualizó y posteriormente fueron dejados en los calabozos, hasta ser retirados por personal de Ejército. Basa que personal de Ejército nunca interrogó detenidos en la Comisaría. Se mantuvo en sus dichos.

En **declaración judicial** con fecha 28 de abril de 2015, **rolante de fs. 767 a fs. 768 (tomo III)**. Divulga que el Comandante del Regimiento la Concepción, Hernán Ramírez Ramírez, después del 11 de septiembre de 1973 le pidió un listado de personas que fueran delincuentes habituales y cuatrereros. Además, solicitó colaboración de parte de personal suyo para que los guiaran hacia los domicilios de estas personas, puesto que el Ejército no conocía como ellos todos los lugares. Por este motivo le encomendó esta labor al Teniente Huerta, quien formó un grupo especial para estos fines. Proclama que el grupo especial de Carabineros al mando del Teniente Huerta no era fijo, por cuanto este oficial tomaba a los Carabineros que estuviesen disponibles para cumplir las órdenes que se daban desde el Regimiento La Concepción. Sin embargo, los carabineros Ponce, Sanhueza, Campos y Sandoval siempre estaban disponibles, por lo que participaban en varias ocasiones de esas salidas. En ese sentido, Carabineros debía acudir a apoyar los allanamientos que el Ejército efectuaba hacia el campo donde los terroristas tenían tomas de terrenos. Dice que los carabineros se movilizaban para estos efectos en el jeep de la Comisaría que manejaba el Sargento Ferrier. Respecto de los oficiales que acudían a buscar y dejar detenidos a la Comisaría, nombra al Capitán Del Río. Sin embargo, él nunca interrogó a los detenidos en la Comisaría. A la pregunta, sin bien es cierto que declaró que el Teniente Huerta y su grupo efectuaba detenciones de personas, que posteriormente el Capitán Del Río llevaba a Temuco, en ese momento no pudo indicar a qué tipo de detenidos se refirió, puesto que Carabineros no efectuaba detenciones de carácter político. A la pregunta, las detenciones de carácter político las efectuaba el Ejército. El Capitán Del Río llevaba a estas personas a la Fiscalía Militar de Temuco o al Regimiento la Concepción, para tomarles declaración seguramente. Adosa que no existió en la Comisaría de Lautaro durante su mando, algún grupo que realizará labores de inteligencia o que tratará temas de índole político.

A.10. ILDA TERESA MORALES JAQUE (44 años para fecha de los hechos investigados), quien declaró de fs. 81 a fs. 82 (Tomo I), fs. 111 (Tomo I), fs. 134 a fs. 135 (Tomo I) y de fs. 633 a fs. 634 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fs. 81 a fs. 82(Tomo I). Señala que es la cónyuge de José Andrés Meliquén Aguilera, con quién se casó legalmente el año 1952, y de cuya unión nacieron siete hijos, José Israel, Domingo Benedicto,

Verónica del Pilar, René Enrique, Dina de las Mercedes, María Virginia y Tránsito del Carmen. El día 04 de octubre de 1973, alrededor de las 07:00 horas se encontraba con su esposo en el domicilio común de la reducción Manuel Levinao en Lautaro, cuando en forma imprevista tocaron a la puerta y al preguntar quién era, le dijeron que la policía y necesitaban conversar con su esposo, ante lo cual abrió sin temor, percatándose en la oportunidad que tras la puerta había una persona vestida con uniforme de carabinero, cubierta su cabeza y rostro con un gorro pasamontañas, viéndole solamente los ojos, sin lograr identificarle, el que tenía en su mano una especie de carabina, ignora que tipo de armamento, ya que no conoce de armas, el cual una vez que su esposo salió de la casa, lo obligó a que pusiera sus manos detrás de la nuca y le hizo caminar, mientras él se quedaba atrás apuntándole, llevándole hacia el camino, luego aparecieron desde los matorrales alrededor de doce personas armadas y también con uniforme de carabineros y encapuchados, quienes les siguieron hasta el camino donde les esperaba una camioneta color amarillo; los siguió de lejos para que no la vieran, ya que le habían advertido de que si nadie oponía resistencia existía la posibilidad de que su esposo regresara con vida; cuando llegaron al camino lo subieron a la parte trasera de la camioneta, la que tenía un toldo amarillo, quedando al cuidado de la misma uno de los carabineros, mientras que los demás fueron a buscar a otra persona. Como le dio susto y además sus hijos estaban llorando en la casa, regresó a ella, sin que volviera a ver a su esposo otra vez. Al día siguiente concurrió a la Comisaría de Carabineros de Lautaro a preguntar por su esposo, lugar donde le informaron que no había sido detenido y que no figuraba en los libros respectivos, retirándose a su casa. Días más tarde regresó nuevamente a la Comisaría y fue informada que su esposo estuvo detenido, pero que se había ido en libertad, inclusive le mostraron un libro donde aparecía una huella de dedo, la que supuestamente era de su esposo, ya que tanto él como ella, son analfabetos, constando así su libertad. Debido a que pasaron los meses y su esposo no regresó a la casa, concurrió al año siguiente a la Vicaría de la Solidaridad, donde estampó la denuncia pertinente, sin conseguir nada, ya que nadie hasta la fecha le ha dado alguna explicación acerca del desaparecimiento de su cónyuge. No obstante, efectuó otra denuncia en el Juzgado del Crimen de Lautaro, la cual tampoco dio resultados positivos. Años más tarde se enteró por boca de vecinos, de los cuales no recuerda mayores

antecedentes, que los carabineros de nombre Domingo Campos y Enrique Ferrier, que trabajaban en el Retén de Tres Esquinas, habían participado en la detención de su esposo y posterior desaparecimiento, que ellos, siempre que se embriagaban, lo contaban como anécdota, riéndose de lo sucedido. En la oportunidad reconoció al chofer de la camioneta, identificándolo como el agricultor Domingo Cuevas, el cual falleció aproximadamente un año a la fecha. Durante mucho tiempo buscó y preguntó por su esposo en los hospitales y morgues de la zona, como también en los recintos carcelarios, siempre con resultados negativos. Cuando se llevaron a su esposo vestía de la siguiente forma: chaleco de lana natural, color amarillo claro, camisa blanca, calzoncillos blancos cortos, pantalón de tela color azul, cinturón de cuero blanco con hebilla amarilla, calcetines de nylon color azul, zapatos negros caña alta, con hebilla cruzada al lado, reloj a cuerda marca Acron con correa café y un anillo de color amarillo en el dedo meñique de la mano izquierda. Su esposo tenía a la fecha la edad de 45 años. El día en que se llevaron a su esposo, su hijo Domingo Benedicto, quien en la oportunidad tenía 12 años y se dirigía a la escuela, vio a las personas que se llevaron a su padre, ya que también le obligaron a devolverse a la casa y lo dejaron encerrado y amenazado para que no saliera a ver lo que sucedía. La presente denuncia la efectuó su cuñada Ida del Carmen Meliquén Quilodrán, la que actualmente reside en la ciudad de Santiago. También por boca de vecinos supo que a su esposo y otros detenidos los habían matado y lanzado al río Muco, desde el puente del mismo nombre que está en Calle del Medio.

En declaración extrajudicial de fecha 9 de enero de 1996, **de fs. 111 (Tomo I)**. Refiere que es esposa de José Andrés Meliquén Aguilera, desaparecido desde el 04 de septiembre de 1973. Respecto de los hechos que rodearon su detención y posterior desaparición, cuenta que el día antes señalado, alrededor de las 07:00 horas, llegaron hasta su domicilio un grupo de Carabineros encapuchados con gorros pasamontaña, los cuales preguntaron por su esposo. Cuando les dijo que se encontraba tomando desayuno, le dijeron que saliera. De inmediato se lo llevaron por el potrero hacia el camino donde los esperaba una camioneta color amarillo. Se pudo percatar que eran alrededor de 12 carabineros, entre los cuales se encontraban el Sargento Domingo Campos Collados y el carabinero Enrique Ferrier. Asevera por cuanto la señora Elisa Schifferli los vio con el rostro descubierto, además de ser familiares. Después de eso hizo numerosas

averiguaciones en Lautaro como en Temuco, a fin de saber antecedentes sobre su esposo, pero nunca se le dijo algo concreto sobre él. Supo que el chofer de la camioneta que movilizaba a los carabineros en esa oportunidad era Elías Segundo Cuevas Aldea, actualmente fallecido. Manifiesta que su esposo no tenía participación en política ni era dirigente campesino, motivo por el cual ignora los motivos de su detención.

En declaraciones judiciales de fecha 18 de abril de 1996, **de fs. 134 a fs. 135 (Tomo I) y de fs. 633 a fs. 634 (Tomo III)**. Ratifica su declaración en todas sus partes. Añade que era la esposa de José Andrés Meliquén Aguilera, desaparecido desde el 4 de octubre de 1973. El 4 de octubre de 1973 llegaron a su domicilio los carabineros encapuchados con gorros pasa montañas, reconociendo entre ellos a Domingo Campos y a Enrique Ferrier, a pesar de estar disfrazado y, además, de que sabía ella que ellos los conocían desde hace tiempo. Ellos preguntaron por su marido y al contestarle que estaba tomando desayuno, ya que era más o menos las siete horas del día mencionado, le dijeron que su esposo saliera al patio; le avisó y él salió tranquilamente, lo tomaron y se lo llevaron rodeado con las manos en alto hacia el camino Quinchol. Su esposo no opuso resistencia. A ella le habían dicho que se quedara dentro de la casa y no saliera al patio; vio todo por una rendija de la casa. Su casa queda más o menos a trescientos metros del camino público. Dejo que los policías que llevaban a su esposo anduvieran un buen trecho; saliendo de su casa y escondiéndose tras las estacas y árboles pudo ver que lo subían a una camioneta amarilla en la parte de la carrocería. También pudo ver arriba a Sergio Navarro Schifferli. Manejaba esa camioneta Elías Cuevas Aldea, agricultor vecino del predio de ellos, quién ya está fallecido. Quién también vio esto fue doña Elisa Schifferli, madre de Sergio Navarro. Esta señora está fallecida. Posteriormente fue a Lautaro a la Comisaría; no le dieron dato alguno acerca del paradero de su marido, por eso fue a Temuco a la Fiscalía. Allí le contestaron que no tenían conocimiento del paradero de su marido. Colige que su marido era una persona tranquila, no tenía color político alguno, no participaba en reuniones políticas que se hacían en el campo en esa fecha, ni era dirigente campesino. Desde esa fecha, o sea de octubre de 1973, no sabe nada de su marido José Andrés Meliquén Aguilera, ya que no regresó a la casa desde esa fecha, quedando sola con cuatro hijos menores. Precisa que al momento de la detención de su esposo,

los policías no le pegaron, sino que solo lo rodearon y lo llevaron con las manos en alto hasta la camioneta. A ella le dieron sueldo y vive bien con su familia.

En declaración extrajudicial de fecha 19 de marzo de 2015 de **fs. 631 a fs. 632**. Señala que es la cónyuge de José Andrés Meliquén Aguilera. Agrega que contrajo matrimonio el día 06 de febrero de 1950 y de cuya relación nacieron 10 hijos, de los cuales solo 4 quedan con vida. Sobre las actividades de su marido este solamente se dedicaba a la agricultura en los terrenos de su propiedad, ubicados en el sector donde en la actualidad reside. Su esposo no era simpatizante ni militante de ningún partido político. Sobre la detención de su marido esta fue el día 04 de octubre de 1973 en su domicilio particular a manos de personal de carabineros de Lautaro. Según su recuerdo eran las 7 de la mañana, cuando en circunstancias que con su marido tomaban desayuno y preparaban a sus hijos para que se fueran al colegio, llegaron a su domicilio un grupo de 8 carabineros quienes iban por su marido, con el argumento que si este no oponía resistencia regresaría pronto al domicilio. Es así que José se entregó sin oponer resistencia y se lo llevaron en un vehículo que con el tiempo supo que era una camioneta amarilla que era de propiedad de una persona de apellido Cuevas, quien residía en calle del Medio, desde esa mañana nunca más supo de su marido, incluso ese mismo día fue a la comisaría de Lautaro a consultar por él, pero le dijeron que ahí no se encontraba, la misma situación consultó en la Policía de Investigaciones, Regimiento Tucapel y Cárcel Pública, donde no obtuvo información respecto a su persona. Con el paso de los días buscó a su marido en la ciudad de Lautaro y tomó contacto con un familiar de Sergio Navarro Schifferli, cuyo nombre no recuerda, quien le comentó que a Navarro lo habían detenido en la misma mañana en que fue detenido José por los mismos Carabineros, ya que vieron que en la parte posterior de la camioneta en que se movilizaban estaba su marido. Por lo que supo, los Carabineros También iban a llevarse a un menor que era sobrino de Sergio Navarro, pero finalmente lo dejaron ir ya que el joven era sobrino también de Domingo Campos, quien dispuso su libertad al darse cuenta que habían detenido al hijo de su hermana, quien estaba casada con Carlos Navarro Schifferli, hermano de la otra víctima de los hechos investigados. Por lo que sabe la familia Navarro tampoco supo que destino tuvo Sergio, incluso recuerda que en una última ocasión fue a la Comisaría de Carabineros de Lautaro a consultar por su marido donde lo atendió un funcionario

cuya identidad ignora, quien le manifestó que José había quedado en libertad exhibiéndole un documento donde supuestamente estaba inscrito su nombre y la impresión de su dedo pulgar, ya que su esposo no sabía leer ni escribir al igual que la declarante, por esa razón nunca supo que decía ese documento. Supo de la participación de Domingo Campos en las detenciones de su marido y la de Sergio Navarro por intermedio de la familia de este último, ya que el menor que había sido detenido lo había reconocido junto a otros Carabineros con los que ese día andaba.

A.11 CARLOS ANTONIO NAVARRO SCHIFFERLI (41 años para la fecha de los hechos investigados), quien declaró de fs. 84 (Tomo I) copia de fs. 640 (Tomo III), fs. 591 a fs. 592 (Tomo III), fs. 638 (Tomo III) y de fs. 641 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fs. 84 (Tomo I) y de fs. 640 (Tomo III).

Señala que el día 4 de octubre de 1973 salió de su casa alrededor de las 06:00 horas, donde un vecino a buscar una rastra, regresando aproximadamente a las 08:00 horas. Ahí desde lejos pudo ver que cuatro sujetos desconocidos vestidos con uniforme de carabineros sacaban de la casa a su hermano Sergio, golpeándole con las culatas de unos fusiles, y como cayó y no podía caminar, lo tomaron de los hombros y llevaron a una camioneta media amarilla que esperaba en el camino, lugar donde estaban los carabineros Enrique Ferrier y Domingo Campos, a quienes logró reconocer su madre Elisa Schifferli Luchsinger (QEPD), ya que ella los siguió hasta el vehículo y después le contó, diciéndole, que también lo buscaban a él, razón por la que se escondió en los cerros. Al día siguiente, su madre concurre a la Comisaría de Carabineros de Lautaro, donde le informaron que su hermano había estado detenido y puesto en libertad, mostrándole un libro donde aparecía una firma que le explicaron era de él. Como no regresaba a la casa, su madre comenzó a buscarle por todas partes, sin obtener noticias sobre su paradero. Alrededor de una semana más tarde se encontró con un vecino de nombre Antonio López Quilapán (QEPD), quién le dijo que había visto el día 4 de octubre una camioneta media amarilla que iba con varios carabineros ingresando a un fundo de propiedad de Pedro Rosel, ubicado a unos 19 kilómetros de Lautaro, a mano izquierda, la que tenía varios cadáveres en la parte posterior, y que después de un rato había salido desocupada, presumiendo que uno de esos cadáveres era de su hermano. Un mes más tarde decidió, en horas de la noche, ingresar al fundo de Rosel, y encontró un pozo de agua, semi escondido, el cual tenía varios troncos sueltos en el fondo,

metiendo una vara sin encontrar nada, ya que no tenía herramientas para verificar bien, debido a que el pozo además tenía como ocho metros de agua. En la actualidad el pozo de encuentra cerrado y relleno con piedras y maderos, pero sigue pensando en que en su interior se encuentran cadáveres, si bien el de su hermano y otros. Posteriormente se enteró que José Santos Meliquén Levinao, padre de José Andrés Meliqueo Aguilera, desapareció el mismo día de su hermano, había concurrido al mismo pozo y encontró cadáveres, pero no el de su hijo y los devolvió al pozo.

En declaración extrajudicial de fecha 24 de julio de 2013, **de fs. 591 a fs. 592 (Tomo III)**. Cuenta que para el año 1973 su hermano tenía la edad de 37 años, soltero trabajaba en la agricultura y vivía en la hijuela El Nogal, ubicada en Calle del Medio, paradero El Manzano de la comuna de Lautaro, junto a su madre Elisa Schifferli Luchsinger, actualmente fallecida. Recalca que su hermano no tenía militancia política alguna ni un cargo sindical. La detención ocurrió el 04 de octubre de 1973, en circunstancias que su hermano se encontraba en la casa en compañía de su madre y su hijo Daniel Navarro Campos de 15 años en esa fecha. Recuerda que ese día no se encontraba en la casa, pero al llegar posteriormente, su madre le comentó que los carabineros del Retén Dollinco y de la Comisaría de Lautaro se habían llevado a su hermano y a su hijo, y que al llegar a Calle del Medio liberaron a su hijo y se llevaron a su hermano, desconociéndose a la fecha su actual paradero, ya que nunca más lo volvieron a ver. Recuerda que su hijo le conversó posteriormente que había reconocido a algunos de los carabineros, siendo ellos Domingo Campos, Sargento Matus y Ferrier. Posteriormente se hicieron diversas consultas en el regimiento, carabineros, investigaciones y en el Juzgado, lugares donde nunca se obtuvo noticias de su hermano, destaca que a los días de ser detenido su hermano tuvo que obligadamente viajar a Santiago a esconderse, ya que carabineros andaba tras de él. Su hijo Daniel maneja mayores antecedentes de lo anteriormente expuesto, quien actualmente vive en Santiago.

En declaración judicial, de fecha 12 de noviembre de 1990 **de fs. 637 (Tomo III)**. Desarrolla que es hermano de Sergio Navarro Schifferli, quien el día 4 de octubre de 1973, en horas de la mañana fue sacado por carabineros desde su casa habitación y hasta la fecha no ha regresado, por lo que se presume que mataron, lo que no le consta, ya que ese día no estaba en su casa y solo se enteró

por los dichos de su madre. Su hermano era soltero. Con respecto a los funcionarios que lo detuvieron, no puede dar nombres ya que no estuvo presente, empero la gente comenta que su hermano estaría en el interior de un pozo ubicado en el predio del señor Roussel. Él ha ido hasta ahí, pero nada ha encontrado, es decir, son comentarios de personas, pero nadie le asegura ni tampoco se identificaron los carabineros que lo sacaron.

En careo judicial con Alfredo Guerrero Navarro, de fecha 06 de julio de 1992 **de fs. 638 (Tomo III)**. Ratifica sus declaraciones anteriores en todas sus partes, anexa que cuando su hermano Sergio Navarro fue detenido él estaba lejos de su casa y no identificó a nadie, y si en Investigaciones dio otra versión se debió al nerviosismo de ese momento. Asegura que su hermano nunca regresó a la casa.

En declaración judicial de fecha 28 de agosto de 2013, **de fs. 641(Tomo III)**. Recalca a sus dichos que el carabinero Campos lo persiguió constantemente después de la muerte de su hermano, por lo que tuvo que irse a Santiago.

A.12 LEVIO HUAQUIL NAMONCURA (58 años para la fecha de los hechos investigados). **En careo judicial con Domingo Campos Collao**, de fecha 23 de enero de 1976, **de fs. 88 (Tomo I)**. El señor que tiene a su lado es Domingo Campos. Éste fue en compañía de Juvenal Sanhueza a su casa y procedieron a sacar a su sobrino Gervasio Huaquil Calviqueo para llevárselo. Desde esa fecha no ha llegado a la casa. Este señor andaba con el funcionario Juvenal Sanhueza y un tal Segundo Coliqueo, que vive en calle Quinchol, llegaron como a las ocho de la mañana. Andaban vestidos de uniforme de carabineros y era solamente dos los que fueron, con Coliqueo.

A.13 ROSA HERMINIA MULATO RAÑIL (17 años para el año de los hechos investigados). Depone de fs. 97 (Tomo I) y de fs. 121 (Tomo I).

En declaración extrajudicial, de fecha 09 de enero de 1996 **de fs. 97 (Tomo I)**. Colige que es hija de Petronila Rañil Lanquilen, convivía con Samuel Huichallan Levian, el desaparecido desde el 11 de junio de 1974. El día de los hechos su madre llegó hasta su domicilio, por cuanto a esa fecha estaba casada y vivía en la misma casa que ahora, y le informó que como a las 06:00 horas habían llegado los carabineros de Lautaro hasta su casa y procedieron a detener a su padrastro. Le dijo que entre los carabineros que habían detenido a Samuel Huichallan estaba el Sargento Campos, el cual le amarró las manos y lo subió al

vehículo en el cual se movilizaban. Ese mismo día, junto a su madre, fueron a Lautaro, a la Comisaría de carabineros a preguntar por Samuel; allí les manifestaron que no se encontraba ahí y que debían ir a la Fiscalía Militar de Temuco. Al día siguiente su madre concurre a la Fiscalía de Temuco, donde le informaron que nunca había llegado a ese lugar, motivo por el cual tuvo que regresar. Especula que cuando ellas consultaban en los carabineros de Lautaro, Samuel Huichallan y otros detenidos más eran interrogados y torturados en el río Cautín. Pese a las numerosas averiguaciones que hizo su madre con el propósito de saber dónde estaba su padrastro, nunca pudo obtener datos sobre él. Afirma que su madre falleció el día 20 de octubre de 1991.

En declaración judicial, de fecha 12 de abril de 1996 **de fs. 121 (Tomo I)**. Ratifica en todas sus partes su declaración.

A.14 MARGARITA DEL CARMEN CUEVAS NAVARRETE (15 Años a la fecha de los hechos). Depone de fs. 107 (Tomo I) y fs. 131 a fs. 132 (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 08 de enero de 1996, **de fs.107 (tomo I)**. Funda que es hija legítima de José Bernardino Cuevas Cifuentes y Clementina del Carmen Navarrete Ulloa. Señala que su padre, José Bernardino Cuevas Cifuentes, fue detenido por carabineros de Lautaro entre los días 09 y 11 de octubre de 1973, en los momentos en que se encontraba en la Feria Ganadera. Recuerda que, en esa oportunidad, su padre andaba acompañado de un compadre de nombre José Linco, fue la persona que concurre a avisarles a su domicilio el mismo día alrededor de las 21: 00 horas. Narra que, como en ese entonces había toque de queda, concurrieron al día siguiente a consultar por él en la Comisaría de carabineros y específicamente a su hermana Raquel Cuevas, domiciliada en calle Palacios No. 0765, población Santa Rosa 1, de Temuco, le manifestaron que su padre se encontraba allí detenido y que le llevaran una manta y comida. Agrega que su hermana en aquella época concurre al parecer donde la señora Hilda de Garrido o el "finado" Rigoberto Vejar, a buscar algo de comer para su padre y al volver al cuartel de Carabineros, le informaron que su padre había sido dejado en libertad el día anterior en horas de la noche. Desarrolla que la primera versión estos negaron terminantemente haber manifestado que se encontraba allí detenido y amenazaron con pegarle a su hermana si seguía preguntando por su padre. Ahonda que por versión del compadre de su padre José Linco les manifestó que los Carabineros

detuvieron a su padre y a él fue Mario Ponce y otro de apellido Campos, que en ese tiempo eran de dotación de la Comisaria de Carabineros de Lautaro. Asevera que, su hermano Juan Cuevas Navarrete, se encuentra desaparecido desde el mes de noviembre de 1975, ignorando en que forma y circunstancias se produjo su desaparición ya que debía firmar todos los domingos en el patronato de reos, estuvo preso por un homicidio. Descarga que, mayores antecedentes sobre la desaparición de su padre entregará su hermana Raquel.

En declaración Judicial de fecha 16 de abril de 1996, **de fs.131 a fs.132 (tomo I)**. Apunta que es hija legítima de José Bernardino Cuevas Cifuentes y Clementina del Carmen Navarrete Ulloa, que a la fecha de la detención de su padre ella tenía 15 años de edad. Precisa que entre los días 9 y 11 de octubre de 1973, su padre fue a la feria Ganadera de Lautaro en compañía de un compadre de nombre José Linco, quien es la persona que concurrió a avisarle a su domicilio que en ese entonces era en el fundo Mirador, ubicado como a tres kilómetros de Lautaro, ese mismo día alrededor de las 21.00 horas. Detalla que al día siguiente concurren sus hermanas a consultar por su padre en la Comisaría de esa ciudad, donde les manifestaron que su padre se encontraba detenido y que le llevaran una manta y comida. Recuerda que sus hermanas concurren al parecer donde la señora Hilda de Garrido, el finado Rigoberto Vejar a buscar algo de comer para su padre y al volver al cuartel de Carabineros, les informaron que su padre había sido dejado en libertad el día anterior en horas de la noche y al hacerle presente la primera versión que tenían respecto del arresto, estos negaron terminantemente haber manifestado que se encontraba allí detenido. Además los amenazaron con golpear a sus hermanas si seguían preguntando por su padre. Suma que por versión de José Linco, supo que los carabineros que detuvieron a su padre fueron Mario Ponce y otro de apellido Campos. Ahora bien, por otra persona supo que el carabinero Ferrier también habría participado. Explana que su hermano Juan Cuevas Navarrete, se encuentra desaparecido desde el mes de noviembre de 1975, ignorando en que forma y circunstancias ocurrió su desaparición, ya que debía firmar todos los domingos en el patronato de reos de Lautaro, estuvo anteriormente recluido por un homicidio. Añade que su hermano vivía en calle Baquedano de Lautaro y al parecer en el trayecto desapareció. Cuenta que su hermana Delia

Cuevas y don José Linco viven en Lautaro. Ratifica su declaración de fojas 08 de enero de 1996, de fs.107 (tomo I).

A.15 PEDRO HUENUL HUAQUI (41 años a la fecha de los hechos). Depone de fs. 112 (Tomo I) y de fs. 137 (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 10 de enero de 2016, **fs.112 (tomo I)**. Cuenta que es hermano de Domingo Huenul Huaiquil, el cual se encuentra desaparecido desde el 15 de junio de 1974. Expone que su hermano perteneció al asentamiento de la Concepción, ex fundo Collanco, como obrero hasta el 11 de septiembre de 1973, por cuando después del golpe de estado, el fundo fue entregado a sus dueños, siendo contratado para seguir trabajando en el predio. Añade que el 15 de junio de 1974, su hermano fue a Lautaro a comprar alimentos, no volviendo más a la casa. Ante esto, comenzó las averiguaciones para saber que le había pasado. Indica que un día se encontró con Luis Grunenwaldt Millapán, quien le manifestó que a su hermano lo habían detenido los Carabineros en el restaurant “El Rayo”, ubicado frente al terminal de buses de Lautaro, por los carabineros German García Romero y Domingo Campos, entre otros. El que manejaba el furgón era el carabinero Ferrier. Afirma que concurrió a la Comisaria de Carabineros de Lautaro, y al preguntar por su hermano, estos negaron que había sido detenido, si dar ninguna explicación al respecto, después de esto no hizo más averiguaciones por temor a que le pasara algo. En el año 1990 hizo la denuncia del caso a la comisión Rettig. Musita que nunca más supo que pasó con su hermano Domingo ni que hicieron con él.

En declaración judicial de fecha 18 de abril de 1996, **de fs.136 a fs.137 (tomo I)**. Ratifica declaración extrajudicial que rola a fs.112 (tomo I). Explana que no recuerda bien el año, debe ser el año 1971, más o menos. Un grupo de los vecinos indígenas como el, se tomaron el fundo Coyando, pero su hermano, no andaba en esas tomas, sólo después se fue a vivir allí con su familia. Después del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, se devolvió el fundo Coyando a sus dueños y su hermano, volvió a su domicilio anterior, pero siguió trabajándole al dueño del predio, Don Moisés Velasco Cruz, quien aún vive en este fundo. Esgrime que el 15 de junio de 1974 su hermano salió de su casa en dirección a Lautaro a hacer unas compras, no regresó a su casa y hasta la fecha no se sabe de su paradero. Añade que por averiguaciones posteriores y preocupado porque su

hermano Domingo Huenul Huaiquil, no llegaba a la casa, un día se encontró con Luis Grunenwaldt Millapán, quien le manifestó que su hermano había sido detenido en Lautaro en el restaurant el Rayo, ubicado frente al terminal de buses, Agrega que los carabineros que lo detuvieron serían Domingo Campos y German Romero, ellos fueron quienes lo subieron al furgón judicial que manejaba el policía de apellido Ferrier. Expresa que con estos datos, se fue a la Comisaría de Carabineros de Lautaro, informándose allí de que su hermano no se encontraba detenido. Puntualiza que no hizo más averiguaciones por temor.

A.16 SERGIO MANUEL JARA SANDOVAL (35 años a la fecha de los hechos). **En declaración extrajudicial** de fecha 10 de enero de 1996, **de fs.119 (tomo I)**. En lo pertinente respecto a los hechos investigados relacionados con la detención y desaparición de once personas, no los conoce. Afirma que para el pronunciamiento militar y fechas posteriores no efectuó ninguna detención ya que en ese tiempo se desempeñaba como Suboficial de guardia y servicio a la población. Depone que al único procedimiento que en el cual participó, fue en la detención del gobernador de Lautaro de Apellido Teller, en el sector de Pumalal, donde no fue habido. Añade que la mayoría de las detenciones efectuadas por personal de Comisaría de Lautaro, había un grupo especial conformado por los carabineros Domingo Campos, Mario Ponce Orellana y Enrique Ferrier Valenze, quienes en algunas oportunidades las practicaban en una camioneta particular color guinda seca o burdeo, de propiedad de la gobernación. Puntualiza que no le consta que estos funcionarios hayan participado en la detención de las personas mencionadas como detenidos desaparecidos por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación que motiva la presente investigación. Proclama que nunca participó en detención de alguna persona con posterioridad al pronunciamiento militar y menos de las personas mencionadas como detenidos desaparecidos.

A.17 ÁNGEL SECUNDINO FUENTES PARDO (34 años a la fecha de los hechos). Declara de fs. 120 (Tomo I), fs. 138 a fs. 139 (Tomo I) y de fs. 224 a fs. 225 (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 10 de enero de 1996, **de fs.120 (tomo I)**. Depone en lo pertinente que para el pronunciamiento militar de 1973, se desempeñaba en la 1° Comisaría de Carabineros de Lautaro, a cargo del ganado,

dedicándose por completo a ello, no teniendo participación alguna en procedimientos policiales, como salir a cumplir servicio a la población y mucho menos participar en la detención de personas como las que en este acto se le mencionaron y que se encuentran detenidas y desaparecidas. Presume que su nombre aparece mencionado en la querella por el hecho de que perteneció a la dotación de la Comisaría de Carabineros de Lautaro y enfermero de ganado y en algunas oportunidades concurría a las reducciones indígenas a fin de vacunar y examinar el ganado. Es enfático en reiterar que nunca participó de detenciones de personas y mucho menos después del pronunciamiento militar.

En declaración judicial de fecha 22 de abril de 1996, **de fs.138 a fs.139 (tomo I)**. Expone que en el año 1964 fue destinado a la Comisaria de Lautaro, donde permaneció hasta 1978, siendo trasladado a la Comisaría de Carabineros de Angol, donde presentó su expediente a retiro ese mismo año. Agrega que para el pronunciamiento militar se encontraba prestando servicios en la Comisaria de Lautaro como mariscal y enfermero de ganado, ya que se preocupaba de los caballares de la unidad y destacamentos. Urde que a veces iba si las comunidades indígenas lo solicitaban, pero fue en contadas veces. Afirma que se dedicaba solo a lo concerniente en su trabajo, no cumplió órdenes judiciales ni de administración, solo estaba dedicado a lo que le correspondía. Apunta que por esa razón no ha participado en la detención de las personas que se dan por desaparecidas, ya que no le correspondió cumplir órdenes ni tomo conocimiento que alguno de sus colegas de equipo hubiera participado en alguna detención de estas personas. Precisa que si se le nombra será porque él fue en algunas oportunidades a alguna reducción a atender a algunos de sus animales como mariscal y enfermero de ganado. Reitera que no tiene participación en el desaparecimiento de las personas que se le han nombrado.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de diciembre de 2015, **de fs.224 a fs.225 (tomo I)**. Afirma que para el año 1973, no recuerda si ostentaba el grado de Sargento o Cabo 1º, se encontraba cumpliendo labores en la 1º Comisaría de Lautaro, al mando del Mayor Schweitzer y la conformaban alrededor de treinta funcionarios. Detalla que su labor en la unidad era herrador y enfermero de ganado, siendo excluido de todo tipo de servicio operativo de la unidad, es decir patrullajes, guardias y servicio a la calle. Su lugar de desempeño era al interior de la Comisaría,

específicamente cabellerizas y una dependencia como oficina para tales efectos. Además de las labores antes descritas, le correspondía salir a las unidades dependientes, como Galvarino, Perquenco, Pillanlelbún y Dollinco, a efectuar la revisión periódica del ganado. Rememora que en más de una oportunidad tuvo la función de estafeta. Narra que una vez ocurrido el pronunciamiento militar el día 11 de septiembre de 1973, siguió cumpliendo las mismas funciones, no siendo considerado en ninguna labor operativa, por lo que no le correspondió desarrollar patrullajes de toque y queda, detenciones, allanamientos ni interrogatorios a personas detenidas por temas políticos. Manifiesta que, a contar del 11 de septiembre de 1973, el Teniente Huerta formó un grupo de funcionarios dedicados a las detenciones de personas por temas políticos, integrada por los Carabineros Ferrier, Campos, Ponce y otros que no recuerda ese momento. Divulga que este grupo en más de una oportunidad llegaron a la Comisaría con personas detenidas por temas políticos, pero desconoce que hacían con ellos y que destinos les daban posteriormente. Declara que era común ver funcionarios militares del Regimiento La Concepción en la unidad policial. Blasona que el Capitán Nibaldo Del Río Del Río concurría a la Comisaria a dejar detenidos, quienes permanecían una noche, para luego ser retirados al día siguiente y conducidos a esa unidad militar. Atestigua que aún cuando era común observar a los militares en la unidad de Carabineros, no recuerda la individualización de éstos, salvo a Del Río cuyas visitas eran recurrentes. Se refiere a víctima de causa diferente.

A.18 LUIS ARMANDO LARENAS CATIPILLAN (30 años a la fecha de los hechos). Depone de fs. 222 a fs. 223 (Tomo I), fs.289 a fs.290 (tomo I) y de fs. 850 a fs.851 (tomo III) y de fs.934 (tomo IV).

En declaración extrajudicial de fecha 14 de diciembre de 2015, **de fs.222 a fs.223 (tomo I)**. Expone que desde el año 1971 hasta 1976, trabajó en la Comisaria de Lautaro, en una oficina que se ubicaba al final de la unidad, a mano derecha, junto al doctor Nilo Fidel Marín Acuña, quien actualmente trabaja en el Hospital Dr. Henríquez Aravena como Gineco Obstetra. Añade que, para el 11 de septiembre, aun cuando hubo muchos cambios en las funciones que se realizaban en la unidad policial, él continuó con su trabajo ordinario como enfermero, atendiendo exclusivamente a carabineros y sus familiares, nunca a detenidos, dentro de su horario que partía a las 08:30 hasta las 18:00 horas; y el sábado hasta

las 13:00 horas. Los calabozos se encontraban al fondo del pasillo, a mano izquierda, por lo tanto, podían observarlos, pero nunca se enteró en qué condiciones se encontraban los detenidos. Narra que en la Comisaria nunca fue testigo ni oyó acerca de interrogatorios o torturas a detenidos en la unidad. Urde que había alrededor de cuatro funcionarios que vestían de civil y formaban parte de un grupo de Inteligencia, entre los cuales recuerda a Santiago Millanguir Hueche, un Cabo 2º de contextura gruesa de nombre Pérez Camaño, Juvenal Sanhueza Sanhueza, Sandoval Humaña, un Sargento 2º de pinta alemán y uno de apellido Ponce. Expone que en diciembre de 1973 fue destinado a atender a los detenidos ordinarios como políticos en la cárcel de Lautaro. Sin embargo, a pesar de realizar dicha labor nunca tomó conocimientos, ni fue testigo de hechos que configurara violación a los derechos humanos de esa gente. Asevera que nunca tuvo conocimiento acerca de detenciones de carácter político, como funcionarios militares sacando detenidos de la Comisaria o llevándolos a ese recinto policial. Se refiere a otra víctima.

En declaración extrajudicial de fecha 27 de mayo de 2016, **de fs.289 a fs.290 (tomo I)**. En lo pertinente aquilata que el 11 de septiembre de 1973, siguió realizando sus labores de paramédico en la cárcel de Lautaro y en la cruz roja de la misma ciudad donde atendía a personal activo, familiares y pasivo de la Institución, labor que realizó durante todo el tiempo que estuvo en Lautaro, hasta el año 1976, para ser trasladado en ese año a la Comisaria de Buin. conversaciones con detenidos comunes y políticos privados de libertad en la cárcel de Lautaro, pero no recuerda sus nombres, las circunstancias de su detención, ni el destino de ellos. Sin embargo, utilizó su función en la cruz roja para conseguirles alimentos, vestimentas etc. Explana que está convencido de que un funcionario de gendarmería de la cárcel de Lautaro, que en ese tiempo tenía el grado de Sargento 1º, debe tener conocimiento acerca de los detenidos al interior de ese recinto penal como de los funcionarios de Ejército y Carabineros que acudían periódicamente a retirarlos. Manifiesta que dejó de realizar labores operativas como patrullajes, allanamientos, detenciones y, labores policiales, una vez que fue destinado a la Comisaria de Lautaro hasta el final de su carrera. Explica que la comisión civil de esa Comisaria estaba conformada por Domingo Campos Collao, Ponce y Matus. Sostiene que no tiene conocimiento sobre detenciones por motivos políticos realizados por funcionarios de esa Comisaría e ignora las labores que realizaba la comisión civil.

Agrega que nunca vio militares del Regimiento "La Concepción" en la Unidad, y menos tuvo la oportunidad de prestar servicios con ellos. Asevera que no tuvo participación ni conocimientos acerca de muertes, ejecuciones, interrogatorios, torturas, inhumaciones, exhumaciones, desapariciones de cuerpos lanzados a ríos, lagos, etc., que haya ocurrido durante el periodo que estuvo en la Institución, como tampoco realizados por funcionarios de otras ramas de la Fuerzas Armadas. Con relación a los hechos que se investigan es primera vez que escucho ese nombre e ignora las circunstancias que rodearon su detención y posterior apremio.

En declaración extrajudicial de fecha 04 de agosto de 2023, **de fs.850 a fs.851 (tomo III)**. Ratifica declaración extrajudicial de fs. 222 a fs.223 (Tomo I). Indica que en su trabajo hubo tres funcionarios de servicios, a saber el escribiente, peluquero y deponente. De ahí con el escribiente Guillermo Caillet, tomaban micro para irse a Lautaro, tenían permiso para llegar un poco más tarde, casi toda su vida ha estado en el hospital de Carabineros en su función de paramédico. Urde que iba a cubrir los reemplazos durante todo el año. En la unidad estaba hasta las 12:30 horas y luego se iba a la cárcel a ver detenidos políticos y ordinarios, los atendía y escuchaba. Soslaya que le llamaba la atención los detenidos que quedaban abandonados tras cometer delitos. Además era voluntario de Cruz Roja y con voluntarios hicieron actividades para ayudarlos. Explaya que a los detenidos políticos, estos no se encontraban juntos con los presos comunes, empero los veía bien y siempre le pedían medicamentos para dormir, él hablaba con el médico, quien lo facultaba para darles ciertas cosas. Cuenta que junto al Dr. Fidel Acuña tenían que atender a los funcionarios activos de carabineros, gendarmería, Policía de investigaciones y sus familiares. El Comisario era Jorge Schweitzer, él lo veía muy sencillo, después se enteró de otras cosas. Indica que recuerda como integrantes de la 1°Comisaría al escribiente Guillermo Caillet y el peluquero Juan Contreras, al parecer falleció, no tenía contacto, no salía a la calle, solo realizaba sus funciones específicas. Manifiesta que se ha encontrado en Temuco con ex detenidos de la Comisaría con los que ha conversado y le dan las gracias. Expresa que no vio detenidos políticos en la Comisaria ni le tocó atenderlos porque él estaba principalmente en la cárcel. Tampoco le tocó atenderlos ni al médico, agregando que después de atender enfermos le correspondía realizar trabajo administrativo. Respecto de la conformación de la comisión civil de la Comisaría recuerda a

Sandoval Humaña, Ponce, Campos, Collao, Sanhueza, Santiago Millanguir y Pérez Camaño, ese era el grupo que realizaba detenciones y se juntaban con militares y hacían sus grupos, intercambio de labores y refuerzo. Respecto de las víctimas de autos no los conoce, agregando que Olivia Paulsen era la presidenta de la Cruz Roja de Lautaro de la época y ella podría dar información de su trabajo con los presos.

En declaración judicial del 08 de agosto de 2018 rolante de **fs. 934 (Tomo IV)**. Ratifica su declaración extrajudicial rolante de fs. 137 a fs. 138 y de fs. 147 a fs. 148. Delibera que tenía un horario especial porque pasaba lista a las 09:00 junto con el escribiente y posteriormente atendía a la gente hasta las 13:00 horas. Luego se iba a la cárcel y ahí almorzaba y permanecía hasta las 17:00 horas. Pero durante el tiempo que estuvo en la unidad policial no recuerda haber visto torturar o apremiar detenidos. Desconoce la cantidad de personas que pudo haber estado detenidas, porque en su lugar de trabajo no pasaba por los calabozos, a pesar de estar al interior de la Comisaría. Cuenta que Nilo Fidel Marín no atendió personas detenidas políticas, porque como enfermero se habría enterado. Puede que el Mayor haya ordenado la detención de alguna persona civil. El Mayor en su momento era Schweitzer, además estaba Marcial Vera y Fernández, cree. Blasona que conoció a los Carabineros en las formaciones generales, de civil, Campos Collao, otro Sandoval, Ponce y no rememora que otros. Se decía que ellos eran los submarinos, significa que era los que trabajaban fondeado, se supone que eran los de inteligencia. Comunica que llegó desde el año 1972 hasta el año 1975 en la Comisaría de Lautaro, después se fue a Santiago. Invoca que en septiembre de 1973, estaban acuartelados durante, no recuerda bien cuanto tiempo estuvieron, no se les permitía salir, estaba el escribiente, peluquero y deponente. El escribiente era Guillermo Callet, el peluquero era Juan Contreras, fallecido. Después fueron autorizados a regresar a sus casas. Callet tenía funciones distintas, desconoce informe que tenía que hacer él, son otras cosas diferentes. No recuerda que vehículo formaba parte de la unidad policial. En aquella fecha había aproximadamente doce personas pero cada uno en sus labores. La única vez que se juntaban eran en las fechas de pago, pero si sabía que Campos Collao, Ponce y otras pertenecían a la comisión de inteligencia. Ignora que labores cumplían con el Ejército e Investigaciones, cree que estaban metidos en esas cuestiones. En su

horario no vio personal del Ejército, estaba encerrado en su lugar de trabajo. Lo que sí sabe que es el Coronel del Regimiento La Concepción de Lautaro, Jorge Aranda Salazar lo reto porque llegó tarde con la gente de la Cruz Roja a un tedeum. Basa que cuando estuvo en la cárcel atendió detenidos políticos, pero no recuerda los nombres de las personas. La chica de la Cruz Roja, Olivia Pausen, ella debe aportar mayores antecedentes, porque con ella atendió personas detenidos políticos y reos comunes en ayuda social, le conseguían ropa, alimentos y medicamentos. Sus funciones eran de servicio, no de orden y seguridad.

A. 19. HÉCTOR GASTÓN BÁEZ SANHUEZA. (23 años a la época de los hechos), quien declaró de fs.240 a fs.241 (tomo I), de fs.315 a fs.316 (tomo I),

En declaración extrajudicial prestaba ante la Policía de Investigaciones de Chile de fs. de fs.240 a fs.241 (tomo I), el 16 de abril de 2016. Para el año 1974 ostentaba el grado de Carabinero y se encontraba cumpliendo labores en la Tenencia de Perquenco. Manifiesta que respecto a detenciones de personas durante el periodo que prestó servicios en la Tenencia de Perquenco, en la jurisdicción las únicas que recuerda fue la del sacerdote Wilfredo Alarcón, quien se presentó voluntariamente en la guardia de la Tenencia y que entregado a personal de la Fuerza Aérea de la Base Maquehue de Temuco, desconociendo si su entrega fue coordinada con dicha institución o bien llegaron a Perquenco en busca de detenidos. La otra situación que recuerda es la de un señor de apellido Martínez, quien también se presentó voluntariamente en la unidad, pero este fue retirado por una patrulla policial de la 1° Comisaría de Lautaro, desconociendo que funcionarios eran.

En **declaración judicial de fs.315 a fs.316 (tomo I)**, del 4 de noviembre de 2016, ratifica su declaración extrajudicial. Expresa que efectivamente conoció a Domingo Campos Collao, el se desplazaba por todo el sector. Ese caballero andaba por todas partes, esto incluía Perquenco. Siempre vio a Campos con Ponce, pero no todo el tiempo, solo a veces.

A.20. JOSÉ AGUSTÍN MÉNDEZ CONTRERAS En diligencia de careo con Domingo Antonio Campos Collao de fecha 10 de abril de 2015, rolante de fs.765 (Tomo III). Reconoce a la persona sentada su lado, como Domingo Campos Collao, de quien hizo referencia en sus dichos. Él formaba parte del grupo seleccionado por el Teniente Huerta para tratar con detenidos políticos. Blasona que la composición

de este grupo era conocida por toda la unidad. Los carabineros fueron escogidos por ser más antiguos o por cercanía o confianza de los jefes de la Comisaría. Más antecedentes no puede aportar. Refiere que no inventa nada, esto es lo que sucedió, en lo demás se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con **Jorge Enrique Schweizer Gómez** de fecha 10 de abril de 2015, rolante de fs.657 (Tomo III). Reconoce a la persona sentada a su lado como el Mayor Jorge Schweizer de quien hizo referencia en sus dichos. Él estaba él tanto del grupo formado por el Teniente Huerta para tratar con detenidos políticos y sabía lo que sucedía con ellos. Esto se lo imagina porque él era el jefe de la unidad en ese tiempo. Se mantiene en sus dichos.

A.21. EDUVINA PATRICIA MILLALÉN LEPILAO-TRALCAL, nacida en 1973. Quien declaró de fs. 332 a fs. 333 (tomo III). En declaración judicial recuerda que a contar del 11 de septiembre de 1973 los Carabineros de Lautaro iban constantemente a su casa a detener y golpear a su padre. Llegaban golpeando la puerta y preguntando por su padre. Agrega que eso ocurrió en varias ocasiones durante 1973 y años posteriores. Además que en innumerables ocasiones, los carabineros llegaban a la casa y sacaban a su padre en ropa interior de la cama para trasladarlo a la cárcel de Lautaro. La última oportunidad en que lo fueron a detener, su padre arrancó cayéndose en un hoyo a las afueras de la casa. Su padre no fue a médico por miedo entrándole gangrena, falleciendo el 01 de enero de 1983. Expresa que ella sufrió mucho a causa de las torturas que su padre padeció, ya que sin motivo lo detenían para golpearlo. Golpes que su madre también recibió porque cuando lo iban a buscar a la casa de encontraba su madre, quien le respondía que no sabía donde estaba su marido, momento en que carabineros la golpeaba y ellos veían cuando caía al suelo mientras todos ellos como hermanos lloraban. Comenta que su madre antes de morir le señaló que los carabineros iban a buscar a su padre a la casa para detenerlo y golpearlo eran los carabineros Mario Gatica y Mario Ponce de la Comisaría de Lautaro. Su madre decía que los carabineros de Lautaro buscaban a su padre pues él se iba constantemente a alojar a la casa de su tío Juan Tralcal Huenchuman, quien también era intensamente buscado.

A.22. VÍCTOR MATUS VÁSQUEZ, 38 años a la época de los hechos, quien declaró de fs.356 (tomo I), de fs.628 a fs.629 (tomo III), de fs.744 a fs.745

(tomo III), de fs.747 (tomo III), de fs.748 a fs.750 (tomo III), de fs.751 a fs.752 (tomo III), de fs.753 (tomo III).

En declaración extrajudicial, prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile de fs.628 a fs.629 (tomo III) el 26 de febrero de 2014.

Para el año 1973 ostentaba el grado de cabo de Carabineros y se desempeñaba en la 1ra Comisaría de Lautaro, la que estaba a cargo del Mayor Schweizer Gomez, recordando también el Teniente José Huerta Ávila, quien estaba a cargo de los servicios de la unidad por lo que tenía a cargo la labor operativa de esta. Expresa que a partir del 11 de septiembre de 1973 comenzaron a llegar personas detenidas a la unidad en algunos casos eran llevados por personal del Ejército pertenecientes al Regimiento La Concepción de Lautaro, quienes dejaban a los detenidos en la noche y al día siguiente los venían a retirar, dejando siempre constancia en los libros respectivos de la guardia. Señala que Mario Ponce Orellana, Domingo Campos Collao y Enrique Ferrier Valeze conformaban un grupo liderado por el Teniente Huerta, quienes efectuaban labores de tipo reservadas, probablemente relacionadas con la ubicación de personas opositoras al régimen militar. Campos, Ferrier y Ponce tenían una oficina al interior de la unidad.

En careo de de fs. 744 a fs.745 (tomo III), de fecha 10 de abril de 2015, con Domingo Campos Collao. Reconoce a la persona sentada a su lado como el cabo Domingo Campos Collao que trabajó en Lautaro cuando sirvió en ese lugar el declarante. Él formaba parte del grupo especial formado por el Teniente Huerta que tenía que ver con detenidos políticos. Afirma que puede ser que el señor Campos haya formado parte de la comisión civil, pero también formó parte del grupo que el Teniente Huerta tenía para salir a los temas políticos. Aunque no vio que el señor Campos llegara con detenidos, si se sabía que ellos estaban a cargo de esos trabajos en ese tiempo. Expresa que la oficina que ocupaba este grupo especial estaba ubicada hacía el interior de la unidad, a un costado de la oficina de partes. Se mantiene en sus dichos,

En declaración judicial de fs.748 a fs. 749 (Tomo III) de fecha 07 de noviembre de 2014. Ratifica su declaración policial y manifiesta que si hubo detenidos por motivos políticos en Lautaro, recordando a un profesor de apellido Gatica a otra que le decían "Pichicho" Venegas. Los detenidos eran ingresados por personal militar del Regimiento La Concepción de Lautaro y dejados en los calabozos de la

unidad. Al día siguiente eran venidos a buscar por los propios militares y llevados al Regimiento. Desconoce lo que hacían con ellos. Recuerda a los capitanes de Ejército Jorge del Río y García quienes constantemente acudían a la Comisaría de Lautaro a buscar y dejar detenidos, de todo lo cual quedaba constancia en los libros. Recuerda que estos oficiales siempre se hacían acompañar de sargentos y cabos militares. El primero de los oficiales mencionados era alto y el segundo como la estatura del declarante y de complexión gruesa. Ellos se entendían con el Teniente Huerta. El Teniente Huerta estaba a cargo de un grupo de carabineros especialmente formado para tratar los temas de detenidos políticos. Entre los carabineros de ese grupo estaban el Sargento Ferriere, los cabos Domingo Campos Collao, Mario Ponce Orellana, Egidio Sandoval Umaña, Saturnino San Martín Bustos y el suboficial Sanhueza. Este grupo tenía una oficina dentro de la unidad donde supuestamente interrogaban a los detenidos. el ingreso estaba prohibido a los demás Carabineros. No tuvo conocimiento de que los detenidos fueran víctimas de apremios ilegítimos. Estas personas solo permanecieron en los calabozos de la unidad. No hubo detenidos en el segundo piso de la unidad, ni en las caballerizas. Tampoco se apremió físicamente a los detenidos en la Comisaría, o a lo menos no fue testigo de este hecho, ni se enteró de aquello. El Tribunal le lee la declaración judicial de Daniel Navarro Campos, a lo que insiste que conocía a la familia Navarro porque trabajó en el Retén Dollinco antes de 1973. Cree que el está confundido y lo mencionó por el hecho de haberlos conocido con anterioridad. Tampoco le consta que carabineros haya participado en operativos acompañado de civiles.

A.23 MANUEL MARTÍNEZ ULLOA (45 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Declara de fs. 516 a fs. 517 (Tomo II) y de fs. 519 a 520 (Tomo II).

En declaración extrajudicial de 13 de mayo de 2016, **de fs. 516 a fs. 517 (Tomo II)**. Decanta que en el mes de septiembre de 1973 era funcionarios de FF.EE y subdelegado en la comuna de Perquenco y Militante del Partido Comunista. El día trece de septiembre de 1973 mientras se dirigía a su hogar en compañía de su esposa, fue detenido por el Suboficial Renato Rodríguez y el Cabo Isla, desconoce mayores antecedentes de ellos, los que eran funcionarios del Retén de Perquenco, según se le informó, por órdenes superiores. En el mismo procedimiento fue detenido el cura párroco, padre Wilfredo Alarcón, fue trasladado a la Comisaría de Lautaro, distante a doce kilómetros de Perquenco. Durante el período comprendido

entre el 13 y el 22 de septiembre de 1973, tiempo que duró su detención en la Comisaría de Lautaro, fue torturado, flagelado y humillado por el Teniente Huerta en presencia de los Carabineros Ferrier y Campos. Se le interrogaba con el pretexto de asumir responsabilidades con respecto a la existencia de armas, para lo cual se ataba a una silla sobre superficie húmeda y desnudo se le aplicaba corriente eléctrica en los testículos y en las orejas hasta quedar inconsciente, práctica que se repitió varias veces. En otras oportunidades el mismo Teniente Huerta haciendo uso de un látigo de cuero de vacuno, con el dorso desnudo procedía a latigarlo e insultarlo y como secuencia de este castigo le quedó una cicatriz en el brazo izquierdo. En otras ocasiones lo sometía a la práctica de “la calle del medio”, recibiendo duros golpes en distintas partes del cuerpo. Delibera que el día 22 de septiembre fue trasladado a la cárcel de la ciudad de Temuco en compañía de otros compañeros, distante 42 kilómetros de Perquenco, para dejar constancia de su estado de salud, se le practicó un examen médico y se le proporcionó algunos medicamentos. De estos exámenes en la actualidad no se registran antecedentes. En calidad de libre plática permaneció hasta el día 3 de enero de 1974, día en que se le puso en libertad. El día 29 de agosto de 1974 fue nuevamente detenido, esta vez junto a su esposa Eliana Veloso, por Militares del Regimiento La Concepción de Lautaro, al mando del Capitán Del Río, esta nueva detención significó abandonar a sus hijos, tres hombres y una mujer, pero posteriormente se enteraron de que vecinos se habían hecho cargo de ellos. En esta ocasión, vendado de la vista fue conducido por militares a declarar al cuartel de Investigaciones, aquí se le aplicó corriente en la cabeza y algunos golpes a los tobillos, sin otro tipo de apremios, fue dejado en libertad siete días después. Se le consulta por una víctima.

En declaración judicial de 15 de marzo de 2017, **rolante de fs. 519 a fs. 520 (Tomo II)**. Ratifica la declaración extrajudicial que rola de fs. 410 a fs. 411 (correspondiente a su declaración de fs. 516 a fs.517, (Tomo II) de la presente causa), y que le ha sido leída. Difunde que fue detenido en Perquenco el día 13 de septiembre de 1973, mientras se dirigía a su hogar, en compañía de su esposa, fue detenido por el Suboficial Renato Rodríguez y el Cabo Isla, siendo trasladado hasta la Comisaría de Lautaro. En la Comisaría de Lautaro estuvo entre el 13 y el 22 de septiembre de 1973, tiempo que duró su detención en la Comisaría de Lautaro, fue torturado y flagelado por el Teniente Huerta en presencia de los funcionarios Ferrier

y Campos. Divulga que el nombre de Benedicto Poo no le es conocido, tampoco el nombre de Manuel Lizama Cariqueo. Desarrolla que mientras estuvo detenido en Lautaro al único que recuerda es al padre Wilfredo Alarcón. En su segunda detención, el 22 de septiembre de 1973, fue trasladado a la cárcel de Temuco, allí recuerda que eran muchos detenidos, estaban en el patio, eran más de cien, pero no recuerda a nadie, ningún nombre, unos se fueron a otros países, a él le ofrecieron irse, pero su señora no quiso. En Temuco cuando fue al médico, se tuvo que sacar la ropa para examinarlo, incluso el médico movió la cabeza, se asustó por cómo estaba, a veces cuando estaban en la cárcel le decían “Martínez, prende las luces”, porque le aplicaban corriente, con el piso mojado y cuando se paraba, lo pasaban por la calle del medio, afortunadamente está vivo. Respecto a la víctima cuyo nombre se le da a conocer como José Claudio Beltrán Curiche, no la recuerda. Finalmente exhibe un certificado médico, el cual se agrega a la presente declaración.

A.24 IRMA ELIANA VELOZO (40 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). **En declaración judicial** de 05 de julio de 2017, **rolante de fs. 531 a 533 (Tomo II)**. Acota que esposa de Manuel Martínez Ulloa, quien se desempeñaba como subdelegado de la comuna de Perquenco para el año 1973. Espeta que la primera vez que Carabineros del Retén, detuvieron a su marido fue en la calle en Perquenco, andaba el Sargento Primero Rodríguez, no recuerda otros nombres. Fue con posterioridad al 11 de septiembre, al día subsiguiente, el 13 de septiembre aproximadamente. Lo llevaron al Retén de Perquenco, luego esa misma noche fue a preguntar por él y le dijeron que los Militares se lo habían llevado a Lautaro, entonces fue a Lautaro a la Comisaría a preguntar y le dijeron que no estaba ahí, con el tiempo supo que efectivamente él estuvo detenido ahí, en la Comisaría, pero se lo habían negado. Ella le iba a dejar ropa, pero nunca le entregaron ropa de vuelta. Con el tiempo se enteró que era porque estaba muy ensangrentada. Debe haber permanecido unos 7 u 8 días detenido en ese lugar. Hasta que un día fue al Retén, ahí le dijeron que no fuera más a Lautaro, porque habían traído a su marido a declarar a Temuco. Entonces viajó a Temuco y un conocido de su marido le informó que estaba en la cárcel, nunca supo el nombre de este hombre. En la cárcel de Temuco le dijeron que debía llevarle una cama, un colchón, nada de sábanas y una cuchara con una taza, estuvo detenido hasta el 03 de enero de 1974. Advierte

que fue al Regimiento Tucapel de Temuco y pidió hablar con el Fiscal, a saber Podlech, el encargado le dijo que ese era su nombre. El señor Podlech le informó que su marido estaba detenido porque se había tomado los terrenos en Perquenco, cuando ella negó esto el Fiscal le dijo: “señora los maridos no les contamos a nuestras señoras lo que hacemos en las noches”, por su insistencia le pidió que recopilara algunos documentos que probaran que era falso de lo que se acusaba a su marido, entonces juntó algunas recomendaciones de personas que conocían a su marido y los entregó en la Fiscalía Militar. También pidió una autorización para llevarle alimentos a su marido, recuerda que en esa oportunidad le llevó medio kilo de tomates. Aproximadamente una semana pudo llevarle comida, en ese lapso vio a su marido, pero no le comentó nada si estaba golpeado, porque había un funcionario y ella estaba con su hijo. En otra oportunidad que había visita lo pudo ver, pero estaba con el ánimo muy bajo, le costó 2 años levantarle el ánimo a su marido, estuvo 2 años sin sueldo, nunca tuvieron recursos como médico o psicólogo para ayudar en este proceso. Adopta que su marido le comentó que de los Carabineros de Lautaro el Teniente Huerta y el Carabinero Ferrier participaron de los castigos a su marido. Precisa que Ferrier hizo el servicio militar con su esposo, por lo que lo recuerda bien. Se que lo llevaron al Regimiento, donde le aplicaron corriente, pero no tiene claro si en Lautaro o Temuco. Cuando volvió a la casa tenía toda la espalda cicatrizada. Sustenta que el 28 de agosto de 1974, en la mañana tocaron la puerta de su casa, era el Capitán Jorge Del Río, quien le señaló que venían a tomar detenido a su esposo y a ella, sin decir cuál era el motivo, los subieron al camión militar, estaban otras personas inclusive señoras detenidas, quedando solos sus cuatro hijos en la casa, los llevaron a la Comisaría de Lautaro, los tuvieron seis días detenidos en el calabozo; sacaron a las mujeres a declarar, pero a la deponente no le dijeron nada. Cuando le preguntó al Teniente Jorge Del Río porque no la dejaban libre, le señaló que estaba ahí porque estaba acusada de hacer reuniones clandestinas y que se iba a ir a su casa a cuidar a sus hijos, que tenían que determinar si su marido era culpable, por lo que pasaba al Consejo de Guerra. Luego de dos días lo dejaron en libertad. En ese periodo no fue golpeada, ni tampoco vio que golpearan a alguien más. Sabe que era Jorge Del Río, quien era delgado, moreno, estatura regular y joven. Destaca que vio que los Militares como llevaban y sacaban detenidos desde la Comisaría de Lautaro. Recuerda que Manuel

mencionó a Domingo Campos Collao como uno de sus castigadores. No recuerda que otras personas estuvieron con su marido. Éste último, con posterioridad a la detención tenía pesadillas en las noches.

A.25 FILIBERTO JARA GÓMEZ (36 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). **En declaración judicial** de 07 de agosto de 2017, **rolante de fs. 535 a 536 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra de fs. 938 a 938 vta. (Tomo IV).** Ratifica íntegramente su declaración rolante de fs. 227 a 228 (otorgada en causa diversa) que le ha sido leída. Detalla que estuvo detenido en la Comisaría de Lautaro aproximadamente desde el 18 de septiembre de 1973 hasta el día de todos los santos, el 01 de noviembre de 1973. Recuerda que Carabinero golpeaba a los detenidos, rememora al Carabinero alto de apellido Vergara, cree que su nombre era Domingo, quien actualmente está fallecido. También había un Teniente de Carabinero de Galvarino, que era bravo, siempre pasaba a molestar a un detenido que era de Galvarino, al que le decía “Pato Malo”, amenazándolo que la próxima vez que lo viera lo iba a matar, no recuerda cuál era su nombre. También el Carabinero Leoncio Higuera, quien fue fregado con el deponente y en una oportunidad sacó un arma y amenazó con matarlo. Respecto a lo Militares, vio al Capitán Del Río al interior de la Comisaría y García, quienes les exhibían fotografías de personas que el deponente no conocía y le preguntaban asegurando que debía haber estado ahí, conocer los hechos sobre los que se le interrogaba. Se le consulta por víctimas de otras causas. A Manuel Martínez si lo recuerda, lo vio detenido, él iba de Perquenco, cuando ellos llegaron a él lo iban sacando para Temuco junto a otros detenidos y les dijo miren lo que les espera, mostrándoles como lo habían golpeado en la espalda, estaba muy herido.

A.26 OCTAVIO RENATO CATALÁN LINCOLEO (25 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). **En declaración judicial** de 13 de febrero de 2020, **rolante de fs. 546 a 548 (Tomo II).** Ratifica íntegramente su querella presentada y que rola a fojas 479 y siguientes. En cuanto a lo que le tocó vivir, la primera vez que fue detenido, fue el 21 de septiembre de 1973 por Carabineros de Pitrufquén, ya que en Pitrufquén trabajaba en la empresa comercio Agrícola “ECA” y lo llevaron al campo que tenían de tortura, este campo parece que estaba en Pitrufquén, ahí había más de 200 personas, entre empleados, profesores, agricultores, etc. Distingue que fue detenido junto a Alfredo López y otros más que no recuerda sus

nombres, pero al día siguiente de esa detención los condujeron a la 2° Comisaría de Temuco, para luego ser trasladados a la cárcel de Temuco, donde vio cómo eran torturados Juan Antonio Chávez y Antonio Molina. No recuerda nombres de las personas con las estuvo detenido, pero eran de distintas reparticiones como el SAG e INDAP. Ahí en la cárcel estuvo hasta finales de octubre de 1973 y lo dejaron en libertad, pero con la obligación de presentarse en Pillanlelbún. En Pillanlelbún lo dejaron detenido y lo trasladaron a Lautaro, donde estuvo como 20 días aproximadamente en la Comisaría, en ésta lo torturaron los Carabineros Juvenal Sanhueza, Campos Collao, Fuentes y Ferrier y gracias a un Teniente que lo defendió lo dejaron tranquilo, porque ellos lo querían matar. Todo esto porque pertenecía a las juventudes Comunistas y era presidente del centro de alumnos tecnológico de la Universidad Técnica del Estado. Luego de esto, lo dejaron en libertad, pero con la obligación de presentarse todas las semanas en la Comisaría y así estuvo durante 10 años, pero cuando ellos querían lo apaleaban y lo dejaban ahí. El que estaba a cargo del Retén de Pillanlelbún, era patas planas. Glosa que en ese tiempo vivía en Vilcún, trabajaba en Pitrufrquén, pero tenía que presentarse en Lautaro. Hace presente que toda su familia, los Catalán Lincoleo, fueron torturados y tienen causas en este Tribunal. Ensaya que mientras sus hermanos y él estaban presos, tomaron preso a su papá y su madre quedó sola. Mientras estuvo detenido en Lautaro, estuvo con sus primos hermanos, eran como 10 y actualmente está desaparecido Elías Catalán, vio cuando a él lo llevaban detenido los Carabineros de Pillanlelbún y luego pasaron buscar al deponente. Esgrime que en caso de ser necesario, está dispuesto a carearse con los Carabineros que mencionó y reconocerlos como sus torturadores. Respecto de la causa 114.025, doña Lucía Catrileo Lincoleo es su prima y su marido, quien está fallecido, don Hilario Catalán Lincoleo, también lo tomaron detenido y fue torturado, sin tener nada que ver. Este fue detenido en su campo en Vilcún, por Carabineros de Vilcún, aproximadamente entre septiembre y octubre de 1973. Espeta que el General López fue uno de los que detuvo a Hilario Catalán. Respecto a Rodolfo Cifuentes, recuerda su nombre, pero no sabe quién es. En cuanto a Peña, también lo recuerda, es de Vilcún, parece que es Carabinero. El apellido Morales también lo recuerda como uno de los Carabineros de Vilcún. No sabe si ellos estarán vivos. Con respecto a Hilario, supo que le pegaron mucho y casi lo mataron, el hermano de él está perdido, por el

hermano pagó él. Escruta que Hilario y él eran primos, pero eran como hermanos, él era el mayor de los Catalán. El actualmente está fallecido, pero producto de las torturas sufridas perdió la memoria. A él lo andaban buscando por su hermano, quien era buscado solo por ser de izquierda. Hilario estuvo detenido como 6 a 8 meses. Estimula que donde vivía, los Carabinero estaban de punto fijo, siempre rondando el lugar y preguntando por ellos. Y los vecinos muchas veces por ignorancia los acusaban. Con respecto a la señora de Hilario, doña Lucía, también la apalearon y la dejaron solo con los niños chicos. A ella la golpearon en su domicilio, pero no fue detenida. En cuanto a otras personas que puedan tener antecedentes respecto a esto, pudo mencionar a la familia Millalén. Estima que está dispuesto a realizarse los exámenes que correspondan conforme al Protocolo de Estambul.

A.27 DANIEL MANUEL EDGARDO NAVARRO CAMPOS (16 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 605 a fs. 606 (Tomo III), fs. 630 (Tomo III), fs. 636 y 639 (Tomo III) y de fs. 831 a fs. 835 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de 14 de octubre de 2013, **de fs. 605 a 606 (Tomo III)**. Explicita que para el año 1973 tenía la edad de 16 años, vivía en el sector Calle del medio, Lautaro, en el domicilio de su abuela, ubicado en ese sector rural. En dicho domicilio vivía su abuela de nombre Elisa Chifferli Lushinger, su tío Sergio Navarro Schifferli y la deponente. Respecto a su tío Sergio, exclama que él tenía 35 años de edad aproximadamente, era soltero, sin hijos y no tenía militancia política. El día 3 de mayo de 1973 a eso de las 7 de la mañana, en circunstancias que se encontraban en su domicilio particular, fueron allanados por personal de Carabineros de la Comisaría de Lautaro, sacándolos a su tío y ella fuera de este y llevándolo hasta un potrero, ubicado en ellos terrenos de su abuela. En ese lugar fueron brutalmente golpeados y les preguntaban por el paradero de su padre, quien era requerido por la autoridad. Según su recuerdo, los Carabineros los ubicaron de pie al frente de una ruma de piedras y uno de los Carabineros se ubicó detrás de su tío y le dio un fuerte culatazo en su cabeza con su fusil, cayendo al suelo y quedando en estado de inconsciencia o muerte, no puede precisarlo. El caso es que el Carabinero a cargo, quien tenía el grado de Teniente y su apellido era Huerta, a insultos le dijo que se fuera del lugar y que no mirara atrás, porque la matarían si lo hacía, esa fue la última vez que vio a su tío. Posteriormente se fue a su domicilio y

le contó lo sucedido, pero nada podían hacer en esa época, por la situación que vivía el país. Hace presente que por varios días buscaron a su tío por las cercanías de su campo y en Lautaro consultaron a Carabineros, pero nunca obtuvieron resultados positivos. Explana que andaban cerca de 20 Carabineros y recuerda a dos funcionarios de apellidos Ponce, Domingo Campos, Ferrier, Matus y el Teniente de apellido Huerta, a ellos los ubicaba y pertenecían a la Comisaría de Lautaro. En relación al funcionario de Carabineros que le dio el culatazo en la cabeza a su tío, no lo ubica y recuerda su descripción su descripción ni tampoco si era una persona de edad. Hace presente que siempre quedó con la duda si su tío quedó inconsciente o fallecido en el lugar y está claro que Carabineros sabe el destino final del cuerpo de su tío. También expone que al día siguiente se enteró que aparte de su tío hubo otras personas del sector que también fueron detenidas y hasta el día de hoy se desconoce sus paraderos, tal es el caso de un señor de apellido Meliqueo y otro apodado el Repollo, sobre quien no recuerda su nombre.

En diligencia de careo con Víctor Matus Vásquez, de 27 de abril de 2015, **rolante de fs. 630 (Tomo III)**. Ratifica en lo pertinente la declaración de fs. 216 y siguientes que se le lee. Reconoce a la persona sentada a su lado como Víctor Matus Vásquez de quien hizo referencia en sus dichos. Explicita que lo vio dentro del grupo de Carabineros que detuvo a su tío. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de 16 de enero de 2014, **de fs. 636 y fs. 639 (Tomo III)**. Ratifica íntegramente su declaración extrajudicial rolante de fs. 168 a 169 y que le ha sido leída (correspondiente a su declaración de fs. 605 a 606, Tomo III de la presente causa). Le parece que “el repollo” era familiar de Beltrán Meliqueo, pero no sabe su nombre. Agrega que su padre, Carlos Navarro Schifferli también fue muy perseguido por los Carabineros. Por este motivo él se escondió en diferentes lugares para no ser encontrado. Carabineros llegaba a su domicilio en diferentes horas sacando al deponente al patio todas las veces, en muchas de las cuales fue golpeado, amarrado y amenazado de muerte para que dijera el paradero de su padre. Expone que Carabineros del Retén Dollinco, ubicado en el sector de Tres Esquinas son los que deben saber el paradero de su tío Sergio Navarro Schifferli y Andrés Meliquén Aguilera. Respecto de las identidades de los Carabineros que participaron en la golpiza que le dieron a su tío Sergio Navarro Schifferli y al deponente, pudo reconocer a Campos, Ponce, Matus, Ferrier y al

Teniente Huerta. A estas personas las conocía desde antes, porque hacían patrullajes por el sector rural. Piensa que a su padre y a su tío los persiguieron porque en el tiempo de Allende ellos se inscribieron en comités para recibir ayuda del Estado, pero nunca fueron políticos. Justifica que Carabineros ese día andaba en número superior a los 20 efectivos y por lo que pudo ver se movilizaban en dos o tres vehículos. Sin embargo, no pudo identificar la marca y modelo de estos. Tampoco podría asegurar si andaban civiles acompañando a los Carabineros. Sabe que por el sector vivía un señor de apellido Cuevas, pero no sabe si participó en los hechos investigados. Deja constancia que producto de las golpizas que recibió de parte de los Carabineros quedó con secuelas físicas y psicológicas. Quedó con problemas de audición y perdió la capacidad intelectual que tenía antes. De hecho, era un buen alumno, pero abandonó el colegio por estos problemas.

En declaración judicial de 23 de mayo de 2023, **rolante de fs. 831 a 835 (Tomo III)**. El Tribunal procede a dar lectura un extracto en lo pertinente de la querella presentada por el abogado David Morales Troncoso en la causa. Ratifica dicha querella. Agregar a la querella que el señor Campos le contó que él sabía dónde estaba don Sergio Navarro Schifferli. Sabía, pero nunca dijo nada más, es decir él sabe dónde está su cuerpo. Espeta que identifica como su agresor al Mayor Huerta, el que mandaba. El Tribunal le pregunta, ¿pero saben con quien más andaba él?, respecto de lo cual el deponente habla que lo que conoció, fue Campos, Ferrier, Matus y uno de los Ponce. El Tribunal le pregunta ¿ustedes conocían a estos Carabineros?, respecto de lo cual el tribunal pregunta ¿los que golpearon a su tío Sergio?, a lo que el Tribunal responde que sí. Indicando el deponente a continuación que no, ellos no, eran otros Carabineros que no conoció. El Tribunal le señala que en estos hechos, ha nombrado al señor Huerta, pero lo que interesa en la investigación es respecto a los Carabineros que golpearon a su tío, preguntándole ¿usted pudo identificar quienes eran aparte del señor Huerta?, respecto de lo cual el deponente inquiriere que no, a esas personas no las conocía. El Tribunal le pregunta ¿por qué sabían que eran de Dollinco los Carabineros que participaron?, respecto de lo cual el deponente manifiesta que los Carabineros claro, eran de la comuna de Lautaro de Dollinco. El Tribunal le pregunta ¿pero pudieron haber sido de otro Retén, a lo que el deponente musita que habían de otras unidades, no solamente de Lautaro, eran varios. A continuación, el Tribunal le lee declaración

policial agregada en autos de fs. 605 a 606, Tomo III, interrogándolo si ¿la ratifica?, respecto de lo cual narra que, si la ratifica, así es. El Tribunal le consulta si ¿se acuerda en que mes específicamente ocurrieron los hechos?, respecto de lo cual ostenta que el 3 de mayo. El Tribunal le indica que en esa fecha fue antes del golpe de estado, por eso pregunta, a lo que el deponente puntualiza que tiene que haber sido más o menos en esa fecha, por qué ahí pusieron eso. El Tribunal le indica que debe haber sido un error de la persona, quien tomó la declaración, respecto de lo cual el testigo precisa que eso es lo que declaró, no sabe la fecha exacta. El Tribunal le señala que va a ver que dice en Memoria Viva del desaparecimiento de su tío. Detallando que fue en octubre. A lo que el deponente prefiere que sí, cree que así fue. El Tribunal le pregunta ¿usted está en la Comisión Valech?, a lo que responde que no, no está en la Comisión, no sabe si estará. A continuación, el Tribunal le lee la declaración judicial agregada en autos de fs. 636, Tomo III, preguntándole si ¿la ratifica?, a lo que responde que la ratifica. Para complementar sus declaraciones, el Tribunal le pregunta en qué lugar sufrió los apremios, además de lo que se ha nombrado en las declaraciones. ¿fue apremiado otra vez?, respecto de lo cual soflama que después de que pasó todo eso, siguieron viniendo los Carabineros a preguntar por su papá. Él fue quien lo pasó más mal en ese tiempo y bueno, vivían molestándolo. Eso es lo que le pasó. Algo terrible y bueno después reclamó y dijo que lo dejaran tranquilo y no fueron más a preguntar. El Tribunal le pregunta ¿dónde reclamó? ¿en la Comisaria de Lautaro u otro lugar?, respondiendo que en la de Lautaro. El Tribunal le pregunta ¿habló con alguien? ¿algún Oficial?, respondiendo que sí habló con un Oficial, no recuerda el nombre. El Tribunal le consulta ¿con quién vivía usted en la época de los hechos?, respecto de lo cual sugiere que con su abuela. El Tribunal le consulta ¿cuándo falleció?, a lo que responde que en el año 85. El Tribunal le pregunta además de su abuela, ¿qué otra persona fue testigo de sus apremios?, respecto de lo cual suma que ya están nombrados, está Jiménez, Raúl Aedo, Gaminao, Juan Sandoval. Quisiera nombrar más, pero son los que están nominados. Pero son esos cuatro. El Tribunal lo interroga ¿hasta qué fecha permaneció en Lautaro?, a lo que contesta que a veces estaba iba y volvía porque trabajaba aquí y así. Acompañaba a su abuela, iba y venía, lo que recuerda. A continuación, Tribunal le explica que se le realizará el Protocolo de Estambul, a lo que responde que bueno, fue víctima de apremios y fue muy afectado en su vida.

Perdió todo, no pudo estudiar por qué quedó mal y hasta el día de hoy le afecta esa cosa. Pudo trabajar y sacó adelante a su familia, tiene un hijo Contador y una hija Enfermera. El Tribunal le pregunta si ¿recuerda hasta que fecha fue perseguido por los Carabineros de Lautaro?, a lo que sustenta que pasó mucho tiempo en que fue acosado. El Tribunal le pide que se ubíquese desde el 11 de septiembre del 73, preguntándole ¿hasta que época lo molestaron?, respecto de lo cual urde que como más o menos unos dos años, algo así. El Tribunal le pregunta si ¿después de esos dos años, fue a hablar con los Carabineros?, a lo que responde sí, claro. El Tribunal lo interroga si ¿recuerda alguien más que haya participado en los apremios? ¿Carabineros o algún funcionario militar o civil?, respecto de lo cual el deponente urde que no, ahí ya no se acuerda mucho.

A.28 HÉCTOR ALEJANDRO PINILLA GONZALEZ (36 años a la fecha de los hechos investigados). Declara de fs. 931 a fs. 931 vta. (Tomo IV) y de fs. 932 a fs. 933 (Tomo IV).

En declaración extrajudicial de 23 de septiembre de 2015, **rolante de fs. 931 a 931 vta. (Tomo IV)**. Estimula que en el año 1973, era Regidor del Partido Comunista en Lautaro, se encontraba casado con Marta Espinoza Jhonson, tenía tres hijas y residía en la misma comuna en la calle Mac Iver, no recuerda numeración, agregando que trabajaba como Profesor Normalista en la Escuela N°29. Al día siguiente de ocurrido el golpe militar el día 11 de septiembre de 1973, mientras caminaba por calle Mac Iver, fue interceptado por una camioneta de Carabineros, de la cual descendieron un Teniente al parecer de apellido Águila y un Carabinero, de quien ignora la identidad. El caso es que le señalaron que debía acompañarlos, instruyendo el Oficial al Carabinero que cualquier movimiento inequívoco de su persona debía dispararle. Al llegar a la Comisaria de Lautaro, fue ingresado inmediatamente a un calabozo, percatándose que en la misma situación se encontraba el Profesor Luis Garrido. A medida que pasaban los días, llegaban más detenidos recordando entre ellos al Subdelegado de Perquenco de apellido Martínez; uno de Pillanlelbún de nombre Tomas Catalán Lincoleo y su primo Adolfo Catalán Lincoleo; el Contador Guido Venegas Avilés; un agricultor de Galvarino de nombre Armando Horn Roa; el Presidente del Sindicato de Magrinsa de nombre Enrique Plaza; un trabajador del Seguro Social de Lautaro de nombre Guillermo Parra; los Profesores de Lautaro Sófocles Ruiz Amigo y Filiberto Jara Gómez; el hijo

de un Carabinero jubilado de nombre Luis Candia. Todas estas personas llegaron detenidas durante los doce días que permaneció recluido en el calabozo de la 1° Comisaria de Lautaro. Narra que el calabozo se encontraba ubicado en el patio, por lo que tenía la visual y pudo ser testigo de las torturas y apremios que los Carabineros cometían, inclusive mantenían un estanque de cemento con agua donde les introducían la cabeza por varios minutos. En las noches hacían correr a los detenidos en el patio y luego los tiraban al suelo y los golpeaban con las culatas de las carabinas. Agrega que en las caballerizas los colgaban y castigaban golpeándolos con un lazo. En su caso no fue sometido a torturas en la Comisaria de Carabineros de Lautaro, pero en una oportunidad conducido por personal militar al Regimiento “La Concepción” de Lautaro, lugar donde se le interrogó con corriente eléctrica, siendo consultado por armas, regresando ese mismo día a la 1° Comisaria de Carabineros de Lautaro. Posteriormente, es trasladado por personal militar a la cárcel publica de Temuco, recinto carcelario que permaneció 145 días privado de libertad. Especula que, en dicho periodo, fue sacado en una oportunidad por personal militar de Lautaro, para ser interrogado pero sin apremios, pasando esa noche en el calabozo de la 1° Comisaria de Lautaro, lugar donde se encuentra solamente con Guido Venegas Avilés. Después de permanecer bastante tiempo recluido en la cárcel pública de Temuco, fue dejado en libertad por falta de méritos. Así inmediatamente tomó la determinación de viajar a Santiago, presentándose en la Embajada del Vaticano junto a 23 personas de diferentes lugares del país, logrando de esta manera viajar a la ciudad de Buenos Aires - Argentina, para luego conseguir asilo político en Rumania y al cabo de seis años se refugia en Suecia, regresando a Chile recién el año 2004. Se refiere a otra víctima.

En declaración judicial de 19 de enero de 2016, **rolante de fs. 932 a fs. 933 (Tomo IV)**. Ratifica íntegramente su declaración extrajudicial rolante de fs. 83 a 85 (correspondiente a su declaración anterior, esto es, 931 a 931 vta. (Tomo IV), y que le ha sido leída. Se refiere a hechos relacionados con otras víctimas.

A.29 MARIO PONCE ORELLANA (41 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Declara de fs. 954 a fs. 955 (Tomo IV) y de fs. 956 a fs. 957 (Tomo IV).

En declaración extrajudicial de 10 de enero de 1996, **de fs. 954 a fs. 955 (Tomo IV)**. Hace una reseña de su carrera funcionaria. Musita que el día 11 de septiembre de 1973 se encontraba trabajando en la 1° Comisaría de Carabineros

de Lautaro, a cargo de la oficina de empadronamiento, donde se llevaba un registro de todos los decretos judicial remitidos por los Tribunales a la unidad. Delibera que durante su tiempo en la Comisaría de Lautaro, nunca le correspondió efectuar servicios ordinarios a la calle, desempeñándose siempre en una oficina, la que hizo entrega al acogerse a retiro el día 16 de abril de 1977, al Cabo 1° Domingo Campos Collao. Con respecto a las personas que se le mencionan: Juan Eleuterio Cheuquepan Levimilla, Samuel Huichallan Lanquilen, José Julio Llaulen Antilao, José Bernardino Cuevas Cifuentes, Gervasio Héctor Hualqui Calviqueo, Ceferino Antonio, Miguel Eduardo y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, no los conoció e ignora los motivos por los cuales tanto sus familiares como testigos refieren haberlo visto junto al Cabo 1° Domingo Campos Collao y al civil Enrique Salazar Herrera, participar en la detención de estos. Es más al civil antes mencionado lo fue a conocer en el Tribunal cuando fueron detenidos a raíz de un proceso que lleva el Juzgado de Letras de Lautaro por el secuestro de José Julio Llaulen y José Cheuquepan Levimilla, en el cual fueron condenados a cinco años y medio con libertad vigilada. Justifica que ha quedado demostrado en el proceso que una de las personas querellantes, familiar de Cheuquepan, mintieron, por cuento en presencia del señor Magistrado de apellido Alfaro, del Juzgado de dicha localidad, afirmó conocerlo como el Carabinero Domingo Campos Collao. Recalca que durante su permanencia en la Comisaría de Lautaro nunca le correspondió trabajar con el Cabo 1° Domingo Campos Collao, ya que como lo mencionó anteriormente, solo le hizo entrega a éste de la oficina de empadronamiento de la unidad, por orden del señor Comisario. Expone que en la Comisaría de Carabineros de Lautaro después del 11 de septiembre de 1973 también se desempeñó su hermano, José Herminio Ponce Orellana. Además, durante su desempeño en la Comisaría de Carabineros de Lautaro, no tuvo conocimiento que algún funcionario de Carabineros haya participado en la detención de alguna de las personas sindicadas como detenidos desaparecidos.

En declaración judicial de 23 de abril de 1996, **de fs. 956 a fs. 957 (Tomo IV)**. En lo pertinente dice que las personas que se nombran como, Samuel Huichallán Llaquilén o Levia, José Llabulén Pilquinao, Ceferino, Miguel Eduardo y Oscar Rumualdo Yafulen Mañil, José Bernardino Cuevas Cifuentes, Gervacio Huaiquil, Juan Milla Montouy, Julio Paine Lepín, José Meliquén Aguilera y Domingo

Huenul Huaiquil, no los conoce, nunca los detuvo, ya que su trabajo solo fue administrativo en el interior de la Comisaría de Lautaro y se dedicó solo a labores administrativas, jamás salió a servicio en la población ni rural tampoco. Ni anduvo en operativos con Domingo Campos Collao. Al retirarse del servicio lo entregó la oficina de empadronamiento a Campos. Por lo cual mienten las personas que dicen haberlo visto deteniendo a las personas que se le han nombrado y que se encontrarían desaparecidas. Tampoco ha andado con Enrique Salazar, al cual conoció solo cuando fueron detenidos en el proceso 37.860, incoado en el Juzgado de Lautaro. Por lo tanto, ratifica íntegramente sus declaraciones prestadas a los funcionarios de Investigaciones que lo interrogaron es de enero de 1996. Por ello las personas ya sea denunciantes y testigos que lo han nombrado en los casos denunciados en esta causa, N°1, 3, 5 y 7 mienten en que lo hubieran visto detener a sus familiares desaparecidos, ya que no participó en ninguna detención, porque se desempeñaba como funcionario administrativo en la Comisaría de Carabineros de Lautaro antes y después del pronunciamiento militar.

A.30 TOMÁS RAÚL CATALÁN LINCOLEO (24 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). En **declaración judicial** de 23 de agosto de 2024, **de fs. 1.030 a fs. 1.031 vta. (Tomo IV)**. Se lee en lo pertinente querella criminal de fs. 878 a fs. 913 (Tomo III), interpuesta por el abogado Jorge Silhi Zarzar en su representación, ratificándola en todas sus partes. A la pregunta de dónde vivía y con quienes para el año 1973, utiliza que vivía en Lautaro, pagaba pensión en una casa particular y trabajaba en la oficina del SAG, era soltero y su trabajo era hacer controles. Consultado sobre su ocupación y militancia política para el año 1973, trabajaba en el SAG, porque cuando empezó a trabajar en el SAG fue en el programa de fiebre aftosa, de ahí lo mandaban a control de ferias, mataderos y control de carreteras, ya que en esa época estaba prohibido matar a las hembras de vacuno, solo con certificado médico, de ahí lo acusaron los dueños de los fundos tras el golpe de Estado, tiene claro quien lo acusó, fue Hernán Fagalde, incluso el papá le dijo que dejara tranquilo al deponente, pero él lo acusó igual. En ese tiempo era simpatizante del gobierno anterior, pero no estaba metido en nada, no militaba en ningún partido político, pero lo acusaron de extremista y fusilero. Con sus hermanos les cortaron las manos, los acusaron por indios, perdió todo, el daño físico, los estudios, moral, todo. Pero lograron salir adelante, sus sobrinos y la

familia. A la pregunta donde fue detenido y trasladado tras su detención, aduce que lo sacaron de dónde venía entrando a la oficina del SAG de Lautaro a las 8.20 de la mañana, el mes de septiembre de 1973 y de ahí lo llevaron a la Comisaria, luego no supo, ya que los tenían esposados y encapuchados, solo sentía los golpes, pero sintió que le reventaron los tímpanos con los golpes. A la pregunta de quienes (Carabineros, Militares y/o Detectives) lo detuvieron en el año 1973, advierte que puros Carabineros le pegaron y lo sacaron de su trabajo. Preguntado sobre con quien más estuvo detenido en Lautaro y Temuco, adopta que con Manuel Martínez de Perquenco, no se acuerda de los otros. Ese Manuel Martínez fue él que más sufrió, estaba hecho pedazos, él lo limpiaba, secaba y ayudaba. Había un curita igual de Perquenco y uno de apellido Masa, había como 25 en ese calabazo. Lo fue a ver varias veces (a Manuel Martínez) después, cada vez que iba a Perquenco, era una llantadera todas las veces. Consultado respecto en qué condiciones estuvo detenido en la 1° Comisaria de Lautaro, adosa que ahí los tenían en la celda, a veces les daban un café y les tiraban adentro, pero no los Carabineros, sino la gente que los iba a ver, como estaba solo y no lo iban a ver, Manuel Martínez le compartía de lo suyo. Se acuerda de que una amiga lo fue a ver el 19 de septiembre de 1973, le llevó unas empanadas, un litro de leche y al verlo sin ropa, toda sucia, ensangrentada, le dijo que fuera a la pensión a buscarle ropa y se la trajo a la Comisaría. No había un baño y tenían que hacer todo ahí mismo, el único baño que les daban era cuando los sacaban y los sumergían en las bateas donde tomaban los animales. Le cortaron el pelo al rape y aún tiene cicatrices de los golpes hasta el día de hoy, no sabe con qué le pegaban, ya que lo tenían vendado, solo sentía los golpes. Otros le dijeron que los golpes habrían sido con una fusta con un alambre de púa en la punta que los Carabineros le quitaron a un campesino, esta huasca al parecer usaban. A la pregunta de cuánto tiempo estuvo detenido en total en la 1° Comisaria de Lautaro, afirma que estuvo desde que lo detuvieron hasta el 25 de septiembre, unos 15 días y después lo llevaron a la cárcel publica de Temuco, siendo liberado el 21 de enero de 1974. En la cárcel de Temuco no le pegaron, pero dos veces lo llevaron al Consejo de Guerra. Llegaba al furgón y lo devolvían a la cárcel, pero a varios los sacaban y no volvían más. Consultado acerca de si recibió apremios, torturas, amenazas y/o intimidaciones durante su periodo de detención y como se materializaron, agrega que los Carabineros le decían dónde tenían armas,

dónde las escondía, pero ellos no tenían nada, ni siquiera una honda, que “tu sabí donde están, tú sabes”, eso le decían en los interrogatorios y “¿por qué trabajabas acá?”, “¿quién te trajo acá?”. Alega que había llegado a su trabajo por concurso. Estaba estudiando en ese tiempo veterinaria en Valdivia, después no pudo seguir. A la pregunta que si tras su liberación, siguió siendo perseguido por Carabineros y quienes eran, anexa que después que lo liberaron se fue al campo, dónde su papá Alberto Hilario Catalán Lleuful, en el sector Quiltrilpe, comuna de Vilcún. Los Carabineros volvieron a buscarlo durante ese año, andaban por Samuel, supuestamente el deponente sabía dónde estaba, porque ellos lo confundían con él, ya que se parecían mucho. Los Carabineros que lo llevaron esposado fueron Sandoval, Torres y Varela, eso rememora. No podría reconocer a los que lo torturaron, ya que estaba vendado. Anima que después vino su hermana Eliana, casada con Luis Córdova, ellos vivían en Temuco, pero tras el golpe los buscaron porque ella trabajaba en la Intendencia y él en Banco Estado, ellos se fueron a Los Ángeles, a Huépil, donde vivían ellos era Chacallal, eso era un campo, su cuñado compró una parcela y ahí llegó a vivir, estuvo como tres meses con ellos. Después se volvió al campo con su papá, de ahí lo vino a buscar su otro hermano, Luis Alberto Catalán Lincoleo, a él nunca le pasó nada, era el jefe de la ECA y viva en Vilcún, de ahí se fue a vivir con él. Luego lo dejaron tranquilo y compró su casa. Preguntado sobre si vio a su hermano Octavio Catalán Lincoleo ser torturado y/o condición física, mientras estuvieron detenidos juntos, añade que con su hermano se encontraron en la cárcel de Temuco, estaba bien, a él le pegaron en su detención, pero al deponente le pegaron más junto con su hermano Gerardo, esta fallecido, su hermano Juan y su hermana Eliana también. Su cuñado esta en Temuco, en un asilo.

A.31 JULIA MERCEDES MILLALÉN LEPILAO-TRALCAL (0 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). En **declaración judicial** de fecha 15 de diciembre de 2016 **de fs. 328 a fs. 329 (Tomo I)**. Soflame que Ceferino Millalén Peralta es su padre. Él fue perseguido por carabineros, investigaciones y Policía del Gobierno Militar en el año 1973, no saben la causa, pero según carabineros que concurría, era porque pertenecía al partido de fila Allendista. Quiere leer en el acto un relato que le dejó su madre, doña Rosa Lepilao-Tralcal Guajardo antes de fallecer, que por miedo de no hablar por lo atropellos que ella sufrió conjuntamente

junto a ellos como sus hijos, no señaló antes. El relato dice así: "Parte del atropello que tuve en el año 1973 por causa política por carabineros de Pillanlelbún, investigaciones de Lautaro y Regimiento de Lautaro, donde carabineros llegaban en cualquier momento en busca de mi marido, Seferino Millalén, hoy fallecido producto de los golpes recibidos en presencia de mis hijos de tan corta edad. Y cuando no los encontraba, recibía ella por no decir donde tenían las armas, según ellos decían que era un político más y compañero de la fila allendista. Todo sucedió porque en ese tiempo se habían perdido los artículos de primera necesidad, como el azúcar, yerba y aceite. Se juntaron los hermanos que fue perseguido y encarcelado por el gobierno militar Juan Millalén Coloma, por ser dirigente del comité de pequeño agricultor, hoy reconocido por la comisión Valech 15021, estos hermanos se inscribieron en una cooperativa llamado comantu en Lautaro, era dirigente por un tal Raiiaf, allí se encontraban los nombres de los registros de toda su familia y por tal motivo también tocaba, siendo quebrada una de sus extremidades por militares del Regimiento de esta ciudad, donde hasta hoy día tiene temor de hablar porque ellos decían que si hablaba vendrían a matarla con toda su familia. El día 04 de octubre de 1973 como a las 09 de la mañana fue detenido su marido junto a su hermano, llevado al Regimiento de Lautaro donde estuvo todo el día y toda la noche y la deponente encerrada en su casa que no podía salir en ningún momento, junto con sus niñas y vigilada por militares. Según ellos decían que no lo vería más. En otro caso, vivían al lado de un asentamiento llamada Elmo Catalán donde hay un dirigente detenido desaparecido llamado Pedro Millalén Huenchuñir, este asentamiento daba trabajo en la lechería. En el año 1982 es invitada por jóvenes estudiantes de Santiago a una reunión que venían a hacer trabajo voluntario, en el sector en la comunidad Antonio, Millalén, donde aceptó, porque ofrecían parte de medicinas y servicio social, en ese tiempo no tenían posta de primeros auxilios. Fue con todos sus niños porque también salió el aviso en la radio Aníbal Pinto de Lautaro, cuando iba cerca de la reunión cerca de los matorrales atajando donde allí la separaron de sus niños, la amarraron y decían que no la iban a soltar mientras no les digiera de que se trataba la reunión y si no decía, según me iban a violar todos los militares que andaban, donde como una hora más tarde más o menos, traían mucha gente de la reunión, amarrados, castigándolos hacía el camino de Lautaro. Después fue libertada con sus niños. Ese día vivió una

triste experiencia con sus niños, más no le cuento, más adjunto parte del periódico y relato personal y de la comunidad Antonio Millalén de Huerqueco" A su consulta, su padre en aquel periodo vivía más afuera que en la casa, tenía que salir arrancando para que no lo mataran y ellos ahí con su madre llorando y era tiempo de invierno y ella con dolor de oídos. Su padre llegaba en la noche a pedir un pedazo de pan. Lo que recuerda es que un tiempo en la mañana de invierno, vivía en una casa muy humilde junto a su madre, cuando llegaron dos camiones de militares y mientras su madre cortaba trigo le dijeron que donde estaba su marido, su madre les dijo que no sabían, razón por la que le dieron una patada en las costillas y ellos junto a sus hermanos (Juana, Oscar, Eduvina, Francisco Javier, todos de apellido Millalén Lepilao-Tralcal) llorando en una esquina pidiendo que por favor se fueran, momento en que ellos apuntaban con sus armas y les decían que se callaran. En esta última oportunidad eran carabineros y militares de Lautaro y Pillanlelbún, pero su padre siempre les hablaba de un carabinero Gatica y de otro Ponce, que ellos los perseguían sin causa, sólo porque su padre en una oportunidad fue a dormir a la casa de su tío Juan Tralcal Huenchuman quien también fue perseguido y muerto. A su consulta, Pedro Ñirripil; Juan Segundo Tralcal Huenchun, Luis Fernando Tralcal Huenchun; Juan Segundo Tralcal Colileo, son todos familiares de su madre, desconociendo que le sucedió a ello, sólo relata lo que vivió en relación a las torturas de su padre, hechos que ella presencié. Su padre falleció producto de cangrena por golpes de los carabineros y militares.

A.32 PEDRO FRANCISCO ANTIPE ÑANCO (21 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). En **declaración judicial** de fecha 27 de mayo de 2016 **de fs. 266 a fs. 267 (Tomo I)**. Es efectivo lo señalado por don Pedro Ñirripil a fs. 175 de autos, en el sentido de que el año 1973, en circunstancias que se encontraba realizando labores agrícolas en la comunidad Blanco Lepín, cerca de la escuela que existe en el lugar, llega Carabineros de Lautaro en conjunto con militares, los cuales le preguntan acerca del paradero de don Juan Tralcal Huenchuman, ante su desconocimiento lo suben a un camión militar, en donde habían alrededor de 80 personas, trasladándolo a la 1º Comisaria de Carabineros de Lautaro, lugar donde pudo observar a don Pedro Ñirripil, quien era residente de una comunidad cercana a la suya, momento en el cual les ordenaron colocarse en fila y los obligaron a golpearse. Descarga que en aquella oportunidad estuvo tres días en la Comisaria

de Carabineros de Lautaro siendo torturado por estos funcionarios y golpeado desde el primer momento en que lo detuvieron. Las torturas consistían en golpes en la cabeza, espalda, dentadura razón por la cual perdí las piezas superiores dentales. A su consulta, en el momento en que fue subido al camión militar, este se desplazó hacia Vilcún, lugar donde detuvieron a otras personas, entre ellos don Alejandro Catalán y su padre, víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. A su consulta, respecto a Juan Segundo Tralcal Huenchún, Ceferino Millalén Peralta, Luis Fernando Tralcal Huenchún y Juan Segundo Tralcal Colileo fueron intensamente buscados a contar del 11 de septiembre de 1973 por Carabineros de Militares de Lautaro. Ello lo sabe, pues a todas estas personas las conoce pues son personas vecinas de la comunidad en donde reside. En el caso de don Ceferino Millalén Peralta, este falleció a consecuencia de las torturas a las que fue sometido por Carabineros de Lautaro. En el caso de Luis Tralcal Huenchún, él vive actualmente en su comunidad.

A.33 JUAN MARIO MILA MILLALÉN (23 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). En **declaración judicial** de fecha 03 de febrero de 2017 **de fs. 344 a fs. 346 (Tomo I)**. Dice que conoció a Ceferino Millalén, porque eran vecinos en el sector Calbuco de la comuna de Lautaro, vivían distantes a 300 metros, por lo que presenció en diversas oportunidades en que fue detenido, era un pequeño agricultor quien fue torturado durante el año 1973 y los años posteriores. Recuerda que él también fue perseguido político y en diversas oportunidades fueron detenidos juntos, a partir del año 1973, eran detenidos por Campos, Gatica, Ponce, Sandoval, Ferrier, Millanguir, quien era el más malo de todos, fue el quien lo tomó detenido. Ceferino Millalén, falleció producto de la tortura que recibió. No recuerda la fecha, pero con posterioridad al golpe militar, lo detuvieron junto con su persona, los llevaron detenidos a la Comisaria de Lautaro, en este lugar, fue donde lo castigaron, lo apaleaban, lo mojaban de la puerta del calabozo, y lo hacían dormir en el piso con agua, estuvieron 3 días en estas condiciones, a Millalén los Carabineros de apellidos Ponce, y Gatica fueron los que más lo apalearon, supo que fueron ellos, porque gritaban sus nombres, Gatica era joven y Ponce era de más edad. Junto con ellos en los calabozos estaban Pedro Ñirripil, el vivía en otro sector. Cree que a Juan Tralcal Huenchuman nunca lo detuvieron, porque se escandia bien, a él cuando lo tuvieron de tente no le detuvieron, lo mataron. Estaban a merced de los

Carabineros de Pillanlelbún y de Lautaro, a cualquier hora los detenían, no quedaba constancia de ello, los llevaban y los liberaban como si nunca hubieran estado ahí, con cualquier pretexto, cada vez que podían los detenían, a Millalén, no lo dejaban trabajar, quien recuerda que lo maltrato bastante fue Ponce y Gatica. En otra oportunidad, para San Juan, para el 24 de junio de 1974 estaban matando un chanco y lo fueron detener, estaban sólo los dos cuando Carabineros a caballo, a veces andaban de civil, sin uniforme, pero en esta oportunidad vestían de Carabineros, los de apellido Gatica, Millanguir, Ponce, Sandoval y Mansilla, le preguntaban dónde estaban las armas, y donde hacían reuniones políticas, si sabían dónde estaba Samuel Catalán, y lo soltaron al día siguiente, el día 24. Ahí lo aporrearon, así le decían ellos a los maltratos, quedó magullado, donde le golpearon la espalda, los culatazos en el pecho, las patadas en las rodillas. Él era dirigente político, sindical y de asentamiento, pero Ceferino Millalén, no se metía en nada, sólo por el hecho de vivir cerca lo apaleaban. Respecto a la detención de Pedro Millalén, habla que estaban trabajando juntos, en el asentamiento Elmo Catalán, ahora Campo lindo, también estaba Luis Illanes, Eduvino Cerda, habían 17 personas, José Ñirrial, Luis Ñirrial, Anastacio Morales, Leoncio Gómez, Arcadio Reyes, entre otros, este último está vivo, trabajaban desparramando salitre cuando los fueron a detener, carabineros y civiles, Fagalde con sus 2 hijos, carabineros Macilla, Ferrier y Fuentes, llegaron en grupo, en dos vehículos, y lo llevaron, con un saco de salitre, lo llevaron a la casa de Fagalde, esto lo sabe, porque estaban a 500 metros de ahí, estaban con el difunto Juan Cerda, allí disparaban y gritaban, hasta las cuatro o cinco de la mañana, al parecer, ebrios. No se supo nunca más de él, dejó varios hijos.

B. Documentos.

- | | |
|--|---|
| 1 Declaración jurada de Modesto Paillavil Blanco. | 4 Copias autorizadas de la dotación del personal de Carabineros de la 1° Comisaria de Lautaro. (1974). |
| 2. Copia de la denuncia de Levío Huaiquil Namoncura. | 5. Copias autorizadas de la dotación del personal de Carabineros de Tenencia de Perquenco y Galvarino, retén Quillen, Pillalelbún y Dollinco. |
| 3. Copias autorizadas de la dotación del personal de Carabineros de la 1° Comisaria de Lautaro (1973). | 6 Servicio de Registro Civil e Identificación que en lo pertinente remite documentos. |

7 Servicio de Registro Civil e Identificación remite antecedentes familiares de Pedro Ñirripil Paillal.

8 Servicio de Registro Civil e Identificación remite antecedentes familiares de Juan Segundo Tralcal Colileo.

9 Servicio de Registro Civil e Identificación remite antecedentes familiares de Ceferino Millalén Peralta.

10. Copia simple de fotografía correspondiente a Ceferino Millalén Peralta.

11. Copia simple del relato de los hechos que da cuenta de situaciones represivas a la comunidad Antonio Millalén.

12. Informe pericial psicológico N°386-2017 del Servicio Médico Legal de Temuco.

13. Copia simple del Diario Austral del domingo 31 de enero de 1982, la crónica se titula: "Casos de Pillalelbún, Nos engañaron, dicen esposas de detenidos."

14. Informe Servicio Médico Legal N°0610-2017 del 04 de julio de 2017, correspondiente a Pedro Ñirripil Paillal.

15. Informe Servicio Médico Legal N°0611-2017 del 04 de julio de 2017 correspondiente a Juan Segundo Tralcal Colileo.

16. Informe pericial psicológico N°393-2017 del 18 de octubre de 2017 del Servicio Médico Legal, realizado a Juan Segundo Tralcal Colileo.

17. Examen pericial médico, N°221-2017 del 09 de junio de 2017 del Servicio Médico Legal realizado a Manuel Martínez Ulloa.

18. ORD 2194/17 de la Dirección Regional de Gendarmería de Chile del 27 de julio de 2017, respecto de Manuel Martínez Ulloa.

19. Ord. N°265 del 02 de abril de 2020 del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

20. Informe de permanencia del Centro de Cumplimiento Penitenciario Temuco del 08 de noviembre de 2020.

21. Ord. N°329 del 28 de abril de 2021 del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

22. Certificado de nacimiento de Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos.

23. Certificado de nacimiento de Carlos Antonio Navarro Schifferli.

24. Informe del Arzobispado de Santiago, Fundación, Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

25. Certificado de nacimiento de Sergio del Carmen Navarro Schifferli.

26. Acta de inscripción de defunción de Sergio del Carmen Navarro Schifferli.

27. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y reconciliación.

28. Fotocopia de informe individual para resolución del consejo elaborado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

29. Copia autorizada de la denuncia de presunta desgracia presentada por doña Ida del Carmen Meliquen Quilodran.

30. ORD N°6907 del 14 de mayo de 2021 del Registro Civil e Identificación remite antecedentes familiares.

31. Nómina de personas reconocidas como víctimas al 28 de noviembre de 2004.

32. Carta N°150/2022 del 05 de agosto de 2022 rolante del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

33. Examen físico médico del Servicio Médico Legal correspondiente a Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos.

34. Extractos de filiación y antecedentes emitidos por el Registro Civil e Identificación.

35. Extracto del libro "Martirologio de la Iglesia chilena", del autor Miguel Jordá Sureda, relato

de Wilfredo Alarcón, páginas 119-180, editorial LOM, año 2001.”

36. Hoja de vida de Domingo Campos Collao que en lo pertinente certifica que en abril de 1973 fue trasladado desde el retén Quillen a la base de la Comisaría.

37. Informe pericial, unidad de lesiones forense del servicio Médico Legal de Temuco N° 204-00270 de Octavio Renato Catalán Lincoleo.

38. Certificados de defunción emitidos por el Registro Civil e Identificación.

B.39. Informe del Arzobispado de Santiago.

B.40.- Antecedentes del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

B.41. Certificación de fs. 1.289 y siguientes (tomo V).

42. Ordenes de investigar debidamente diligenciadas por la Policía de Investigaciones de Chile.

B.1 De fs. 6 (Tomo I), copia de fs. 173 (Tomo I), declaración jurada de Modesto Paillavil Blanco del 02 de abril de 2008, firmando ante la Notaria de Lautaro. Que expresa: "en mi calidad de ex miembro del ejército perteneciente al Regimiento N°20 La Concepción de la ciudad de Lautaro donde me desempeñé como instructor durante los años 1956-1988 y fui testigo de cuando miembros del ejército de mi dotación practicaron apremio físico a Pedro Ñirripil Paillal, Rut 6.906.867-k y las personas con vinculación al gobierno de la unidad popular o ex asentado y personas naturales.

B.2. De fs. 8 a fs. 9 (Tomo I), copia de la denuncia de Levío Huaiquil Namoncura del 22 de septiembre de 1975, que en pertinente narra la detención de su sobrino Gervasio Huaiquil Calviqueo por funcionarios de Carabineros de Chile.

B.3. De fs. 151 a fs. 152 (Tomo I) copia de fs. 661 a fs. 662 (Tomo II), copias autorizadas de la dotación del personal de Carabineros de la 1° Comisaria de Lautaro, que en lo pertinente indica que entre los meses de septiembre-diciembre de 1973, el Cabo Domingo Antonio Campos Collao se desempeñaba en dicha unidad.

B.4 De fs. 158 a fs. 159 (Tomo I) copias autorizadas de la dotación del personal de Carabineros de la 1° Comisaria de Lautaro, que en lo pertinente indica que entre los meses de marzo-septiembre de 1974, el Cabo Domingo Antonio Campos Collao se desempeñaba en dicha unidad.

B.5 De fs. 160 a fs. 165 (Tomo I), copias autorizadas de la dotación del personal de Carabineros de Tenencia de Perquenco y Galvarino, retén Quillen, Pillalelbún y Dollinco entre los meses de marzo a septiembre de 1973.

B.6 Ord N° 1188 del 12 de abril de 2016 del Servicio de Registro Civil e Identificación que en lo pertinente remite los documentos que a continuación se desglosan:

a. Certificado de nacimiento de Juan Segundo Tralcal Colileo de **fs.182 (Tomo I)**.

b. Extracto de filiación y antecedentes de Juan Segundo Tralcal Colileo de **fs.183 (Tomo I)**.

c. Certificado de nacimiento de Pedro Ñirripil Paillal de **fs.184 (Tomo I)** consta que nació el 25 de febrero de 1940.

d. Extracto de filiación y antecedentes de Pedro Ñirripil Paillal de **fs. 185 a fs. 186 (Tomo I)**, que en lo pertinente registra anotación en causa rit N° 516 del Juzgado de Familia de Lautaro

e. Certificado de defunción de Ceferino Millalén Peralta de **fs.187 (Tomo I)**, consta que falleció el 01 de enero de 1983.

f. Acta de defunción de Ceferino Millalén Peralta de **fs. 188 (Tomo I)**.

B.7 Ord N° 1886 del 17 de mayo de 2016 del 17 de mayo de 2016 del Servicio de Registro Civil e Identificación remite antecedentes familiares de Pedro Ñirripil Paillal, rolante de **fs. 251 a fs. 253 (Tomo I)**.

B.8 Ord N° 1886 del 17 de mayo de 2016 del 17 de mayo de 2016 del Servicio de Registro Civil e Identificación remite antecedentes familiares de Juan Segundo Tralcal Colileo, rolante de **fs. 254 a fs. 256 (Tomo I)**.

B.9 Ord N° 1886 del 17 de mayo de 2016 del 17 de mayo de 2016 del Servicio de Registro Civil e Identificación remite antecedentes familiares de Ceferino Millalén Peralta, rolante de **fs. 260 a fs. 264 (Tomo I)**.

B.10. Copia simple de fotografía correspondiente a Ceferino Millalén Peralta de **fs. 334 (Tomo I)**.

B.11 Copia simple del relato de los hechos de **fs. 335 (Tomo I)** que da cuenta de situaciones represivas a la comunidad Antonio Millalén. Cuenta que el 29 de enero de 1982, en la comunidad Antonio Millalén, sector Blanco Lepín citaron a una reunión porque se iniciaban los trabajos de estudiantes voluntarios de Lautaro, para lo cual solicitaron el colegio. Como no les cedieron el colegio se dispuso a hacer la reunión en una casa particular. A esta reunión asistieron más de 200 personas de la Comunidad Antonio Millalén y alrededores, ya que era la primera

experiencia que se llevaba a cabo en ese entonces. Muchas personas asistieron a la reunión, porque, entre los voluntarios de estudiantes de medicina de 5 año que prestaban asistencia médica; en ese entonces las condiciones de los servicios sanitarios eran muy deficientes y no existía siquiera una posta de salud en el sector. Cuando todavía estábamos en las presentaciones y no había empezado la reunión entraron los carabineros y echaron la puerta abajo maltratando a todos los allí presentes, sin dar ninguna opción para salir de la casa pacíficamente. Una de las personas asistentes a la reunión era un carabinero de incognito, el cual saco una pistola y amenazó a todos los allí presentes, prohibiéndoles salir. Cuando algunas de las personas intentaron salir de la casa fueron alcanzados en el exterior propinándoles una tremenda paliza. El resto fuimos golpeados indiscriminadamente aterrados y no teníamos consciencia de qué delito estábamos cometiendo. Llegaron por cientos de carabineros al lugar y continuaron apaleando a todos reunidos, sin hacer distinción de edades ni de sexo. Fuimos detenidos y amarrados para concentrarnos en Blanco Lepín, permaneciendo bajo la lluvia y recibiendo golpes durante más de cinco horas. En ese lapso de tiempo fuimos insultados y vejados impidiéndonos siquiera hacer nuestras necesidades dignamente, ya que sin miramiento de que se tratara de mujeres u hombres, si alguna persona tenía necesidad de ir al W.C. era obligada a hacerlo delante de los demás sin soltarle las amarras. Fuimos trasladados a Lautaro bajo la acusación, de que estábamos planificando una reunión de sabotaje al gobierno de Pinochet con el argumento de que íbamos a volar torres de alta tensión, por lo que algunas de las personas fueron obligadas a firmar tal acusación bajo torturas. A la difusión de esta falsedad contribuyo la prensa con una campaña de desprestigio y mentiras. Durante el trayecto no cesaron los maltratos y los insultos y fuimos reclusos provisionalmente en el patio de un gimnasio permaneciendo bajo la lluvia hasta pasada medianoche. Posteriormente nos llevaron a la 2° Comisaría de Temuco y allí tuvimos que dormir en el cemento mojado; permaneciendo en ese estado; mojados, golpeados y sucios hasta las 11 de la mañana, hora en que nos llevaron a la cárcel de Temuco a la cual llegamos en estado físico y anímico deplorable. Los funcionarios de gendarmería que nos recibieron nos insultaron cruelmente profiriendo alusiones racistas, despectivas y acusándonos de terrorismo, sin cesar de infringirnos continuos golpes. Después nos pasaron a celdas sin colchonetas, mezclándonos con los

presos comunes que aprovecharon la ocasión para robarnos lo que teníamos. Permanecimos incomunicados sin recibir bebida o alimento alguno durante el tiempo de detención, incluso un preso, D. Ulises Gómez, que se presentó a socorrernos, ofreciéndonos café y pan, fue maltratado porque decían que estábamos incomunicados, pero debido al hacimiento que había ese día nos metieron en celdas comunes. A la tarde del día domingo, nos pasaron a la Fiscalía Militar. Veinte personas pasamos a declarar ante el fiscal titular del día domingo, el cual nos dejó en libertad porque no encontró ningún mérito. Sin embargo, ese día hubo relevo por motivo de vacaciones, y en la visita del día siguiente, el fiscal entrante, decidió que el resto de las personas unas sesenta que estaban en prisión por una semana más. En todos los casos fuimos puestos en libertad por falta de méritos. Durante la detención en Pillalelbún, al menos veinte jóvenes menores fueron golpeados y llevados a Lautaro, quedando posteriormente en libertad por ser menores de edad. Y otra veintena de personas también fueron puestas en libertad en el recinto deportivo de Blanco Lepín, por no haber espacios en los buses en que eran trasladados a Lautaro desde la comunidad. Desde entonces muchas de las personas que fueron detenidas y han fallecido arrastrando secuelas de los golpes hasta los últimos días, los ancianos y diversas personas de la comunidad que sufrieron estos hechos, aun se quejan de que, producto de este maltrato sufren diversas secuelas y dolores y padecen enfermedades desde entonces.

B.12 Informe pericial psicológico N°386-2017 del Servicio Médico Legal de Temuco, rolante de **fs. 390 a fs. 396 (Tomo II)** realizado a Pedro Ñirripil Paillal, en lo pertinente informa: “presenta indicadores de deterioro cognitivo que impacta en la capacidad de dar cuenta de su experiencia; su narración presenta características de aquellas que provienen de la vivencia basada en la realidad y no se observa un cuadro clínico vinculado con los hechos que se investigan. No se visualiza la presencia de síntomas de estrés post- traumático.”

B.13 Copia simple del Diario Austral del domingo 31 de enero de 1982, rolante de **fs. 336 a fs. 337 (Tomo I)**, que en lo pertinente la crónica se titula: “Casos de Pillalelbún, Nos engañaron, dicen esposas de detenidos.”

B.14 Informe Servicio Médico Legal N°0610-2017 del 04 de julio de 2017, rolante de **fs. 364 a fs. 365 (Tomo I)** correspondiente a Pedro Ñirripil Paillal que en

lo pertinente concluye que: “Existe relación entre cicatrices y alegación de abuso, de acuerdo al relato del examinado.”

B.15 Informe Servicio Médico Legal N°0611-2017 del 04 de julio de 2017, rolante de **fs. 366 a fs. 367 (Tomo I)** correspondiente a Juan Segundo Tralcal Colileo que en lo pertinente concluye que: “Existe relación entre cicatrices y alegación de abuso, de acuerdo al relato del examinado.

B.16 Informe pericial psicológico N°393-2017 del 18 de octubre de 2017 del Servicio Médico Legal, realizado a Juan Segundo Tralcal Colileo, en lo pertinente concluye que: “No es posible descartar que sus dichos puedan estar basados en experiencias de la realidad; no se visualiza alguna sintomatología de estrés post-traumático u otro cuadro de tipo emocional”, de **fs. 460 a fs. 464 (Tomo II)**.

B.17 Examen pericial médico, N°221-2017 del 09 de junio de 2017 del Servicio Médico Legal realizado a Manuel Martínez Ulloa, en lo pertinente concluye que: “A la fecha no se observan secuelas psicológicas como consecuencia de los hechos denunciados. Se hipotetiza que sus características de personalidad han sido un factor protector en esa área. No se observa animosidad ni animo ganancial en su relato en los hechos denunciados de **fs. 525 a fs. 530 (Tomo II)**.

B.18 ORD 2194/17 de la Dirección Regional de Gendarmería de Chile del 27 de julio de 2017, rolante de **fs. 534 (Tomo II)**, respecto de Manuel Martínez Ulloa que en lo pertinente informa que permaneció en el centro de cumplimiento penitenciario de Temuco en calidad de procesado en causa rol 1.556 de la Fiscalía Militar Cautín egresando el 02 de enero de 1974.

B.19 Ord. N°265 del 02 de abril de 2020 del Instituto Nacional de Derechos Humanos de **fs. 554 a fs. 555 (Tomo II)**, en lo pertinente dice que Manuel Martínez Ulloa aparece en la nómina de personas reconocidas como víctimas de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y tortura.

B.20 Informe de permanencia del Centro de Cumplimiento Penitenciario Temuco del 08 de noviembre de 2020, rolante de **fs. 562 a fs. 564 (Tomo II)**, de Octavio Renato Catalán Lincoleo, precisa que ingreso el 22 de septiembre de 1973, por el delito de infracción al bando N°26, egresando el 29 de octubre de 1973, orden Fiscalía de Carabineros de Cautín.

B.21 Ord. N°329 del 28 de abril de 2021 del Instituto Nacional de Derechos Humanos de **fs. 572 a fs. 573 (Tomo II)**, en lo pertinente dice que Octavio Renato

Catalán Lincoleo aparece en la nómina de personas reconocidas como víctimas de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y tortura.

B.22 Certificado de nacimiento de Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos de **fs. 580 (Tomo III)**, emitido por el Registro Civil e Identificación.

B.23 Certificado de nacimiento de Carlos Antonio Navarro Schifferli de **fs. 581 (Tomo III)**, emitido por el Registro Civil e Identificación.

B.24 Informe del Arzobispado de Santiago, Fundación, Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, del 28 de mayo de 2013, rolante de **fs. 642 a fs. 650 (Tomo III)** que en lo pertinente contiene lo recabado hasta diciembre de 1992 de Sergio del Carmen Navarro Schifferli y José Andrés Meliquén Aguilera.

B.25 Certificado de nacimiento de Sergio del Carmen Navarro Schiferlli de **fs.652** copia a **fs. 695 (Tomo III)**, emitido por el Registro Civil e Identificación.

B.26 Acta de inscripción de defunción de Sergio del Carmen Navarro Schiferlli de **fs. 654 a fs. 655 (Tomo III)**, copia de **fs. 723 a fs. 724 (Tomo III)**, emitido por el Registro Civil e Identificación, en lo pertinente observaciones: declara muerte presunta.

B.27 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de **fs. 668 a fs.669 (Tomo III)**, que en lo pertinente describe: “Otro episodio lo constituye la detención y posterior desaparición de siete campesinos de la zona de Lautaro. La mayoría de ellos registran antecedentes de haber sido procesados por la justicia ordinaria por la comisión de delitos comunes: El 04 de octubre es detenido por carabineros del Retén Yuyinco y trasladado a la comisaría de Lautaro, Sergio del Carmen Navarro Schifferli, 37 años, agricultor. A su familia le habrían señalado que había sido puesto en libertad, sin embargo, desde esa fecha permanece desaparecido. El 15 de octubre de 1973, José Ignacio Beltrán Meliqueo, 46 años, agricultor de la comunidad Manuel Levinao fue detenido ante testigos en la Plaza de Lautaro por efectivos de carabineros y conducido a la Comisaría del lugar. Sus familiares aseguran que su detención les fue negada, desde esa fecha permanece desaparecido. Al día siguiente 16 de octubre de 1973, fue detenido Julio Manuel Paine Lipin, 27 años, campesino del asentamiento tres luces de la localidad de Muco Bajo. Lo detuvo Carabineros cuando se presentó voluntariamente al retén de Pillalelbún. Desde allí es trasladado a la Comisaría de Lautaro, recinto desde el cual, según versiones de testigo fue sacado a fines de octubre. Desde esa fecha

permanece desaparecido. ” El 08 de noviembre de 1973 fue detenido en Lautaro Juan Milla Montuy, 40 años, agricultor. Carabineros habría negado la detención a sus familiares. Hasta la fecha permanece desaparecido. También es aprehendido en esta fecha por carabineros. Y trasladado al retén de Pillalelbún, Manuel Lizama Cariqueo, 29 años, secretario de la central única de trabajadores (CUT) de Temuco y presidente del asentamiento el cardal, de la mencionada localidad. Hasta la fecha permanece desaparecido.”

B.28 Fotocopia de informe individual para resolución del consejo, de Sergio del Carmen Navarro Schifferli y José Meliquen Aguilera, elaborado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de **fs. 670 a fs. 682 (Tomo III)**.

B.29 Copia autorizada de la denuncia de presunta desgracia presentada por doña Ida del Carmen Meliquen Quilodran de **fs. 714 a fs. 718 (Tomo III)**, en representación de José Andrés Meliquen Aguilera, José Ignacio Beltrán Meliqueo y Sergio Navarro Schifferli detenidos por civiles y carabineros en la dotación del retén tres esquinas de Lautaro, el día 4 de octubre de 1973.

B.30 ORD N°6907 del 14 de mayo de 2021 del Registro Civil e Identificación remite antecedentes familiares de Sergio Navarro Schifferli y José Andrés Meliquen Aguilera de **fs. 716 a fs. 725 (Tomo III)**.

B.31 Nómina de personas reconocidas como víctimas al 28 de noviembre de 2004 rolante de **fs. 771 a fs. 775 (Tomo III)**, que en lo pertinente en el N°5.330 aparece mencionado Catalán Lincoleo, Octavio Renato y N°14.342 menciona a Martínez Ulloa Manuel.

B.32 Carta N°150/2022 del 05 de agosto de 2022 rolante de **fs. 802 a fs. 806 (Tomo III)** del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en lo pertinente nombra a Pedro Ñirripil Paillal, Tralcal Colileo Juan Segundo.

B.33 Examen físico médico del Servicio Médico Legal correspondiente a Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, de **fs. 914 a fs. 916 (Tomo III)**, en lo pertinente cuenta que en octubre de 1973 junto a su tío fue detenido por carabineros siendo golpeado en un terreno baldío y fue testigo presencial de golpes que le dieron a su tío el que cayó al suelo luego de un golpe a la cabeza permaneciendo desaparecido hasta la fecha de hoy.

B.34 Extractos de filiación y antecedentes emitidos por el Registro Civil e Identificación, que a continuación se indican:

a. Sergio del Carmen Navarro Schifferli de **fs. 656 (Tomo III)**, quien se encuentra fallecido.

b. Jorge Andrés Meliquen Aguilera de **fs. 658 a fs. 659 (Tomo III)**, registra anotación en la causa rol 530/1962 de la Fiscalía Militar Temuco, por maltrato de obra carabinero de servicio.

c. Víctor Matus Vásquez de **fs. 781 a fs. 782 (Tomo III)**, registra anotación en causa rol 45.357/2015 del Juzgado de Letras de Lautaro como autor del delito de secuestro calificado.

B.35 Extracto del libro “Martirologio de la Iglesia chilena”, del autor Miguel Jordá Sureda, relato de Wilfredo Alarcón, páginas 119-180, editorial LOM, año 2001 de **fs. 964 a fs. 979 (Tomo IV)**, en lo pertinente da cuenta de la detención y torturas que sufrió Wilfredo Alarcón junto a otras personas que pudo ver detenidas al interior de la Comisaria de Carabineros de Lautaro, en lo pertinente sostiene que: “Me dijeron que pasarían a buscar a Martínez, mi amigo, el subdelegado, que también tenía que presentarse a Lautaro.”. En líneas posteriores arguye: “Ahora quería hablarte el “Pelao” de Manuel Martínez.”

B.36 De **fs. 980 a fs. 1.003 (Tomo IV)** hoja de vida de Domingo Campos Collao que en lo pertinente certifica que en abril de 1973 fue trasladado desde el retén Quillem a la base de la Comisaría.

B.37 De **fs. 1.073 a fs. 1.075 (Tomo IV)**, informe pericial, unidad de lesiones forense del servicio Médico Legal de Temuco N° 204-00270 de Octavio Renato Catalán Lincoleo del 10 de septiembre de 2024, en lo pertinente concluye que no presenta lesiones atribuibles a los hechos investigados.

B.38 Certificados de defunción emitidos por el Registro Civil e Identificación, que a continuación se indican:

a. Modesto Paillavil Blanco de **fs. 179 (Tomo I)**, consta que falleció el 21 de diciembre de 2013.

b. Santiago Millangir Hueche de **fs. 468 (Tomo II)**, consta que falleció el 21 de febrero de 2001.

c. Sergio del Carmen Navarro Schifferli de **fs. 653 (Tomo III)**, consta que falleció el 03 de octubre de 1976, muerte presunta.

d. Mario Ponce Orellana de **fs. 1005 (Tomo IV)**, consta que falleció el 29 de junio de 2009.

e. Víctor Matus Vásquez, de **fs. 1006 (Tomo IV)**, consta que falleció el 29 de junio de 2024.

f. Jorge Enrique Schweitzer Gómez, de **fs. 1007 (Tomo IV)**, consta que falleció el 26 de enero de 2022.

g. Enrique Ferreir Valeze, de **fs. 1008 (Tomo IV)**, consta que falleció el 25 de abril de 2010.

h. Juvenal Santiago Sanhueza Sanhueza, de **fs. 1009 (Tomo IV)**, consta que falleció el 24 de enero de 2011.

i. Marcelo Edmundo Vera Ríos, de **fs. 1010 (Tomo IV)**, consta que falleció el 01 de septiembre de 2019.

j. Sergio Manuel Jara Sandoval de **fs. 1011 (Tomo IV)**, consta que falleció el 19 de mayo de 2017.

k. José Orlando Huerta Ávila, de **fs. 1012 (Tomo IV)**, consta que falleció el 29 de octubre de 2000.

l. Sergio Gustavo Gastón Quezada Lafourcade, de **fs. 1013 (Tomo IV)**, consta que falleció el 27 de mayo de 2013.

m. Rafael Renato Rodríguez, de **fs. 1014 (Tomo IV)**, consta que falleció el 21 de abril de 2018.

n. Francisco Isla Mejías, de **fs. 1015 (Tomo IV)**, consta que falleció el 28 de noviembre de 2012.

ñ. Egidio Manuel Sandoval Umaña, de **fs. 1016 (Tomo IV)**, consta que falleció el 26 de febrero de 2008.

o. Dagoberto Francisco Poblete Carriel, de **fs. 1017 (Tomo IV)**, consta que falleció el 9 de mayo de 1988.

p. José Nicanor Pérez Caamaño, de **fs. 1018 (Tomo IV)**, consta que falleció el 8 de enero de 2014.

q. Luis Armando Rounaut Hidalgo, de **fs.1019 (Tomo IV)**, consta que falleció el 13 de diciembre de 2022.

r. José Herminio Ponce Orellana, de **fs.1020 (Tomo IV)**, consta que falleció el 22 de junio de 2015.

s. Juan de Dios Torres Yáñez, de **fs. 1021 (Tomo IV)**, consta que falleció el 13 de marzo de 2024.

t. Ángel Secundino Fuentes Pardo, de **fs.1022 (Tomo IV)**, consta que falleció el 27 de marzo de 2024.

B.39. Informe del Arzobispado de Santiago, Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad de fecha 8 de marzo de 2021 de fs.769 fs.775 (tomo III) en el que acompaña Informe del Nómina de personas reconocidas como víctimas al 28 de noviembre de 2004, que en lo pertinente en el N°5.330 aparece mencionado Catalán Lincoleo, Octavio Renato y N°14.342 menciona a Martínez Ulloa Manuel. respecto a Octavio Catalán Lincoleo y Manuel Martínez Ulloa

B.40.- Antecedentes del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a Tomás Catalán Lincoleo de fs.1033 a fs.1.044 (tomo IV). Que contiene: Certificado del Instituto Nacional de Derechos Humanos que señala don Tomás Raúl Catalán Lincoleo se encuentra calificado como víctima en la nómina de prisioneros políticos y torturados, elaborada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I, número de registro 5333.; Certificado del Alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, señalando que Tomás Raúl Catalán Lincoleo ingresó a ese centro de cumplimiento el 25 de septiembre de 1973 por disposición de la Fiscalía de ejército Cautín, por infracción a la ley N°17.798; egresa en libertad por orden de la misma Fiscalía el 21 de enero de 1974, no indica motivo. El certificado es de fecha 20 de octubre de 1993.

B.41. Certificación de fs. 1.289 y siguientes (tomo V), en que se indican las causas en que Domingo Campos Collao ha sido condenado.

B.42 Ordenes de investigar debidamente diligenciadas por la Policía de Investigaciones de Chile que se desglosan de la siguiente manera

a. De **fs. 27 a fs. 49 (Tomo I)**, informe policial N°3.229/220 del 08 de junio de 2015, lo cual contiene declaración e individualización de testigos.

b. De **fs. 216 a fs. 246 (Tomo I)**, informe policial N° 2.344 del 04 de mayo de 2016, lo cual contiene declaración e individualización de ex funcionarios policiales.

c. De **fs. 231 a fs. 247 (Tomo I)**, informe policial N°2.387/220 del 05 de mayo de 2016, lo cual contiene declaración e individualización de ex funcionarios policiales.

d. De **fs. 269 a fs. 294 (Tomo I)**, informe policial N° 3.613 del 04 de julio de 2016, lo cual contiene declaración e individualización de ex funcionarios policiales.

e. De **fs.469 a fs. 474 (Tomo II)**, informe policial N°03582/36 del 10 de septiembre de 2018 lo cual contiene declaración e individualización de testigos.

f. De **fs. 586 a fs. 596 (Tomo III)**, informe policial N°3.814/202 del 13 de agosto de 2013 lo cual contiene declaraciones de testigos.

g. De **fs. 597 a fs. 612 (Tomo III)**, informe policial N°4.950/202 del 25 de octubre de 2013 lo cual contiene declaraciones de testigos.

h. De **fs. 613 a fs. 629 (Tomo II)**, informe policial N°1.456/202 del 13 de marzo de 2014 lo cual contiene declaraciones de testigos y ex funcionarios policiales.

i. De **fs. 726 a fs. 730 (Tomo III)**, informe policial N°05180/225 del 02 de enero de 2014 lo cual contiene declaración de Domingo Campos Collao.

j. De **fs. 776 a fs. 778 (Tomo III)**, informe policial N°05180/225 del 01 de octubre de 2020 lo cual contiene declaración de testigo.

k. De **fs. 819 a fs. 823 (Tomo III)** informe policial N°00462/225 del 27 de enero de 2023 lo cual contiene declaraciones de testigos.

l. De **fs. 825 a fs. (Tomo III)**, informe policial N°00462/225 del 27 de enero de 2023 lo cual contiene individualización de testigo.

3°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Que los elementos de convicción antes reseñados constituyen presunciones judiciales, que por reunir las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener legalmente acreditado lo que se indicará a continuación.

A. Que tras el 11 de septiembre de 1973 y del golpe de Estado de público conocimiento que afectó al país, producto de una orden emanada en todo el país a las instituciones Armadas y de Orden y Seguridad; en la 1° Comisaria de Lautaro de Carabineros de Chile, según consta en nómina de dotación del año 1973 de fs.151 (tomo I), el mando a cargo de la unidad, el Mayor Jorge Schweizer Gómez (fallecido a fs.1.007, tomo IV) y el Capitán Marcial Vera Ríos (fallecido a fs. fs.1.010, tomo IV); organizaron y coordinaron un grupo especial de carabineros de la unidad, integrado por los siguientes funcionarios: el vice sargento 1° Santiago Millanguir Hueche (fallecido a fs.468, tomo II), el sargento 2° Juvenal Sanhueza Sanhueza

(fallecido a fs.1.009, tomo IV), el sargento 2° y chofer Enrique Ferrier Valeze (fallecido a fs.1.008, tomo IV), el sargento 2° Mario Ponce Orellana (fallecido a fs.1.005, tomo IV), el sargento 2° José Nicanor Pérez Caamaño (fallecido a fs.1.018, tomo IV), el cabo Domingo Antonio Campos Collao y el carabinero Egidio Sandoval Umaña (fallecido a de fs.1.016, tomo IV); todos bajo las órdenes del Teniente José Orlando Huerta Ávila (fallecido a fs.1.012, tomo IV). Acorde a las declaraciones de los ex funcionarios de la 1° Comisaría; Jorge Schweizer Gómez de fs.114 a fs.115 y de fs.303 a fs.305 (tomo I); Marcial Vera Ríos de fs.116 y de fs.306 a fs.307 (tomo I); Víctor Matus Vásquez (fallecido a fs.1.006, tomo IV), de fs.42 a fs.43 y de fs.356 (tomo I); Luis Armando Larenas Catipillan de fs.222 a fs.223, de.289 a fs.290 (tomo I), de fs.850 a fs.851 (tomo III) y de fs.934 (tomo IV); José Arturo Araneda Pulgar de fs.226 a fs.227 (tomo I), y las demás declaraciones en autos. Este grupo previamente individualizado, comenzó a realizar patrullajes y allanamientos masivos, muchas veces vestidos de civil, en el sector rural y urbano de la comuna de Lautaro y sus alrededores; para localizar y detener a presuntos extremistas contrarios al régimen militar recién impuesto, para luego ser trasladados a las dependencias de la 1° Comisaría de Lautaro y el Regimiento La Concepción de Lautaro, para así ser interrogados por los funcionarios de estos destacamentos.

B. Que para la cooperación y coordinación en las actividades anteriormente descritas, este grupo de carabineros o comisión civil contó con el apoyo de funcionarios de las unidades bajo la dependencia administrativa y vigilancia de la 1° Comisaría de Lautaro, a saber: la tenencia de Perquenco, la tenencia de Galvarino, el retén Quillem, el retén Pillanlelbún y el retén Dollinco (sector Tres Esquinas). Acorde a las declaraciones de algunos los ex funcionarios de estas unidades para el año 1973: José Orlando Huerta Ávila (fallecido a fs.1.012, tomo IV) de fs.147 a fs.148 (tomo I); Juan Bautista Torres Yáñez (fallecido a fs.1.021) de fs.238 a fs.239 (tomo I); Héctor Báez Sanhueza 240 a fs.241 y de fs.315 a fs.316 (tomo I); Carlos Ibáñez Jara de fs.607 a fs.608 (tomo III), de fs.935 y de fs.936 a fs.937 (tomo IV), y Héctor Aroca Salazar de fs.622 a fs.623 (tomo III) y en concordancia con las nóminas de funcionarios de estas unidades para el año 1973 de fs.160 a fs.164 (tomo I). Dentro de los funcionarios que participaron en detenciones por motivos políticos, se encontraban el suboficial Rafael Renato Rodríguez Rodríguez (fallecido a fs.1.014, tomo IV), el cabo 1° Francisco Isla Mejías

(fallecido a fs.1.015, tomo IV) y el carabinero Dagoberto Poblete Carriel (fallecido a fs.1.017, tomo IV), todos de la Tenencia de Perquenco.

C. Que Pedro Ñirripil Paillal, Juan Segundo Tralcal Colileo y Ceferino Millalén Peralta (fallecido a fs.187, tomo I), para septiembre de 1973 vivían en la zona rural de la comuna de Lautaro, dedicándose a labores de agricultura principalmente, sin militancia política conocida. Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, por el hecho de trabajar en el asentamiento Guillermo Teillier de la zona, son detenidos en el transcurso de ese mes desde sus domicilios, por funcionarios de la 1° Comisaría de Carabineros de Lautaro, reconociendo dentro de sus aprehensores a los carabineros Mario Ponce Orellana (fallecido a fs.1.005, tomo IV), Enrique Ferrier Valeze (fallecido a fs.1.008, tomo IV), un carabinero apodado “patas planas” y Domingo Antonio Campos Collao, para ser llevados por ellos sin orden judicial alguna, a dependencias de la Comisaría antes nombrada, donde permanecieron en los calabozos de la unidad, siendo interrogados por sus actividades y apremiados durante todos los días que permanecieron allí, con golpes con luma y puño junto con aplicación de corriente en todas las partes de sus cuerpos. Según lo evidenciado en las declaraciones de las víctimas antes nombradas de fs. 34, de fs.35 a fs.37, de fs.52 a fs.53, de fs.55 a fs.56, de fs.171 a fs.172, de fs.175 a fs.176 y de fs.197 a fs.198 (tomo I); además de declaraciones de Juana Millalén Lepilao-Tralcal, hija de Ceferino Millalén Peralta, de fs.38 a fs.39, de fs.57 y de fs.177 (tomo I); Pedro Antipe Ñanco de fs.266 a fs.267 (tomo I); Julia Millalén Lepilao-Tralcal de fs.328 a fs.330 (tomo I) y Juan Mila Millalén de fs.344 a fs.346 (tomo I).

D. Que Manuel Martínez Ulloa (fallecido a fs.1.026, tomo IV), para el año 1973 era funcionario de Ferrocarriles del Estado, subdelegado de la comuna de Perquenco y militante del partido Comunista. El día 13 de septiembre de 1973 es detenido en la comuna de Perquenco, junto al sacerdote de Perquenco Wilfredo Alarcón Ferrada (fallecido a fs.1.025, tomo IV), por los funcionarios de Carabineros que él identifica como Rafael Renato Rodríguez (fallecido a fs.1.014, tomo IV) y Francisco Isla Mejías (fallecido a fs.1.015, tomo IV). Tras su detención es trasladado junto a Alarcón, a la 1° Comisaría de Lautaro, donde fue interrogado por tenencia de armas y apremiado duramente por el teniente José Orlando Huerta (fallecido a fs.1.011, tomo IV) en presencia de los carabineros Enrique Ferrier Valeze (fallecido

a fs.1.008, tomo IV) y Domingo Antonio Campos Collao, con aplicación de corriente en distintas partes de su cuerpo y golpizas constantes por los funcionarios de la Comisaría. Tras estos hechos es ingresado a la cárcel pública de Temuco, siendo liberado el 3 de enero de 1974. Según el relato de sus propias declaraciones de fs.516 a fs.517 y de fs.519 a fs.520 (tomo II); además de declaraciones de Irma Eliana Veloso de fs.531 a fs.533 (tomo II), Filiberto Jara Gómez de fs.535 a fs.533 (tomo II); Héctor Pinilla González de fs.931 y de fs.932 a fs.933 (tomo IV) y Tomás Raúl Catalán Lincoleo de fs.1.030 a fs.1.031 (tomo IV); y extracto del libro “Martirologio de la Iglesia chilena” del autor Miguel Jordá Sureda; donde se recoge el testimonio respecto a su detención del sacerdote Carlos Wilfredo Alarcón Ferrada de fs.964 a fs.979 (tomo IV).

E. Que al mes de septiembre del año 1973, los hermanos Octavio Renato Catalán Lincoleo y Tomás Raúl Catalán Lincoleo, debido a la persecución política sufrida por toda su familia, incluyendo a su hermano detenido desaparecido Samuel Alfonso Catalán Lincoleo (causa rol 113.958, fallada con fecha 17 de octubre de 2024 por este Tribunal); ambos son detenidos sin orden judicial durante el transcurso del mes. Octavio Catalán Lincoleo es detenido desde su domicilio en Pitrufuquén, tras ser llevado inicialmente a la 2° Comisaría de Temuco y la cárcel de Temuco, según consta en informe de permanencia evacuado por el alcaide del C.C.P de Temuco de fs.562 (tomo II), es trasladado a dependencias de la 1° Comisaría de Lautaro, donde es liberado con la medida de firma mensual en la unidad antes señalada. En cuanto a Tomás Catalán Lincoleo, es detenido desde su trabajo en las oficinas del SAG en Lautaro por el carabinero Egidio Sandoval Umaña (fallecido a de fs.1.016, tomo IV), entre otros y es trasladado a la 1° Comisaría de Lautaro y luego a la cárcel de Temuco, donde es liberado tras cuatros meses de prisión. Ambos hermanos apuntan haber sido torturados con golpes, aplicación de corriente en sus cuerpos y sumersión en agua en el patio de la unidad, por funcionarios de la 1° Comisaría de Lautaro durante el tiempo que permanecieron en sus calabozos, sin acceso a baño junto a 25 personas más aproximadamente, reconociendo dentro de sus torturadores a Juvenal Sanhueza Sanhueza (fallecido a fs.1.009, tomo IV), Enrique Ferrier Valeze (fallecido a fs.1.008, tomo IV) y Domingo Antonio Campos Collao. Como se desprenden de las declaraciones de las víctimas de fs.546 a fs.547 (tomo II) y fs.1.030 a fs.1.031 (tomo IV); además declaraciones

de Héctor Pinilla González de fs.931 y de fs.932 a fs.933 (tomo IV); y antecedentes del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a Tomás Catalán Lincoleo de fs.1033 a fs.1.044 (tomo IV).

F.- Que en el contexto de la detención y secuestro calificado de su tío paterno Sergio Navarro Schifferli de fecha 4 de octubre de 1973 (investigada en causa rol 45.357, seguida y fallada con fecha 21 de septiembre de 2021 por este Tribunal), Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, siendo menor de edad, fue testigo de su detención y traslado por parte de funcionarios de la 1° Comisaría de Lautaro, siendo en dicho acto de aprehensión, duramente golpeado y maltratado por los carabineros que identificó como Domingo Antonio Campos Collao, Mario Ponce Orellana (fallecido a fs.1.005, tomo IV), Víctor Matus Vásquez (fallecido a fs.1.006, tomo IV), Enrique Ferrier Valeze (fallecido a fs.1.008, tomo IV) y José Orlando Huerta Ávila (fallecido a fs.1.012, tomo IV). Tras este hecho siguió siendo perseguido y molestado por Carabineros en su domicilio, por lo que decide emigrar a Santiago al año siguiente. Acorde a sus propias declaraciones de fs.605 a fs.606, de fs.636 a fs.639 y de fs.831 a fs.835 (tomo III); además de declaraciones de Carlos Antonio Navarro Schifferli de fs.591 a fs.592 y de fs.641 (tomo III); e Ilda Teresa Morales Jaque de fs.134 a fs.135 (tomo I) y de fs.631 a fs.632 (tomo III).

4°) Calificación. Que los hechos antes reseñados, constituyen los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos, en su carácter de lesa humanidad, en las personas de 1) Pedro Ñirripil Paillal, 2) Juan Segundo Tralcal Colileo, 3) Ceferino Millalén Peralta, 4) Manuel Martínez Ulloa, 5) Octavio Renato Catalán Lincoleo, 6) Tomás Raúl Catalán Lincoleo y 7) Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos previstos y sancionados en los artículos 148 y 150 N°1 del Código Penal, vigentes a la época de los hechos.

5°) Calificación. Que los ilícitos antes reseñado, son además delitos de lesa humanidad. Así se ha pronunciado este Tribunal, la Ilma.. Corte de Apelaciones de Temuco y la Excma. Corte Suprema, en las siguientes causas tramitadas ante este Ministro en Visita Extraordinaria:

1. Causa rol 27.525 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidios calificados de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014;

2. Causa rol 27.526 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014;

3. Causa rol 45.345 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidios calificados de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014;

4. Causa rol 113.990 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015;

5.Causa rol 113.989, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016;

6. Causa rol 18.780 del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015;

7. Causa rol 29.877, del ingreso del Juzgado de Letras de Pitrufrquén, seguida por el delito de homicidios calificados de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016;

8. Causa rol 45.344, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016;

9.Causa rol 45.371, del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016;

10.Causa rol 45.342, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumercindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015;

11. Causa rol 29.869, del Juzgado de Letras de Pitrufrquén, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016;

12. Causa rol 27.527, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016;

13. Causa rol 114.001, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016;

14. Causa rol 113.986, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016;

15.Causa rol 63.541, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016;

16.Causa rol 45.363, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017;

17. Causa rol 114.048, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017;

18. Causa rol 10.868, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017;

19. Causa rol 114.003, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017;

20. Causa rol 10.854, del Primer Juzgado de Letras de Puerto Montt, seguida por los homicidios calificados en las personas de Dagoberto Segundo Cárcamo Navarro, José René Argel Marilicán, Adolfo Omar Arismendi Pérez, Carlos Mansilla Coñuecar, Jorge Melipillán Aros, José Armando Ñancuman Maldonado, sentencia de 28 de octubre de 2017;

21. Causa rol 45.359 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de Domingo Huenul Huaquil, sentencia de 31 de agosto de 2017.

22. Causa rol 54.035 del Primer Juzgado de Crimen de Puerto Montt, apremios ilegítimos en las personas de Mario Enrique Contreras Vega, Cesar Vladimir Leiva Garrido, Domingo Álvarez Cárdenas, Raúl Ángel Andrade Oyarzún, Marco Antonio Romero Arias, Enrique Becker Álvarez, Carlos Jerges Torres Vera, Noé Alejandro Cárdenas Alvarado, Werne Víctor Haro Oyarzún, sentencia de 23 de diciembre de 2017.

23. Causa rol 65.535 del Juzgado de Letras de Angol, seguida por los apremios ilegítimos en las personas de Manuel Marcelino Ramírez Zurita, sentencia de 25 de mayo de 2018.

24. Causa rol 45.343, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por los homicidios calificados en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaiquimil, Julio Augusto Ñirripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 09 de noviembre de 2020.

25. Causa rol 1-2013 del Juzgado de Letras de Pucón, seguida por detención ilegal de Alberto Colpíhueque Navarrete, Eleuterio Colpíhueque Lican y Abel Florencio Colpíhueque Lican; apremios ilegítimos de Alberto Colpíhueque Navarrete y Eleuterio Colpíhueque Lican; y homicidios calificados de Alberto Colpíhueque Navarrete y Eleuterio Colpíhueque Licán, sentencia de 24 de mayo de 2019.

26. Causa rol 57.071, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el Homicidios calificados en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia de 09 abril de 2021.

27. Causa rol 113.997, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco para investigar el delito de secuestro calificado en la persona de Segundo Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia de 02 de junio de 2021.

28. Causa rol 45.354, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia de 16 de junio de 2021.

29. Causa rol 45.361, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020;

30. Causa rol 114.000, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020;

31. Causa rol 4-2010, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018;

32. Causa rol 45.362, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018.

33. Causa rol 114.007, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018.

34. Causa rol 114.042, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018.

35. Causa rol 113.996, del Primer Juzgado del crimen de Temuco, seguida por el Homicidios calificados y apremios ilegítimos en la persona de Tomás Segundo Esparza Osorio y apremios ilegítimos en la persona de Javier Enrique Esparza Osorio, sentencia de 30 de junio de 2018.

36. Causa rol 29.979 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado de Domingo Obreque Obreque, sentencia de 07 de abril de 2014.

37. Causa rol 45.365, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Luis Armando Horn Roa, sentencia de 25 de febrero de 2021.

38. Causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Pedro Millalén Huenchuñir, sentencia de 11 de mayo de 2022.

39. Causa rol 44.305 del juzgado del Crimen de Puerto Varas, seguida por los homicidios calificados en las personas de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, sentencia de 25 de enero de 2019.

40. Causa rol 45.368 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de José Bernardino Cuevas Cifuentes, sentencia de 30 de marzo de 2019.

41. Causa rol 114.103 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de secuestro calificado en la persona de Alejandro Ancao Paine, sentencia de 03 de septiembre de 2021.

42. Causa rol 113.991 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de homicidio calificado en la persona de Ramón Carrero Chanqueo, sentencia de 21 de noviembre de 2022.

43. Causa rol 113.478 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de homicidio calificado en la persona de Luis Omar Torres Antinao, sentencia del 13 de junio de 2019.

44. Causa rol 114.051 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de secuestro calificado en la persona de José Edulio Muñoz Concha, sentencia del 30 de abril de 2021.

45. Causa rol 5-2013 del ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por aplicación de tormentos de Harry Cohen Vera, sentencia de fecha 30 de septiembre de 2019.

46. Causa rol 113.999 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por aplicación de tormentos con resultado de muerte de Nolberto Seiffert Dossow, sentencia de fecha 03 de octubre de 2019.

47. Causa rol 114.058 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco seguida por el delito de apremios ilegítimos de Manuel Antivil Huenуqueo, sentencia de 30 de octubre de 2019.

48. Causa rol 6.345 del ingreso criminal del Juzgado del Crimen de Chile Chico, seguida por el delito de homicidio calificado de José Ananías Zapata Carrasco, sentencia de fecha 09 de marzo de 2020.

49. Causa rol 114.043 del ingreso criminal Primer Juzgado del Crimen de Temuco seguida por el homicidio calificado de Gonzalo Hernández Morales, sentencia de fecha 15 de mayo de 2020.

50. Causa rol 45.464 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Benedicto Poo Álvarez, sentencia de fecha 06 de junio de 2021.

51. Causa rol 18.782 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por secuestro simple, apremios ilegítimos y homicidio calificado de Julio San Martín San Martín, sentencia de fecha 28 de julio de 2022.

52. Causa rol 114.039 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Diego Celso Saldías Cid, sentencia de fecha 21 de septiembre de 2022.

53. Causa rol 45.355 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de José Ignacio Beltrán Meliqueo, sentencia de 20 de abril de 2023.

54. Causa rol 18-2011 del ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio simple de José Avelino Runca, sentencia de 27 de julio de 2020.

55. Causa rol 63.551 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el secuestro calificado de Patricio Rivas Sepúlveda, sentencia de 23 de diciembre de 2022.

56. Causa rol 113.969 de ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera, sentencia de 2 de enero de 2020.

57. Causa rol 2-2013 del ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el delito de homicidio de Domingo Pérez San Martín, sentencia de 14 de octubre de 2020.

58. Causa rol 24.428 del ingreso del Juzgado de Letras de Traiguén, seguida por el delito de apremios ilegítimos de Antonio Inostroza Segura y otros, sentencia de 31 de octubre de 2023.

59. Causa rol 114.034 del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de apremios ilegítimos de Luis Alberto Chihuailaf, sentencia del 03 de agosto de 2022.

60. Causa rol 10.914-P del Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por aplicación de tormentos y detención ilegal, sentencia del 09 de agosto de 2022.

61. Causa rol 25-2011 de ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el delito de homicidio de Reinaldo Rosas Asenjo, sentencia del 19 de diciembre de 2022.

62. Causa rol 113.975 de ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por los delitos de homicidio calificado y apremios ilegítimos de Pedro Ríos Castillo y Guido Troncoso Pérez, sentencia del 26 de agosto de 2022.

63. Causa rol 45.357 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Sergio del Carmen Navarro Schifferli y José Andrés Meliquén Aguilera, sentencia del 22 de julio de 2021. Todos los fallos anteriores condenatorios.

64.Causa rol 114.033 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco seguida por el delito de secuestro calificado de Osvaldo del Carmen Cerna Huard, sentencia del 08 de febrero de 2024.

65.Causa rol 63.556 del ingreso Juzgado de Letras de Angol, seguida por el delito de secuestro calificado de Óscar Armando Gutiérrez Gutiérrez, sentencia del 10 de junio de 2020.

66.Causa rol 114.017 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de Apremios Ilegítimos y Homicidios calificados de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga, sentencia del 24 de diciembre de 2021.

67.Causa rol 29.883 del Juzgado de Letras de Pitrufquén, por el delito de secuestro de Daniel Mauricio Sepúlveda Contreras, sentencia del 29 de noviembre de 2022.

68.Causa rol 114.047 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco por el delito de homicidio calificado de Rubén Eduardo Morales Jara, sentencia del 03 de agosto de 2020.

6°) Concepto de Lesa Humanidad. Que sobre lo anterior y en cuanto al origen, evolución histórica y definición de los delitos de lesa humanidad el concepto de delitos de "lesa humanidad" o de "leyes o normas de la humanidad", surgieron durante el siglo XX y ha permanecido en constante evolución a través del tiempo. Este concepto, tuvo su origen en varios instrumentos internacionales a saber:

A. Que la Convención de la Haya sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y 1907. Fundamento del concepto de: "leyes de la humanidad" plasmado en la Cláusula Martens: "Mientras que se forma un código más completo de las leyes de la guerra, las altas partes contratantes juzgan oportuno declarar que en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del derecho de gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública" (**Óscar López Goldaracena. Derecho Internacional y crímenes contra la humanidad. 2008. Fundación de Cultura Universitaria, Uruguay. pp. 29 – 34).**

B. Que en la Declaración de 28 de mayo de 1915 de los Gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia en la que denunciaron las masacres a los armenios por parte del Imperio Otomano como crímenes de lesa humanidad, tal como lo expresan los autores (Derechos Humanos: Justicia y Reparación. **Ricardo Lorenzetti**, editorial Sudamericana). Hay que precisar, como lo ha dicho la literatura, que el crimen contra la humanidad excede con mucho en su conducta el contenido ilícito de cualquier otro delito. Asimismo, el Derecho Penal no está legitimado para exigir la prescripción de las acciones emergentes de estos delitos y si lo hiciere sufriría un grave desmedro ético: no hay argumento jurídico ni ético que le permita invocar la prescripción (Nueva Doctrina Penal, “Notas Sobre el Fundamentos de la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad” Eugenio Raúl Zaffaroni, pág. 437 a 446). Del mismo modo, el crimen de lesa humanidad es aquel injusto que no solo contraviene los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, esto es, se mira al individuo como cosa. La característica principal es la forma cruel y bestial con que diversos hechos criminales son perpetrados. Sin perjuicio de otros elementos que también lo constituyen como son la indefensión, la impunidad, que serán analizados con posterioridad. Es un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes.

7°) Que en una reflexión más integral podemos indicar que una perspectiva para abordar la justicia de transición es el valor social y jurídico de la verdad, esto es, la función que asume el concepto de verdad no sólo en contextos específicos, sino también en la justicia de transición y en especial en el plano más amplio de la dinámica social política y jurídica. Así Bernard Williams nos plantea las virtudes de la verdad como la sinceridad y la precisión en referencia a la realidad, son factores esenciales en la dinámica social. El mismo autor plantea la conexión entre verdad y política e indica que la verdad constituye una característica esencial de la democracia por cuanto asegura la libertad de los ciudadanos contra el poder tiránico. Plantea también que la exigencia de que el poder actúe el valor de la verdad determina el factor efectivamente democrático en el ámbito del sistema político liberal. Esto es, el valor político de la verdad deriva del hecho de que la medida de

un sistema político funda sus relaciones entre el poder y los ciudadanos en la verdad y determina el grado de democracia del sistema. El poder tiránico se funda en una verdad envenenada, es decir, sobre una mentira, mientras que el sistema democrático se funda en el principio de verdad. Por su lado, Michael Lynch insiste en el valor fundamental de la verdad en el contexto de la democracia liberal, puesto que señala que, si nos importan los valores liberales, nos debe importar la verdad. Por otro lado, desde un punto de vista más amplio el principio de la verdad se configura como una condición esencial para la efectividad del ordenamiento jurídico, esto es, la efectividad del ordenamiento jurídico se funda en la hipótesis de que el sistema sea capaz de establecer la verdad respecto de tales conductas. Más específico, la consideración del valor jurídico de la verdad se refiera a la administración de justicia. En términos más simples, en palabras de Gerome Frank, no existe una decisión justa que se funde en hechos equivocados. Es decir, la verdad de los hechos es una condición necesaria para que se arribe a una decisión justa. A propósito de la justicia de transición ha habido un discurso ambiguo, puesto que se ha expresado que el silencio y el olvido respecto de los crímenes pasados son el mejor método para facilitar la construcción de la nueva sociedad. Esto puede ser respondido no solo por las víctimas sino por la sociedad entera en cuanto puede ser difícil o imposible aceptar que los graves actos de violencia cometidos contra miles de personas sean silenciados en nombre de la pacificación social. Hay que reflexionar sobre las dudas que surgen, sobre el tipo de paz social que se quiere lograr sobre la base de la falta de verdad efectiva sobre los crímenes y las correspondientes responsabilidades relacionadas con los hechos cometidos. El principal efecto del silencio es que antiguos criminales escapan masivamente de la justicia (ejemplos caso del Alemania post nazista y la Italia post fascista) se convierten en buenos y honorables ciudadanos de la democracia, en ese sentido se pregunta el autor si realmente se puede hablar de democracia cuando se habla de un sistema político que evita sistemáticamente la búsqueda de la verdad sobre sus precedentes históricos inmediatos, no obstante ser clara la cantidad y calidad de los crímenes cometidos. En consecuencia, citando nuevamente a Williams, es que el diagnóstico es negativo respecto a las pretendidas democracias que sistemáticamente rechazan la búsqueda de la verdad. (Michel Taruffo (2018): “La

verdad. Consideraciones sobre la verdad y justicia de transición” En Revista de Estudios Judiciales, año 2018, N° 5, ediciones DER. pp. 19 – 30).

Declaraciones indagatorias.

8°) Declaración indagatoria de DOMINGO ANTONIO CAMPOS COLLAO.

Quien depone de fs.73 a fs. 73 vta.(Tomo I), fs. 86 (Tomo I), fs. 88 (Tomo I), fs. 89 a fs. 90 (Tomo I), fs. 91(Tomo I) con copia de fs. 635 (Tomo III) y fs. 735 (Tomo III), fs. 93 (Tomo I), fs. 117 a fs. 118 (Tomo I), copia de fs. fs. 736 a fs. 737 (Tomo III), fs. 140 a fs. 141 (Tomo I) copia de fs. 738 a fs. 739 (Tomo III), fs. 155 a fs. 156 (Tomo I), fs. 197 a fs. 198 (Tomo I), fs. 199 (Tomo I), fs. 729 a fs. 730 (Tomo III), fs. 731 a fs. 732 (Tomo III), 733 (Tomo III), fs. 734 (Tomo III), fs. 741 a fs. 742 (Tomo III), fs. 743 (Tomo III), fs. 744 a fs. 745 (Tomo III) y de fs. 746 (Tomo III).

En **diligencia de careo con Lorenza Cheuquepán** del 03 de enero de 1975 **de fs. 73 a 73 vta. (Tomo I)**. Ratifica su declaración y si bien es cierto conoce a la familia Cheuquepán, por haber trabajado durante seis años en el Retén de Dollinco, sector que embarca reducciones Quiñaco-Manzanar, pero no participó en la investigación relacionada a un hurto y no pidió la detención del hermano de la persona con quien se le carea. Anexa que cada vez que un funcionario salía a efectuar una investigación o cualquier diligencia, debe dejar constancia en el libro de guardia. El nombre del funcionario, número del arma que se entrega y la diligencia que va efectuar, lugar y hora de la misma.

En **diligencia de careo con Margarita Cheuquepán** del 03 de enero de 1975 **de fs. 73 vta. a 74 (Tomo I)**. Expresa que desde esa fecha y desde el mes de marzo no se había designado la comisión de vehículos motorizados y en este caso no cumplía ninguna investigación y esto puede consultarse acerca del servicio que le correspondía y en la fecha que se indica, el día 11 de junio del año pasado a la Comisaría de Lautaro, señor oficial de ordenes al señor Comisario, ya que todos los días al ingresar al servicio se deja estipulado lo que corresponde, hora de entrada y la hora de regreso y con la novedad que trae. Por esto mismo la aseveración que se hace de su persona en relación con la detención de Juan Eleuterio Cheuquepán no es verídica. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 27 de noviembre de 1975, **rolante a fs. 86 (Tomo I)**. Colige que no es cierta la cita que hace el denunciante, referente a

otros hechos. Comunica que no está encargado de practicar averiguaciones por hurto, sino que su trabajo consiste en otras misiones específicas. Estima que el denunciante está equivocado, ya que insiste en que no recuerda haberse entrevistado jamás con él.

En diligencia de careo con Levío Huaiquil de 23 de enero de 1976, **rolante fs. 88 (Tomo I)**. Ratifica su declaración, agrega que no trabajó de uniforme, hace más de dos años a la fecha, por otra misión específica, correspondiéndole solamente actuar en lo relacionado con asuntos políticos y en este caso no se ha mezclado. Comenta que no puede haber concurrido al domicilio de Huaiquil porque no se viste con el uniforme de Carabineros, y por otra parte, son tres los funcionarios que están designados en esa otra misión y no podían haber concurrido dos funcionarios a ese domicilio. Conjetura que no se ha designado ninguna pesquisa, por alguna denuncia. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Mercedes Huaquilao de fecha 23 de enero de 1976, **rolante a fs. 89 a fs. 90 (Tomo I)**. Ratifica su declaración. Inquieta que jamás ha concurrido al domicilio de Huaiquil para hacer alguna investigación, porque no le corresponde hacer esta clase de trabajos, sino que la relacionada con el Servicio de Inteligencia, siendo tres los funcionarios designados en ese cargo y no andan vestidos de uniforme, sino que de civil y tampoco deben andar uno o dos solos, sino que tienen que andar los tres juntos. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial del 25 de junio de 1992, de **fs. 91 (Tomo I) copia de fs. 635 (Tomo III) y fs. 735 (tomo III)**. Advierte que no conoció a Samuel Alfonso Catalán Lincoleo, tampoco tuvo participación en su detención, por comentarios de terceras personas supo que a esta persona lo habrían detenido los militares no eso no lo puede asegurar, ya que no fue testigo de los hechos. Hace presente que en el año 1974, trabajó como funcionario de Carabineros dependiente de la Primera Comisaría de esta ciudad (Lautaro), pero no recuerda si estaba en la base o en el Retén Quillem. Insiste en que nunca detuvo al nombrado Catalán Lincoleo.

En declaración judicial de fecha 30 de noviembre de 1981, de **fs. 93 (Tomo I)**. Blasona que en el mes de septiembre del año 1973 se encontraba trabajando en la Primera Comisaría de Lautaro y su labor consistía en efectuar servicios ordinarios, también le correspondió hacer patrullajes en los campos y cumplimiento de órdenes judiciales, no habiéndole correspondido en esa época

detener a Manuel Elías Catalán Paillal, a quién no conoce ni tiene idea dónde pueda vivir. La persona cuya fotografía el Tribunal le muestra, no la vio detenida en la Comisaría de Lautaro.

En declaración extrajudicial de fecha 10 de enero de 1996, rolante a **fs. 117 a fs. 118 copia de fs. 736 a fs. 737 (Tomo III)**. Sostiene que ingresó a Carabineros de Chile el 01 de agosto de 1957, desempeñándose en diferentes unidades del país, en lo pertinente soflama que los sucesos del 11 de septiembre de 1973, se encontraba cumpliendo funciones en la unidad base de Lautaro, donde era Comisario el Mayor Jorge Schweitzer Gómez. Dentro de las primeras misiones que le correspondió participar junto a otros funcionarios, fue la de detener personas que habían participado en las tomas de terrenos y corridas de cercos. En especial, se trataba de mapuche que vivían en los alrededores de los fundos tomados, tales como fundo La Peña, ubicado en el sector camino Quinchol; fundo Miraflores, ubicado en el sector camino Brasil; fundo Huelqueco, ubicado en camino a Vilcún, entre otros. Respecto del desaparecimiento de Samuel Huichallan Llanquilen, debido a que antes del pronunciamiento militar estuvo ocho años destinado en el retén Dollinco, conocía a la gran mayoría de los habitantes del sector jurisdiccional, en especial a los que se dedicaban al robo de animales y Samuel Huichallan era cuatrero reconocido. Los hermanos Ceferino Antonio, Miguel Eduardo y Oscar Yaufulem Mañil, también eran cuatros reconocidos, que vivían en el sector de Quiñaco Manzanares. Que las dos personas mencionadas en puntos anteriores, además de Juan Eleuterio Cheuquepan Levimilla y Julio Llaulén Antilao, fueron detenidos por personal del retén Perquenco, el que estaba a cargo del suboficial, don Renato Rodríguez Rodríguez, el cual le conversó personalmente, diciéndole que le había ayudado a limpiar el sector. Debido a que el encartado trabajaba en la comisión contra el Abigeato. Alega que no participó en la detención de estas personas como ningún funcionario del Retén Dollinco, ni de la Comisaría de Lautaro, ni tampoco le correspondió indicarles el domicilio de estas personas. En el proceso en el cual está sometido, la mayoría de las personas señalan que estos detenidos fueron llevados a Perquenco. Asevera que, le correspondió en algunas oportunidades, mostrar domicilios a militares, por orden de sus jefes superiores. Adopta que lo pasaban a buscar a la Comisaría en un vehículo militar en el que andaban siempre personas de civil, más el chofer, a su parecer, oficiales de los cuales no conoce sus identidades. La misión consistía en pasar por fuera de los

domicilios de las personas que ellos requerían y seguir el camino. Recuerda que le correspondió mostrar las casas de José Domingo Llabulen Pilquinao, que vivía en ese tiempo en el sector Quiñaco Manzanares; la de Gervasio Héctor Huaiquil Calviqueo, ubicada en el lugar Montaña Recortada, por calle Quinchol y José Andrés Meliquen Aguilera, que vivía en Reducción Levinao, por calle Quinchol. Una vez que estos domicilios fueron mostrados, lo regresaron a su unidad. Posteriormente se supo que los militares habían detenido a estas personas, y que estaban desaparecidas, además, en una oportunidad, se lo comunicó la señora de José Andrés Meliquen. Respecto de José Bernardino Cuevas Cifuentes, Juan Milla Montuy, Julio Manuel Paine Lipin y Domingo Huenul Huaiquil, manifiesta que no los conoce y no ha participado en sus detenciones. Que en ese tiempo la dotación de la Comisaría de Lautaro era de aproximadamente 43 funcionarios, los que se desempeñaban en las labores policiales habituales. Cuando había algún operativo, en especial los que mencionó al principio de su declaración, premunidos de un decreto judicial, un oficial de alta graduación disponía la formación de un piquete, para realizar tal cometido, lo que le podía corresponder a cualquiera que estuviere disponible. Hace presente que ha sido nombrado en numerosos procesos por detenidos desaparecidos, debido a que él integró la comisión contra el abigeato por un largo tiempo, en el cual tuvo varios resultados positivos con las personas que lo involucraron en estos delitos, habiendo constancia de estas detenciones en los procesos por abigeato que se encuentran en el Juzgado del Crimen de Lautaro. Reitera que no tuvo participación en los hechos que se le inculpa, siendo realmente el autor de estas detenciones el suboficial de carabineros Renato Rodríguez Rodríguez, junto a personal de su destacamento.

En declaración judicial de fecha 23 de abril de 1996, rolante a **fs. 140 a fs. 141 (Tomo I) copia de fs. 738 a fs. 739 (Tomo III)**. En lo pertinente de sus dichos, se refiere al caso N°1 (fs. 9 de la causa rol 40.943 a la vista en este proceso y que corresponde a Samuel Huichillan Llanquilen o Samuel Huichaillan Levian), lo conoció por muchos años, como cuatrero e incluso en varias oportunidades se le detuvo por hurto, antes del pronunciamiento militar. Después supo que había sido detenido por carabineros de Perquenco, según lo manifestado por Ceferino Antilao, quien anduvo con el jefe del retén Perquenco, Renato Rodríguez y además, personal de ese destacamento. Él no ha detenido a Samuel Huichallan, después del pronunciamiento. En cuanto al caso N°3 (fs. 17 de la causa rol 40.943 a la vista en este proceso), Estos

Indígenas, Ceferino Antonio Yaufulen, Miguel Eduardo Yaufulen Mañil, y Oscar Romualdo Yaufulen Mañil, los conoció cuando investigaban hurto y robos y muchas veces se les detuvo, pero antes del pronunciamiento Militar. Después, el procesado dice que, no los volvió a detener. Comunica que debe decir que, en una ocasión por el mismo jefe del retén de Perquenco, que habían sido detenidos por él y su personal, y llevados a Perquenco. Respecto del caso N°5 (fs. 26 de la causa rol 40.943 a la vista en este proceso), en cuanto a Gervasio Héctor Huaiquil Calviqueo, el acusado lo conocía, porque también era cuatrero reconocido en el sector Dollinco. Después de pronunciamiento, refiere el encartado que no lo detuvo, pero por orden de sus superiores, es decir, su mayor Schweitzer, comisario de la comisaría de esta ciudad, debía mostrarle los domicilios de varios indígenas de malos antecedentes, es decir, cuatros a funcionarios militares del regimiento Andino de Lautaro, lo que el encartado hizo, ya que en vehículo militar pasaban por los lugares y ahí les indicaba sus domicilios y así lo hizo, mostrando el domicilio Gervasio Héctor Huaiquil Calviqueo, pero en esa oportunidad no fue detenido, ni los acompañó posteriormente. Respecto al caso N° 8 (fs. 39 de la causa rol 40.943 a la vista en este proceso), en cuanto a José Andrés Meliquén, apodado El "Ten" era un ladrón reconocido en el sector. También a éste por orden del comisario de ese tiempo, tuvo que mostrarle a una patrulla militar su domicilio, pero en su presencia no se detenía a nadie. En una oportunidad, llegó hasta la comisaría la esposa de Meliquén pidiéndole que le ayudara a indagar el nombre de los militares que habían detenido a su marido, el acusado pudo hacerlo, ya que no podía obtener datos de esta naturaleza y no se los iban a dar, así se lo manifestó a esta señora Hilda, que no sabe su apellido o no lo recuerda en este momento. Afirma que, ella mejor que nadie puede asegurar que cuando detuvieron a su esposo, él no participó. Respecto al Caso N° 9 (fs. 42 de la causa rol 40.943 a la vista en este proceso), en cuanto a Domingo Huenul Hauiquil, no lo conoció y por lo que se le interrogó, este pertenecía al sector de carabineros de Perquenco y en el cual no podía el encartado actuar habiendo un retén que estaba facultado o autorizado para cualquier contingencia que se le presentara, en cuanto a denuncias y averiguaciones. En cuanto a los otros indígenas que se le nombran, José Domingo Llabulen, Juan Milla Montuy, Julio Paine Lipin y José Cuevas Cifuentes; al primero les mostró su domicilio a los funcionarios o a los militares, eso nada más, a los demás no recuerda haberlos detenido ni tampoco los conoció. En esos tiempos la dotación de

Carabineros era de solo 43 funcionarios aproximadamente y cuando había que cumplir misiones, se nombraba a cualquier funcionario y no solo a él, y no salían solos, sino varios al mando de un oficial. Hace presente que a Samuel Huichallan, los hermanos Yafulen Mañil, José Andrés Meliquén, el jefe del Retén de Perquenco le dijo en una oportunidad, que les había ayudado a limpiar el sector de la Comisaría, ya que estos indígenas ya nombrados fueron detenidos por él y su personal y llevados a Perquenco, al retén. Que los indígenas, todos lo nombran, porque lo conocían por haber estado destinado por muchos en el Retén de Dollinco. Agrega que Juan Cheuquepán Levimilla y Julio Llaulén Antilao, mencionados en el proceso N° 37.869, fueron detenidos por su colega en retiro, Renato Rodríguez. Que él, ni el personal de carabineros de Dollinco y de la Comisaría de Carabineros de Lautaro, han participado en la detención de estos indígenas mencionados en esta causa. Recalca que posteriormente, ha sabido que estos hechos por los cuales se le inculpan, el autor de las detenciones fue el Suboficial en retiro de carabineros, Renato Rodríguez Rodríguez. Insiste, que nada tiene que ver en estos hechos denunciados. No tiene participación en ello.

En **declaración judicial** de fecha 15 de marzo de 2016, **de fs. 155 a fs. 156 (Tomo I)**. Respecto a los hechos relativos a la presente causa, los cuales se suscitaron principalmente en los asentamientos Los Encinos y Elmo Catalán en relación a las víctimas Pedro Ñirripil Paillal, Juan Segundo Tralcal Colileo, Juana del Carmen Millalén Lepilao-Tralcal, Luis Fernando Tralcal Huenchullán, no tiene conocimiento de tales hechos y no conoce a tales personas referidas, nunca ha escuchado oír de ellas. El tribunal le lee la declaración de fs. 140, en virtud de la cual don Domingo Antonio Campos Collao señala que autor de las detenciones producidas en Lautaro posterior al 11 de septiembre de 1973 sería don Renato Rodríguez Rodríguez, a lo que el deponente señala que ello es efectivo. Al respecto agrega que en una fiesta que se realizó en el año 1974, con motivo al aniversario de Carabineros el día 27 de abril del año referido, en el retén de Quillén, la hija de don Rafael Renato Rodríguez, de nombre Mesi Rodríguez comenzó a hablar respecto de los procedimientos que realizaban los militares, que eran abusivos, que detenían a estudiantes, que maltrataban a la gente, que los flagelaban, por lo que el señor Rudy Paslack, que allí se encontraba le señaló que no era la ocasión para realizar comentarios indebidos. Posterior a este hecho el comisario Sergio Quezada

Lafourcade llamó a su presencia a Rafael Renato Rodríguez señalándole que a consecuencia de los dichos de su hija lo podían pasar al Tribunal de guerra, por lo que no debía seguir permitiendo esos comentarios por parte de su hija. Posterior al hecho referido Rafael Renato Rodríguez manifestó en presencia de los funcionarios de la Comisaría de Lautaro que allí se encontraban, específicamente el año no lo recuerda, debe haber sido en 1974 ó 1975, que estaba limpiando a personas de malos antecedentes. Tiene conocimiento que Renato Rodríguez Rodríguez, realizó detenciones junto a su personal de destacamento de la Tenencia de Perquenco. Que, eliminó gente en el sector Quiñaco Manzanar, lo sabe, pues el mismo se jactaba de ello. En consecuencia, el cabo Francisco Isla Mejías le manifestó que Rafael Renato Rodríguez ejecutaba a los detenidos, los conducía a su retén en Perquenco para posteriormente llevarlos a un bao del río Cautín, sector Quiñaco, comuna de Perquenco. Manifiesta que pertenecía al personal de planta de la 1° Comisaría de Carabineros de Lautaro y no tiene conocimiento respecto a personas detenidas por carácter político ni respecto de torturas que allí se hayan realizado. Las detenciones y torturas las realizaba personal del Regimiento La Concepción de Lautaro. Sabe que Salazar (fallecido), Zúñiga y Millar realizaban detenciones a personas con antecedentes políticos, estos eran funcionarios del Regimiento La Concepción de Lautaro. Lo anterior lo sabe pues ellos mismos se jactaban respecto a tales detenciones.

En **diligencia de careo con Pedro Ñirripil Paillal** del 25 de abril de 2016 **rolante de fs. 197 a fs.198 (Tomo I)**. Aproxima que no reconoce a la persona con quien se le carea. Se mantiene en sus dichos y declaraciones precedentes. No conoce a la persona con quien se le carea. Expresa que Carabineros nunca flageló, torturó o interrogó a personas, dado que carabineros no se inmiscuía con personal militar. En declaración judicial del 25 de abril de 2016 de fs. 199 (Tomo I). A raíz del careo efectuado, nunca participó junto a personal militar realizando detenciones ni menos flagelaciones en contra de personas. El carabinero apodado patas planas era el carabinero de apellido Cea, perteneciente al Retén de Pillalelbún. El carabinero estuvo después del año 1973 como jefe del Retén. Anexa que el personal nombrado por Ñirripil eran carabineros conocidos de Lautaro, personalmente trabajó muchos años en contra del robo de animales, razón por la cual fueron muy nombrados. Destaca que en el sector donde fue detenido don pedro Ñirripil

pertenecía al Retén de Carabineros de Pillalelbún, cuyo jefe era el Sargento 1° Millanguir.

En declaración extrajudicial de 18 de diciembre de 2013, **rolante de fs. 729 a fs. 730 (Tomo III)**. Utiliza que a la persona de Sergio Del Carmen Navarro Schifferli, lo conoció a debido a que en el tiempo que pasó en el Retén Dollinco, el hermano era un cuatrero del sector, además conocía a su madre de nombre Elisa y su nieto Carlos, quien actualmente es parte de la dotación de Carabineros de Chile. Sobre la detención de Sergio Navarro, espeta que él no participó de dicho procedimiento; pero si se le ordenó en una oportunidad entregar un listado de nombres que tuvieran antecedentes por robo, los cuales según información que obtuvo fue entregada al Comandante del Regimiento Lautaro, presumiendo que estos se habrían equivocado y detuvieron a Sergio Navarro, siendo Carlos Navarro el cual mantenía antecedentes por robo, desconociendo lo que sucedió con la persona antes señalada. Anexa que posterior a esto, la cuñada de Navarro, doña Marta Campos Pino, se trasladó hasta la unidad policial donde solicitó su presencia a lo cual accedió, conversando con esta persona manifestándole que Sergio no se encontraba detenido en la unidad, pero que por comentarios se supo que a éste se lo habrían llevado los militares, junto con otros delincuentes. Finalmente, nunca le correspondió cooperar ni participar en hechos de sangre durante su permanencia en la Comisaria de Lautaro.

En declaración judicial de fecha 25 de marzo de 2014, **rolante de fs. 731 a fs. 732 (Tomo III)**. Ratifica su declaración extrajudicial rolante de fs. 211 a fs. 212, con la salvedad que la cuñada de Sergio Navarro se llama Berta Campos y no Marta, como lo mencionó anteriormente. Urde que don Elías Segundo Cuevas Aldea, era un agricultor de la zona. Sin embargo, esta persona siempre estaba enferma por lo que generalmente conversaba más con su hermano Guillermo Cuevas. Ambos están fallecidos. Delibera que esta persona tenía una camioneta marca Chevrolet C-10, pero no recuerda el color del vehículo. Esgrime que nunca salió en patrullajes en ese vehículo. Apunta que no participó en las detenciones de Sergio Navarro Schifferli, José Andrés Meliquén Aguilera y José Ignacio Beltrán Meliquén, pero los conocía a todos ellos puesto que trabajó muchos años en el Retén Dollinco del sector Tres Esquinas; en cuyo lugar ellos eran vecinos. El hermano de Sergio Navarro, llamado Carlos, era cuatrero, y siempre iban a la casa de Sergio

Navarro a preguntar por el paradero de su hermano. Suma que después del 11 de septiembre de 1973 estuvieron acuartelados en grado 1 durante bastante tiempo, período durante el cual casi no podían salir del Cuartel. Proclama que durante ese período llegaron patrullas militares a dejar detenidos, siendo retirados por ellos a la mañana siguiente. A cargo de estas patrullas estaba el Sargento Salazar. Puntualiza que no recuerda que haya habido detenidos en las caballerizas o en las pesebreras. No supo de la existencia de personas detenidas en el segundo piso de la Comisaría. Narra que no recuerda que hayan entrado detenidos por la puerta falsa. Difunde que el Teniente Huerta pagaba pensión en el casino de Oficiales del Regimiento y él se relacionaba con los mandos de esa unidad. Además, tenía un grupo especial para salir en patrullajes, de cuyos integrantes sólo rememora al Carabinero Poblete. Arguye que nunca salió con Huerta en esos patrullajes. Musita que se acuerda de los nombres de los Capitanes de Ejército Del Río y García, pero no los vio en la Comisaría de Lautaro.

En declaración extrajudicial, rolante a **fs. 733 (Tomo III)**. Arguye que es Sargento Primero en retiro. Que el año 1966 fue enviado a trabajar al Retén Dollinco, conocido como Tres Esquinas, lugar donde desempeñó funciones hasta el año 1970, fecha en que fue trasladado al retén Quillem, el cual en la actualidad no existe, trabajando allí hasta el año 1972, fecha en que lo destinaron a la comisaría base de Lautaro, donde prestó servicios hasta el mes de diciembre de 1985, en que se acogió a retiro. Durante el tiempo en que trabajó en la base, se creó un grupo operativo para combatir los abigeatos. Respecto de las personas que se le consulta, funda que a José Andrés Meliquén Aguilera, lo conoció, ya que era un cuatrero de la zona de Dollinco, a quien puso a disposición del Tribunal, en reiteradas oportunidades, durante su permanencia. A José Ignacio Beltrán Meliqueo lo conoció físicamente, por oídas supo que era un delincuente que robaba junto a Meliqueo, pero a este sujeto no lo pasó nunca detenido, ya que no se le comprobó participación en delito alguno. A Sergio Navarro Schifferli, lo conoció solamente de oídas, ya que siempre les decían que sustraía animales en diferentes comunas, pero jamás lo vio, ni se pudo detener. Respecto de la detención y posterior desaparición de las tres personas antes indicadas, habla que él no ha participado en la detención de ninguno de ellos. Ni menos efectuó detenciones junto al Sargento Segundo (R), Enrique Ferrier Veleze, ya que este era un funcionario contratado como chofer y nunca podía hacer servicios

ordinarios, como son los que efectuaba cualquier carabinero que no sea chofer, ya que estos solamente se limitaban a manejar y tienen prohibición de hacer detenciones. Al agricultor Domingo Cuevas, no le conoce, pero sí conoció a don Elías Cuevas Aldea, quien, el año 1973 tenía una camioneta Chevrolet C-10, color blanco, pero nunca el encartado salió con él, ni con su hijo Patricio, ya que no había motivos para ello. No recuerda la fecha en que las tres personas presuntamente detenidas por él desaparecieron del sector, ya que, sin darse cuenta, nunca más se supo de que alguno de ellos estuviera participando en la sustracción de animales. Ignora que sucedió con ellos, pero de los que está seguro, es que no tiene nada que ver con sus desapariciones. Presume que las personas que lo inculpan de tal situación son familiares adoloridos por el hecho de que él, más de una vez puso a disposición de la justicia a esas personas

En declaración judicial de fecha 20 de noviembre de 1990, **de fs. 734 (Tomo III)**. Expone que conoció a José Meliquén, José Beltrán y Sergio Navarro, porque cuando fue funcionario de carabineros, trabajó por un tiempo en el Retén Dollinco o Tres Esquinas y como estas personas eran de ese sector y además que se dedicaban al cuatrismo, por lo tanto, eran muy nombrados. En cuanto a la querella presentada en su contra, informa que nunca los detuvo, debido a que el año 1973, trabajaba en el retén de Quillem, por lo que no participó en detención, ni de civil, ni con uniforme, razón por la cual nada podría aportar sobre las personas antes nombradas y que se dice que desaparecieron en el año 1973. Con respecto a Enrique Ferrier, este en esa fecha era chofer de la comisaría y no realizaba servicio de orden y seguridad, todo esto se lo declaró al funcionario de investigaciones que está a cargo de la investigación de este sumario. Insiste, que no tiene ninguna participación en los hechos investigados ya que nunca detuvo a los presuntos desaparecidos.

En diligencia de careo con Jorge Enrique Schweitzer Gómez, de fecha 09 de abril de 2014, **rolante de fs. 741 a fs. 742 (Tomo III)**. Ratifica en lo pertinente la declaración de fs. 249 a fs. 250. Distingue que la persona con quien se le carea es el Mayor Jorge Enrique Schweitzer Gómez, Comisario de Lautaro. Desarrolla que luego del 11 de septiembre de 1973 el Comandante del Regimiento La Concepción del Lautaro pidió un listado de personas con malos antecedentes o delincuentes habituales al Mayor Schweitzer, Comisario de la época. Evidencia que él le entregó este listado que fue sacado de los archivos que mantenían en la unidad,

pero desconoce qué sucedió con esas personas. Además, le fue entregado un croquis de los lugares donde estas personas vivían. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Héctor Leonardo Aroca Salazar de fecha 10 de abril de 2015, **a fs. 743 (Tomo III)**. Reconoce a la persona sentada a su lado como el Carabinero Héctor Leonardo Aroca Salazar que trabajó en Lautaro cuando él sirvió en ese lugar. Explica que es falso lo que él señaló, jamás perteneció al grupo del Teniente Huerta. Además, él no era parte del personal más antiguo. No sabe por qué él lo sindicaba en esas actividades. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Víctor Matus Vásquez, de fecha 10 de abril de 2015, **rolante de fs. 744 a fs. 745 (Tomo II)**. Espeta que reconoce a la persona con quien se le carea, es el entonces Carabinero Víctor Matus Vásquez, con quien sirvió en Carabineros de Lautaro en 1973. Anima que lo indicado por el señor Matus es absolutamente falso. Relata que en ese tiempo formaba parte de la Comisión de abigeato o Comisión Civil contra el robo de animales junto con el Suboficial Sanhueza y el Cabo Sandoval Humaña. Pero nunca estuvo en el grupo del Teniente Huerta. Suma que con Mario Ponce Orellana trabajó el tema de órdenes judiciales casi al final de su carrera. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con José Agustín Méndez Contreras de fecha 10 de abril de 2015, **rolante a fs. 746 (Tomo III)**. Manifiesta que reconoce a la persona sentada a su lado como el Carabinero José Agustín Méndez Contreras, que trabajó en Lautaro cuando él sirvió en ese lugar. Asevera que es falso lo señalado por él, jamás perteneció al grupo del Teniente Huerta. Además, él no era parte del personal más antiguo. No sabe por qué él le sindicaba en esas actividades. Descarga que es un invento que no se puede explicar. Recalca que solo estuvo en la comisión civil contra el robo de animales. Se mantiene en sus dichos.

9º) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **Domingo Antonio Campos Collao**, quien fue sometido a proceso de fs. 1.052 a fs. 1.070 (Tomo) con fecha 03 de septiembre de 2024, y confirmado por la Corte de Apelaciones de Temuco el 18 de octubre de 2024, como consta a fs. 1.102 (tomo IV); Acusado según el auto acusatorio de fs. 1.131 a fs. 1.149 (Tomo IV) con fecha 26 de noviembre de 2024, como autor de los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos en las personas de 1) Pedro Ñirripil Paillal, 2) Juan Segundo Tralcal Colileo, 3) Ceferino Millalén Peralta, 4) Manuel Martínez Ulloa, 5) Octavio Renato

Catalán Lincoleo, 6) Tomás Raúl Catalán Lincoleo y 7) Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, perpetrados en la comuna de Lautaro, desde la fecha del 11 de septiembre de 1973 en adelante.

Que si bien el acusado se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante, lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción, ello sin perjuicio de nuevas ponderaciones y reflexiones que haga el tribunal sobre la prueba allegada al proceso.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados, puntualizando lo siguiente:

I. Testigos Generales

1. Jorge Enrique Schweizer Gómez. Declaró de fs. 78 a fs. 79 (tomo I), fs. 114 a fs. 115 (tomo I), copia de fs. 761 fs. 762 (tomo III), fs. 145 (tomo I) copia a fs. 763 (tomo III), fs. 303 a fs. 305 (tomo I), fs. 742 (tomo III), fs. 754 a fs. 755 (tomo III), fs. 756 a fs. 760 (tomo III), fs. 764 (tomo III), fs. 765 (tomo III), fs. 766 (tomo III) y de fs. 767 a fs. 768 (tomo III). En lo pertinente de fs. 756 a fs. 760 (tomo III), asevera que es cierto lo relatado por Caillet, en el sentido de que militares del Regimiento La Concepción de Lautaro, llevaban y traían detenidos a la Comisaría. El Tribunal lee en lo pertinente declaración que rola de fs. 242 a fs. 243 en causa rol 45.362 de Juzgado de Letras de Lautaro, es efectivo que hubo detenido políticos en Lautaro, pero estando en la Comisaría todos los funcionarios podían tener acceso a ellos, no había una prohibición para tener contacto con los detenidos. Los detenidos eran mantenidos en los calabozos y en las pesebreras de la Comisaría. Especula que en algunas oportunidades a ver a los detenidos políticos. No conversó con ellos, solo fue a verlos. **En declaración judicial con fecha 28 de abril de 2015, rolante de fs. 767 a fs. 768 (tomo III).** Divulga que el Comandante del Regimiento la Concepción, Hernán Ramírez Ramírez, después del 11 de septiembre de 1973 le pidió un listado de personas que fueran delincuentes habituales y cuatrerros. Además, solicitó colaboración de parte de personal suyo para que los guiaran hacia los domicilios de estas personas, puesto que el Ejército no conocía como ellos todos los lugares. Por este motivo le encomendó esta labor al Teniente Huerta, quien

formó un grupo especial para estos fines. Proclama que el grupo especial de Carabineros al mando del Teniente Huerta no era fijo, por cuanto este oficial tomaba a los Carabineros que estuviesen disponibles para cumplir las órdenes que se daban desde el Regimiento La Concepción. Sin embargo, los carabineros Ponce, Sanhueza, Campos y Sandoval siempre estaban disponibles, por lo que participaban en varias ocasiones de esas salidas. En ese sentido, Carabineros debía acudir a apoyar los allanamientos que el Ejército efectuaba hacia el campo donde los terroristas tenían tomas de terrenos. Dice que los carabineros se movilizaban para estos efectos en el jeep de la Comisaría que manejaba el Sargento Ferrier. si bien es cierto que declaró que el Teniente Huerta y su grupo efectuaba detenciones de personas, que posteriormente el Capitán Del Río llevaba a Temuco, en ese momento no pudo indicar a qué tipo de detenidos se refirió, puesto que Carabineros no efectuaba detenciones de carácter político. Las detenciones de carácter político las efectuaba el Ejército. El Capitán Del Río llevaba a estas personas a la Fiscalía Militar de Temuco o al Regimiento la Concepción, para tomarles declaración seguramente. Adosa que no existió en la Comisaría de Lautaro durante su mando, algún grupo que realizará labores de inteligencia o que tratará temas de índole político.

2. Luis Armando Larenas Catipillan. Depone de fs. 222 a fs. 223 (Tomo I), fs.289 a fs.290 (tomo I) y de fs. 850 a fs.851 (tomo III) y de fs.934 (tomo IV). En lo pertinente de su declaración extrajudicial de fs.850 a fs.851 (tomo III). Respecto de la conformación de la comisión civil de la Comisaría recuerda a Sandoval Humaña, Ponce, Campos Collao, Sanhueza, Santiago Millanguir y Pérez Camaño, ese era el grupo que realizaba detenciones y se juntaban con militares y hacían sus grupos, intercambio de labores y refuerzo.

3. Pablo Cheuquepán Cañiumil. En lo pertinente de su declaración rolante a fs.75 (Tomo I). Musita que el día que Carabineros fue hasta su domicilio, él estaba en la casa y andaban tres funcionarios de uniforme, de los cuales reconoció a Domingo Campos y los otros dos eran de Perquenco, a quienes no les sabe sus nombres, además del carabinero Mario Ponce, de civil y con una manta de castilla. En esa ocasión había cuatro carabineros más en la casa de Rosa Panta, quienes estaban con varios detenidos y donde se juntaron con los que fueron a buscar a su hijo Juan Eleuterio.

4. José Segundo Yaufulem Pinto. En lo pertinente de su declaración de fs.76 (Tomo I). Informa que al casarse con Emilia Mañil Painequeo, esta tenía un hijo llamado Ceferino Mañil Painequeo, quien no recuerda si fue el año 1973 o 1974, fue a Lautaro a vender carbón, siendo detenido por Carabineros. Al otro día lo detuvieron a él y diviso a su hijastro en la Comisaría de Carabineros de Lautaro. Estuvo detenido un mes, dejándolo en libertad. De Ceferino nunca más se supo, a pesar de que su mujer fue a la Comisaría a reclamarlo y también a Temuco. Habla que esa vez que fue detenido en su domicilio por el carabinero Domingo Antonio Campos. Posteriormente fueron detenidos sus hijos Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, en su domicilio por Domingo Antonio Campos, quien andaba solo. Desde esa fecha no han sabido de sus hijos, su mujer los estuvo buscando sin resultado alguno.

5.- Sergio Manuel Jara Sandoval (35 años a la fecha de los hechos). **En declaración extrajudicial** de fecha 10 de enero de 1996, **de fs.119 (tomo I)**. En lo pertinente manifiesta que la mayoría de las detenciones efectuadas por personal de Comisaría de Lautaro, había un grupo especial conformado por los carabineros Domingo Campos, Mario Ponce Orellana y Enrique Ferrier Valenze, quienes en algunas oportunidades las practicaban en una camioneta particular color guinda seca o burdeo, de propiedad de la gobernación. Puntualiza que no le consta que estos funcionarios hayan participado en la detención de las personas mencionadas como detenidos desaparecidos por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación que motiva la presente investigación. Proclama que nunca participó en detención de alguna persona con posterioridad al pronunciamiento militar y menos de las personas mencionadas como detenidos desaparecidos.

6.- Ángel Secundino Fuentes Pardo. **En declaración extrajudicial** de fecha 11 de diciembre de 2015, **de fs.224 a fs.225 (tomo I)**. Manifiesta que, a contar del 11 de septiembre de 1973, el Teniente Huerta formó un grupo de funcionarios dedicados a las detenciones de personas por temas políticos, integrada por los Carabineros Ferrier, Campos, Ponce y otros que no recuerda ese momento. Divulga que este grupo en más de una oportunidad llegaron a la Comisaría con personas detenidas por temas políticos, pero desconoce que hacían con ellos y que destinos les daban posteriormente. Declara que era común ver funcionarios militares del Regimiento La Concepción en la unidad policial. Blasona que el Capitán Nibaldo Del

Rio Del Río concurría a la Comisaria a dejar detenidos, quienes permanecían una noche, para luego ser retirados al día siguiente y conducidos a esa unidad militar. Atestigua que aún cuando era común observar a los militares en la unidad de Carabineros, no recuerda la individualización de éstos, salvo a Del Rio cuyas visitas eran recurrentes. Se refiere a víctima de causa diferente.

II. Relato de las víctimas:

1. Juan Segundo Tralcal Colileo. Declaró de fs. 16 a fs. 18 (Tomo I), copia de fs. 35 a fs. 37 (Tomo I) y de fs.44 a fs.45 (Tomo I), de fs. 55 a fs. 56 (Tomo I) y de fs. 175 a fs. 176 (Tomo I). En lo pertinente de sus dichos proclama que la primera vez que fue detenido ocurrió después del golpe militar, en el asentamiento Fernando Tellier, siendo aprehendido por personal de Carabineros de Lautaro, entre ellos se encontraba un carabinero de apellido Ponce. Posteriormente fue trasladado hasta la Comisaría de Lautaro, donde permaneció alrededor de ocho días. En este lugar fue maltratado por personal de esa unidad, en donde los golpeaban en la cara, los desvestían y los golpeaban en todo el cuerpo, para luego mojarlos. Rememora que les aplicaban electricidad en la cabeza y en la sien, motivo por el cual está perdiendo la visión del ojo izquierdo. El motivo por el cual fue detenido fue porque pertenecía al Asentamiento Fernando Tellier, aludiendo que eran unos ladrones. Fue detenido una segunda vez por personal de Carabinero, recordando que en esa oportunidad se encontraba el carabinero Ponce, no recordando fecha exacta. Apunta que se trasladaron hasta Lautaro dentro de un camión en el cual había alrededor de cincuenta personas, siendo tratados igual que animales. En esta oportunidad, permaneció dos días al interior de la Comisaría, siendo nuevamente torturado, en todo momento los mantenían con la vista vendada. Dentro de sus torturadores rememora al carabinero Ponce, ya que lo conocía con anterioridad, además lo identifica perfectamente porque una vez retirado se dedicaba a realizar fletes donde vivía con su familia. Precisa que con posterioridad al año 1973, la casa en la que vivía con su familia se incineró, motivo por el cual, junto con su señora, doña Delfina Huenchún Paillaf, se dirigieron hacia Lautaro para comprar algunas cosas. Es así como mientras caminaban por la ciudad, fue detenido por personal de Investigaciones del que recuerda a un detective de apellido Figueroa, siendo conducido a la Unidad de Investigaciones de Lautaro, él lo torturó, sentándose en

un asiento de acero, siendo encadenado a este, para así evitar que se moviera. En esta oportunidad le aplicaron electricidad hasta que su cuerpo casi no resistiera más, quedando mareado y adolorido. Indica que fue detenido una cuarta vez por personal de Carabineros, no puede precisar la fecha, empero fue trasladado hasta la Comisaría donde lo torturaron por cuatro días aproximadamente, para luego ser dejado en libertad. Musita que a los días que fue dejado en libertad los carabineros de Lautaro, llegaron hasta la casa de su primo Juan Tralcal Huenchumán, donde fue fusilado al interior del inmueble. En este acto, se dirigió cerca de la casa de su primo, a lo cual lo vieron los carabineros, gritándole "¿qué andas sapeando?". Acto seguido dispararon una ráfaga hacia su casa, en donde se encontraba su cónyuge con sus hijos. Luego que los Carabineros se fueran del lugar, familiares de don Juan Tralcal Huenchuman, lo subieron a una camioneta con el objeto de trasladarlo hasta Hospital de Lautaro, ya que aún estaba con signos vitales. Al llegar al Hospital, Juan ya se encontraba fallecido, dejando su cadáver en la morgue de ese Hospital, posteriormente fue reclamado por su cónyuge. Durante el período de la dictadura, su primo Juan Tralcal Huenchumán y él, eran intensamente buscados, ya que eran tildados de miristas, comunistas y ladrones. Por esa razón tenía que andar escondido en casa de familiares, como vecinos, además de ir a esconderse varias veces en el bosque, a la orilla de canales, para no ser encontrado por Carabineros o Investigaciones. Finalmente, que por todas las veces que fue detenido y buscado por su familia entera, vivía atemorizada, es así que mientras su hijo Luis Fernando Tralcal Huenchun, asistía al colegio Blanco Lepín era sacado de clases por Carabineros, quienes insistentemente le ofrecían caramelos o le propinaban golpes con el objeto de sacar información acerca del paradero de Juan Tralcal Huenchuman o del deponente.

2. Pedro Ñirripil Paillal, quien declaró de fs. 23 a fs. 24 (tomo I), copia de fs.33 a fs.34 (tomo I) y fs.42 a fs.43 (tomo I), fs.52 a fs.53 (Tomo I) y de fs.171 a fs. 172 (tomo I). En lo pertinente de su declaración judicial rolante de fs.171 a fs.172 (Tomo I). Colige que en el año 1973 se encontraba en su casa, a saber en el asentamiento Fernando Teillier, lo tomaron detenido personal militar y lo trasladan hasta el Regimiento La Concepción, donde estuvo detenido 16 días. Allí lo torturaron tanto personal militar como personal de la 1º Comisaría de Carabineros de Lautaro, mediante la aplicación de corriente en la cabeza, golpes de pies y puños en

diferentes partes de su cuerpo, además de dejarlos sin comida y sin agua durante largos periodos de tiempo. Urde que producto de dichos golpes y electricidad aplicada, perdió la visión de su ojo izquierdo. El deponente exhibió al Tribunal, una copia de un certificado, el cual señala que Modesto Paillavil Blanco, en su calidad de ex miembro del Ejército, desempeñándose como instructor del Regimiento La Concepción de Lautaro, fue testigo de cuando miembros del Ejército de su dotación, practicaron apremios físicos a don Pedro Ñirripil Paillal y a personas con vinculación al gobierno de la unidad popular, o ex Asentamiento y personas naturales. Certificado que el tribunal agregó al proceso mediante copia simple. En relación con el documento recién citado, don Modesto lo vio en el Regimiento cuando estaba siendo torturado, sin embargo, él no pudo hacer nada, razón por la cual, en el año 2008 fue su testigo de la declaración antes referida. Espeta que en el Regimiento fue torturado por los carabineros Campos, Ferrier y Ponce. Atestigua que podría reconocer perfectamente al carabinero Campos. **En diligencia de careo con Domingo Campos Collao, de fecha 25 de abril de 2016, rolante de fs.197 a fs. 198 (tomo I),** manifiesta que la persona que está a su lado es el Carabinero Campos, quien lo habría detenido ara 1973. Aclara que estuvo 8 días en el Regimiento La Concepción de la comuna de Lautaro y quien lo trasladó hasta allí fue el carabinero Campos. Carabineros de Lautaro lo detuvo y lo trasladó hasta el Regimiento La Concepción de esa ciudad, reconociendo a don Domingo Campos como uno de sus agresores en el Regimiento La Concepción de Lautaro. Afirma conocer al sr. Campos porque iba a citar a la gente al campo, era una persona conocida, razón por la cual recuerda al sr. Campos. Se mantiene en sus dichos, agregando que los carabineros en el Regimiento La Concepción le preguntaban si era comunista, mirista y al no responder militares y carabineros lo agredían mediante puntapiés.

3. Octavio Renato Catalán Lincoleo. En dichos rolantes de fs. 546 a 548 (Tomo II) en lo pertinente dice que la primera vez que fue detenido, fue el 21 de septiembre de 1973 por Carabineros de Pitrufrquén, ya que en Pitrufrquén trabajaba en la empresa comercio Agrícola “ECA” y lo llevaron al campo que tenían de tortura, este campo parece que estaba en Pitrufrquén, ahí había más de 200 personas, entre empleados, profesores, agricultores, etc. Distingue que fue detenido junto a Alfredo López y otros más que no recuerda sus nombres, pero al día siguiente de esa

detención los condujeron a la 2° Comisaría de Temuco, para luego ser trasladados a la cárcel de Temuco, donde vio cómo eran torturados Juan Antonio Chávez y Antonio Molina. No recuerda nombres de las personas con las estuvo detenido, pero eran de distintas reparticiones como el SAG e INDAP. Ahí en la cárcel estuvo hasta finales de octubre de 1973 y lo dejaron en libertad, pero con la obligación de presentarse en Pillanlelbún. En Pillanlelbún lo dejaron detenido y lo trasladaron a Lautaro, donde estuvo como 20 días aproximadamente en la Comisaría, en ésta lo torturaron los Carabineros Juvenal Sanhueza, Campos Collao, Fuentes y Ferrier y gracias a un Teniente que lo defendió lo dejaron tranquilo, porque ellos lo querían matar. Todo esto porque pertenecía a las juventudes Comunistas y era presidente del centro de alumnos tecnológico de la Universidad Técnica del Estado. Luego de esto, lo dejaron en libertad, pero con la obligación de presentarse todas las semanas en la Comisaría y así estuvo durante 10 años, pero cuando ellos querían lo apaleaban y lo dejaban ahí. El que estaba a cargo del Retén de Pillanlelbún, era patas planas. Ensaya que mientras sus hermanos y él estaban presos, tomaron preso a su papá y su madre quedó sola. Mientras estuvo detenido en Lautaro, estuvo con sus primos hermanos, eran como 10 y actualmente está desaparecido Elías Catalán, vio cuando a él lo llevaban detenido los Carabineros de Pillanlelbún y luego pasaron buscar al deponente.

4. Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos. Depone de fs. 605 a fs. 606 (Tomo III), fs. 630 (Tomo III), fs. 636 y 639 (Tomo III) y de fs. 831 a fs. 835 (Tomo III). En lo pertinente depone que para el año 1973 tenía la edad de 16 años, vivía en el sector Calle del medio, Lautaro, en el domicilio de su abuela, ubicado en ese sector rural. En dicho domicilio vivía su abuela de nombre Elisa Schiferli Luchsinger, su tío Sergio Navarro Schifferli y el deponente. El día 3 de mayo de 1973 a eso de las 7 de la mañana, en circunstancias que se encontraban en su domicilio particular, fueron allanados por personal de Carabineros de la Comisaría de Lautaro, sacándolos a su tío y ella fuera de este y llevándolo hasta un potrero, ubicado en esos terrenos de su abuela. En ese lugar fueron brutalmente golpeados y les preguntaban por el paradero de su padre, quien era requerido por la autoridad. Según su recuerdo, los Carabineros los ubicaron de pie al frente de una ruma de piedras y uno de los Carabineros se ubicó detrás de su tío y le dio un fuerte culatazo en su cabeza con su fusil, cayendo al suelo y quedando en estado de inconsciencia

o muerte, no puede precisarlo. Explana que andaban cerca de 20 Carabineros y recuerda a los funcionarios de apellidos Ponce, Domingo Campos, Ferrier, Matus y el Teniente de apellido Huerta, a ellos los ubicaba y pertenecían a la Comisaría de Lautaro. Agrega que su padre, Carlos Navarro Schifferli también fue muy perseguido por los Carabineros. Por este motivo él se escondió en diferentes lugares para no ser encontrado. Carabineros llegaba a su domicilio en diferentes horas sacando al deponente al patio todas las veces, en muchas de las cuales fue golpeado, amarrado y amenazado de muerte para que dijera el paradero de su padre. Deja constancia que producto de las golpizas que recibió de parte de los Carabineros quedó con secuelas físicas y psicológicas. Quedó con problemas de audición y perdió la capacidad intelectual que tenía antes. De hecho, era un buen alumno, pero abandonó el colegio por estos problemas.

5. Tomás Raúl Catalán Lincoleo. En lo pertinente de su declaración de fs. 1.030 a fs. 1.031 vta. (Tomo IV). A la pregunta donde fue detenido y trasladado tras su detención, aduce que lo sacaron de dónde venía entrando a la oficina del SAG de Lautaro a las 8.20 de la mañana, el mes de septiembre de 1973 y de ahí lo llevaron a la Comisaria, luego no supo, ya que los tenían esposados y encapuchados, solo sentía los golpes, pero sintió que le reventaron los tímpanos con los golpes. A la pregunta de quienes (Carabineros, Militares y/o Detectives) lo detuvieron en el año 1973, advierte que puros Carabineros le pegaron y lo sacaron de su trabajo. Preguntado sobre con quien más estuvo detenido en Lautaro y Temuco, adopta que con Manuel Martínez de Perquenco, no se acuerda de los otros. Ese Manuel Martínez fue él que más sufrió, estaba hecho pedazos, él lo limpiaba, secaba y ayudaba. Había un curita igual de Perquenco y uno de apellido Masa, había como 25 en ese calabazo. Lo fue a ver varias veces (a Manuel Martínez) después, cada vez que iba a Perquenco, era una llantadera todas las veces. Consultado respecto en qué condiciones estuvo detenido en la 1° Comisaria de Lautaro, adosa que ahí los tenían en la celda, a veces les daban un café y les tiraban adentro, pero no los Carabineros, sino la gente que los iba a ver, como estaba solo y no lo iban a ver, Manuel Martínez le compartía de lo suyo. Preguntado sobre si vio a su hermano Octavio Catalán Lincoleo ser torturado y/o condición física, mientras estuvieron detenidos juntos, añade que con su hermano se

encontraron en la cárcel de Temuco, estaba bien, a él le pegaron en su detención, pero al deponente le pegaron más junto con su hermano Gerardo, esta fallecido.

6. Manuel Martínez Ulloa. Declara de fs. 516 a fs. 517 (Tomo II) y de fs. 519 a 520 (Tomo II). Soflame en lo pertinente que fue detenido el cura párroco, padre Wilfredo Alarcón, fue trasladado a la Comisaría de Lautaro, distante a doce kilómetros de Perquenco. Durante el período comprendido entre el 13 y el 22 de septiembre de 1973, tiempo que duró su detención en la Comisaría de Lautaro, fue torturado, flagelado y humillado por el Teniente Huerta en presencia de los Carabineros Ferrier y Campos. Se le interrogaba con el pretexto de asumir responsabilidades con respecto a la existencia de armas, para lo cual se ataba a una silla sobre superficie húmeda y desnudo se le aplicaba corriente eléctrica en los testículos y en las orejas hasta quedar inconsciente, práctica que se repitió varias veces.

III. Documentos.

1. De fs. 151 a fs. 152 (Tomo I) copia de **fs. 661 a fs. 662 (Tomo II)**, copias autorizadas de la dotación del personal de Carabineros de la 1° Comisaria de Lautaro, que en lo pertinente indica que entre los meses de septiembre-diciembre de 1973, el Cabo Domingo Antonio Campos Collao se desempeñaba en dicha unidad.

2. De fs. 158 a fs. 159 (Tomo I) copias autorizadas de la dotación del personal de Carabineros de la 1° Comisaria de Lautaro, que en lo pertinente indica que entre los meses de marzo-septiembre de 1974, el Cabo Domingo Antonio Campos Collao se desempeñaba en dicha unidad.

3. Informe pericial psicológico N°489-2017 del Servicio Médico Legal de Temuco, rolante de fs. 414 a fs. 420 (Tomo II) realizado a Luis Fernando Tralcal Huenchun en lo pertinente concluye que: “relata haber vivido apremios por parte de agentes del Estado en la etapa de su infancia, específicamente por haber acompañado a su padre en su huida. Su relato es vago y con escasos detalles. Esta situación podría estar influida por la edad del evaluado al momento de ocurrencia de los hechos. No obstante, lo anterior, se constatan contradicciones con narraciones anteriores de estos hechos, específicamente en cuanto a haber sufrido castigo físico por parte de funcionarios de Carabineros de Chile”

4. Informe Servicio Médico Legal N°0612-2017 del 04 de julio de 2017, rolante de **fs. 362 a fs. 363 (Tomo I)** correspondiente a Luis Fernando Tralcal Huenchún que en lo pertinente concluye que: “No presenta lesiones atribuibles a terceras personas”.

5. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de **fs. 668 a fs.669 (Tomo III)**, que en lo pertinente describe: “Otro episodio lo constituye la detención y posterior desaparición de siete campesinos de la zona de Lautaro. La mayoría de ellos registran antecedentes de haber sido procesados por la justicia ordinaria por la comisión de delitos comunes: El 04 de octubre es detenido por carabineros del Retén Yuyinco y trasladado a la comisaría de Lautaro, Sergio del Carmen Navarro Schifferli, 37 años, agricultor. A su familia le habrían señalado que había sido puesto en libertad, sin embargo, desde esa fecha permanece desaparecido. El 15 de octubre de 1973, José Ignacio Beltrán Meliqueo, 46 años, agricultor de la comunidad Manuel Levinao fue detenido ante testigos en la Plaza de Lautaro por efectivos de carabineros y conducido a la Comisaría del lugar. Sus familiares aseguran que su detención les fue negada, desde esa fecha permanece desaparecido. Al día siguiente 16 de octubre de 1973, fue detenido Julio Manuel Paine Lipin, 27 años, campesino del asentamiento tres luces de la localidad de Muco Bajo. Lo detuvo Carabineros cuando se presentó voluntariamente al retén de Pillalelbún. Desde allí es trasladado a la Comisaría de Lautaro, recinto desde el cual, según versiones de testigo fue sacado a fines de octubre. Desde esa fecha permanece desaparecido. ” El 08 de noviembre de 1973 fue detenido en Lautaro Juan Milla Montuy, 40 años, agricultor. Carabineros habría negado la detención a sus familiares. Hasta la fecha permanece desaparecido. También es aprehendido en esta fecha por carabineros. Y trasladado al retén de Pillalelbún, Manuel Lizama Cariqueo, 29 años, secretario de la central única de trabajadores (CUT) de Temuco y presidente del asentamiento el cardal, de la mencionada localidad. Hasta la fecha permanece desaparecido.”

6. Carta N°150/2022 del 05 de agosto de 2022 rolante de **fs. 802 a fs. 806 (Tomo III)** del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en lo pertinente nombra a Pedro Ñirripil Paillal, Tralcal Colileo Juan Segundo.

7. De fs. 980 a fs. 1.003 (Tomo IV) hoja de vida de Domingo Campos Collao que en lo pertinente certifica que en abril de 1973 fue trasladado desde el retén Quillem a la base de la Comisaría.

8. Certificación de fs. 1.289 y siguientes (tomo V), en que se indican las causas en que Domingo Campos Collao ha sido condenado.

Elementos probatorios específicos para la víctima Pedro Ñirripil Paillal:

A. Declaraciones:

A.1 Pedro Francisco Antipe Ñanco. En **declaración judicial** de fecha 27 de mayo de 2016 **de fs. 266 a fs. 267 (Tomo I)**. Es efectivo lo señalado por don Pedro Ñirripil a fs. 175 de autos, en el sentido de que el año 1973, en circunstancias que se encontraba realizando labores agrícolas en la comunidad Blanco Lepín, cerca de la escuela que existe en el lugar, llega Carabineros de Lautaro en conjunto con militares, los cuales le preguntan acerca del paradero de don Juan Tralcal Huenchuman, ante su desconocimiento lo suben a un camión militar, en donde habían alrededor de 80 personas, trasladándolo a la 1º Comisaria de Carabineros de Lautaro, lugar donde pudo observar a don Pedro Ñirripil, quien era residente de una comunidad cercana a la suya, momento en el cual les ordenaron colocarse en fila y los obligaron a golpearse. Descarga que en aquella oportunidad estuvo tres días en la Comisaria de Carabineros de Lautaro siendo torturado por estos funcionarios y golpeado desde el primer momento en que lo detuvieron. Las torturas consistían en golpes en la cabeza, espalda, dentadura razón por la cual perdió las piezas superiores dentales. En el momento en que fue subido al camión militar, este se desplazó hacia Vilcún, lugar donde detuvieron a otras personas, entre ellos don Alejandro Catalán y su padre, víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

A.2. Juan Mario Mila Millalén. En **declaración judicial** de fecha 03 de febrero de 2017 **de fs. 344 a fs. 346 (Tomo I)**. Dice que conoció a Ceferino Millalén, porque eran vecinos en el sector Calbuco de la comuna de Lautaro, vivían distantes a 300 metros, por lo que presenció en diversas oportunidades en que fue detenido, era un pequeño agricultor quien fue torturado durante el año 1973 y los años posteriores. Recuerda que él también fue perseguido político y en diversas oportunidades fueron detenidos juntos, a partir del año 1973, eran detenidos por

Campos, Gatica, Ponce, Sandoval, Ferrier, Millanguir, quien era el más malo de todos, fue el quien lo tomó detenido. Ceferino Millalén, falleció producto de la tortura que recibió. No recuerda la fecha, pero con posterioridad al golpe militar, lo detuvieron junto con su persona, los llevaron detenidos a la Comisaría de Lautaro, en este lugar, fue donde lo castigaron, lo apaleaban, lo mojaban de la puerta del calabozo, y lo hacían dormir en el piso con agua, estuvieron 3 días en estas condiciones, a Millalén los Carabineros de apellidos Ponce, y Gatica fueron los que más lo apalearon, supo que fueron ellos, porque gritaban sus nombres, Gatica era joven y Ponce era de más edad. Junto con ellos en los calabozos estaban Pedro Ñirripil, el vivía en otro sector.

B. Documentos:

B.1 Informe pericial psicológico N°386-2017 del Servicio Médico Legal de Temuco, rolante de **fs. 390 a fs. 396 (Tomo II)** realizado a Pedro Ñirripil Paillal, en lo pertinente informa: “presenta indicadores de deterioro cognitivo que impacta en la capacidad de dar cuenta de su experiencia; su narración presenta características de aquellas que provienen de la vivencia basada en la realidad y no se observa un cuadro clínico vinculado con los hechos que se investigan. No se visualiza la presencia de síntomas de estrés post- traumático.”

B.2. Informe Servicio Médico Legal N°0610-2017 del 04 de julio de 2017, rolante de **fs. 364 a fs. 365 (Tomo I)** correspondiente a Pedro Ñirripil Paillal que en lo pertinente concluye que: “Existe relación entre cicatrices y alegación de abuso, de acuerdo al relato del examinado.”

Con los elementos probatorios relacionados y ponderados da cuenta que en la Comisaría de Lautaro había una comisión especial formada, entre otros por el Carabinero Domingo Antonio Campos Collao. Que esta comisión tenía un patrón común respecto de detención y apremios, tal como se dijo en el auto acusatorio y se establece en los hechos en esta sentencia. En efecto los testigos Pedro Francisco Antipe Ñanco identificó que Pedro Ñirripil Paillal, fue detenido en la Comisaría de Lautaro. De la misma manera la misma víctima en careo identificó a Domingo Campos Collao. Además del informe N°0610-2017 del Servicio Médico legal que concluye que existe relación entre cicatrices y alegación de abuso. De acuerdo al relato del examinado y a la certificación de fs. 1.289 y siguientes (tomo

V), que da cuenta de un patrón de conducta del acusado Campos Collao, permiten al tribunal llegar a la convicción, por los medios de prueba legal, que se han cometido los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos en su carácter de lesa humanidad, en contra de Pedro Ñirripil Paillal.

Elementos probatorios específicos para la víctima Manuel Martínez Ulloa

A. Declaraciones:

A.1 Héctor Gastón Báez Sanhueza. En declaración extrajudicial prestaba ante la Policía de Investigaciones de Chile de fs. de fs.240 a fs.241 (tomo I), el 16 de abril de 2016. Para el año 1974 ostentaba el grado de Carabinero y se encontraba cumpliendo labores en la Tenencia de Perquenco. Manifiesta que respecto a detenciones de personas durante el periodo que prestó servicios en la Tenencia de Perquenco, en la jurisdicción las únicas que recuerda fue la del sacerdote Wilfredo Alarcón, quien se presentó voluntariamente en la guardia de la Tenencia y que entregado a personal de la Fuerza Aérea de la Base Maquehue de Temuco. La otra situación que recuerda es la de un señor de apellido Martínez, quien también se presentó voluntariamente en la unidad, pero este fue retirado por una patrulla policial de la 1° Comisaría de Lautaro, desconociendo que funcionarios eran.

A.2 Irma Eliana Velozo. En declaración judicial de 05 de julio de 2017, rolante de fs. 531 a 533 (Tomo II). Acota que esposa de Manuel Martínez Ulloa, quien se desempeñaba como subdelegado de la comuna de Perquenco para el año 1973. Espeta que la primera vez que Carabineros del Retén, detuvieron a su marido fue en la calle en Perquenco, andaba el Sargento Primero Rodríguez, no recuerda otros nombres. Fue con posterioridad al 11 de septiembre, al día subsiguiente, el 13 de septiembre aproximadamente. Lo llevaron al Retén de Perquenco, luego esa misma noche fue a preguntar por él y le dijeron que los Militares se lo habían llevado a Lautaro, entonces fue a Lautaro a la Comisaría a preguntar y le dijeron que no estaba ahí, con el tiempo supo que efectivamente él estuvo detenido ahí, en la Comisaría, pero se lo habían negado. Ella le iba a dejar ropa, pero nunca le entregaron ropa de vuelta. Con el tiempo se enteró que era porque estaba muy ensangrentada. Debe haber permanecido unos 7 u 8 días detenido en ese lugar. Hasta que un día fue al Retén, ahí le dijeron que no fuera más a Lautaro, porque habían traído a su marido a declarar a Temuco. Entonces viajó a Temuco y un

conocido de su marido le informó que estaba en la cárcel, nunca supo el nombre de este hombre. Continúa relatando lo vivido en su detención en la cárcel de Temuco. Adopta que su marido le comentó que de los Carabineros de Lautaro el Teniente Huerta y el Carabinero Ferrier participaron de los castigos a su marido. Precisa que Ferrier hizo el servicio militar con su esposo, por lo que lo recuerda bien. Se que lo llevaron al Regimiento, donde le aplicaron corriente, pero no tiene claro si en Lautaro o Temuco. Cuando volvió a la casa tenía toda la espalda cicatrizada. Sustenta que el 28 de agosto de 1974, en la mañana tocaron la puerta de su casa, era el Capitán Jorge Del Río, quien le señaló que venían a tomar detenido a su esposo y a ella, sin decir cuál era el motivo, los subieron al camión militar, estaban otras personas inclusive señoras detenidas, quedando solos sus cuatro hijos en la casa, los llevaron a la Comisaría de Lautaro, los tuvieron seis días detenidos en el calabozo; sacaron a las mujeres a declarar, pero a la deponente no le dijeron nada. Destaca que vio que los Militares como llevaban y sacaban detenidos desde la Comisaría de Lautaro. Recuerda que Manuel mencionó a Domingo Campos Collao como uno de sus castigadores. No recuerda que otras personas estuvieron con su marido. Éste último, con posterioridad a la detención tenía pesadillas en las noches.

A.3 Filiberto Jara Gómez. En declaración rolante de fs. 535 a 536 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra de fs. 938 a 938 vta. (Tomo IV). Detalla que estuvo detenido en la Comisaría de Lautaro aproximadamente desde el 18 de septiembre de 1973 hasta el día de todos los santos, el 01 de noviembre de 1973. A Manuel Martínez si lo recuerda, lo vio detenido, él iba de Perquenco, cuando ellos llegaron a él lo iban sacando para Temuco junto a otros detenidos y les dijo miren lo que les espera, mostrándoles como lo habían golpeado en la espalda, estaba muy herido.

A.4 Héctor Alejandro Pinilla González. Declara de fs. 931 a fs. 931 vta. (Tomo IV) y de fs. 932 a fs. 933 (Tomo IV). Que en lo pertinente de su declaración extrajudicial rolante de fs. 931 a 931 vta. (Tomo IV). Al llegar a la Comisaria de Lautaro, fue ingresado inmediatamente a un calabozo, percatándose que en la misma situación se encontraba el Profesor Luis Garrido. A medida que pasaban los días, llegaban más detenidos recordando entre ellos al Subdelegado de Perquenco de apellido Martínez; uno de Pillanlelbún de nombre Tomas Catalán Lincoleo y su primo Adolfo Catalán Lincoleo; el Contador Guido Venegas Avilés; un agricultor de Galvarino de nombre Armando Horn Roa; el Presidente del Sindicato de Magrinsa

de nombre Enrique Plaza; un trabajador del Seguro Social de Lautaro de nombre Guillermo Parra; los Profesores de Lautaro Sófocles Ruiz Amigo y Filiberto Jara Gómez; el hijo de un Carabinero jubilado de nombre Luis Candia. Todas estas personas llegaron detenidas durante los doce días que permaneció recluido en el calabozo de la 1° Comisaria de Lautaro. Narra que el calabozo se encontraba ubicado en el patio, por lo que tenía la visual y pudo ser testigo de las torturas y apremios que los Carabineros cometían, inclusive mantenían un estanque de cemento con agua donde les introducían la cabeza por varios minutos. En las noches hacían correr a los detenidos en el patio y luego los tiraban al suelo y los golpeaban con las culatas de las carabinas. Agrega que en las caballerizas los colgaban y castigaban golpeándolos con un lazo.

A.5 Tomás Raúl Catalán Lincoleo. En lo pertinente de su declaración de fs. 1.030 a fs. 1.031 vta. (Tomo IV). A la pregunta donde fue detenido y trasladado tras su detención, aduce que lo sacaron de dónde venía entrando a la oficina del SAG de Lautaro a las 8.20 de la mañana, el mes de septiembre de 1973 y de ahí lo llevaron a la Comisaria, luego no supo, ya que los tenían esposados y encapuchados, solo sentía los golpes, pero sintió que le reventaron los tímpanos con los golpes. A la pregunta de quienes (Carabineros, Militares y/o Detectives) lo detuvieron en el año 1973, advierte que puros Carabineros le pegaron y lo sacaron de su trabajo. Preguntado sobre con quien más estuvo detenido en Lautaro y Temuco, adopta que con Manuel Martínez de Perquenco, no se acuerda de los otros. Ese Manuel Martínez fue él que más sufrió, estaba hecho pedazos, él lo limpiaba, secaba y ayudaba. Había un curita igual de Perquenco y uno de apellido Masa, había como 25 en ese calabozo. Lo fue a ver varias veces (a Manuel Martínez) después, cada vez que iba a Perquenco, era una llantadera todas las veces. Consultado respecto en qué condiciones estuvo detenido en la 1° Comisaria de Lautaro, adosa que ahí los tenían en la celda, a veces les daban un café y les tiraban adentro, pero no los Carabineros, sino la gente que los iba a ver, como estaba solo y no lo iban a ver, Manuel Martínez le compartía de lo suyo. Preguntado sobre si vio a su hermano Octavio Catalán Lincoleo ser torturado y/o condición física, mientras estuvieron detenidos juntos, añade que con su hermano se encontraron en la cárcel de Temuco, estaba bien, a él le pegaron en su detención, pero al deponente le pegaron más junto con su hermano Gerardo, esta fallecido.

B. Documentos:

B.1 Examen pericial médico, N°377-2017 del 11 de mayo de 2017 del Servicio Médico Legal realizado a Manuel Martínez Ulloa, en lo pertinente concluye que: “No se observan secuelas de lesiones atribuibles a terceras personas”, de fs. 523 a fs. 524 (Tomo II)

B.2 Examen pericial médico, N°221-2017 del 09 de junio de 2017 del Servicio Médico Legal realizado a Manuel Martínez Ulloa, en lo pertinente concluye que: “A la fecha no se observan secuelas psicológicas como consecuencia de los hechos denunciados. Se hipotetiza que sus características de personalidad han sido un factor protector en esa área. No se observa animosidad ni animo ganancial en su relato en los hechos denunciados de fs. 525 a fs. 530 (Tomo II). En su relato señala que estuvo detenido en Lautaro y fue castigado por el teniente Huerta

B.3 Ord. N°265 del 02 de abril de 2020 del Instituto Nacional de Derechos Humanos de fs. 554 a fs. 555 (Tomo II), en lo pertinente dice que Manuel Martínez Ulloa aparece en la nómina de personas reconocidas como víctimas de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y tortura.

B.4 Extracto del libro “Martirologio de la Iglesia chilena”, del autor Miguel Jordá Sureda, relato de Wilfredo Alarcón, páginas 119-180, editorial LOM, año 2001 de **fs. 964 a fs. 979 (Tomo IV)**, en lo pertinente da cuenta de la detención y torturas que sufrió Wilfredo Alarcón junto a otras personas que pudo ver detenidas al interior de la Comisaria de Carabineros de Lautaro, en lo pertinente sostiene que: “Me dijeron que pasarían a buscar a Martínez, mi amigo, el subdelegado, que también tenía que presentarse a Lautaro.”. En líneas posteriores arguye: “Ahora quería hablarte el “Pelao” de Manuel Martínez.”

B.5 ORD 2194/17 de la Dirección Regional de Gendarmería de Chile del 27 de julio de 2017, rolante de **fs. 534 (Tomo II)**, respecto de Manuel Martínez Ulloa que en lo pertinente informa que permaneció en el centro de cumplimiento penitenciario de Temuco en calidad de procesado en causa rol 1.556 de la Fiscalía Militar Cautín egresando el 02 de enero de 1974.

B.6 Nómina de personas reconocidas como víctimas al 28 de noviembre de 2004 rolante de **fs. 771 a fs. 775 (Tomo III)**, que en lo pertinente en el N°5.330

aparece mencionado Catalán Lincoleo, Octavio Renato y N°14.342 menciona a Martínez Ulloa Manuel.

Con los elementos probatorios relacionados y ponderados da cuenta que en la Comisaría de Lautaro había una comisión especial formada, entre otros por el Carabinero Domingo Antonio Campos Collao. Que esta comisión tenía un patrón común respecto de detención y apremios, tal como se dijo en el auto acusatorio y se establece en los hechos en esta sentencia. En efecto los testigos Héctor Gastón Báez Sanhueza, recuerda que la víctima Manuel Martínez fue retirado por una patrulla policial de la 1° Comisaría de Lautaro; Filiberto Jara Gómez y Héctor Alejandro Pinilla González, lo recuerdan como detenido en la Comisaria de Lautaro. La Testigo Irma Eliana Velozo, recuerda que la víctima mencionó a Domingo Campos como uno de sus castigadores. Entre los documentos que acreditan lo anterior son el extracto del libro “Martirologio de la Iglesia chilena”, del autor Miguel Jordá Sureda, relato de Wilfredo Alarcón, páginas 119-180, editorial LOM, año 2001 de **fs. 964 a fs. 979 (Tomo IV)**. De acuerdo al relato examinado y a la certificación de fs. 1.289 y siguientes (tomo V), que da cuenta de un patrón de conducta del acusado Campos Collao, permiten al tribunal llegar a la convicción, por los medios de prueba legal, que se han cometidos los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos en su carácter de lesa humanidad, en contra de Manuel Martínez Ulloa.

Elementos probatorios específicos para la víctima Octavio Renato Catalán Lincoleo

A. Declaraciones:

A.1 Tomás Raúl Catalán Lincoleo. En lo pertinente de su declaración de fs. 1.030 a fs. 1.031 vta. (Tomo IV). A la pregunta donde fue detenido y trasladado tras su detención, aduce que lo sacaron de dónde venía entrando a la oficina del SAG de Lautaro a las 8.20 de la mañana, el mes de septiembre de 1973 y de ahí lo llevaron a la Comisaria, luego no supo, ya que los tenían esposados y encapuchados, solo sentía los golpes, pero sintió que le reventaron los tímpanos con los golpes. A la pregunta de quienes (Carabineros, Militares y/o Detectives) lo detuvieron en el año 1973, advierte que puros Carabineros le pegaron y lo sacaron de su trabajo. Preguntado sobre con quien más estuvo detenido en Lautaro y Temuco, adopta que con Manuel Martínez de Perquenco, no se acuerda de los

otros. Consultado respecto en qué condiciones estuvo detenido en la 1° Comisaría de Lautaro, adosa que ahí los tenían en la celda, a veces les daban un café y les tiraban adentro, pero no los Carabineros, sino la gente que los iba a ver, como estaba solo y no lo iban a ver, Manuel Martínez le compartía de lo suyo. Preguntado sobre si vio a su hermano Octavio Catalán Lincoleo ser torturado y/o condición física, mientras estuvieron detenidos juntos, añade que con su hermano se encontraron en la cárcel de Temuco, estaba bien, a él le pegaron en su detención, pero al deponente le pegaron más junto con su hermano Gerardo, esta fallecido.

B. Documentos:

B.1 Informe de permanencia del Centro de Cumplimiento Penitenciario Temuco del 08 de noviembre de 2020, rolante de fs. 562 a fs. 564 (Tomo II), de Octavio Renato Catalán Lincoleo, precisa que ingresó el 22 de septiembre de 1973, por el delito de infracción al bando N°26, egresando el 29 de octubre de 1973, orden Fiscalía de Carabineros de Cautín.

B.2 Ord. N°329 del 28 de abril de 2021 del Instituto Nacional de Derechos Humanos de fs. 572 a fs. 573 (Tomo II), en lo pertinente dice que Octavio Renato Catalán Lincoleo aparece en la nómina de personas reconocidas como víctimas de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y tortura.

B.3 Nómina de personas reconocidas como víctimas al 28 de noviembre de 2004 rolante de **fs. 771 a fs. 775 (Tomo III)**, que en lo pertinente en el N°5.330 aparece mencionado Catalán Lincoleo, Octavio Renato y N°14.342 menciona a Martínez Ulloa Manuel.

Con los elementos probatorios relacionados y ponderados da cuenta que en la Comisaría de Lautaro había una comisión especial formada, entre otros por el Carabinero Domingo Antonio Campos Collao. Que esta comisión tenía un patrón común respecto de detención y apremios, tal como se dijo en el auto acusatorio y se establece en los hechos en esta sentencia. En efecto Octavio Catalán Lincoleo en Ord. N°329 del 28 de abril de 2021 del Instituto Nacional de Derechos Humanos de fs. 572 a fs. 573 (Tomo II), aparece en la nómina de personas reconocidas como víctimas de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y tortura. De acuerdo al relato del examinado y a la certificación de fs. 1.289 y siguientes (tomo V), que da cuenta de un patrón de conducta del acusado Campos Collao, permiten al tribunal

llegar a la convicción, por los medios de prueba legal, que se han cometidos los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos en su carácter de lesa humanidad, en contra de Octavio Catalán Lincoleo.

Elementos probatorios específicos para la víctima Tomás Raúl Catalán Lincoleo

A.- Declaraciones

A.1 Héctor Alejandro Pinilla González. Declara de fs. 931 a fs. 931 vta. (Tomo IV) y de fs. 932 a fs. 933 (Tomo IV). Que en lo pertinente de su declaración extrajudicial rolante de fs. 931 a 931 vta. (Tomo IV). Al llegar a la Comisaria de Lautaro, fue ingresado inmediatamente a un calabozo, percatándose que en la misma situación se encontraba el Profesor Luis Garrido. A medida que pasaban los días, llegaban más detenidos recordando entre ellos al Subdelegado de Perquenco de apellido Martínez; uno de Pillanlelbún de nombre Tomás Catalán Lincoleo y su primo Adolfo Catalán Lincoleo; el Contador Guido Venegas Avilés; un agricultor de Galvarino de nombre Armando Horn Roa; el Presidente del Sindicato de Magrinsa de nombre Enrique Plaza; un trabajador del Seguro Social de Lautaro de nombre Guillermo Parra; los Profesores de Lautaro Sófocles Ruiz Amigo y Filiberto Jara Gómez; el hijo de un Carabinero jubilado de nombre Luis Candia. Todas estas personas llegaron detenidas durante los doce días que permaneció recluido en el calabozo de la 1° Comisaria de Lautaro. Narra que el calabozo se encontraba ubicado en el patio, por lo que tenía la visual y pudo ser testigo de las torturas y apremios que los Carabineros cometían, inclusive mantenían un estanque de cemento con agua donde les introducían la cabeza por varios minutos. En las noches hacían correr a los detenidos en el patio y luego los tiraban al suelo y los golpeaban con las culatas de las carabinas. Agrega que en las caballerizas los colgaban y castigaban golpeándolos con un lazo. En su caso no fue sometido a torturas en la Comisaria de Carabineros de Lautaro, pero en una oportunidad conducido por personal militar al Regimiento “La Concepción” de Lautaro, lugar donde se le interrogó con corriente eléctrica, siendo consultado por armas, regresando ese mismo día a la 1° Comisaria de Carabineros de Lautaro. Posteriormente, es trasladado por personal militar a la cárcel publica de Temuco, recinto carcelario que permaneció 145 días privado de libertad.

Documentos:

1.- Antecedentes del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a Tomás Catalán Lincoleo de fs.1033 a fs.1.044 (tomo IV). Que contiene: Certificado del Instituto Nacional de Derechos Humanos que señala don Tomás Raúl Catalán Lincoleo se encuentra calificado como víctima en la nómina de prisioneros políticos y torturados, elaborada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I, número de registro 5333.; Certificado del Alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, señalando que Tomás Raúl Catalán Lincoleo ingresó a ese centro de cumplimiento el 25 de septiembre de 1973 por disposición de la Fiscalía de ejercito Cautín , por infracción a la ley N°17.798; egresa en libertad por orden de la misma Fiscalía el 21 de enero de 1974, no indica motivo. El certificado es de fecha 20 de octubre de 1993.

Con los elementos probatorios relacionados y ponderados da cuenta que en la Comisaría de Lautaro había una comisión especial formada, entre otros por el Carabinero Domingo Antonio Campos Collao. Que esta comisión tenía un patrón común respecto de detención y apremios, tal como se dijo en el auto acusatorio y se establece en los hechos en esta sentencia. En efecto el testigo Héctor Alejandro Pinilla González, recuerda a la víctima en la Comisaría de Carabineros de Lautaro. Además que Tomás Catalán Lincoleo se encuentra calificado como víctima en la nómina de prisioneros políticos y torturados, elaborada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I. De acuerdo al relato del examinado y a la certificación de fs. 1.289 y siguientes (tomo V), que da cuenta de un patrón de conducta del acusado Campos Collao, permiten al tribunal llegar a la convicción, por los medios de prueba legal, que se han cometidos los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos en su carácter de lesa humanidad, en contra de Tomás Catalán Lincoleo.

Elementos probatorios específicos para la víctima Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos

A.- Declaraciones.

A.1 Ilda Teresa Morales Jaque. En declaración extrajudicial de fecha 19 de marzo de 2015 de **fs. 631 a fs. 632**. Señala que es la cónyuge de José Andrés Meliquén Aguilera. Por lo que supo, los Carabineros También iban a llevarse a un menos que era sobrino de Sergio Navarro, pero finalmente lo dejaron ir, ya que el

joven era sobrino también de Domingo Campos, quien dispuso su libertad al darse cuenta que habían detenido al hijo de su hermana, quien estaba casada con Carlos Navarro Schifferli, hermano de la otra víctima de los hechos investigados. Agrega supo de la participación de Domingo Campos en las detenciones de su marido y la de Sergio Navarro por intermedio de la familia de este último, ya que el menor que había sido detenido lo había reconocido junto a otros Carabineros con los que ese día andaba.

A.2 Carlos Antonio Navarro Schifferli (41 años para la fecha de los hechos investigados), quien declaró de fs. 84 (Tomo I) copia de fs. 640 (Tomo III), fs. 591 a fs. 592 (Tomo III), fs. 638 (Tomo III) y de fs. 641 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 24 de julio de 2013, **de fs. 591 a fs. 592 (Tomo III)**. La detención ocurrió el 04 de octubre de 1973, en circunstancias que su hermano se encontraba en la casa en compañía de su madre y su hijo Daniel Navarro Campos de 15 años en esa fecha. Recuerda que ese día no se encontraba en la casa, pero al llegar posteriormente, su madre le comentó que los carabineros del Retén Dollinco y de la Comisaría de Lautaro se habían llevado a su hermano y a su hijo, y que al llegar a Calle del Medio liberaron a su hijo y se llevaron a su hermano, desconociéndose a la fecha su actual paradero, ya que nunca más lo volvieron a ver. Recuerda que su hijo le conversó posteriormente que había reconocido a algunos de los carabineros, siendo ellos Domingo Campos, Sargento Matus y Ferrier.

B.- Documentos:

B.1 Examen físico médico del Servicio Médico Legal correspondiente a Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, de **fs. 914 a fs. 916 (Tomo III)**, en lo pertinente cuenta que en octubre de 1973 junto a su tío fue detenido por carabineros siendo golpeado en un terreno baldío y fue testigo presencial de golpes que le dieron a su tío el que cayó al suelo luego de un golpe a la cabeza permaneciendo desaparecido hasta la fecha de hoy.

Con los elementos probatorios relacionados y ponderados da cuenta que en la Comisaría de Lautaro había una comisión especial formada, entre otros por el Carabinero Domingo Antonio Campos Collao. Que esta comisión tenía un patrón común respecto de detención y apremios, tal como se dijo en el auto acusatorio y se establece en los hechos en esta sentencia. En efecto los testigos Ilda Morales

Jaques y Carlos Navarro Schifferli, dan testimonio de los hechos. De acuerdo al relato del examinado y a la certificación de fs. 1.289 y siguientes (tomo V), en la que se especifica que el acusado Campos Collao fue condenado en calidad de autor a la pena de 12 años presidio mayor en su grado medio y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por los delitos Secuestro Calificado en las personas de Sergio Del Carmen Navarro Schifferli y José Andrés Meliquén Aguilera, perpetrado en la comuna de Lautaro el 04 de octubre de 1973. Lo anterior da cuenta de un patrón de conducta del acusado y permite al tribunal llegar a la convicción, por los medios de prueba legal, que se han cometido los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos en su carácter de lesa humanidad, en contra de Daniel Navarro Campos.

Elementos probatorios específicos para la víctima Juan Segundo Tralcal Colileo

A. Declaraciones:

A.1 Luis Fernando Tralcal Huenchún. En declaración extrajudicial con fecha 16 de mayo de 2015, Manifiesta que mientras estudiaba en la Escuela Blanco Lepín, en el período comprendido entre el año 1973 a 1975, después de ocurrido el golpe militar, personal de carabineros de Lautaro, Recordando claramente a Mario Ponce. Buscaban intensamente a su tío don Juan Tralcal Huenchumán desconociendo el motivo de ese acto. Es así que en varias oportunidades erróneamente detuvieron a su padre por el alcance del primer apellido.

A.2 Pedro Francisco Antipe Ñanco. En declaración judicial de fecha 27 de mayo de 2016 de fs. 266 a fs. 267 (Tomo I). Respecto a Juan Segundo Tralcal Huenchún, Ceferino Millalén Peralta, Luis Fernando Tralcal Huenchún y Juan Segundo Tralcal Colileo fueron intensamente buscados a contar del 11 de septiembre de 1973 por Carabineros de Militares de Lautaro. Ello lo sabe, pues a todas estas personas las conoce pues son personas vecinas de la comunidad en donde reside. En el caso de don Ceferino Millalén Peralta, este falleció a consecuencia de las torturas a las que fue sometido por Carabineros de Lautaro. En el caso de Luis Tralcal Huenchún, él vive actualmente en su comunidad.

B. Documentos:

B.1. Informe Servicio Médico Legal N°0611-2017 del 04 de julio de 2017, rolante de **fs. 366 a fs. 367 (Tomo I)** correspondiente a Juan Segundo Tralcal Colileo que en lo pertinente concluye que: “Existe relación entre cicatrices y alegación de abuso, de acuerdo al relato del examinado.

B.2 Informe pericial psicológico N°393-2017 del 18 de octubre de 2017 del Servicio Médico Legal, realizado a Juan Segundo Tralcal Colileo, en lo pertinente concluye que: “No es posible descartar que sus dichos puedan estar basados en experiencias de la realidad; no se visualiza alguna sintomatología de estrés post-traumático u otro cuadro de tipo emocional”, de fs. **460 a fs. 464 (Tomo II)**.

Respecto de esta víctima que si bien efectivamente fue perseguida, detenida y apremiada, sin embargo, el tribunal no ha llegado a la convicción que el acusado Domingo Campos Collao haya tenido participación en los delitos de apremios ilegítimos y detención ilegal cometidos en contra de Juan Tralcal Colileo. Por lo tanto en la parte resolutive se procederá a la absolución por estos hechos, respecto del acusado Domingo Campos Collao.

Elementos probatorios específicos para la víctima Ceferino Millalén Peralta

A. Declaraciones.

A.1 Juana Del Carmen Millalen Lepilao-Tralcal. En declaración extrajudicial con fecha 16 de mayo de 2015, de fs.21 a fs.22 (Tomo I), copia de fs.38 a fs.39 (Tomo I) y fs.46 a fs.47 (Tomo I). Descarga que para la fecha de los hechos investigados, tenía alrededor de 9 años y vivía junto a sus padres en Juan Bautista Guineo en Lautaro y sus cinco hermanos, siendo ella la mayor. Es así, que para el año 1973 aproximadamente, cuatro carabineros llegaron a su casa buscando a su padre Ceferino Millalén Peralta, aludiendo que tenía conocimiento acerca del paradero de don Juan Tralcal Huenchuman, intensamente buscado en el sector. Dentro de los carabineros que fueron a detener a su padre, estaba Mario Ponce, quién habría torturado a su padre durante su estadía en la Comisaría de Lautaro, esto se lo comentó su padre en una oportunidad. Atestigua que su padre estuvo detenido alrededor de tres días en la Comisaría de Lautaro, fue torturado por funcionarios de esa unidad. Le comentó que le pegaban con una luma por todo el cuerpo, además de aplicarle corriente. Recalca que su padre Ceferino Millalén

Peralta, fue detenido una segunda vez en su casa. En esa oportunidad, su padre asustado intentó arrancar, cayendo a un hoyo doblándose una rodilla, sin embargo carabineros lo detuvo de igual forma, llevándoselo a Lautaro por tres o cuatro días. Al regresar, estaba en pésimas condiciones físicas, comentando que nuevamente había sido duramente golpeado por carabineros. Cuando lo dejaron libre esa vez, por temor a ser detenido nuevamente no quiso ir al hospital. Producto de la caída al hoyo y a la brutal golpiza que sufrió, estuvo alrededor de seis meses enfermo, diagnosticándole posteriormente gangrena, debiendo ser amputado de una de sus piernas, falleciendo alrededor de un año después producto de todo lo sufrido.

En declaración judicial con fecha 13 de abril de 2015, rolante de fs.177 (Tomo I). En esa oportunidad eran cuatro carabineros, lo anterior lo sabe, pues vio a estos cuatro funcionarios y se escondió debajo de la cama. No rememora las identidades de esos carabineros, puesto que ella solo tenía 9 años de edad. En la oportunidad antes señalada, en la cual tomaron detenido a su padre, se encontraba su hermano Oscar Millalén Lepilao-Tralcal, quien logró escapar en aquella oportunidad. Evidencia que su padre fue detenido por parte de carabineros de Lautaro, no solo en la oportunidad antes señalada, fueron alrededor de dos o tres veces. Dichos funcionarios policiales, en todas las oportunidades en que fue detenido lo trasladaban a la Comisaria de Lautaro, lugar donde lo torturaban por algunos días. Dichas torturas consistían en golpes de luma, patadas y aplicación de corriente. Lo anterior lo sabe por comentarios de sus padres.

A.2 Juan Mario Mila Millalén. En declaración judicial de fecha 03 de febrero de 2017 **de fs. 344 a fs. 346 (Tomo I)**. Dice que conoció a Ceferino Millalén, porque eran vecinos en el sector Calbuco de la comuna de Lautaro, vivían distantes a 300 metros, por lo que presenció en diversas oportunidades en que fue detenido, era un pequeño agricultor quien fue torturado durante el año 1973 y los años posteriores. Recuerda que él también fue perseguido político y en diversas oportunidades fueron detenidos juntos, a partir del año 1973, eran detenidos por Campos, Gatica, Ponce, Sandoval, Ferrier, Millanguir, quien era el más malo de todos, fue el quien lo tomó detenido. Ceferino Millalén, falleció producto de la tortura que recibió. No recuerda la fecha, pero con posterioridad al golpe militar, lo detuvieron junto con su persona, los llevaron detenidos a la Comisaria de Lautaro, en este lugar, fue donde lo castigaron, lo apaleaban, lo mojaban de la puerta del

calabozo, y lo hacían dormir en el piso con agua, estuvieron 3 días en estas condiciones, a Millalén los Carabineros de apellidos Ponce, y Gatica fueron los que más lo apalearon, supo que fueron ellos, porque gritaban sus nombres, Gatica era joven y Ponce era de más edad. Junto con ellos en los calabozos estaban Pedro Ñirripil, el vivía en otro sector. Cree que a Juan Tralcal Huenchuman nunca lo detuvieron, porque se escandia bien, a él cuando lo tuvieron de tente no lo detuvieron, lo mataron. Estaban a merced de los Carabineros de Pillanlelbún y de Lautaro, a cualquier hora los detenían, no quedaba constancia de ello, los llevaban y los liberaban como si nunca hubieran estado ahí, con cualquier pretexto, cada vez que podían los detenían, a Millalén, no lo dejaban trabajar, quien recuerda que lo maltrato bastante fue Ponce y Gatica. En otra oportunidad, para San Juan, para el 24 de junio de 1974 estaban matando un chanco y lo fueron detener, estaban sólo los dos cuando Carabineros a caballo, a veces andaban de civil, sin uniforme, pero en esta oportunidad vestían de Carabineros, los de apellido Gatica, Millanguir, Ponce, Sandoval y Mansilla, le preguntaban dónde estaban las armas, y donde hacían reuniones políticas, si sabían dónde estaba Samuel Catalán, y lo soltaron al día siguiente, el día 24. Ahí lo aporrearon, así le decían ellos a los maltratos, quedó magullado, donde le golpearon la espalda, los culatazos en el pecho, las patadas en las rodillas. Él era dirigente político, sindical y de asentamiento, pero Ceferino Millalén, no se metía en nada, sólo por el hecho de vivir cerca lo apaleaban.

A.3 Julia Mercedes Millalén Lepilao-Tralcal. En declaración judicial de fecha 15 de diciembre de 2016 de fs. 328 a fs. 329 (Tomo I). Sofloma que Ceferino Millalén Peralta es su padre. Él fue perseguido por carabineros, investigaciones y Policía del Gobierno Militar en el año 1973, no saben la causa, pero según carabineros que concurría, era porque pertenecía al partido de fila Allendista. Quiere leer en el acto un relato que le dejó su madre, doña Rosa Lepilao-Tralcal Guajardo antes de fallecer, que por miedo de no hablar por lo atropellos que ella sufrió conjuntamente junto a ellos como sus hijos, no señaló antes. El relato dice así: "Parte del atropello que tuve en el año 1973 por causa política por carabineros de Pillanlelbún, investigaciones de Lautaro y Regimiento de Lautaro, donde carabineros llegaban en cualquier momento en busca de mi marido, Seferino Millalén, hoy fallecido producto de los golpes recibidos en presencia de mis hijos de tan corta edad. Y cuando no los encontraba, recibía ella por no decir donde tenían

las armas, según ellos decían que era un político más y compañero de la fila allendista. Posteriormente señala que el día 04 de octubre de 1973 como a las 09 de la mañana fue detenido su marido junto a su hermano, llevado al Regimiento de Lautaro donde estuvo todo el día y toda la noche y la deponente encerrada en su casa que no podía salir en ningún momento, junto con sus niñas y vigilada por militares.

A.4 Pedro Francisco Antipe Ñanco. En declaración judicial de fecha 27 de mayo de 2016 de fs. 266 a fs. 267 (Tomo I). Respecto a Juan Segundo Tralcal Huenchún, Ceferino Millalén Peralta, Luis Fernando Tralcal Huenchún y Juan Segundo Tralcal Colileo fueron intensamente buscados a contar del 11 de septiembre de 1973 por Carabineros de Militares de Lautaro. Ello lo sabe, pues a todas estas personas las conoce pues son personas vecinas de la comunidad en donde reside. En el caso de don Ceferino Millalén Peralta, este falleció a consecuencia de las torturas a las que fue sometido por Carabineros de Lautaro. En el caso de Luis Tralcal Huenchún, él vive actualmente en su comunidad.

Respecto de esta víctima que si bien efectivamente fue perseguida, detenida y apremiada, sin embargo, el tribunal no ha llegado a la convicción que el acusado Domingo Campos Collao haya tenido participación en los delitos de apremios ilegítimos y detención ilegal cometidos en contra de Ceferino Millalén Peralta. Por lo tanto en la parte resolutive se procederá a la absolución por estos hechos, respecto del acusado Domingo Campos Collao.

10°) Que del conjunto de elementos probatorios antes aquilatados y relacionados generales y específicos testigos directos, indirectos y documentos antes señalados como además se indica en el auto acusatorio de fs. 1.131 a fs. 1.149 (Tomo IV), permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallados y relacionados, llegar a la convicción:

1. Primero: que han existido los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos en las personas de Pedro Ñirripil Paillal, Manuel Martínez Ulloa, Octavio Renato Catalán Lincoleo, Tomas Raúl Catalán Lincoleo y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, previstos y sancionados en los artículos 148 y 150 N°1 del Código Penal vigentes a la época de los hechos, ilícitos en su carácter de lesa humanidad.

2. Segundo: que en estos ilícitos le ha correspondido la participación en calidad de **autor** en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal al acusado

Domingo Antonio Campos Collao, ello sin perjuicio de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y la defensa.

11°) En cuanto a la defensa. El abogado Rodrigo Cortés Carrasco en representación de **Domingo Campos Collao** en su presentación de fs. 1.210 a fs. 1.13 (Tomo V), en lo principal contesta acusación judicial y adhesión a la acusación fiscal y acusaciones particulares, alegando primeramente la prescripción de la acción penal, solicitando la absolución de su representado, y en subsidio de lo precedente se acojan las atenuantes y beneficios de la ley 18.216.

Para un mejor entendimiento se estructura de la siguiente manera:

A. Prescripción de la acción penal.

i. Institución de la Prescripción, cita el artículo 93 y 94 del Código Penal, fundándose en que han transcurrido más de treinta años desde la comisión de los hechos. Reflexiona respecto de la jurisprudencia de la Corte Suprema. En ese sentido, los delitos prescriben por razones de debilitamiento de la prueba y riesgo de error procesal que el paso de un tiempo prolongado produciría.

ii. Irretroactividad de la ley penal. La defensa desarrolla que los delitos de lesa humanidad están tipificados en la legislación N°20.357 que tipifica crímenes de lesa humanidad y su artículo 40 dispone que la acción penal y la pena de los delitos de lesa humanidad sobre imprescriptibles, no obstante, a la fecha de los hechos, no existía en el ordenamiento jurídico esta normativa. Se refiere a la Constitución Política de la República. En consecuencia, la acción penal para perseguir la aparente responsabilidad de don Domingo Campos Collao en los delitos de apremios ilegítimos y detención ilegal, se encuentra totalmente prescrita por lo cual la acusación debe ser rechazada.

B. Falta de legitimación activa. Opone la excepción de falta de legitimación activa respecto de la acción penal en contra de su representado. Reproduce artículo 10 del Código de Procedimiento Penal. Desarrolla que para el ejercicio de la acción penal es necesario que se configure el delito tipificado en la ley, pues la acción nace desde que se cumple el supuesto legal. Empero si los hechos sucedieron en el año 1973, en la legislación no estaban tipificados los delitos de apremios ilegítimos ni detención ilegal, en su carácter de lesa humanidad en consecuencia los hechos objetos de la acusación no configuran los delitos imputados, así no nace acción penal alguna.

C. Acusado no ha cometido los hechos imputados. Esgrime la defensa que si bien su representado se desempeñó en la 1° Comisaria de Lautaro de Carabineros, no es efectivo que haya realizado patrullajes, detenciones ilegales ni apremios ilegítimos. Atina que en virtud a los pobres medios probatorios rendidos por la parte contraria, solicita al tribunal se rechace las acusaciones judiciales, particulares y adhesiones en contra del encausado.

D. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Solicita se le reconozca a su representado lo contemplado en los N°6 y 9 del artículo 11 del Código Penal. Blasona que en el tiempo que fue funcionario de Carabineros demostró una irreproachable conducta anterior, desempeñando sus labores de manera diligente y responsable. Suma que ha colaborado sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos objetos del procedimiento. Que en caso, de ser condenado pide se le otorgue alguna pena sustitutiva a las penas privativas o restrictivas de libertad, en consideración a su edad y estado de salud.

Análisis de la defensa.

12°) Consideraciones previas al análisis de la defensa específica: Que previo al análisis de la defensa específica es necesario tener en consideración los antecedentes y reflexiones que seguidamente se detallaran:

- A. Resumen ejecutivo del auto acusatorio.
- B. Estado de derecho.
- C. Obligación de investigar.
- D. Jurisprudencia internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos (delitos de lesa humanidad) pronunciada por tribunales alemanes.
- E. Convenios de Ginebra.

13°) Resumen ejecutivo del auto acusatorio. Que para un adecuado análisis de la defensa específica se hace necesario hacer un resumen del auto acusatorio de fs. 1131 a fs. 1149 (Tomo IV) en la parte pertinente de la descripción de los hechos.

a.1. En efecto de su lectura integral se desprende en su letra A) que tras el 11 de septiembre de 1973 y del golpe de Estado en la 1° Comisaria de Lautaro de Carabineros de Chile, organizaron y coordinaron un grupo especial de carabineros de la unidad, integrado por los siguientes funcionarios: el vice sargento

1° Santiago Millanguir Hueche (fallecido a fs.468, tomo II), el sargento 2° Juvenal Sanhueza Sanhueza (fallecido a fs.1.009, tomo IV), el sargento 2° y chofer Enrique Ferrier Valeze (fallecido a fs.1.008, tomo IV), el sargento 2° Mario Ponce Orellana (fallecido a fs.1.005, tomo IV), el sargento 2° José Nicanor Pérez Caamaño (fallecido a fs.1.018, tomo IV), el cabo Domingo Antonio Campos Collao. Se describe las actividades que este grupo realizaba, como patrullajes y allanamientos masivos.

a.2. En la letra B) se describe que este grupo de carabineros o comisión civil contó con apoyo de unidades bajo dependencia funcionarios de las unidades bajo la dependencia administrativa y vigilancia de la 1° Comisaría de Lautaro, enumerando las unidades y funcionarios que cooperaban y coordinaban las actividades.

a.3. En la letra C) se describe que Pedro Ñirripil Paillal, Juan Segundo Tralcal Colileo y Ceferino Millalén Peralta, para septiembre de 1973 vivían en la zona rural de la comuna de Lautaro, dedicándose a labores de agricultura principalmente, sin militancia política conocida. Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, por el hecho de trabajar en el asentamiento Guillermo Teillier de la zona, son detenidos en el transcurso de ese mes desde sus domicilios, por funcionarios de la 1° Comisaría de Carabineros de Lautaro, reconociendo dentro de sus aprehensores a los carabineros Mario Ponce Orellana (fallecido a fs.1.005, tomo IV), Enrique Ferrier Valeze (fallecido a fs.1.008, tomo IV), un carabinero apodado “patas planas” y Domingo Antonio Campos Collao, para ser llevados por ellos sin orden judicial alguna, a dependencias de la Comisaría antes nombrada, donde permanecieron en los calabozos de la unidad, siendo interrogados por sus actividades y apremiados durante todos los días que permanecieron allí. Describiendo los apremios que sufrieron.

a.4. En la Letra D) se refiere a la víctima Manuel Martínez Ulloa, quien para el año 1973 era funcionario de Ferrocarriles del Estado, subdelegado de la comuna de Perquenco y militante del partido Comunista. El día 13 de septiembre de 1973 es detenido en la comuna de Perquenco, junto al sacerdote de Perquenco Wilfredo Alarcón Ferrada, por los funcionarios de Carabineros que él identifica como Rafael Renato Rodríguez Rodríguez, explicando los lugares donde estuvo detenido y apremios vividos.

a.5. En la Letra E) se refiere a los hermanos Octavio Renato Catalán Lincoleo y Tomas Raúl Catalán Lincoleo, quienes, debido a la persecución política sufrida por toda su familia, incluyendo a su hermano detenido desaparecido Samuel Alfonso Catalán Lincoleo (causa rol 113.958, fallada con fecha 17 de octubre de 2024 por este Tribunal); ambos son detenidos sin orden judicial durante el transcurso del mes. Explicando su detención, quienes fueron sus torturadores y apremios sufridos.

a.6. En la letra F) se señala a la víctima Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, detallando circunstancias de su detención, identificación de los carabineros que participaron en su aprehensión y maltratos.

Como se desprende, el auto acusatorio, tiene una estructura General, ordenada y detallada de cómo se organizó el aparato policial para reprimir a los oponentes del régimen de facto y practicar los ilícitos investigados en este proceso.

14°) Estado De Derecho:

a. Estado Autoritario: “Un Estado autoritario, es aquel donde el poder se encuentra concentrado en una persona o grupo de personas. Hay una estructuración estatal, existe autoridad, pero las leyes no obedecen a órganos que tengan origen democrático y por lo general no hay subordinación ni respeto a ella.” (Roberto Ruiz Díaz Labrano: “El Estado de Derecho algunos elementos y condicionamientos para su efectiva vigencia”, p.3. Disponible en: www.tprmercosur.org/es/doc.) (...) “La historia nos muestra demasiados casos de Estados autoritarios. Al hombre contemporáneo le resultan insoportables e indignos esos Estados autoritarios. Del mismo modo, el Estado autoritario- poder arbitrario- es la antítesis del Estado de Derecho. Las diversas perspectivas políticas que apoyan el Estado de Derecho comparten su aversión hacia el uso arbitrario del poder. En una sociedad abierta y pluralista, que ofrece espacio para hacer competir ideales del bien público, la noción del Estado de Derecho se torna una protección común contra el poder arbitrario”. (Oscar Vilhena Vieira (2007): “La desigualdad y la subversión del Estado de Derecho”. Sur – Revista Internacional de Derechos Humanos. Número 6, Año 4. p.33). (...) “En esa línea el concepto de Estado de Derecho es una respuesta al Estado absolutista, caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder. De ahí que la garantía jurídica del Estado de Derecho

corresponda al constitucionalismo moderno”. (Dante Jaime Haro Reyes: “Estado de Derecho, Derechos Humanos y Democracia”. www.juridicas.unam.mx. p. 123). (...)
“Puede sostenerse entonces, que su búsqueda va dirigida a limitar y restringir el poder del Estado en favor de la libertad de los individuos. Es decir, permite entender al Estado de Derecho como contraposición al estado de fuerza o de fuerza política”. (Pablo Marshall Barberán (2010): “El Estado de Derecho como principio y su consagración en la Constitución Política”. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte sección ensayos, año 17 - N° 2, pp. 185-204).

b. Origen: “El Estado de Derecho nace como como un Estado respetuoso de la ley y de las libertades del ciudadano frente al poder despótico del Estado Absolutista. Luego su tarea es el aseguramiento de la libertad y propiedad del ciudadano, su objeto la promoción del bienestar del individuo. Se trata de un orden estatal justo expresado a través de una constitución escrita, el reconocimiento de los derechos del hombre, la separación de poderes y garantizado por leyes producidas y promulgadas conforme a procedimientos debidamente establecidos.” (Luis Villar Borda (2007): “Estado de Derecho y Estado Social de Derecho”. Revista de Derecho del Estado N° 20, p. 74). (...) “En todo caso, el Estado de Derecho surge como el servidor, rigurosamente controlado, de la sociedad; queda sometido a un sistema cerrado de normas jurídicas o, sencillamente, identificado con ese sistema de normas, así que se convierte en solo norma o procedimiento”. (Haro, p. 118).

c. Fundamento: “El fundamento del Estado de Derecho se encuentra en la doctrina del Derecho Natural Racional. En realidad, la explicación del término no debe entenderse, en su origen, como la sujeción del Estado al Derecho estatal, sino al Derecho Suprapositivo, permanente y universal que emana de la razón. Así, su fundamento se encuentra en la naturaleza del individuo: en la libertad y la igualdad de las personas que se reúnen en una comunidad y que se desarrollan en la autonomía moral, la igualdad jurídica y la posibilidad de lograr el bienestar económico a través de la adquisición de la propiedad y el ejercicio libre de la empresa. Es decir, el Estado de Derecho proyecta así, un criterio de legitimidad para el dominio del Estado, en la garantía de la libertad y la propiedad de los individuos. En Alemania, el argumento del Derecho Natural ha revivido en la forma de un Derecho de rango superior, frente al cual el Derecho estatal tiene que ceder”. (Marshall, pp. 187-188).

d. Concepto: “El Estado de Derecho es aquel Estado en el que autoridades e individuos se rigen por el derecho, y éste incorpora los derechos y las libertades fundamentales, y es aplicado por instituciones imparciales y accesibles que generan certidumbre.” (Haro, p. 124). (...) “Del mismo modo, como expresa Guastini en primer sentido el Estado de Derecho es aquel en el que están garantizados los derechos de libertad de los ciudadanos, en un segundo sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual el poder político está limitado por el derecho, en un tercer sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual todo acto de ejercicio del poder político está sujeto al principio de legalidad (Haro, p.123). Resumiendo, para nuestro objetivo el Estado de Derecho alude a un particular diseño institucional que, con el objeto de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas, intenta guiar, controlar y limitar el ejercicio del poder público a través de normas de carácter general, que conformen un sistema claro y conocido por todos”. (Haro, p. 126).

e. Elementos: Marshall siguiendo Böckenförde, expresa que las características originales del Estado de Derecho son las siguientes: “a) el Estado es una creación de la comunidad política y está a su servicio, no es una creación de, ni está encomendado a, ningún orden superior o divino; b) los objetivos del Estado quedan restringidos a la garantía de la libertad, la seguridad y la propiedad de los individuos; y c) la organización y regulación de la actividad del Estado debe realizarse de acuerdo a principios racionales, incluyendo entre estos los siguientes: el reconocimiento de los derechos básicos de la ciudadanía (libertad, igualdad y propiedad), la independencia de los jueces, la responsabilidad del gobierno, el dominio de la ley, la representación del pueblo y la separación de funciones” (Marshall, p.191). En esa línea Benda considera que el Estado de Derecho involucra: “a) seguridad jurídica y justicia; b) que la Constitución sea la norma suprema; c) la vinculación de los poderes públicos a la ley y al Derecho; d) vinculación de los poderes públicos por la primacía y reserva de ley; e) división de poderes; f) protección de los derechos fundamentales; g) tutela judicial; h) protección de la confianza jurídica.” (Marshall, p.191). Sobre lo anterior Villar Borda (pp. 74-81) realiza una buena síntesis de los elementos del Estado de Derecho-principios racionales dirá Böckenförde. En realidad, en Estado de Derecho hay una acumulación de ideas de muchas fuentes y distintas épocas, así: “a) sometimiento

del poder al derecho; b) el gobierno de la razón; c) El gobierno de las leyes y no de los hombres; d) La Obligación del gobernante de proteger el derecho, la separación del poder, las libertades de los ciudadanos, los derechos del hombre y Estado Constitucional”.

f. Chile y el Estado de Derecho: Que Chile siempre mantuvo una disposición a proteger los derechos fundamentales. La conciencia jurídica ya estaba instalada. Así, se aprecia en los albores de la república, se verifica esto en el Mensaje para la promulgación de la Constitución Política de 1828, que dentro de sus párrafos expresaba, que ha llegado el día solemne de la consolidación de nuestras libertades, cesaron para nosotros los tiempos en que la suerte nos condenada a la ciega obediencia de una autoridad sin límites. Los depositarios de la autoridad se convierten en verdaderos servidores de la causa pública. Del pueblo mismo. Depositarios de su seguridad. Barreras ante las cuales deben detenerse todas las usurpaciones y todas las injusticias. **La Constitución establece la más formidable garantía contra los abusos de toda especie de autoridad, de todo exceso de poder.** “La libertad, la igualdad, la facultad de publicar vuestras opiniones, de presentar reclamaciones y quejas a los diferentes órganos de la soberanía nacional, están al abrigo de todo ataque. La constitución es un tesoro que no podemos perder, ni menoscabar, sin degradarnos, ni envilecernos. En esa perspectiva la Constitución de 1925 mantuvo el mismo temple jurídico. En efecto, se presenta como un Estado de Derecho toda vez que al analizar las normas esta Constitución - vigentes al 11 de septiembre de 1973- Había Constitución escrita, **Separación de Poderes, Principio de la legalidad, Principio de garantía de los Derechos Fundamentales, Seguridad jurídica y protección de la confianza y Principio de proporcionalidad.** Lo anterior, de inicio es comprobable por la práctica democrática desde 1932 hasta 1973 en la denominada Cuarta República o bien la República democrática”. (Renato Cristi y Pablo Ruiz- Tagle (2006): “La República en Chile. Teoría y práctica del Constitucionalismo Republicano”. Ediciones LOM. pp. 114- 130). Además de la lectura de la Constitución de 1925 esta consagra, además, el principio constitucional del Estado de Derecho como un principio normativo. Así es verificable en sus artículos 1 al 4 que consagra el gobierno republicano y democrático (1) la soberanía reside en la nación (2). Ninguna magistratura, ni reunión de personas puede atribuirse ni aún pretexto de

circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que lo que expresamente le haya conferido por las leyes (4). Del mismo modo, el capítulo III está consagrado a las garantías Constitucionales, que el capítulo IV está dedicado al Congreso Nacional; el capítulo V al Presidente de la República; el capítulo VII al Poder Judicial.

Que por su lado la **Constitución de 1980** (con todas sus precariedades, limitaciones e infinitas críticas) con las reformas realizadas desde 1980 en forma incipiente nos anuncia en su artículo 4 que Chile es una República democrática. En su artículo 5 que la soberanía reside en la nación. El capítulo III prescribe De los Derechos y Deberes Constitucionales, el capítulo IV gobierno; el capítulo V Congreso Nacional; capítulo VI Poder Judicial. Marshall (pp.199-202) expresa que (...) “los artículos 5 a 7 de la Carta Fundamental se desprenden algunos **principios constitucionales que contribuyen a darle forma al Estado de Derecho en la Constitución Política**: Esta disposición plantea varias cuestiones interesantes. (i) El enunciado del artículo 5 inciso 2º como consagración del principio de distribución. La afirmación de que el Estado tiene un deber de respetar los derechos fundamentales es la afirmación central del Estado de Derecho e implementa de esa manera el principio de distribución entre lo permitido y lo no permitido para el Estado. Por su lado el principio de Organización en supremacía constitucional (art. 6 inc. 1º), legalidad en sentido amplio (arts. 6 inc. 1º y 7 inc. 1º), garantía del orden institucional (art. 6 inc. 1º), fuerza normativa de la Constitución (art. 6 inc. 2º); responsabilidad (art. 6 inc. 3º y 7 inc. 3º), distribución de competencias- separación de poderes- (art. 7 inc. 1º y 2º), legalidad en sentido estricto (art. 7º inc. 1º). Todas estas ideas sugieren que la idea del Estado de Derecho es la concreción institucional de las ideas de la filosofía política liberal racional. El lugar que tiene la institución de la ley para el Estado de Derecho es central para afirmar la primacía del individuo frente al Estado y va a ser el eje de continuidad sobre el cual el concepto de Estado de Derecho se va a desarrollar.” (Marshall, pp. 191-192). (...) “En la actualidad la idea del Estado de Derecho se lo considera uno de los pilares principales de un régimen democrático Sería difícil encontrar otro ideal político encomiado por un público tan diverso”. (Vilhena, p.30). Luego se dan todos los elementos del **Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los delitos de lesa humanidad** para formularle al acusado el reproche penal que se ha señalado. Ello sin perjuicio del análisis de las defensas.

Que como se aprecia, complementado e iluminando lo que se ha expresado con anterioridad, hay que tener presente que las autoridades que tomaron el Poder tras el **11 de septiembre de 1973**, tenían una mayor exigencia de respetar y garantizar sin discriminación los derechos de todas las personas. En especial, porque si desde ya hay un **quiebre constitucional** significa que las personas no pueden recurrir en forma normal a las instituciones que pueden resguardar sus derechos, por ello cualquier actuación de la autoridad debe ser con la mayor exigencia y cuidado respecto de los derechos de las personas, ya que, está actuando sin un mandato constitucional, legal y democrático. **Los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos** (como indica el mérito del proceso) **de Pedro Ñirripil Paillal, Manuel Martínez Ulloa, Octavio Renato Catalán Lincoleo, Tomás Raúl Catalán Lincoleo y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos**, fueron al margen de todo derecho. En consecuencia, tanto el mando superior como los subordinados respectivos se encuentran en condiciones como se ha cavilado, de realizarle un **reproche penal** como se ha hecho en esta sentencia. Ello sin perjuicio del estudio de la defensa.

15°) Obligación de investigar. Que cabe hacer presente que para la ponderación y aquilatación de los medios de pruebas del proceso en materia de violación a los derechos humanos (delitos de Lesa Humanidad) debe estarse al contexto de la época y lo que significa la obligación de investigar como a continuación se indica:

a. “Los estándares normativos e interpretativos en materia de graves violaciones a los de derechos humanos (delitos de lesa humanidad) en relación a la obligación de investigar. Partamos expresando que un estándar normativo en Derechos Humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5° inciso 2° de nuestra Constitución que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales.” (García Pino, Gonzalo: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En

Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Tribunal que a partir de la normativa aludida, está debe ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo. En este caso sobre la Obligación de investigar.

b. Que sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 124, señaló: “La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

c. “Que esta institución denominada control de convencionalidad puede ser definida, en términos simples, como el mecanismo que utiliza la Corte IDH tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo, como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana”.(García, Gonzalo (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: Nogueira, Humberto (coord.) “La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Santiago de Chile, Librotecnia. pp. 356-357).

d. Que para aplicar entonces el control de convencionalidad hay que observar por supuesto la Convención Americana sobre Derechos Humanos- ya citada- en especial los artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado, su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

e. Que del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna opinión consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un estándar normativo en materia de derechos humanos. En este caso (obligación de investigar) en relación a cómo se deben desarrollar las investigaciones cuando han ocurrido graves violaciones a los Derechos Humanos (delitos de lesa humanidad). En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

f. Que siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

1. Sentencia en caso Velásquez Rodríguez versus Honduras de 29 de julio de 1988. Párrafos 176 y 177, afirma en el 176 que (...) “el Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención”. Por su lado en el párrafo 177 acota que (...) “la de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin

embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado”.

2. Sentencia caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala de 19 de noviembre de 1999. El párrafo 225, añade que del (...) “artículo 1.1 se desprende claramente la obligación de investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención como medio para garantizar tales derechos”.

3. Sentencia caso Barrios Altos versus Perú de fecha 14 de marzo de 2001. Párrafo 41 asevera que (...) “esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

4. Sentencia caso Las Palmeras versus Colombia de 6 de diciembre de 2001, en su párrafo 42 anexa que (...) “La Corte estima que es posible que, en un caso determinado, se pueda interpretar la omisión de investigación como una forma de encubrir a los autores de un delito contra la vida, pero no puede erigirse este razonamiento en una norma válida para todos los casos. Independientemente de la cuestión de la validez de la pretendida norma, es de señalar que ella sería aplicable en ausencia de una investigación seria” (...).

5. Sentencia caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras de 7 de junio de 2003. Párrafo 184 expresa que (...) “el Estado parte de la Convención Americana tiene el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y

sancionar a los autores y a quienes encubran dichas violaciones. Y toda persona que se considere víctima de éstas o bien sus familiares tienen derecho de acceder a la justicia para conseguir que se cumpla, en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad, ese deber del Estado”.

6. Sentencia caso Bulacio versus Argentina de 18 septiembre de 2003.

El párrafo 115 explícita que (...) el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos”.

7. Sentencia caso Myrna Mack Chang versus Guatemala de 25 de noviembre de 2003. Párrafo 277 explaya que (...) asimismo, en el cumplimiento de esta obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad en el presente caso; otorgar las garantías de seguridad suficientes a las autoridades judiciales, fiscales, testigos, operadores de justicia y a los familiares de Myrna Mack Chang y utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso”.

8. Sentencia caso Tibi versus Ecuador de 7 septiembre de 2004. Párrafo 159 acota que (...) la Corte entiende que, a la luz de la obligación general de los Estados partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana”.

9. Sentencia caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador de 1 de marzo de 2005. Párrafo 83 añade que (...) la Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención”.

10. Sentencia caso Comunidad Moiwana versus Suriname de 15 de junio 2005. Párrafo 145 anexa que (...) “está expresamente reconocido por Suriname, que agentes estatales estuvieron involucrados en el ataque del 29 de

noviembre de 1986 en el que murieron al menos 39 residentes indefensos de la aldea de Moiwana – entre los cuales había niños, mujeres y ancianos – y muchos otros resultaron heridos. De esta manera, los hechos muestran múltiples ejecuciones extrajudiciales; en tal situación, la jurisprudencia del Tribunal es inequívoca: el Estado tiene el deber de iniciar exoficio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva”.

11. Sentencia caso de la Masacre de Mapiripán versus Colombia de 15 de septiembre de 2005. En sus párrafos 137, 233 y 299. Afirma en el 137 (...) Tal como se desarrolla en las consideraciones sobre los artículos 8 y 25 de la Convención una de las condiciones para garantizar efectivamente el derecho a la vida se refleja necesariamente en el deber de investigar las afectaciones a ese derecho. De tal manera, la obligación de investigar los casos de violaciones al derecho a la vida constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal en el presente caso”. El párrafo 233 (...) “Este deber de investigar deriva de la obligación general que tienen los Estados parte en la Convención de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en ella, es decir, de la obligación establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado en conjunto con el derecho sustantivo que debió ser amparado, protegido o garantizado. De tal manera, en casos de violaciones al derecho a la vida, el cumplimiento de la obligación de investigar constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal por la inobservancia de las debidas garantías judiciales y protección judiciales”. Se destaca del párrafo 299 que, (...)“Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Colombia debe: a) remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; b) utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y c) otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de Mapiripán”.

12. Sentencia caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia de 31 de enero de 2006. Párrafo 143 afirma que (...) “en particular, por constituir el goce pleno del derecho a la vida la condición previa para la realización de los demás derechos una de esas condiciones para garantizar efectivamente este

derecho está constituida por el deber de investigar las afectaciones al mismo. De tal manera, en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales”.

13. Sentencia caso Goiburú y otros versus Paraguay de 22 de septiembre de 2006. Párrafos 117, 129 y 130. Asevera que 117 (...) “además, es preciso reiterar que esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Durante la investigación y el trámite judicial las víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación, de acuerdo con la ley interna y la Convención Americana. No obstante, la investigación y el proceso deben tener un propósito y ser asumidos por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios”. El párrafo 129 (...) “una vez establecido el amplio alcance de las obligaciones internacionales erga omnes contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que en los términos del artículo 1.1 de la Convención Americana los Estados están obligados a investigar las violaciones de derechos humanos y a juzgar y sancionar a los responsables”. Ahora bien, el párrafo 130 (...) “por ende, según la obligación general de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Paraguay debe adoptar todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, inclusive

impulsando por todos los medios a su alcance las solicitudes de extradición que correspondan. La inexistencia de tratados de extradición no constituye una base o justificación suficiente para dejar de impulsar una solicitud en ese sentido”.

14. Sentencia caso Almonacid Arellano y otros versus Chile de 26 de septiembre de 2006. Párrafos 111 y 114. Expresa el párrafo 111 (...) “Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales”. Párrafo 114 (...) “Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía”.

15. Sentencia caso del penal Miguel Castro versus Perú de 25 de noviembre de 2006. Párrafo 387. (...) Explicita que en primer término, esta Corte considera que el tiempo transcurrido entre el momento de los hechos y el inicio del proceso penal por la investigación de éstos sobrepasa por mucho un plazo razonable para que el Estado realice las primeras diligencias probatorias e investigativas para contar con los elementos necesarios para formular una acusación penal, máxime que a ese tiempo habrá que sumar el que tome la realización del proceso penal, con sus distintas etapas, hasta la sentencia firme. Esta falta de investigación durante tan largo período configura una violación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, por cuanto el Estado ha incumplido su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para

investigar las violaciones, sancionar a los eventuales responsables y reparar a las víctimas y sus familiares”.

16. Sentencia caso de la Masacre de La Rochela versus Colombia de 11 de mayo de 2007. Párrafos 155, 156 y 171. Explaya el párrafo 155 (...) La Corte estima que la ineffectividad de tales procesos penales queda claramente evidenciada al analizar la falta de debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales de investigación. Esta falta de debida diligencia se manifiesta en la irracionalidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la falta de adopción de las medidas necesarias de protección ante las amenazas que se presentaron durante las investigaciones, las demoras, obstáculos y obstrucciones en la realización de actuaciones procesales y graves omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación”. En tanto, el párrafo 156 (...) “El eje central del análisis de la efectividad de los procesos en este caso es el cumplimiento de la obligación de investigar con debida diligencia. Según esta obligación, el órgano que investiga una violación de derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. Esta obligación de debida diligencia adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos”. El párrafo 171 (...) “Este Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismo.”

17. Sentencia caso Escué Zapata versus Colombia de 4 de julio de 2007. Párrafo 106 indica que (...) “Una debida diligencia en los procesos investigativos requiere que éstos tomen en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto y las circunstancias en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, en seguimiento de todas las líneas lógicas de investigación. Las

autoridades judiciales deben intentar como mínimo, inter alia: a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con los hechos; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones; d) determinar la causa, forma, lugar y momento en que se produjo el ilícito, así como cualquier patrón o práctica que lo pueda haber causado; y e) en caso de fallecimientos, distinguir entre muerte natural, accidental, suicidio y homicidio”.

18. Sentencia caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú de 10 de julio de 2007. Párrafo 131 manifiesta que (...) “El Tribunal reitera que la obligación de investigar es una obligación de medio, no de resultados. Lo anterior no significa, sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como “una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos”.

19. Sentencia caso García Prieto y otros versus El Salvador de 20 de noviembre de 2007. Párrafos 104, 112 y 115. Menciona el párrafo 104, (...) “Que cabe señalar que la obligación de investigar no sólo se desprende de las normas convencionales de Derecho Internacional imperativas para los Estados Parte; sino que además se deriva de la legislación interna que haga referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos”. Párrafo 112 (...) “La obligación a cargo del Estado de actuar con debida diligencia en la práctica de una investigación implica que todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para que sea posible alcanzar los objetivos de una investigación. La autoridad encargada de la investigación debe velar para que se realicen las diligencias requeridas y, en el evento de que esto no ocurra, debe adoptar las medidas pertinentes conforme a la legislación interna. A su vez, las otras autoridades deben brindar al juez instructor la colaboración que éste les requiera y abstenerse de actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. En el presente caso se presentaron actos de esta naturaleza en lo que toca a la

investigación relativa a la inspección de los libros de “entradas y salidas” del personal del Batallón San Benito de la extinta Policía Nacional”. Párrafo 115 (...) “Para la Corte la falta de respuesta estatal es un elemento determinante al valorar si se ha dado un incumplimiento del contenido de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, pues tiene relación directa con el principio de efectividad que debe irradiar el desarrollo de tales investigaciones. De tal forma el Estado al recibir una denuncia penal, debe realizar una investigación seria e imparcial, pero también debe brindar en un plazo razonable una resolución que resuelva el fondo de las circunstancias que le fueron planteadas”.

20. Sentencia caso Heliodoro Portugal versus Panamá de 12 de agosto de 2008. Párrafo 142 narra que (...) “La obligación de investigar violaciones de Derechos Humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. La Corte ha sostenido que, para cumplir con esta obligación de garantizar derechos, los Estados deben no sólo prevenir, sino también investigar las violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Convención, como las alegadas en el presente caso, y procurar además, si es posible, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por las violaciones de los derechos humanos”.

21. Sentencia caso Tiu Tojín versus Guatemala de 26 de noviembre de 2008. Párrafo 77 acota que (...) “en base en lo anterior, el Estado deberá asegurar, como una forma de garantizar que la investigación iniciada ante la justicia ordinaria sea conducida con la debida diligencia que las autoridades encargadas de la investigación tengan a su alcance y utilicen todos los medios necesarios para llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado garantizará que las autoridades encargadas de la investigación cuenten con los recursos logísticos y científicos necesarios para la recaudación y procesamiento de pruebas y, en particular, tengan las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y puedan obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. En este sentido, cabe reiterar que en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en

mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes”.

22. Sentencia caso Ríos y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. Párrafo 283 añade “que la investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados” incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de *ius Cogens*. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación *ex officio*, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado”.

23. Sentencia caso Perozo y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. En su párrafo 298 apunta que (...) “La obligación general de garantizar los Derechos Humanos reconocidos en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección. Por ello, corresponde determinar si en este caso, y en el contexto en que ocurrieron los hechos alegados, la obligación general de garantía imponía al Estado el deber de investigarlos efectivamente, como medio para garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la integridad personal, y evitar que continuaran ocurriendo. La investigación de la violación de determinado derecho sustantivo

puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados”, incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de *ius cogens*. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condiciona condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado”.

24. Sentencia caso Anzualdo Castro versus Perú de 22 de septiembre de 2009. Párrafo 135 apoya que (...) “este Tribunal ha establecido que para que una investigación de desaparición forzada sea llevada adelante eficazmente y con la debida diligencia, las autoridades encargadas de la investigación deben utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado debe dotar a las correspondientes autoridades de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. Asimismo, es fundamental que las autoridades a cargo de la investigación puedan tener acceso ilimitado a los lugares de detención, respecto a la documentación, así como a las personas. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o

ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación”.

25. Sentencia caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia de 26 de mayo de 2010. Párrafo 118 aproxima que (...) “en casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial del Senador Cepeda sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación”.

26. Sentencia caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña versus Bolivia de 1 de septiembre de 2010. Párrafo 158 arguye que (...) “la Corte considera pertinente reiterar, como lo ha hecho en otros casos, que la “verdad histórica” documentada en informes especiales, o las tareas, actividades o recomendaciones generadas por comisiones especiales, como la del presente caso, no completan o sustituyen la obligación del Estado de establecer la verdad e investigar delitos a través de procesos judiciales”.

27. Sentencia caso Gelman versus Uruguay de 24 febrero de 2011. Párrafo 194 asevera que (...) “la Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables”.

28. Sentencia caso Núñez Naranjo y otros versus Ecuador del 23 de mayo de 2023. Párrafo 81 asevera que, (...) “de forma reiterada en su

jurisprudencia, la Corte ha establecido que la desaparición forzada es una violación compleja y múltiple, que pone a la víctima en un estado de completa indefensión y atenta contra diversos bienes jurídicos protegidos por la Convención Americana. En particular, esta conducta genera la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, consagrados en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención, respectivamente. Asimismo, la Corte ha señalado que, si un Estado práctica, tolera o permite un acto de desaparición forzada, incumple las obligaciones previstas en el artículo I a) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que prohíbe tales conductas". Continúa, el párrafo 83 musita que, asimismo, (...) "la Corte ha afirmado que la desaparición forzada es "un acto continuado o permanente, que permanece mientras no se conozca el paradero de la víctima o se hallen sus restos, y mientras no se determine con certeza la identidad de los mismos". Este acto se configura cuando se presentan en forma concurrente los siguientes elementos: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o de personas que actúen con autorización, apoyo o aquiescencia de estos; y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada". Que el párrafo 106 asienta que, "Los Estados tienen el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, en su caso de imponerles las sanciones pertinentes, y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. En particular, cuando se trata de la investigación de violaciones en perjuicio de personas que se encontraban bajo custodia del Estado, las autoridades correspondientes tienen el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva, es decir, con la debida diligencia, sustanciada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad. Tales características del deber de investigar son aplicables, con mayor razón, en casos de posible desaparición forzada de una persona. Por último, el párrafo 107 refiere, (...) "frente a esta violación en particular, además del deber de investigar y sancionar a los responsables, la Corte ha subrayado la existencia de una obligación autónoma de buscar y localizar a las personas desaparecidas, derivada de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención

Americana, del artículo X de la CIDFP y de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas. Este deber también ha sido desarrollado por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y por los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Estos últimos indican que las autoridades encargadas deben iniciar la búsqueda de oficio, incluso si no se ha presentado una denuncia o una solicitud formal y agregan que “[l]a búsqueda de la persona desaparecida y la investigación penal de los responsables de la desaparición deben reforzarse mutuamente”, toda vez que “[e]l proceso de búsqueda integral de las personas desaparecidas debe iniciarse y llevarse a cabo con la misma efectividad que la investigación criminal.”

g. Síntesis de estos estándares normativos citados. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia sólida y robusta ha sostenido un estándar en relación a la obligación de investigar en materia de derechos humanos, en cuanto tratándose de graves violaciones a los Derechos Humanos (entre otros el delito lesa humanidad) los Estados deben realizar determinadas actividades. En concreto realizando un resumen de la Jurisprudencia anterior y apoyándonos además en Eduardo Ferrer Mac-Gregor. (“Las siete principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicable a la justicia penal”. Revista IIDH v. 59 pp.45-48). El autor además que es Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

1. Investigar efectivamente los hechos. En casos de ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida y castiguen a todos los responsables, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de no ser así se estarían creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para que se repitan estos hechos, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida.

2. Que si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado. En este sentido, la Corte IDH ha establecido que en casos de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, las autoridades de un Estado deben iniciar ex officio y sin

dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que tengan conocimiento del hecho.

3. El deber de investigar es una obligación de medios, no de resultados, la investigación de este tipo de casos debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares, o de la aportación privada de elementos probatorios. Esto último no se contrapone con el derecho que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares a ser escuchados durante el proceso de investigación y al trámite judicial, así como a participar ampliamente de los mismos.

4. Cabe destacar que cualquier carencia o defecto a los responsables materiales o intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida.

5. La Corte IDH ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.

6. Para cumplir la **obligación de investigar** y sancionar a los responsables en el presente caso, se debe: **1)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **2)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **3)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia.

7. La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

8. El Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte IDH ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”.

9. Esta obligación de debida diligencia adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos.

10. El Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos.

11. La Corte IDH reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación y en algunos casos, la imposibilidad para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación

12. En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.

13. La Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad

en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

14. La Corte IDH ha establecido ciertos Principios Rectores, con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación efectiva de Ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias de Naciones Unidas, para las investigaciones cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben: **1)** Identificar a la víctima; **2)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte con el fin de ayudar en cualquier investigación; **3)** Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones con relación a la muerte que se investiga; **4)** determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y **5)** distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen; se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados.

h. Que tal como se ha señalado latamente en los párrafos precedentes, estos son los estándares normativos e interpretativos que se deben ponderar tanto al momento de investigar, como al momento de valorar la prueba del proceso. El Tribunal debe considerar las dificultades de la época, el contexto para reunir la prueba y ver los patrones de conducta de los Agentes del Estado. **Tal como, lo que se ha realizado en esta sentencia** y que la defensa nada expresa. Así del estudio de sus argumentaciones, no existe un examen adecuado de todos los testigos y documentos, sino que se refieren a eventos parciales de su propio interés. Ocurre que la defensa debe situarse en la sede del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y lo que significa la violación de los Derechos Humanos y el delito de lesa humanidad.

16º) Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por los Tribunales Alemanes.

a. Que en todo caso a propósito de delitos de Lesa humanidad y la estructura legal y normativa que debe ponderarse en la sentencia (debe considerarse- con los ajustes hecho y derecho al contexto chileno- pues también

los hechos investigados son graves violaciones a los derechos humanos, en este caso delitos de lesa humanidad y haremos los ajustes precisos y detallados al caso chileno, esto es, Centros de Detención, Regimientos, Destacamentos, Retenes, Tenencias, Comisarías, Bases Navales, Bases Aéreas, Cuarteles, Cárceles, Calabozos, casas, subterráneos y todo otro lugar legal o ilegal que sirvió para detención, tortura o ejecución en la realidad chilena de la época) es muy significativo lo razonado en derecho comparado en los casos de Iwan Nikolai de Demjanjuk (condenado el 12 de mayo 2011) y Oskar Gröning (condenado 15 de julio de 2015), quienes tenían 91 y 94 años de edad, respectivamente, al ser condenados por Tribunales Alemanes. A continuación, se realiza una síntesis de las reflexiones en lo pertinente de los artículos de Gerhard Werle y Boris Burghardt (Universidad Humboldt- Berlín, sobre el caso Demjanjuk); y de Claus Roxin sobre el caso Oskar Gröning. Estos casos además han sido llevados a formato audiovisual en diferentes documentales, tales como: “El nazi Iván el terrible” Netflix y “El contador de Auschwitz” de la plataforma Prime Video.

b. Que el primer artículo versa sobre la complicidad en matanzas ocurridas en campos de exterminio nacionalsocialistas (el caso Demjanjuk en el contexto de la jurisprudencia de la República Federal Alemana). (Gerhard Werle y Boris Burghardt (Universidad Humboldt- Berlín. “Revista Penal México”. N°9 septiembre 2015- febrero 2016, pp.181-193). Corresponde al análisis de la sentencia recaída contra Iwan Nikolai Demjanjuk, quien fue considerado cómplice en el exterminio masivo de personas. El 12 de mayo de 2011, el segundo Landgericht (LG, Tribunal Estatal) de Múnich condenó a Iwan Nikolai Demjanjuk, quien se había dado como nombre John para su segunda vida en Estados Unidos, a una pena única de cinco años por complicidad en 16 casos de homicidio calificado, de los que resultaron un total de 28060 muertes. Antes de la revisión de los recursos pendientes, que habían presentado tanto el condenado como la Fiscalía, Demjanjuk murió el 20 de marzo de 2012, a los 91 años. Lo que se razona es que antes de esta sentencia habría valido, conforme a la jurisprudencia de la República Federal Alemana, que una condena requeriría de la prueba de un hecho delictivo concreto (konkreten Einzeltatnachweis) imputable a cada acusado. Pero lo cierto es que los querellantes alegaron que la fundamentación de la responsabilidad como cómplice de Demjanjuk no se fundaría en un novum jurídico, sino que se vincularía con una jurisprudencia

que habría sido olvidada solamente por razones de oportunidad política. El caso Demjanjuk implicaría una vuelta a la valoración correcta de acuerdo a la dogmática jurídico-penal. En efecto el segundo Landgericht de Múnich comprobó que Demjanjuk llegó a Sobibór como Trawniki (Se conocía como Trawniki a prisioneros de guerra y personas sometidas a trabajos forzados que recibieron entrenamiento por parte de las SS (Escuadras de Defensa) para colaborar en los campos de concentración y en llevar a cabo el genocidio. En su mayoría se trataba de ucranianos y los así llamados alemanes étnicos (Volksdeutsche) de la Unión Soviética. La denominación tiene su origen en el campo de Trawniki –donde tenía lugar el entrenamiento– que se ubicaba aproximadamente a 40 kilómetros al este de Lublin) el día 27 de marzo de 1943, permaneciendo allí hasta mediados de septiembre del mismo año. El tribunal señaló que si bien no fue posible comprobar las actividades desarrolladas por Demjanjuk dentro del campo de concentración, se consideró el hecho de que el campo de Sobibór se habría dedicado exclusivamente a la matanza de judíos deportados. Los Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habrían colaborado en todas las fases del exterminio bajo las órdenes del personal alemán del campo. Se habrían repartido en tres turnos: uno de ellos habría estado dedicado a la seguridad externa del campo, otro habría vigilado las labores en el campo y el tercero habría permanecido de guardia. Los turnos habrían durado ocho horas y habrían rotado entre tres días de turnos de vigilancia y tres días de turnos de guardia. Al arribo de un transporte, los Trawniki se habrían ocupado de vigilar a los judíos que llegaban y a los prisioneros que estaban sometidos a trabajos forzados, que consistían en descargar a los deportados, hacerlos pasar a las cámaras de gas, someterlos a gases letales, y luego el examen y la remoción de los cadáveres. Cada Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habría sabido que formaba parte de un aparato que no buscaba otra cosa que la manera más eficiente de matar al mayor número posible de personas. Además, todos los Trawniki habrían tenido conciencia de la manera en que los judíos eran exterminados, y de que esto acontecía exclusivamente por motivos de odio racial. Durante el periodo de tiempo en el que Demjanjuk cumplió labores como Trawniki en Sobibór habrían arribado comprobadamente 16 transportes con 29779 personas deportadas. De ellos, un total de 28060 fueron asesinadas inmediatamente tras su llegada, ya sea en las cámaras de gas o a tiros. En esa línea el homicidio de todas

las personas que compartieron un transporte fue valorado por la sala como una unidad de acción desde el punto de vista jurídico. En cada uno de estos actos habría colaborado Demjanjuk como cómplice.

c. Que los principales hallazgos de la sentencia son, en este punto, que todos quienes formaban parte de la cadena de mando –comenzando con los miembros de la RSHA (Agencia Central de Seguridad Imperial) encargados de llevar adelante el exterminio de los judíos, pasando por los empleados ferroviarios, las personas en la administración del gobierno general, los directores de campos de concentración, los Oficiales de la SS (Schutzstaffel, fuerzas especiales nazis), los Oficiales de Policía en los campos de concentración individualmente considerados y el personal de vigilancia directamente comandado por ellos– tenían, cada uno, una tarea asignada en la expulsión de ciudadanos judíos de Alemania, planeada y organizada desde Berlín, hacia los países ocupados y controlados por el ejército alemán; en su transporte en los campos de exterminio y –siempre que no fueran seleccionados para ser forzados a trabajar, lo que ocurría con un pequeño grupo de ellos– en su homicidio inmediato y organizado en las cámaras de gas, como en una línea de producción. Sostiene la sentencia que los tres campos de exterminio de Treblinka, Belzec y Sobibór sirvieron al solo propósito del asesinato masivo de la población judía de Europa, y que con ello toda actividad del imputado y de las demás personas que tenían a su cargo tareas de vigilancia era una promoción de la tarea principal del campo de exterminio. En ese contexto, daba lo mismo si debían vigilar los andenes de arribo del tren, guiar a los prisioneros hasta las cámaras de gas, vigilar a los judíos que debían incinerar los cadáveres de los muertos, vigilar a los prisioneros sujetos a trabajos forzados para mantener el funcionamiento del campo y apropiarse de las pertenencias de los difuntos, controlar desde la torre de vigilancia para contrarrestar sublevaciones desde el interior o defenderse ante eventuales ataques de partisanos o realizar el servicio de guardia de reserva para el caso de alguno de estos eventos. Sostiene el tribunal que el peso del actuar individual para el plan común no es relevante para satisfacer la tipicidad de la complicidad, sino que adquiere relevancia solamente para la determinación de la pena, y que, en particular, no es relevante una relación causal, en el sentido de que la contribución del cómplice deba originar la consumación del hecho principal.

d. Que asimismo la resolución con otros procesos seguidos por la justicia de la República Federal Alemana por matanzas en los campos de concentración exclusivamente dedicados al exterminio, la Jurisprudencia había seguido la misma posición que luego fue olvidada. Así es posible observarlo, ya en la **sentencia de la sala especial del Landgericht de 1950 contra Hubert Go-merski y Johann Klier** se dice con claridad ejemplar: “El campo Sobibór fue creado con el solo fin de dar muerte a un gran número de judíos”. La sala sigue: “Todos quienes trabajaban en ese campo –alemanes, ucranianos y judíos– tenían su tarea particular, sea que hayan participado inmediatamente de los homicidios o que hayan apoyado indirectamente las tareas del campo. Todas estas actividades fueron en último término causales para el resultado –la muerte de los judíos–, pues sólo por haber existido este conjunto de actividades fue posible el resultado”. Esta argumentación la mantuvo la sala especial del Landgericht, incluso para Klier, quien hizo valer irrefutablemente que el solamente había trabajado en la panadería del campo y luego habría dirigido el comando de los zapatos (Schuhkommando), que se dedicaba a recolectar, seleccionar y almacenar los zapatos de los asesinados en las cámaras de gas. La sala especial del Landgericht hizo nuevamente hincapié en que “todas las personas que trabajaban en el campo de Sobibór eran engranajes de un sistema que tenía por única finalidad matar a judíos. Toda acción que se llevó a cabo en ese campo servía directa o indirectamente a ese fin. Todas esas acciones fueron necesarias para la operación del campo”. De este modo, tanto la actividad del acusado Klier en la panadería como la actividad que tuvo a cargo de los zapatos fueron causales para el resultado”.

e. Que del mismo modo dieciséis años después, en el gran proceso de Sobibór, la sala especial del Landgericht tampoco dudó en clasificar como colaboraciones promotoras del resultado a aquellas que no estaban directamente vinculadas con la operación de exterminio, como por ejemplo el trabajo como tesorero o administrador del campo, o como responsable del abastecimiento de víveres y vestuario del personal del campo. La sentencia dijo sobre este punto: “Allí donde ellos [los acusados] formaban parte de la organización de los campos, (...) todos contribuyeron a hacer posible, por su colaboración funcional, los asesinatos masivos contra los judíos, siendo su causa y promoviéndolos en inmediata cercanía al hecho”. El Tribunal Federal alemán confirmó esa argumentación en cuanto

conoció de la revisión de esas sentencias. Particularmente destacable resulta en ese contexto lo dicho respecto de la **sentencia de primera instancia de hechos en el proceso Kulmhof**, que se llevó adelante durante los años 1962 y 1963 ante el Landgericht de Bonn contra 12 acusados. Ante la alegación por parte de algunos acusados de que se los habría condenado como cómplices mediando un error jurídico, porque ellos solamente habrían llevado a cabo acciones “que (...)se enmarcaban dentro de las tareas entonces asignadas a la policía de protección [Schutzpolizei]”, y por lo mismo habrían sido “valorativamente neutrales” y no podrían ser valoradas como fundamento de complicidad en un asesinato, el Tribunal Federal Alemán respondió claramente: “Conforme a lo constatado (...) ya por su pertenencia al comando especial que fue creado para el sólo fin de aniquilar a la población judía de Polonia y ciertos otros grupos de personas cuya vida era considerada útil, los acusados han colaborado en el asesinato de las víctimas. La naturaleza de las tareas que les correspondió realizar a cada uno en la ejecución de acciones individuales deviene en razón de ello –por lo menos en este contexto– irrelevante”. Tampoco en los procesos posteriores tuvieron éxito las revisiones fundadas en alegaciones contra la calificación del trabajo en campos de exterminio como complicidad en el asesinato masivo, que se llevó a cabo en esos campos de exterminio.

f. El caso Demjanjuk ha demostrado que el segundo Landgericht de Múnich en ningún caso ha penetrado en nuevo terreno jurídico en lo tocante a las valoraciones jurídicas centrales, sino que ha continuado con un camino que ya había sido trazado. La justicia de la República Federal alemana ha constatado desde siempre que toda función desempeñada en el funcionamiento de los campos de concentración de Treblinka, Belzec, Sobibór y Chelmno era complicidad en el asesinato masivo. La declaración principal podía resumirse diciendo que allí no había actividades neutrales. Es decir esta valoración fundamental fue confirmada en el proceso contra Demjanjuk. Ella es correcta y resulta de la aplicación de los fundamentos de la complicidad que desde hace tiempo están fijados por la jurisprudencia. Según ellos, se presta una colaboración por medio de cada comportamiento que promueve la comisión del hecho principal objetivamente de cualquier manera. En el caso de formas de comportamiento que, miradas en sí mismas son cotidianas y permitidas, según la jurisprudencia la situación dependerá

del conocimiento que tengan los partícipes: si saben que su actuar promueve la comisión del hecho principal, su acción pierde en todo caso su carácter de acción cotidiana. Luego el caso Demjanjuk no creó una nueva construcción de la punibilidad a título de complicidad. El proceso se deja entender más bien como una reactivación de principios reconocidos de la complicidad en relación con homicidios masivos en la época nacionalsocialista. El caso llevó la atención a que estos principios fueron pasados por alto en muchos procesos por largo tiempo.

g. Que el segundo artículo versa sobre la sentencia en el asesinato por medio del servicio en el campo de concentración de Auschwitz. Sentencia del BGH y comentario de Claus Roxin ("Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano". CEDPAL, Editores Kai Ambos John Zuluaga, volumen 2, 2018, pp. 189-209). Se resumen en lo pertinente el análisis de la sentencia de la Tercera Sala Penal del Tribunal Supremo Federal, la que con fecha 20 de septiembre de 2016 decidió por unanimidad rechazar el recurso de revisión solicitado por el acusado Oskar Gröning en contra de la sentencia del Tribunal Regional de Luneburgo del 15 de julio de 2015.

h. Que el Tribunal Regional (Landgericht) sentenció al acusado a una pena de cuatro años de prisión en calidad de cómplice de asesinato en 300.000 casos, todos los casos legalmente coincidentes. Contra su condena, el acusado promovió recurso de revisión basado en la invocación de la violación al derecho formal y sustantivo. El recurso deviene infructuoso. El sentenciado murió a los 94 años antes de empezar a cumplir la sentencia condenatoria. Los fundamentos son: **a)** Una vez trasladado al campo de concentración de Auschwitz, el acusado fue asignado a un puesto en el área de Administración del dinero de los prisioneros. Entretanto había sido promovido al grado de Sargento Segundo de las SS (SSUnterscharführer) y asignado a la Operación Hungría, de igual manera que en la Operación Reinhard. De tal modo que, en el transcurso de la Operación Hungría, el acusado, uniformado y armado con una pistola, desempeñó durante al menos tres días -no mayormente precisables-, las funciones de servicio de rampa en la denominada nueva rampa. En primer lugar, tenía la tarea de custodiar en el campo de concentración de Auschwitz el equipaje allí depositado durante la descarga de los trenes que llegaban a Auschwitz y, de esta manera, evitar el robo. Aunque en Auschwitz el robo por parte de los miembros de la SS estaba a la orden del día, la mayoría de estos

hechos no fueron perseguidos ya que los autores cedían subrepticamente una parte del botín, a fin de mantener la moral de las tropas. En la rampa, sin embargo, debía impedirse en todo momento que los equipajes fueran abiertos, inspeccionados y saqueados a la vista de los deportados, para no levantar sospechas y evitar revueltas, que pudieran poner en riesgo el procedimiento ulterior de selección y gaseado. Al mismo tiempo y mediante sus funciones en el servicio de rampa, el acusado formó parte del contexto de intimidación usado para sofocar, ya desde el origen, cualquier idea de resistencia o huida. Además, del servicio de rampa, el acusado estaba encargado, conforme a su función en la sección de administración del dinero de los prisioneros, de la clasificación monetaria, la contabilidad, la administración y el transporte hacia Berlín del dinero de los deportados. Allí, lo entregaba en intervalos irregulares a la Dirección General de Administración Financiera de las SS (SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt) o lo depositaba directamente en una cuenta de las SS en el Reichsbank. Asimismo, incumbía en todo momento a las funciones de servicio del acusado, la supervisión de los deportados y, en caso necesario, el impedir por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga; **b)** Desde su participación en la Operación Reinhard, el acusado conocía todos los detalles de los procedimientos empleados en el campo de concentración de Auschwitz. En particular, él sabía que los judíos deportados en forma masiva a Auschwitz eran masacrados aprovechándose deliberadamente de su calma e indefensión. Asimismo, él era consciente de que con sus actividades apoyaba la maquinaria de muerte que operaba en Auschwitz. Él fue -al menos- condescendiente con tal proceder, para evitar ser transferido a las unidades de las SS que combatían en el frente de batalla.

i. Que el profesor Roxin expresa que la afirmación de la Sala Penal según la cual el acusado ha prestado asistencia a todos estos hechos no resulta objetable por motivos legales. Además, continúa que esto se aplica en primer lugar con relación a las víctimas frente a cuyo arribo en Auschwitz-Birkenau el acusado se encontraba cumpliendo con el servicio de rampa. No exige mayores discusiones el hecho de que, con su accionar, el acusado prestaba asistencia a los miembros de las SS, los que a su vez cometían asesinatos mediante la previa selección en la rampa y la inmediata ejecución a través del rociamiento del Zyklon B en las cámaras de gas. Añade que el acusado prestó asistencia entonces en el sentido del artículo

27 inciso 1 del Código Penal, por un lado –mediante la vigilancia del equipaje-, a conservar la calma de quienes llegaban y, por el otro -como una parte del contexto de intimidación-, a sofocar toda idea de resistencia o fuga. Ahora bien, razona que también resulta punible el acusado por complicidad en el asesinato respecto de las víctimas que arribaron y a las cuales él no prestó el servicio de rampa. En efecto, aunque no pueda aseverarse que con su accionar el acusado haya prestado asistencia física o psicológica directa a los médicos que participaron en la selección o a los miembros de las SS que realizaron la matanza, el Tribunal Regional no obstante tomó acertadamente como punto de partida que el acusado por medio del ejercicio general de su servicio en Auschwitz, ya había prestado asistencia a los dirigentes estatales y a las SS, quienes a principios de 1944 ordenaron la Operación Hungría, la que subsecuentemente desde una posición de liderazgo, implementaron o dejaron implementar (para la autoría mediata en el marco de los aparatos de poder estatales).

j. Que desde esa perspectiva cavila el autor, que el acusado (Gröning) tuvo participación en esta facilitación de los hechos. Era parte del aparato de personal que ya estaba cumpliendo funciones al momento de la orden para llevar a cabo la Operación Hungría en Auschwitz. Él estaba vinculado a la organización de los asesinatos masivos, e independientemente de esto, le incumbía supervisar y vigilar la llegada de los deportados a la rampa y evitar por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga. Finalmente, más allá de esto, también estuvo involucrado en el aprovechamiento de los bienes de las víctimas, lo que hizo que las SS se beneficiaran incluso luego de la muerte de las víctimas. El hecho de que estas funciones fueran ejercidas en el campo de concentración de Auschwitz por miembros de las SS que eran activos allí, era bien conocido por los responsables cuando se ordenó la Operación Hungría y fue de fundamental importancia para su resolución de actuar y emitir las respectivas órdenes y mandatos. El hecho de que ellos no conocieran personalmente al acusado es jurídicamente irrelevante. Bastaba con que ellos sepan que todas las tareas a desarrollarse para poner en marcha esa mortífera maquinaria, serían cumplidas por subordinados confiables y obedientes, lo que garantizaba una implementación sin obstáculos de la Operación Hungría.

k. Que todo según el contexto general de los fundamentos del veredicto, era también conocido por el acusado, quien lo aprobó -al menos- con

condescendencia. Ya estaba plenamente informado de los acontecimientos, poco después de su llegada a Auschwitz. Sin embargo, en su empeño por no ser transferido al frente, se unió a la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que se le impartieron. Él tenía en claro, por lo tanto, que a través de su servicio, en colaboración con otros, lograba asegurar en todo momento las condiciones necesarias para que las autoridades del Estado y de las SS pudieran decidir y ordenar la ejecución de una operación de exterminio en Auschwitz, ya que dependían de la ejecución a nivel local de sus órdenes criminales. Precisa Roxin que desde el punto de vista subjetivo, no se requiere más para tener por acreditada la contribución del acusado en todos los asesinatos que le fueran atribuidos en la sentencia impugnada por la Operación Hungría.

I. Que por ello Claus Roxin considera que la decisión anterior relatada, es correcta y cree que merece la relevancia que se le ha atribuido. Ella deja definitivamente en claro que los miembros del equipo de un campo de concentración se hicieron culpables por complicidad en el asesinato, si ellos sabían de los asesinatos cometidos durante su pertenencia al campo y apoyaron la operación del campo dirigida al exterminio a gran escala de vidas humanas.

m. Que el autor recuerda que tampoco la **Sentencia de la Segunda Sala Penal del 20 de febrero de 1969**, a la que se ha remitido en la revisión del acusado y muchas órdenes de sobreseimiento de años anteriores, ha juzgado esto de un modo distinto. Allí se señala lo siguiente: “Una especificación más detallada de los hechos no era posible, pues las muertes en Auschwitz fueron tan numerosas que en su mayoría no pudieron ser identificadas por sus características específicas, como la persona del difunto o el momento exacto en que ello ocurrió...”. En ese sentido, si frente a asesinatos en masa uno quisiera colocar exigencias más estrictas respecto a la concretización de las ejecuciones individuales, entonces fracasaría la persecución de crímenes cometidos a escala masiva.”

n. Que precisa Roxin que, no existen causales de exculpación. En especial, no viene en consideración el estado de necesidad como consecuencia de una orden (Befehlsnotstand). Tampoco el acusado mismo lo hizo valer para él. Tal como se dice en la sentencia de la Tercera Sala, él estaba “informado en su totalidad [sobre el suceso en el campo]”. A pesar de ello, con el anhelo de no ser enviado al frente, él se integró en la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que

le fueron impartidas.” Esto corresponde al reconocimiento general de que los miembros del campo no fueron obligados a realizar sus actos. Quien se negaba a cooperar, era enviado al frente. A los líderes les interesaba que el funcionamiento de la maquinaria de muerte no fuera impedido por la oposición de algunos. “Hasta hoy no se ha documentado ningún caso en el que un miembro de la unidad militar o policial alemana hubiere sido condenado a muerte, asesinado o por lo menos maltratado, por haberse negado a ejecutar una orden de asesinato.” Con mayor razón no se puede hablar de un error de prohibición exculpante. Es difícilmente imaginable que quien actúa en un campo de concentración hubiera podido considerar que el asesinato de personas completamente inocentes resultaba conforme al derecho. Pero incluso de haber sido éste el caso – por ejemplo, debido a la autoría estatal –, una semejante “ceguera jurídica” no habría merecido ninguna disminución de la pena. En el caso que aquí se discute el acusado tampoco invocó un error de prohibición.

ñ. Que trazando un razonamiento de lo anterior para el caso de Chile y en especial en esta causa podemos escrutar lo siguiente:

1. Que al 11 de septiembre de 1973 en Chile no había Estado de Derecho. Se había quebrado el orden institucional pues las Fuerzas Armadas y de Orden dieron un Golpe de Estado, derribando al gobierno constitucional que había ascendido al poder.

2. Es decir, se retrocedió de inmediato 200 años, y al retroceder estos 200 años y romper el freno de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 se retrocedió por lo menos otros 2000 años, volviendo a vivir la sociedad chilena bajo autoridades despóticas y arbitrarias. Situación que en la historia abundan. Ahora bien, el Estado de Derecho al menos desde la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789; Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791 y la misma Constitución francesa de 1791 tiene por fin último proteger a la persona, proteger sus derechos, salvaguardar la libertad. Podemos releer los artículos N°2 y N°16 de la citada declaración del Hombre y del Ciudadano. “Artículo 2: La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”. “Artículo 16: Una Sociedad

en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”.

3. Que en este caso, como está documentado en forma amplia públicamente, durante 17 años de quiebre constitucional (régimen militar, dictadura militar), no hubo separación de poderes (al contrario, hubo concentración); se disolvió el poder más significativo de la representación popular como el Congreso; el Poder Judicial no tuvo la independencia necesaria para salvaguardar los derechos de las personas. Luego en esa perspectiva, la autoridad tenía un doble resguardo de los Derechos Fundamentales de las personas. Primero, no había Estado de Derecho, en consecuencia, el cuidado hacia los derechos y libertades de las personas le exigía un estándar mayor. En segundo lugar, reuniendo el poder político y militar en sus manos, cualquier afectación a los derechos de las personas se debía tener una necesaria proporcionalidad y mayor fundamentación, pues de otro modo era sospechosa cualquier actuación pues no se estaba bajo un Estado de Derecho. Lo anterior según publicación del sitio web <https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2024&nr=138703&linked=pm&Blank=1> .

4. En este caso entonces, las personas, como es el caso de Pedro Ñirripil Paillal, Manuel Martínez Ulloa, Octavio Renato Catalán Lincoleo, Tomas Raúl Catalán Lincoleo y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos) **estaban en una alta indefensión**, como puede observarse en las causas citadas por este Ministro en la ponderación de la prueba y en el análisis de las declaraciones indagatorias antes detallada. Sin perjuicio del análisis de la defensa.

17º) **Convenios de Ginebra.** Que a mayor abundamiento, cabe hacer presente que sobre los Convenios de Ginebra, la jurisprudencia ha sido uniforme. Así en causa rol 2182-98 del ingreso de la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, caso Luis Almonacid Dúmenez de fecha 29 de octubre de 2013, en su considerando dieciocho, párrafo 6, señala que: (...) “los Convenios de Ginebra consagran el deber del Estado de persecución de los crímenes de guerra, sin poder "auto exonerarse" a su respecto. Tales convenios entraron en vigor en nuestro ordenamiento en las fechas en que fueron publicados en el Diario Oficial, esto es, entre los días 17 y 20 de abril de 1951. Los aludidos Convenios rigen también respecto de delitos cometidos en caso de conflictos armados sin carácter internacional, situación que,

jurídicamente, existió en Chile a partir del 11 de septiembre 1973, como se ha afirmado por la doctrina; pero que también, aun cuando se estimare que dicha situación es una ficción, los aludidos convenios son aplicables en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° común a todos ellos y ya citado, donde se plasma el principio de humanidad, así como por los principios que emanan de los Convenios de Ginebra son vinculantes por ser parte del derecho internacional consuetudinario, que pertenece a la categoría del *ius Cogens*". En efecto, el artículo 3°, común a los cuatro Convenios, prescribe: "en caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes: 1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquiera otra causa serán en toda circunstancia tratadas con humanidad. Al efecto, están y quedan prohibidas en cualquier tiempo y lugar, respecto de las personas arriba mencionadas: a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, las torturas y suplicios". En consecuencia, las normas sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad confirman el principio esencial en cuanto a que la imputabilidad, el juzgamiento y la condena por tales delitos son procedentes, cualquiera que sea la época en que se hubieren cometido". Se corrobora esta aseveración, por otra parte, en la sentencia de la Excma. Corte Suprema (Rol N°2664-04), en cuanto expresa en su considerando décimo séptimo: (...) "Que debe tenerse presente también la llamada Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de Guerra y de los crímenes de Lesa Humanidad de 1968 que surge en la actualidad con categoría de norma de *ius Cogens* o Principios Generales de Derecho Internacional".

Análisis de la defensa específica.

18°) Que haciéndonos cargo de la defensa de fs. 1.210 a fs. 1.213 (Tomo V) del abogado Rodrigo Cortés Carrasco, en representación del acusado **Domingo Campos Collao**. El Tribunal estará a lo antes razonado, respecto a la ponderación de la declaración indagatoria del acusado y todos los fundamentos pertinentes que

se han dado respecto a la relación y valoración de la prueba general y específica, en especial a lo que antes se detalló y además lo ponderado con precisión en el título de consideraciones generales para la defensa y las absoluciones respecto de algunos delitos. En relación a esta defensa se precisa lo siguiente:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento. La defensa no interpuso excepciones de previo y especial pronunciamiento.

B. Sobre tachas de testigos y objeciones de documentos. La defensa no realizó tachas a testigos en los términos que exige el artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, ni objeto ningún documento en particular.

C. Excepciones de fondo. La defensa alega como excepción de fondo la prescripción de la acción penal. El tribunal haciéndose cargo reflexiona en el siguiente sentido:

C.1. Que en cuanto a la excepción de **prescripción de la acción penal**, el Tribunal reitera que del mérito de proceso los delitos que se le imputan al acusado, atentan contra los derechos humanos, entendiéndose por estos, aquellos que son inherentes a la persona humana y son anteriores al Estado. Este Tribunal ha establecido que corresponden a delitos de lesa humanidad y tiene como uno de sus fundamentos el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Almonacid Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre de 2006, que entre sus considerandos sostiene en el párrafo 114) que: “La Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otra normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder prescripción de la acción penal”. No existiendo en conformidad a lo que dispone la propia defensa en su presentación, ningún otro elemento de prueba que ponderar respecto a esta excepción. En consecuencia, esta excepción de prescripción de la acción penal **se rechaza** y así se dirá en lo resolutivo del fallo.

D. Contestación de la acusación fiscal y particulares. El tribunal estará a lo razonado precedentemente, puntualizando lo siguiente:

D.1. Irretroactividad de la ley penal. Sobre esta materia este tribunal ha mantenido la misma argumentación jurídica en cuanto la Ley N°20.357 que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra en su

Artículo 44 expresa: "Los hechos de que trata esta ley, cometidos con anterioridad a su promulgación, continuarán rigiéndose por la normativa vigente a ese momento. En consecuencia, las disposiciones de la presente ley sólo serán aplicables a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior a su entrada en vigencia". Este Ministro en Visita para los 103 fallos que ha dictado, nunca ha aplicado la ley N°20.357, por lo tanto, la alegación que hace la defensa en cuanto a la ley 20.357 no favorece al acusado por ser más gravosa, no resulta atingente a los hechos. Por lo antes dicho y porque los fundamentos de los delitos de lesa humanidad corresponden a lo que se ha expuesto en el derecho Internacional de los Derechos Humanos, entre aquellos argumentos están los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el que se ha citado y la historia y el origen de los delitos de lesa humanidad, en consecuencia, no resulta atendible el argumento de la irretroactividad de la ley penal.

D.2. Respecto a la falta de legitimación activa. Sobre esta materia la defensa plantea que para el año 1973 no estaban tipificados en la legislación chilena los delitos de apremios ilegítimos y detención ilegal en su carácter de lesa humanidad. El tribunal estará a la argumentación anterior y sobre el origen de los delitos de lesa humanidad, estos se remontan por lo menos al año 1.917, fueron desarrollados de manera más orgánica y sistemática a través de los juicios de Nuremberg, ratificado ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Luego nuevamente argumentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre lo anterior existe una extensa explicación sobre esta materia en considerandos posteriores. El Tribunal estará a esos fundamentos, en consecuencia, no dará lugar a la argumentación de falta de legitimación activa.

D.3 Respecto a que el acusado no ha cometido los hechos imputados. A diferencia de lo que expone la defensa, podemos razonar lo siguiente:

A) Como consta en la certificación de fs. 1.289 y siguientes (Tomo V), que se ha detallado más arriba, desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante el acusado Domingo Campos Collao participó en la comisión de diferentes delitos. Tanto es así que existen las siguientes causas ejecutoriadas: **Causa rol 45.368:** Según sentencia definitiva de primera instancia, de fecha 30 de marzo de 2019; y Sentencia de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 22 de enero de 2020 (Rol 459-2019) y sentencia de la Excm. Corte Suprema Rol 24.387-2020: Se

le condenó, con costas, como autor del delito de secuestro calificado previsto en el artículo 141 del Código Penal (vigente a la época de los hechos) en la persona de José Bernardino Cuevas Cifuentes perpetrado en la comuna de Lautaro , en el mes de noviembre de 1973, a cumplir la pena de **12 años de presidio mayor en su grado medio y las accesorias** de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.; **Causa rol 45.362:** En sentencia de primera instancia, de fecha 16 de febrero de 2018; Sentencia de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 26 de septiembre de 2018 (Rol 320-2018); y Sentencia de reemplazo de la Excma. Corte Suprema de fecha 20 de octubre de 2021 (Rol 28.552-18): Se le condenó, con costas, como autor del delito de secuestro calificado previsto en el artículo 141 del Código Penal (vigente a la época de los hechos) en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao perpetrado en la comuna de Lautaro , el 11 de octubre de 1973, a cumplir la pena de **12 años de presidio mayor en su grado medio y las accesorias** de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. **Causa rol 45.361:** En sentencia de primera instancia, de fecha 23 de diciembre de 2020; Sentencia de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 22 de julio de 2021 (Rol 178-2021): Se condenó, con costas en calidad de encubridor a la pena de **3 años de presidio menor en su grado medio y a las accesorias** de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, por el Secuestro Calificado en la persona de Manuel Elías Catalán Paillal, previsto en el artículo 141 del Código Penal, en su carácter de lesa humanidad. Hecho perpetrado en la comuna de Lautaro en septiembre de 1973. **Causa rol 45.367:** En sentencia de primera instancia, de fecha 22 de septiembre de 2021; Sentencia de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 11 de mayo de 2022 (Rol 958-2021): Se condenó, con costas, calidad de autor a la pena de **12 años presidio mayor en su grado medio y a las accesorias** de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por el secuestro calificado, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Pedro Millalén Huenchuñir, perpetrado en la comuna de Lautaro el día 29 de septiembre de 1973, previsto y sancionado en el artículo 141 del Código

Penal, vigente a la época de los hechos. **Causa rol 45.357:** En sentencia de primera instancia, de fecha 22 de julio de 2021; Sentencia de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 14 de abril de 2022 (Rol 868-2021); sentencia de la Excma. Corte Suprema del 30 de octubre de 2024 (Rol 22.712-2022): Se condenó, con costas, en calidad de autor a la pena de 12 años presidio mayor en su grado medio y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Por los delitos Secuestro Calificado en las personas de Sergio Del Carmen Navarro Schifferli y José Andrés Meliquén Aguilera, perpetrado en la comuna de Lautaro el 04 de octubre de 1973, delitos previstos en el artículo 141 del Código Penal, en su carácter de lesa humanidad. **Causa rol 45.355:** En sentencia de primera instancia, de fecha 29 de abril de 2023; Sentencia de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 26 de octubre de 2023 (Rol 504-2023): Se condenó en calidad de autor a la pena de 12 años presidio mayor en su grado medio y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Por el delito de Secuestro Calificado en la persona de José Ignacio Beltrán Meliqueo, perpetrado en la comuna de Lautaro a contar del 15 de octubre de 1973, delito previsto en el artículo 141 del Código Penal, en su carácter de lesa humanidad.

B) En cambio el tribunal si comparte, de manera parcial, los argumentos de la defensa, como ya se ponderó al analizar las declaraciones indagatorias del acusado Campos Collao, quien no participó en todos los delitos que se investigaron en esta causa, como es el caso de I) Juan Tralcal Colileo, quien si bien sufrió persecución, el tribunal no ha llegado a la convicción que haya sido detenido o apremiado por el acusado Campos Collao. II) Lo mismo puede decirse de la Ceferino Millalén Peralta que si bien sufrió detención y apremios el Tribunal con los medios de prueba legal no ha podido formar la convicción que haya participado el acusado y así se dirá en lo resolutivo.

C) Respecto de los demás delitos de detención y apremios ilegítimos, como se ponderó y relacionó en detalle si existen elementos probatorios y el tribunal llegó a la convicción que el acusado Domingo Campos Collao, ha participado en los delitos de detención y apremios ilegítimos de Pedro Ñirripil Paillal, Manuel Martínez

Ulloa, Octavio Catalán Lincoleo, Tomás Catalán Lincoleo y Daniel Navarro Campos tal como se hizo en el examen detallado al analizar las declaraciones indagatorias del acusado Domingo Campos Collao. Lo anterior como señaló el testigo Héctor Alejandro Pinilla González de fs. 931 a fs. 931 vta. (Tomo IV) y de fs. 932 a fs. 933 (Tomo IV). Que en lo pertinente aduce que al llegar a la Comisaria de Lautaro, fue ingresado inmediatamente a un calabozo, percatándose que en la misma situación se encontraba el Profesor Luis Garrido. A medida que pasaban los días, llegaban más detenidos recordando entre otros al subdelegado de Perquenco de apellido Martínez; uno de Pillanlelbún de nombre Tomas Catalán Lincoleo y su primo Adolfo Catalán Lincoleo. Todas estas personas llegaron detenidas durante los doce días que permaneció recluido en el calabozo de la 1° Comisaria de Lautaro. Narra que el calabozo se encontraba ubicado en el patio, por lo que tenía la visual y pudo ser testigo de las torturas y apremios que los Carabineros cometían, inclusive mantenían un estanque de cemento con agua donde les introducían la cabeza por varios minutos. En las noches hacían correr a los detenidos en el patio y luego los tiraban al suelo y los golpeaban con las culatas de las carabinas. Agrega que en las caballerizas los colgaban y castigaban golpeándolos con un lazo.

E. En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y beneficios de la ley 18.216. En los considerandos posteriores el Tribunal se hará cargo de lo solicitado en la presentación.

F. Prueba del plenario. Que la defensa no rindió prueba en esta etapa procesal.

G. Calificación final: Que del estudio y ponderación de los medios probatorios y del escrito de defensa, este Tribunal llega a la conclusión que la calificación debe modificarse. En consecuencia, como se dirá en lo resolutivo se absolverá al acusado Domingo Campos Collao por los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos de Juan Segundo Tralcal Colileo y Ceferino Millalén Peralta. En cambio, se mantiene la calificación respecto de los delitos cometidos en contra de Pedro Ñirripil Paillal, Manuel Martínez Ulloa, Octavio Catalán Lincoleo, Tomás Catalán Lincoleo y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos.

REFLEXIONES SOBRE LESA HUMANIDAD.

19°) Sin perjuicio del estudio sobre lo constituye delito de lesa humanidad en las consideraciones generales de este fallo, es también necesario hacer las siguientes reflexiones sobre el delito de lesa humanidad que complementan lo anteriormente dicho por este Tribunal:

Que profundizando el origen y concepto del delito de lesa humanidad para un adecuado análisis de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y determinación de la pena, cabe citar la sentencia Almonacid Arellano y otros versus Chile, de fecha 26 de septiembre de 2006 puntualizando lo siguiente:

Párrafo 94. El desarrollo de la noción de crimen de lesa humanidad se produjo en los inicios del siglo pasado. En el preámbulo del Convenio de la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907. Asimismo, el término “crímenes contra la humanidad y la civilización” fue usado por los gobiernos de Francia, Reino Unido y Rusia el 28 de mayo de 1915 para denunciar la masacre de armenios en Turquía.

Párrafo 95. El asesinato como crimen de lesa humanidad fue codificado por primera vez en el artículo 6.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg. Poco después, el 20 de diciembre de 1945, la Ley del Consejo de Control No. 10 también consagró al asesinato como un crimen de lesa humanidad en su artículo II.c. De forma similar, el delito de asesinato fue codificado en el artículo 5.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juzgamiento de los principales criminales de guerra del Lejano Oriente (Estatuto de Tokyo), adoptada el 19 de enero de 1946.

Párrafo 96. Estatuto de Nuremberg jugó un papel significativo en el establecimiento de los elementos que caracterizan a un crimen como de lesa humanidad. Así constituyen actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad. En este sentido se pronunció el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso Prosecutor v. Dusko Tadic, al considerar que “un solo acto cometido por un perpetrador en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil trae consigo responsabilidad penal individual, y el perpetrador no necesita cometer numerosas ofensas para ser considerado responsable. **Todos estos elementos ya**

estaban definidos jurídicamente cuando el señor Almonacid Arellano fue ejecutado.

Párrafo 98. La prohibición de crímenes contra la humanidad, incluido el asesinato, fue además corroborada por las Naciones Unidas. El 11 de diciembre de 1946 la Asamblea General confirmó “los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho Tribunal.

A. Que como ya se ha dicho, por tratarse de un delito de lesa humanidad y no común, sobre esta materia el Tribunal tiene presente lo que en forma reiterada la Excm. Corte Suprema ha manifestado que hechos, como los investigados en esta causa y por los cuales se ha dictado acusación, que corresponden a **detención ilegal y apremios ilegítimos**, son un delitos de tal magnitud que deben ser **imprescriptibles**. Asimismo, dicho ilícito es de aquellos que la doctrina reconoce como de **lesa humanidad** y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 N°1 y 15 N°2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos ratificados por Chile, tienen plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que son imprescriptibles e inamnistiables.

B. Que a mayor ilustración, este Tribunal reiteradamente se ha pronunciado en las siguientes causas sobre el delito de lesa humanidad: 27.525; 27.526; 45.345; 113.990; 113.989; 18.780; 29.877; 45.344; 45.371; 45.342; 29.869; 27.527; 114.001; 113.986; 63.541; 45.363; 114.048; 10.868-P; 114.003; 10.851; 10.854; 45.359; 54.035; 63.535; 45.343; 57.071; 113.997; 45.354; 45.361; 114.000; 4-2010; 45.362; 114.007; 114.042; 113.996; 29.879; 45.365; 45.367; 44.305.

C. Cabe también hacer presente, que el mismo fallo Almonacid Arellano y otros vs Chile dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 119, al analizar el Decreto Ley de Amnistía 2.191 y en lo pertinente manifiesta que “las leyes de amnistía con las características descritas (es decir, como la chilena) conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crimines de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana e indudablemente afectan derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la Convención y genera responsabilidad internacional del Estado. En

consecuencia, dada su naturaleza, el Decreto Ley N°2.191 carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos, que constituyen este caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile”.

D. Sobre la misma materia del delito de lesa humanidad, cabe recordar lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso ya señalado, **“Almonacid Arellano y otros versus Chile”**, en que reitera, a propósito de las leyes de amnistía, entre otros aspectos la doctrina centrada en la sentencia caso **“Barrios Altos versus Perú”** de 14 de marzo de 2001, en cuanto la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos. En lo pertinente, el fallo “Almonacid Arellano y otros versus Chile” afirma lo anterior en los siguientes párrafos: 82.5, 82.6, 82.7, 111 y en especial en el párrafo 119 donde la Corte expresa que las leyes de amnistía, como la chilena, conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana y afectan los derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la convención y genera responsabilidad general del Estado, agregando que el Decreto Ley 2.191, carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para las investigaciones de los hechos, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile. En la misma línea, para sostener como lo ha hecho la Excma. Corte Suprema y este Tribunal, la Corte Interamericana en el fallo aludido manifestó lo siguiente:

82.5. La época más violenta de todo el período represivo corresponde a los primeros meses del gobierno de facto. De las 3.197 víctimas identificadas de ejecuciones y desapariciones forzadas que ocurrieron en todo el gobierno militar, 1.823 se produjeron en el año 1973. Por su parte, “el 61% de las 33.221 detenciones que fueron calificadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, corresponde a detenciones efectuadas en 1973”. Esta misma Comisión señaló que

“más del 94% de las personas que sufrieron prisión política” dijeron haber sido torturadas por agentes estatales.

82.6. Las víctimas de todas estas violaciones fueron funcionarios destacados del régimen depuesto y connotadas figuras de izquierda, así como sus militantes comunes y corrientes; jefes y dirigentes políticos, sindicales, vecinales, estudiantiles (de enseñanza superior y media) e indígenas; representantes de organizaciones de base con participación en movimientos de reivindicaciones sociales. “Muchas veces [las] relaciones políticas se deducían de la conducta „conflictiva” de la víctima en huelgas, paros, tomas de terrenos o de predios, manifestaciones callejeras, etc.” Las ejecuciones de estas personas “se insertan dentro del clima reinante [...] de hacer una “limpieza” de elementos juzgados perniciosos por sus doctrinas y actuaciones, y de atemorizar a sus compañeros que podían constituir una eventual “amenaza”. No obstante, en la época inicial de la represión existió un amplio margen de arbitrariedad a la hora de seleccionar a las víctimas.

82.7. En lo que se refiere a las ejecuciones extrajudiciales –crimen cometido en el presente caso, por lo general, las muertes fueron de personas detenidas y se practicaban en lugares apartados y de noche. Algunos de los fusilamientos al margen de todo proceso fueron, sin embargo, fulminantes y se efectuaron al momento de la detención. [...] En las regiones del sur [del país] la persona, sometida ya al control de sus captores, [era] ejecutada en presencia de su familia”.

E. En el mismo sentido cabe también hacer presente, que el **fallo pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha 15 de noviembre de 2021, en caso Maidanik y Otros Vs. Uruguay**, mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de la República Oriental del Uruguay (en adelante “el Estado” o “Uruguay”) por las violaciones a distintos derechos humanos, en perjuicio de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Asteazu, víctimas de desapariciones forzadas que principiaron durante la dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985, así como de sus familiares, desatándose los siguientes párrafos:

Párrafo 206: ...“en relación tanto con actos de desaparición forzada como respecto a otras graves violaciones a derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, en la misma oportunidad este Tribunal señaló que “es incompatible

con las obligaciones internacionales de un Estado Parte en la Convención que éste deje de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos que por su naturaleza sean **imprescriptibles**, en perjuicio del derecho de las víctimas de acceso a la justicia, amparándose en una situación de impunidad que sus propios poderes y órganos hayan propiciado”...

Párrafo 211: “El Estado debe asegurar que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes ex officio, contando, para ese cometido, con las facultades y recursos necesarios²³⁹, inclusive logísticos y científicos, para recabar y procesar las pruebas, así como para acceder plenamente a la documentación e información pertinente y para llevar a cabo las actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer lo sucedido a las personas desaparecidas y a las víctimas de ejecución extrajudicial”.

Párrafo 246: “La **Corte** recuerda que, al decidir sobre el caso Gelman Vs. Uruguay determinó que “la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”. Por ello, dispuso que “el Estado deberá asegurar que [dicha ley] no vuelva a representar un obstáculo [...] para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de [...] graves violaciones de derechos humanos [...] acontecidas en Uruguay”.

Párrafo 251: “Considerando lo anterior, la Corte entiende necesario recordar al Estado que: cuando un Estado es Parte en un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos al tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, de modo que decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de las obligaciones internacionales. Es decir, todas las autoridades estatales, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado,

sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. [...]. Por el solo hecho de ser Parte en la Convención Americana, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por lo cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana”.

F. En consecuencia, cabe reflexionar lo siguiente:

F.1. La lesa humanidad nos remite a lo más profundo de la mujer y del hombre, puesto que sostiene todos nuestros valores. Además es una verdadera exigencia social y civilizadora.

F.2. La lesa humanidad modela nuestro habitar. Sensibiliza nuestro marco de acción.

F.3. La lesa humanidad insufla, canaliza, transforma y dinamiza nuestro Derecho. Dotándolo de nuevas herramientas y concepciones. Le fija los límites infranqueables ante los cuales mujeres y hombres deben actuar y detenerse.

F.4. La lesa humanidad como un muro invencible, rechaza con toda fuerza la irracionalidad y arbitrariedad.

F.5. La lesa humanidad vence, derrota a la prescripción (en el más amplio sentido), a las simples legalidades del Derecho penal liberal (prescripción, tipos, participación, penas), puesto que, no tienen la capacidad de resolver esos dilemas jurídicos y sociales.

F.6. La Lesa humanidad es la conciencia robusta de la humanidad. Nos muestra el ideal de mujer y hombre, de humanidad.

F.7. La lesa humanidad, con una resonancia infinita, atraviesa todo el universo jurídico y nos sitúa en lugar correcto y verdadero. Esto es, como honestamente debe funcionar nuestra convivencia en la sociedad.

G. Que también es relevante para esta causa, lo que señala dicha Corte Interamericana en relación a la jurisdicción militar, **párrafo 131**, donde la Corte indica que “El Tribunal ha establecido que en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas Militares. Por ello, sólo se debe juzgar a Militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Al respecto, la Corte ha dicho que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”. Se hace presente que en ese proceso no consta además, que la Justicia Militar hubiere siquiera iniciado alguna investigación sobre estos hechos, lo que revela la actitud del Estado de mantener la impunidad sobre el delito investigado en esta causa.

H. Cabe puntualizar que en el caso de “**Hilario Barrios Varas**” (**causa rol 25.657-14 de la Excma. Corte Suprema**), en los considerandos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno se dan todos los elementos que ha descrito la Excma. Corte Suprema, esto es, en síntesis, una represión generalizada del régimen de la época, una hiperseguridad al margen de toda condición de la persona humana, una conformidad con la impunidad de los actos cometidos por los agentes estatales, además, con el amedrentamiento a la población civil. Lo cierto es que los hechos calzan con lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso citado, lo que ha fallado en forma robusta la Excma. Corte Suprema y éste Ministro Visitador corresponde sin duda a un delito de lesa humanidad. **Delito que es imprescriptible.**

20°) Adhesión a la acusación. Que el abogado David Morales Troncoso en representación de Pedro Ñirripil Paillal, Juan Segundo Tralcal Colileo, Juana del Carmen Millalén Lepilao- Tralcal y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos de fs. 1170 a fs. 1179 (Tomo IV), se adhiere a la causa fiscal por cuanto coincide en la calificación jurídica y participación del acusado Domingo Campos Collao.

21°) Análisis de la adhesión a la acusación fiscal. Que del análisis de la adhesión a la acusación fiscal fs. 1170 a fs. 1179 (Tomo IV), se observa que

coincide en los hechos y calificación jurídica que ha hecho el Tribunal, el Tribunal nada tiene que reflexionar.

Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

22°) Atenuantes de responsabilidad penal. Que el abogado Rodrigo Cortés Carrasco en representación de Domingo Campos Collao de fs. 1.210 a fs. 1.213(Tomo V), solicita se le reconozcan las circunstancias atenuantes de responsabilidad contempladas en los artículos **11 N°6 y 9 del Código Penal**.

23°) Que el Tribunal haciéndose cargo, reflexiona de la siguiente manera:

A. Que en relación a la atenuante de responsabilidad penal del artículo **11 N°6** del texto citado: Que analizando la solicitud de la defensa antes indicada, **se da lugar** a esta minorante, en calidad de simple, por no existir mérito para otra calificación, toda vez que, de su extracto de filiación y antecedente citado precedentemente, se puede observar que no tenía antecedentes penales pretérito, todos a la época de los hechos, esto es, a septiembre de 1973. Se califica de simple porque razonar de otra manera en relación a cualquier persona que reside en Chile, se incurriría en una discriminación arbitraria, puesto que solo los que pueden acceder a educación, formación y perfeccionamiento se les califica; pero los que no puede hacer eso (que hay muchas personas en Chile) no se les podría calificar, lo que sin duda constituye una discriminación sobre la materia.

C. Que en relación a la atenuante de responsabilidad penal del artículo **11 N° 9 del Código Penal**, no se dará lugar respecto del acusado de Domingo Antonio Campos Collao, toda vez que como se ha razonado precedentemente en la ponderación y relación integral de toda la prueba del proceso no es posible sostener que dicho acusado haya colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, en realidad ha sido todo lo contrario, han pasado más de 50 años y con otros elementos probatorios, no con los dichos del encausado se ha logrado determinar los hechos y la participación del responsable. El hecho de que el acusado concurra a estrados a prestar declaraciones no es ninguna colaboración sustancial, sino que es una carga u obligación que tiene todo ciudadano, respecto a las reglas jurídicas en materia procesal penal. En consecuencia, **no se hace lugar** a la atenuante solicitada por el acusado.

24°) En la determinación de la pena. Se conjugan varios factores que el sentenciador debe evaluar, entre ellos siguiendo a los autores Juan Pablo Mañalich en su obra Discrecionalidad Judicial en la determinación de la pena, en el libro de Defensoría Penal Pública, 07 de octubre de 2010; además en Memoria de Prueba, del libro determinación de la Prueba en Chile, Facultad de Derecho Universidad de Chile, 2007, Carolina Acevedo, Ángela Torres; Guillermo Oliver en Algunos problemas de aplicación de reglas de determinación legal de la pena en el Código Penal Chileno; René Pica Urrutia, Reglas para la aplicación de las penas. Las que se rigen por los artículos 10, 11, 12, 18 y siguientes, 50 y siguientes, 74 y 103 del Código Penal, 509 del Código de Procedimiento Penal, 164 del Código Orgánico de Tribunales. En lo que se deduce lo siguiente

- A. En primer lugar, la pena señala por la ley al delito.
- B. Grado de ejecución del delito.
- C. Forma de participación en el delito.
- D. Concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.
- E. Eximentes de Responsabilidad penal.
- F. Extensión del mal causado.
- G. Que finalmente la situación de los artículos 74 del Código Penal y 509 del Código de Procedimiento Penal, ello sin perjuicio de otras circunstancias especiales como eximentes incompletas, situación de los menores de edad.
- H. Que asimismo cabe hacer presente que tratándose en este caso de delitos que su penalidad consta de dos o más grados, se deberá aplicar el artículo 68 del texto punitivo, y si no es así el artículo 67 del texto citado. En segundo lugar, la determinación de la pena regida por los artículos 50 y siguientes del mismo texto.
- I. Que por otro lado tratándose en este caso de delitos de lesa humanidad como se explicará con posterioridad, atendida la gravedad y en consideración a la proporcionalidad de las penas, no procede que los encartados, aparte por la extensión de la pena, obtengan algún beneficio de la Ley 18.216 atendido a los estándares normativos e interpretativos existentes en la materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- J. Que también cabe precisar, que esta es la última etapa en la determinación de la pena, esto es el equilibrio adecuado entre el artículo 74 del

Código Penal y el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal (si fuera pertinente). Que de igual forma se ha razonado, debe estarse a los estándares normativos e interpretativos sobre Derechos Humanos de la Corte Interamericana sobre esta materia, en especial el sentenciador tiene que considerar la gravedad de los hechos y la proporcionalidad de la pena, pues se trata de delitos de lesa humanidad.

25°) Que conforme a la calificación jurídica precedente y sus razonamientos posteriores, los hechos materia de la causa corresponde a la figura típica de los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos en contra de Pedro Ñirripil, Manuel Martínez Ulloa, Octavio Renato Catalán Lincoleo, Tomás Raúl Catalán Lincoleo y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, en la comuna de Lautaro, desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante. Delitos previstos y sancionados en los artículos **148 y 150 N°1 del Código Penal**, en su carácter de **lesa humanidad**, vigente a la época de los hechos.

26°) Que Domingo Antonio Campos Collao, está acusado como **autor** de los delitos de **detención ilegal y apremios ilegítimos** en las personas de Pedro Ñirripil Paillal, Manuel Martínez Ulloa, Octavio Renato Catalán Lincoleo, Tomas Raúl Catalán Lincoleo y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, perpetrados en la comuna de Lautaro, desde el 11 de septiembre de 1973, en adelante. Respecto a los cuales se razona de la siguiente manera:

A. Que el delito de detención ilegal tiene la pena asignada de reclusión menor y suspensión del empleo en su grado mínimo a medio más las accesorias legales.

B. Que el delito de apremios ilegítimos tiene la pena asignada de presidio o reclusión menor y suspensión en cualquiera de sus grados más las accesorias legales.

C. Que la pena imponer para el acusado Domingo Campos Collao conforme al análisis de las circunstancias atenuantes, le beneficia la minorante del artículo 11 N°6 del Código Penal y no le perjudica ninguna agravante. Por lo tanto y atendido a lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal no se le puede aplicar la pena en su grado máximo. En consecuencia:

C.1 Por el delito de **detención ilegal** en las personas de Pedro Ñirripil Paillal, Manuel Martínez Ulloa, Octavio Renato Catalán Lincoleo, Tomas Raúl

Catalán Lincoleo y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, se aplicarán cinco penas de reclusión menor en su grado mínimo, partiendo cada pena en 300 días, más las accesorias legales.

C.2 Por los delitos de **apremios ilegítimos** en las personas Pedro Ñirripil Paillal, Manuel Martínez Ulloa, Octavio Renato Catalán Lincoleo, Tomás Raúl Catalán Lincoleo y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos se aplicarán cinco penas de presidio menor en su grado medio, partiendo cada pena en 400 días, más las accesorias legales.

27°) Que analizando los artículos 74 del Código Penal y 509 del Código de Procedimiento Penal, le resulta más favorable al sentenciado cumplir la pena respecto de los delitos de la siguiente forma:

a) Detención ilegal: si se aplica, por la reiteración, el artículo 509 del Código citado, la pena debe aumentar a presidio menor en su grado medio, esto es, de 541 días a 3 años. Si se aplica el artículo 74 del Código citado, debe cumplir 5 penas de 300 días, lo que da un total de 1500 días, que dividido por el año (365) nos da 4,1 años. En consecuencia, le es más beneficioso aplicar el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, quedando como **pena única la de 3 años de reclusión menor en su grado medio** por los cinco delitos de detención ilegal, más las accesorias legales.

b) Apremios ilegítimos: si se aplica el artículo 509 del Código citado, se debe aumentar un grado por la reiteración, quedando en presidio menor en su grado máximo, esto es de 3 años y un día a 5 años. Si se aplica el artículo 74 del Código Penal, debe cumplir 5 penas de 400 días, lo que da un total de 2000 días, que dividido por 365 nos otorga 5,4 años. En consecuencia, le es más beneficioso aplicar el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, quedando como **pena única la de 5 años de presidio menor en su grado máximo**, por los cinco delitos de apremios ilegítimos, más las accesorias legales.

28°) Beneficios de la ley 18.216 y sus modificaciones posteriores. Que atendida la extensión de la pena impuesta y las razones que se van a exponer a continuación, no procede ningún beneficio de la ley N°18.216 aplicable a los acusados. Sobre esta materia y aun en el caso que posteriormente el acusado tuviera una pena inferior de igual forma no puede acceder a cumplir la pena en libertad. En efecto con un mejor estudio y ponderación actualizada de los

estándares normativos e interpretativos en materia de Derechos Humanos es necesario hacer las siguientes reflexiones, como el Tribunal lo ha realizado últimamente en las causas: rol 2-2013 ingreso de la Ilma. Corte de Apelaciones de Valdivia; rol 45.361 ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro; rol 114.051 ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco; rol 45.357 ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro; rol 114.103 ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco; rol 45.367 ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro; rol 114.017 ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco; rol 2-2012 ingreso del Juzgado de Letras de Pucón; rol 114.034 ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco; rol 10.914-P del Juzgado del Crimen de Puerto Montt; rol 113.969 ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco; rol 25-2011 ingreso de la Corte de Apelaciones de Valdivia.

A. Que continuando con el racionamiento anterior, podemos indicar un **estándar en Derechos Humanos** corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5 inciso 2° de nuestra Constitución que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales (García Pino, Gonzalo: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Ministro que, a partir de la normativa aludida, esta deber ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre determinado estándar normativo.

B. Que sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de fecha 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 124, señaló: *“La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los*

efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos”. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte IDH, intérprete última de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

C. Que esta institución denominada **control de convencionalidad** puede ser definida en término simples como el mecanismo que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos **tanto en sede contenciosa como consultiva** para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte IDH (García, Gonzalo (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: Nogueira, Humberto (coord.) “La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Santiago de Chile, Librotecnia, pp.356-357).

D. Que para aplicar entonces el control de convencionalidad, hay que observar por su puesto la **Convención Americana sobre Derechos Humanos en especial los artículos N°1.1 y N°2**. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

E. Que del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna opinión consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un **estándar normativo y/o interpretativo en materia de Derechos Humanos**. En este caso en relación a la aplicación de sanciones y posibles beneficios respecto a los delitos que consistan en graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito de lesa humanidad. En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia. Siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

a. **Caso Barrios Altos versus Perú**, de 14 de marzo de 2001, en el párrafo 41, expuso que: *“Considera inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”*.

b. **Caso Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, párrafos 111 a 114; la Corte IDH ha señalado: (...) *“Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes”*. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la **impunidad**, que la Corte IDH ha definido como: *“la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”*. Asimismo, la Corte IDH ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Al respecto, este Tribunal ha señalado que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares

de un caso dado, resulten ilusorios. Este Tribunal ya había señalado en el **Caso Barrios Altos** que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Resulta útil destacar también que el propio Estado en el presente caso reconoció que en “principio, las leyes de amnistía o auto amnistía son contrarias a las normas de derecho internacional de los derechos humanos”. Por las consideraciones anteriores, la Corte IDH estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía.

c. Caso la Masacre de la Rochela versus Colombia, Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, párrafo N° 191, señaló de manera expresa: (...) *“que en la investigación de graves violaciones a los Derechos Humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia”*.

d. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú, de 10 de julio de 2007, en su párrafo 190, puntualiza: “La Corte recuerda que en cumplimiento de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos, el Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que impidan la debida investigación de los hechos, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita dicha investigación y los procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los presentes. El Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de derecho interno para eximirse de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar penalmente a los responsables de los hechos cometidos en perjuicio de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz.” En particular, la Corte IDH recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía, ni disposiciones de prescripción, ni otras

excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables.

e. Caso Masacre de las Dos Erres versus Guatemala de 24 de noviembre de 2009, en el párrafo 129, señala que ante esta situación: “la Corte reitera su jurisprudencia constante sobre la incompatibilidad de figuras como la prescripción y la amnistía en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, que de manera clara ha establecido que: El Estado debe garantizar que los procesos internos tendientes a investigar y [eventualmente] sancionar a los responsables de los hechos de este caso surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad”. “En ese sentido, el Tribunal ya ha señalado que [...]son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” [...] ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos[...]. En particular, al tratarse de graves violaciones de derechos humanos el Estado no podrá argumentar prescripción o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber”.

f. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha Do Araguaia”) versus Brasil de 24 de noviembre de 2010 en el párrafo 155, indica: (...) “Adicionalmente, el mismo Grupo de Trabajo manifestó su preocupación que en situaciones post-conflicto se promulguen leyes de amnistía o se adopten otras medidas que tengan por efecto la impunidad, y recordó a los Estados que: es fundamental adoptar medidas efectivas de prevención para que no haya desapariciones.” Entre ellas, destaca [...] “el procesamiento de todas las personas acusadas de cometer actos de desaparición forzada, la garantía de que sean enjuiciadas ante Tribunales civiles competentes y que no se acojan a ninguna ley especial de amnistía o medidas

análogas que puedan eximir las de acciones o sanciones penales, y la concesión de reparación e indemnización adecuada a las víctimas y sus familiares”.

F. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia, ha sostenido este **estándar en materia de Derechos Humanos** en cuanto tratándose de delitos de graves violaciones a los Derechos Humanos (entre otros el delito lesa humanidad), los responsables deben ser sancionados, la pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos perpetrados por la intervención de Agentes del Estado. Del mismo modo, se debe evitar cualquier práctica o aplicación de normativa interna que restrinja los efectos de la sentencia u otorgue algún beneficio de cualquier tipo para el cumplimiento de la sentencia.

Del mismo modo que las penas resulten ilusorias. Todo ello por tratarse de graves violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por Agentes del Estado. Lo anterior, es totalmente diferente al tratamiento penal y procesal penal de la delincuencia común.

G. Que sobre esta materia, esto es, de los beneficios que pueden otorgarse a los responsables de los ilícitos penales (tratándose de la delincuencia común), el legislador chileno ya avanzó sobre la materia en la **Ley N°18.216**. En efecto en esta ley, si bien el **artículo 33 de la ley antes mencionada**, permite al Tribunal, previo informe favorable de Gendarmería, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad reemplazándola por el régimen de libertad vigilada intensiva, previo los requisitos legales, este artículo debe relacionarse con el **artículo 1 y siguientes de la citada ley**. En efecto el **artículo 1** de la señalada ley indicada, en forma categórica y expresa, prescribe: “No procederá la facultad establecida en el inciso precedente (otorgamiento de los beneficios de Remisión condicional, Reclusión parcial, Libertad vigilada, Libertad vigilada intensiva, Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34 y Prestación de servicios en beneficio de la comunidad) ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 150 A, 150 B, 361, 362, 372 bis, 390 y 391 del Código Penal”.

H. En esa idea de razonamiento, si bien la **Ley N°18.216, se refiere a los ilícitos penales de la delincuencia común**. Manifiesta la voluntad del Estado de Chile de negar cualquier tipo de beneficios (en forma acotada) para los autores

consumados de determinados delitos, en este caso **detención ilegal y apremios ilegítimos**. En todo caso si ello no estuviera consagrado en la legislación chilena para todos los responsables de los delitos de lesa humanidad (en la época de los hechos investigados) debemos observar la jurisprudencia de la Corte IDH antes citada, según se ha relacionado. En todo caso- como expone Nogueira-, (...) “debe aplicarse el control de convencionalidad cuando el derecho interno se encuentra por debajo del estándar mínimo asegurado convencionalmente. Considerando los artículos N°1, N°2 y N°29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además los artículos N°26, N°31.1 y N°27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969”. (Nogueira, Humberto (2014): “Sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, control de convencionalidad y aplicación por parte de las jurisdicciones nacionales” en: Nogueira, Humberto (“coord.”). “La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, Santiago de Chile, Librotecnia, pp. 395-420).

29°) En consecuencia, aplicando el **control de convencionalidad**, según lo dispuesto por la Corte IDH, en relación a los estándares normativos e interpretativos sobre Derechos Humanos para los efectos de la sanción y cumplimiento de las penas, en relación a los ilícitos de graves violaciones a los Derechos Humanos, entre ellos el delito lesa humanidad (como es el caso en estudio). No es posible (además de lo antes razonado y de los estándares normativos) otorgarles algún beneficio de la ley N°18.216 a los acusados, en esta causa y así se dirá en lo resolutivo. De esta forma el control de convencionalidad se manifiesta como una obligación de garantía, es decir, este control se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. Este control es una expresión de la obligación de garantía y de disponer medidas en el ámbito interno. Esto implica que el control de convencionalidad cristaliza estas obligaciones para toda autoridad pública. Más aun, dicho control desde una mirada más amplia se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de

conducta internacionales. (Núñez, Constanza (2017):” El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Argentina, ARA, Editores. p. 36). Lo anterior ha sido además ratificado por la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 4 de marzo de 2020, en causa **rol N°1.052-2019** (en relación a causa **rol 113.999** de este Tribunal); en cuanto la no concesión de beneficios de la ley 18.216 a aquellas personas que hubieran participado en graves violaciones a Derechos Humanos (lesa humanidad). Lo anterior ha sido además ratificado por la **ltma. Corte de Apelaciones de Temuco, el 04 de marzo de 2020, en causa rol 1.052-2019**, en cuanto la no concesión de beneficios de la ley 18.216 a aquellas personas que hubieran participado en graves violaciones a derechos Humanos (lesa humanidad). Lo mismo en causa **rol 114.034** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de apremios ilegítimos de Luis Alberto Chihuailaf Arriagada, no obstante las personas ser condenadas a tres años de presidio menor en su grado medio están cumpliendo pena efectiva, no otorgándosele beneficio. **En consecuencia, no es posible otorgar al acusado, ningún beneficio y deberá cumplir la pena efectiva impuesta como se dirá en lo resolutivo.**

30°) Que en cuanto a los informes solicitados respecto al acusado Domingo Campos Collao de fs. 1254 (Tomo V) al Centro de Reinserción Social y Servicio Médico Legal, estos no han sido remitidos al Tribunal. No obstante, ello no es óbice para que el Tribunal en virtud de la ley 18.216 pueda dictar el fallo.

En cuanto a la acción civil.

32°) Que de **fs. 1170 a fs. 1179 (Tomo V)** el abogado David Alberto Morales Troncoso en representación de **1) Pedro Ñirripil Paillal, 2) Juan Segundo Tralcal Colileo, 3) Juana del Carmen Millalén Lepilao- Tralcal y 4) Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos**, deducen demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por Diego Acuña Gálvez ambos domiciliados en calle Prat N° 847, oficina 202, Temuco, solicitando se condene al Fisco de Chile, representado por el abogado procurador Fiscal, Diego Acuña Gálvez, a pagar la suma total de \$300.000.000(trescientos millones de pesos), que se desglosan de la siguiente manera: \$100.000.000 (cien millones de pesos) para los demandantes civiles Pedro Ñirripil Paillal y Juan Segundo Tralcal

Colileo y \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos) para los demandantes civiles, a saber Juana del Carmen Millalén Lepilao- Tralcal y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, monto que deberá ser pagado con reajustes e intereses desde la fecha de la notificación de la demanda hasta el completo pago, más las costas del juicio o lo que Ssa., estime conforme a justicia. La cual para un mejor entendimiento se estructura de la siguiente manera:

A. Hechos. Reproduce en lo pertinente el considerando 33 y 34 del auto acusatorio.

B. En cuanto al Derecho.

B.1 El delito. Que los hechos precedentes constituyen los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos, en su carácter de lesa humanidad, previsto y sancionado en los artículos 148 y 150 N°1 del Código Penal.

B.2. Fuentes de la responsabilidad. Esta parte cita lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 38 de la Constitución Política de la República de Chile, citando al respecto un fallo de la Excelentísima Corte Suprema, el cual consagra que la responsabilidad de Estado es de carácter genérico. Por lo que, a su juicio, la responsabilidad del Estado proviene esencialmente de disposiciones constitucionales y de los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. En este sentido, también hace referencia al inciso 2° del artículo 5 de la Constitución, por lo que cualquier órgano del Estado se encuentra obligado a respetar los derechos esenciales de la naturaleza humana, norma constitucional que fue quebrantada por el Estado de Chile a través de sus agentes. Ahora bien respecto a la fuente de la obligación civil particular para delitos que importen una violación a los derechos humanos no solo se encuentra en la Constitución Política de la República de Chile y en la Ley de Bases de la Administración, según se señaló anteriormente, sino que también en los Principios Generales del Derecho Humanitario y de los Tratados Internacionales sobre la materia, para este caso la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, de tal suerte que las normas de derecho común interno se aplicarán sólo si no están en contradicción con ellas, tal es el caso del artículo 2329 de nuestro Código Civil que se encuentra en armonía con el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969,

ratificada por el Estado de Chile, citando fallos de la Excelentísima Corte Suprema al respecto.

B.3 La imprescriptibilidad de la acción civil deducida en autos. Cita jurisprudencia al respecto, en lo pertinente destacar que de acuerdo a un fallo del 15° Juzgado Civil de Santiago proclama que la fuente de la obligación de reparación del Estado se funda en principios generales del derecho humanitario y tratados internacionales que deben primar por sobre las codificaciones civilistas. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la misma línea de razonamiento puntualiza sentencias dictadas por este Tribunal.

B.4 Competencia de este Tribunal para conocer de la presente de manda de indemnización de perjuicios deducida. Cita el artículo 10 y 431 del Código de Procedimiento Penal, disposiciones legales que a su juicio, dejan muy en claro y disipa toda duda en cuanto a que en el proceso penal se puede deducir una acción que busque reparar los efectos patrimoniales del hecho punible, como es la acción de indemnización de perjuicios que se deduce en este acto. Así, según su criterio, la norma señala claramente que se puede discutir ante el juez en lo penal toda consecuencia patrimonial, sea contra quien sea que se dirija la acción destinada a hacerla valer, fundándose en fallos de la Excelentísima Corte Suprema al respecto.

B.5 Compatibilidad de la indemnización reclamada con otros beneficios otorgados. Según esta parte, la indemnización de perjuicios pretendida en autos no es incompatible con otros beneficios otorgados por el Estado de Chile, puesto que el objeto de toda acción civil es la obtención de una compensación íntegra de los daños ocasionados por el actuar de los agentes del Estado de Chile, ya que así lo demanda la aplicación de la buena fe de los tratados internacionales suscritos por Chile, así como la interpretación de las normas de los Cogens, compatibilidad que ya ha sido declarada según los fallos que cita de la Excelentísima Corte Suprema al respecto.

C. El daño provocado y el monto de la indemnización. Que en relación a los demandantes:

C.1 Demandantes Pedro Ñirripil Paillal y Juan Segundo Tralcal Colileo, relatan vivencias una vez que fueron detenidos ilegalmente por funcionarios de

Carabineros de Chile siendo interrogados mediante apremios ilegítimos por funcionarios de la unidad. Lo precedente ha generado la impotencia y angustia generada de la negación de justicia y reparación que por años le fue esquiva.

C.2 Demandante civil doña Juana del Carmen Millalén Lepilao-Tralcal, hija de don Ceferino Millalén Peralta, este último detenido ilegalmente y objeto de apremios ilegítimos tales como aplicación de corriente en todo su cuerpo. La demandante de 8 años a la época de los hechos vivía con su padre en una zona rural de Lautaro quien era su figura de protección, seguridad, cariño y sustento económico, provocándole un daño moral a la demandante los hechos narrados.

C.3 Demandante civil don Daniel Edgardo Navarro Campos, de quince años a la época de los hechos quien junto a su tío fue sacado violentamente, mediante apremios consistentes en golpes, pies, puños y culletazos de fusil por Carabineros de Lautaro, debiendo a su corta edad escapar de la ciudad por el temor de ser secuestrado como su tío.

33°) Que de fs. 1.190 a fs. 1207 (Tomo V), contesta la demanda civil el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Diego Acuña Gálvez, deducida por el abogado David Morales Troncoso en representación Pedro Ñirripil Paillal, Juan Segundo Tralcal Colileo, Juana del Carmen Millalén Lepilao- Tralcal y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos; en la cual solicita se condena al fisco por indemnización de perjuicios la suma de \$300.000.000 (trescientos millones de pesos) a razón de \$100.000.000 (cien millones de pesos) para los dos demandantes civiles primeramente mencionados y la suma de \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos) para los dos restantes actores, con reajustes, intereses legales y costas del juicio. Esta parte solicita que la mencionada demanda sea íntegramente **rechazada**, por los siguientes fundamentos:

A. Falta de legitimación activa de la demandante doña Juana Millalén Lepilao-Tralcal en cuanto alega ser víctima por repercusión en calidad de hija de la víctima directa don Ceferino Millalén Peralta. Que la demandante deduce la acción por rebote de la detención ilegal y apremios ilegítimos sufridos por su padre, no ella misma. Tampoco figura como víctima en la Comisión Valech. Por tanto, no reviste la calidad de víctima. Urde que la situación de la especie no puede considerarse englobada en ninguno de los casos que la doctrina y jurisprudencia ha planteado como causante de daño reflejo. Se refiere a jurisprudencia francesa.

B. En subsidio, excepción de reparación integral. Improcedencia de la indemnización demandada por doña Juana Millalén Lepilao-Tralcal, por limitación de la justicia transicional y por haber sido ya reparada en la forma que se expresará: Comienza aludiendo a la Justicia Transicional, que desde esa óptica se puede mirar en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria. Que en ese sentido, las negociaciones del Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Aduce a los costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones las que detalla y que ha significado a diciembre de 2019 la suma total de \$992.084.910.400. En lo pertinente trae a colación normas, entre ellas la ley 16.744. Concluye que es improcedente, porque existe un sistema legal de reparación pecunaria en el que se excluyó a los parientes, siendo titulares de la acción de reparación solo aquellos afectados directamente por el daño.

C. Excepción de reparación satisfactiva: Improcedencia de las indemnizaciones reclamadas por haber sido ya reparados los demandantes en conformidad a las leyes de reparación.

a. Marco general sobre las reparaciones ya otorgadas. Comienza aludiendo a la Justicia Transicional, que desde esa óptica se puede mirar en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria. Que en ese sentido, las negociaciones del Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos.

b. La complejidad reparatoria. Comienza citando a Lira. Posteriormente señala que la llamada Comisión Verdad y Reconciliación o también llamada “Comisión Rettig”, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación”. Dicho informe derivó en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, reflexiona respecto al mensaje de dicho proyecto de ley. Asumida esa idea reparatoria, tanto la Ley 19.123 como las leyes 19.980, 19.992 y otras normas jurídicas conexas, han establecido diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación exhibiendo

aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. En ese sentido, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones a saber: **a) mediante transferencias directas de dinero.** Aduce a los costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones las que detalla y que ha significado a diciembre de 2019 la suma total de \$992.084.910.400; **b) Reparaciones mediante la asignación de nuevos derechos.** Que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase. Señalando la normativa al respecto y las múltiples prestaciones con los desembolsos asumidos por el Estado en esas materias; **c) Reparaciones simbólicas:** Que al igual que todos los demás procesos de justicia transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a la víctima de Derechos Humanos se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Ejemplifica algunas medidas.

c. La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas. Que todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de Derechos Humanos no solo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con nuestra realidad financiera

que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales sufridos a consecuencia de las violaciones a los Derechos Humanos. Al efecto, funda sus argumentos citando fallos de la Excma. Corte Suprema, la Corte Interamericana de Justicia, normativa internacional y doctrina. cabe indicar que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, citando al efecto el caso Almonacid, jurisprudencia y doctrina atingente. Estando entonces la acción deducida los actores que invocan la calidad de cónyuge e hijos de la víctima directa, respectivamente basada en los mismos hechos y pretendiendo ella indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cumulo de

acciones reparatorias, ya enunciadas, es que se opone la excepción de reparación y pago por haber sido ya indemnizada en conformidad a las leyes 19.123 y 19.980.

C. Excepción de prescripción extintiva:

a. Normas de prescripción aplicables. En subsidio opone la excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios deducida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con el artículo 2.497 del mismo Código; por encontrarse prescrita la demanda, en todas sus partes. Apunta que se persigue la responsabilidad extracontractual del Estado por la detención y apremios ilegítimos que en septiembre de 1973, tras el golpe de estado, habrían padecido los señores Pedro Ñirripil Tralcal, Juan Segundo Tralcal Colileo y Ceferino Millalén Peralta, en tanto la detención de Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos que tuvo lugar el 04 de octubre de 1973. La prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las víctimas o familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, o aun, hasta la entrega pública del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 1990 y el 4 de marzo de 1991, respectivamente, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 03 de enero de 2025, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En consecuencia, oponen la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2.332 del Código Civil. En subsidio, en caso de estimarse que la norma anterior no es aplicable en autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la demanda de autos, transcurrió con creces el plazo que establece el artículo 2.515 del Código Civil.

b. Generalidades sobre la prescripción. Aduce que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, citando doctrina al efecto. Expresa que, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Que la prescripción es una institución universal y de orden público. Que las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagra y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a

todo el derecho y no solo al derecho privado. Que entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor cita. Que, esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por las leyes y reglamentos especiales. Adosa que toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2.514 y 2.515 del Código Civil.

c. Fundamento de la prescripción. Comunica que, la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Que los planteamientos doctrinarios de los que se vale, le permiten concluir que la prescripción, es una institución estabilizadora. Que está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas, continua sus argumentos en ese contexto. Finalmente, refiere que en la especie, el ejercicio de la acción indemnizatoria ha sido posible durante un número significativo de años, desde que los demandantes estuvieron en situación de hacerlo.

d. Jurisprudencia sobre la materia. Cita jurisprudencia y reflexiona en ese ámbito, en lo pertinente el fallo de la Excma. Corte Suprema del 21 de enero de 2013 el cual alega que el principio general que debe regir la materia es la de la prescriptibilidad de la acción de reparación civil. Que el plazo no debe contarse desde la desaparición del secuestrado, sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de Justicia.

e. Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria. Ilustra que, la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo

para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. Que debe considerarse, lo planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraria la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece- como se dicho- al ámbito patrimonial.

f. Normas contenidas en el Derecho Internacional. Funda que en relación con las alegaciones expuestas por las actoras en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en ese sentido, se hace cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, aduce que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia. No habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2.332 y 2.497 del Código Civil, solicitando que con el mérito de lo expuesto se rechazase íntegramente la demanda, por encontrarse prescritas las acciones civiles deducidas.

D. En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas. Vislumbra que en subsidio de las defensas y excepciones precedentes, opone alegaciones en cuanto a la naturaleza de las acciones indemnizatorias solicitadas y los montos pretendidos. Alega que los demandantes como compensación del daño moral solicitan una cifra absolutamente excesiva.

1. Fijación de la indemnización por daño moral. Que con relación al daño moral debe considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades morales. En términos generales refiere que la indemnización de perjuicios tiene por objeto

restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgándole a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido. Citando la definición que ha realizado la Excmá. Corte Suprema al respecto sobre el perjuicio moral.

2. En subsidio de las excepciones precedentes de reparación satisfactiva y de prescripción, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales. Fundamenta que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

3. Improcedencia del pago de reajustes e intereses con anterioridad a que la sentencia se encuentre ejecutoriada y se requiere legalmente su cumplimiento. Hace presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Realiza argumentos en esa línea citando jurisprudencia de los tribunales superiores. Luego expresa que, en el hipotético caso de que se resolviera acoger las acciones de autos y se condene a su representado al pago de indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoria y su representado incurra en mora.

34°) Que haciéndonos cargo de la contestación de la demanda efectuada por el Fisco de Chile, reflexionaremos de la siguiente manera:

Para un mejor entendimiento de la contestación efectuada por el Fisco de Chile, se estructurará su presentación de la siguiente forma:

A. Falta de legitimación activa de la demandante doña Juana Millalén Lepilao-Tralcal en cuanto alega ser víctima por repercusión, en calidad de hija de la víctima directa don Ceferino Millalen Peralta.

B. En subsidio, improcedencia de la indemnización demandada por doña Juana Millalén Lepilao-Tralcal, por limitación de la justicia transicional y por haber sido reparada en la forma que se expresara.

C. Excepción de reparación satisfactiva: Improcedencia de las indemnizaciones reclamadas por haber sido ya indemnizados los demandantes en conformidad a las leyes de reparación.

D. Excepción de prescripción extintiva.

E. En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas.

A. Falta de legitimación activa de la demandante doña Juana Millalén Lepilao- Tralcal en cuanto alega ser víctima por repercusión, en calidad de hija de la víctima directa don Ceferino Millalén Peralta. Este Tribunal estima que no existe ninguna norma donde se indique que los familiares, ya sea cónyuge, hermanos, convivientes, nietos o hijos (como en el caso de autos) u otros de víctimas de violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el régimen militar año 1973 y siguientes, no puedan demandar por indemnización por daño moral. Por lo que el acusado y demandado civilmente de autos, sí puede ser sujeto pasivo de una acción indemnizatoria (tal como sucede en la presente causa). **En consecuencia, el Tribunal rechazará esta excepción, como se dirá en lo resolutivo del fallo.**

A.I) Este tribunal ya se ha pronunciado sobre esta materia en las siguientes causas, donde ha demandado civilmente: **la Sentencia Definitiva de 25 de febrero de 2021 en causa rol 45.365**, causa en donde es posible encontrar como querellantes y demandantes civiles a quienes invocan además la calidad de **hermanos** de la víctima de autos; **la Sentencia Definitiva de 30 de abril de 2021 en causa rol 114.051** causa en donde es posible encontrar como querellantes y demandantes civiles a quienes invocan además la calidad de **hermanos** de la víctima de autos; **la Sentencia Definitiva de 11 de junio de 2021 en causa rol 45.364**, causa en donde es posible encontrar como demandante civil a quien invoca además la calidad de **prima** de la víctima de autos; **la Sentencia Definitiva de 03 de septiembre de 2021 en causa rol 114.103**, causa en donde es posible encontrar como querellantes y demandantes civiles a quienes invocan además la calidad de **hermanos** de la víctima de autos; y **la Sentencia Definitiva de 22 de septiembre de 2021 en causa rol 45.367**, causa en donde es posible encontrar como querellantes y demandantes civiles a quienes invocan la calidad de **hermanos** de la víctima de autos. **Causa rol 114.017** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, donde es posible encontrar como demandante civil a quien invoca la calidad de nieto de la víctima.

2. Sobre esta materia citar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos *Bamaca Velázquez vs Guatemala*, que en su párrafo 160

expresa: “Esta Corte ha señalado, en otras oportunidades, que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. En un caso que involucraba la desaparición forzada de una persona, el Tribunal afirmó que la violación de la integridad psíquica y moral de dichos familiares es una consecuencia directa, precisamente, de la desaparición forzada. En particular, la Corte consideró que las “circunstancias de dicha desaparición generan sufrimiento y angustia, además de un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia ante la abstención de las autoridades públicas de investigar los hechos”. (...) lo mismo en el párrafo 163 “Recientemente dicha Corte desarrolló aún más el concepto, resaltando que entre los extremos a ser considerados se encuentran también los siguientes: la proximidad del vínculo familiar, las circunstancias particulares de la relación con la víctima, el grado en el cual el familiar fue testigo de los eventos relacionados con la desaparición, la forma en que el familiar se involucró respecto a los intentos de obtener información sobre la desaparición de la víctima y la respuesta ofrecida por el Estado a las gestiones incoadas. (...). En el mismo sentido el caso Cantoral Benavides vs Perú, párrafo 186; González y otras vs México 2009, párrafos 248 a 260; Caso Aloeboetoe vs Surinam 1993. En consecuencia, el Tribunal también rechazará esta excepción, como se dirá en lo resolutivo del fallo.

B) En cuanto a las excepciones de las letras B y C precedentes el Tribunal reflexiona de la siguiente manera: esto es letras B. En subsidio, improcedencia de la indemnización demandada por doña Juana Millalén Lepilao-Tralcal, por limitación de la justicia transicional y por haber sido reparada en la forma que se expresara. Y letra **C.** Excepción de reparación satisfactiva: Improcedencia de las indemnizaciones reclamadas por haber sido ya indemnizados los demandantes en conformidad a las leyes de reparación. Las excepciones antes referidas, serán rechazadas por el Tribunal y así se estará en lo resolutivo, es especial por los siguientes fundamentos ya ponderados en las siguientes causas:

1. Causa rol 27.525 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014;

2. Causa rol 27.526 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014;

3. Causa rol 45.345 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014;

4. Causa rol 113.990 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015;

5. Causa rol 113.989, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016;

6. Causa rol 18.780 del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015;

7. Causa rol 29.877, del ingreso del Juzgado de Letras de Pitruftuén, seguida por el delito de homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016;

8. Causa rol 45.344, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016;

9. Causa rol 45.371, del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016,

10. Causa rol 45.342, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumercindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015;

11. Causa rol 29.869, del Juzgado de Letras de Pitruftuén, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016;

12. Causa rol 27.527, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016;

13. Causa rol 114.001, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016;

14. ñ. Causa rol 113.986, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016;

15. Causa rol 63.541, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016;

16. Causa rol 45.363, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017;

17. Causa rol 114.048, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017;

18. Causa rol 10.868, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017;

19. Causa rol 114.003, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017;

20. Causa rol 10.851, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, seguida por el homicidio simple, en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 20 de enero de 2016;

21. Causa rol 45.343, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaquimil, Julio Augusto Ñirripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 31 de agosto de 2017;

22. Causa rol 57.071, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el Homicidio Calificado en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia del 12 de octubre de 2017,

23. Causa rol 113.997, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco para investigar el delito de Secuestro Calificado en la persona de Segundo

Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia del 19 de enero de 2018;

24. Causa rol 45.354, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el Secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia del 03 de agosto de 2020;

25. Causa rol 45.361, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020;

26. Causa rol 114.000, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020;

27. Causa rol 4-2010, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018;

28. Causa rol 45.362, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018;

29. Causa rol 114.007, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018;

30. Causa rol 114.042, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018.

31. Causa rol 113.996, del Primer Juzgado del crimen de Temuco, seguida por el Homicidio calificado y apremios ilegítimos en la persona de Tomás Segundo Esparza Osorio y apremios ilegítimos en la persona de Javier Enrique Esparza Osorio, sentencia de 30 de junio de 2018.

32. Causa rol 29.979 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado de Domingo Obreque Obreque, sentencia de 07 de abril de 2014.

33. Causa rol 45.365, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Luis Armando Horn Roa, sentencia de 25 de febrero de 2021.

34. Causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Pedro Millalén Huenchuñir, sentencia de 11 de mayo de 2022.

35. Causa rol 44.305 del juzgado del Crimen de Puerto Varas, seguida por el homicidio calificado en las personas de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, sentencia de 25 de enero de 2019.

36. Causa rol 45.368 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de José Bernardino Cuevas, sentencia de 30 de marzo de 2019.

37. Causa rol 113.991 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Ramón Carrero Chanqueo, sentencia de 21 de noviembre de 2022.

38. Causa rol 113.478 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Luis Omar Torres Antinao, sentencia de 13 de junio de 2019.

39. Causa rol 114.051 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el secuestro calificado de José Edulio Muñoz Concha, sentencia de 30 de abril de 2021.

40. Causa rol 5-2013 del ingreso de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por delito de aplicación de tormentos en la persona de Harry Cohen Vera.

41. Causa rol 63.551 de ingreso del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el delito de homicidio calificado en la persona de Patricio Rivas Sepúlveda.

42. Causa rol 113.969 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera.

43. Causa rol 114.034 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de apremios ilegítimos de Luis Alberto Chihuailaf Arriagada, sentencia del 02 de agosto de 2022;

44. Causa rol 24.428 del Juzgado de Letras de Traiguén, seguida por los apremios ilegítimos de Antonio Inostroza Segura y otros, sentencia del 30 de octubre de 2023.

45. Causa rol 10.914-P del Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por aplicación de tormentos y detención ilegal, sentencia del 09 de agosto de 2022. Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados que han rechazado los argumentos reiterados en el tiempo sobre estas excepciones que ha interpuesto el FISCO de Chile.

a. Sobre lo anterior, además se reitera que esta excepción será rechazada. En efecto, cabe hacer presente que el demandando no señala ninguna norma de las leyes que cita, donde se indique que los familiares, ya sea cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas de violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el régimen militar año 1973 y siguientes, no puedan demandar por indemnización por daño moral. Por qué no la cita: primero porque no existe y segundo porque en el ordenamiento jurídico chileno, tratándose de violaciones a los Derechos Humanos y por las obligaciones generales establecidas en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es, respetar, garantizar, y no discriminar en el goce y ejercicio de los derechos y libertades, no es posible obstruir a persona alguna el derecho de acceso a la justicia (artículos 8 y 25 de dicha Convención). No es óbice interponer las acciones civiles respectivas por el daño causado a las víctimas por violación a los Derechos Humanos y las reparaciones y prestaciones estatales de todo tipo que pueda otorgar el Estado en cumplimiento a los estándares internacionales. En este punto se seguirá la línea jurisprudencial desarrollada **en fallos por la Excma. Corte Suprema**, en especial: El fallo de 01 de abril de 2014, **rol 1424-2013**, sentencia de remplazo, considerando 13°, motivo que también cita fallos en el mismo sentido, roles N° 2918-13, N°3841-12 y N°5436-10. Que en síntesis expresa, en relación a la improcedencia alegada por el Fisco de Chile, que esta no es efectiva. Así en términos precisos: (...) “la acción civil es la obtención de la compensación íntegra de los daños ocasionados por el actuar de los Agentes del Estado de Chile. Las disposiciones de derecho internacional deben tener aplicación preferente en nuestro régimen jurídico al tenor del artículo 5° de la Constitución Política de la República”. Del mismo modo el hecho que la demandante hayan sido favorecida por el Estado

por la Ley 19.123 y leyes posteriores no es óbice para demandar civilmente (tanto la cónyuge, los hijos y los hermanos) toda vez que la citada Ley no establece de modo alguno la incompatibilidad que reclama el Fisco de Chile.

B. Que en cuanto a la excepción de prescripción extintiva del artículo 2.332 en relación a los artículos 2.497 y 2.515 en relación al artículo 2.514 del Código Civil: También será rechazada. Este Tribunal, en igual sentido, estará a lo ya resuelto por la Excma. Corte Suprema en el fallo de remplazo rol 1424-2013 de 1 de abril de 2014, considerando 11°, el cual en síntesis y en lo pertinente, señala que tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio Derecho Interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 y su posterior modificación contenida en la Ley N°19.980, reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973- 1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Verdad y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. Por consiguiente, agrega la Excma. Corte Suprema, cualquier diferenciación efectuada por el juez, en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama. Como se aprecia, la Excma. Corte Suprema de manera sostenida en el tiempo ha rechazado esta excepción de prescripción extintiva, como se puede observar en este fallo y otros posteriores, como en causas roles 15.294-2018 y 2.471-18 del ingreso de la Excma. Corte Suprema, entre otros. Sobre la materia también es importante señalar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros vs Chile” de fecha 29 de Noviembre de 2018, el que se relaciona con la alegada responsabilidad del Estado por violación de los

derechos a las garantías judiciales y protección judicial como consecuencia de la aplicación de la figura de prescripción de acciones civiles de reparación relacionadas con crímenes de lesa humanidad. Las presuntas víctimas son siete grupos de personas que, entre 1997 y 2001, interpusieron por separado siete acciones civiles de indemnización de perjuicios, en razón del secuestro y desaparición o ejecución de sus familiares por parte de agentes estatales en 1973 y 1974, durante la dictadura militar. Tales acciones fueron rechazadas entre 1999 y 2003, por juzgados, Tribunales de apelación o la Corte Suprema de Justicia, con base en la aplicación del plazo de la figura de prescripción establecida en el Código Civil. Si bien las presuntas víctimas han recibido una pensión mensual administrativa en virtud de lo dispuesto en la Ley 19.123 de 1992, así como otros beneficios en algunos casos (bono de reparación o bonificación compensatoria), la Comisión consideró que la existencia de un programa administrativo de reparaciones no excluye la posibilidad de que las víctimas de graves violaciones opten por reclamar reparación por vía judicial y que, tratándose de crímenes de lesa humanidad, es desproporcionado negarles sus derechos a una reparación bajo el argumento de prescripción. Sobre estos hechos, en el párrafo 13, el Estado de Chile acepta los hechos que se han tenido por probados por la Comisión en el Capítulo IV de su Informe. En los puntos resolutivos la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado de Chile por violación al derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y se ordena además al Estado a pagar determinadas sumas dinero.

C. En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas:

a) Que en un examen somero de las siguientes Constituciones Chilenas la expresión para referirse a los Tribunales, es “Tribunales de Justicia”. De esta forma, lo hacían los siguientes textos: de 1822, capítulo I, artículo 158, donde a los Tribunales se les denominada “Tribunales de Justicia”; de 1823, título XIII, artículo 143, “Suprema Corte de Justicia”; de 1833, capítulo VIII, “De la administración de justicia”; de 1925, artículos 23 y 39, aluden a la expresión “Tribunales de Justicia”; de 1980, artículos 45, 52 N°2 letra c) y 76 se refieren a la expresión “Tribunales de Justicia”. En consecuencia, la tradición constitucional, constata que el nombre para

referirse a los Tribunales para que ejerzan su función no es de Tribunales de Ley, Tribunales de Derecho, Tribunales de Jurisprudencia, Tribunales de administración, sino que es Tribunales de Justicia, lo que significa que tienen una conexión directa con este valor e ideal Constitucional. Por lo tanto, siempre los Tribunales en conformidad, además, al Código Iberoamericano de Ética Judicial, vigente en Chile para los magistrados, en su artículo 35 señala: “el fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del Derecho”. Con mayor énfasis los jueces, frente a casos extraordinarios, únicos, irrepetibles que puedan suceder en una República, los Tribunales deben considerar la colisión que pueda producirse entre el Derecho positivo y la Justicia, debiendo considerarse, además, que la Corte de Apelaciones de Temuco ya recogió esta tradición constitucional de principios y valores en el fallo rol 45-2008 de 1 de septiembre de 2008, recaído en la causa rol 113.959 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, caso “Curiñir Lincoqueo”. Sólo a modo de ejemplo, ya que hay muchos sobre la materia, la Corte Constitucional Federal de la Republica Bonn, en una decisión ya en 1953, citando a Radbruch, declaró que en interés de la seguridad jurídica, un conflicto entre una prescripción de Derecho positivo y la justicia de fondo se resuelve normalmente en favor de la primera; sin embargo, cuando la discrepancia entre una ley positiva y la justicia llega a un grado intolerable, la ley por ser derecho injusto, debe ceder ante la justicia (Antonio Pedrals: Atisbos de Supralegalidad en el ordenamiento positivo. Universidad de Valparaíso, 1982, pág. 584). Que en este caso es aplicable, a propósito de la indemnización reclamada.

b. Que asimismo podemos decir que la naturaleza humana es de tal condición que adquiere un deseo de actuar justamente cuando hemos vivido en un marco de Instituciones justas y nos hemos beneficiado de ellas. (John Rawls. Una Teoría de la Justicia. Fondo de Cultura Económica, año 2006, página 412).

c. Que en la misma línea, el autor citado en su obra Liberalismo Político, igual editorial, año 2013, páginas 224 y 225, donde expresa que los Tribunales cuando deban decidir los casos deben recurrir a los valores políticos que en su opinión pertenecen a la comprensión más razonable del concepto público de la justicia y a sus valores políticos de justicia y de razón pública (esto no tiene que ver con su propia moral personal) pues, los valores anotados son los valores que la ciudadanía y en general todos creen de buena fe, como les exige el deber de

civilidad y que se espera que suscriban todos los ciudadanos en tanto personas razonables y racionales. Agrega este Tribunal que el valor justicia consagrado en nuestras Constituciones por lo menos desde 1822, es un acervo que cualquier ciudadano de una república independiente y soberana, como la chilena, adhiere.

d. Que continuando con lo anterior yendo más al fondo en esta introducción, si uno analiza, incluso, el desarrollo del Derecho Civil y su interpretación, como lo hizo Alejandro Guzmán Brito en su artículo, La historia Dogmática de las Normas sobre Interpretación recibidas por el Código Civil de Chile, (Interpretación, Integración y razonamientos Jurídicos Editorial Jurídica de Chile, año 1992, página 77) en cuanto a que toda la evolución del derecho civil desarrollado por los jurisconsultos romanos y sus sucesores puede entenderse al Derecho como equidad constituida, lo mismo podemos decir con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de Derechos Humanos, en especial en materia de reparación integral a las víctimas. Aquí el Derecho es equidad constituida. Del mismo modo, en materia de reparaciones, el autor chileno Claudio Nash Rojas, que ha hecho un estudio sistemático y completo hasta ahora en su libro “Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1988 - 2007” (editorial Facultad de Derecho Universidad de Chile, Centro de Derechos Humanos) y también en su libro “Responsabilidad Internacional Del Estado En La Jurisprudencia Internacional y La Experiencia Chilena” (Editorial Legal Publishing) donde manifiesta en forma clara, en las páginas 67 y siguientes del primero, que la Corte Interamericana ha señalado que en aquellos casos en que se han producido violaciones de los derechos y libertades convencionales, el Estado tiene el deber de actuar en el ámbito interno de forma tal que se determine la verdad de los hechos violatorios de la Convención, se juzgue y sancione a los responsables y se repare a las víctimas. Todo ello en el entendido que las situaciones de impunidad pueden inducir a futuras violaciones de Derechos Humanos. Agrega, además, este Tribunal, que lo anterior se ve refrendado por el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo mismo en el segundo libro del autor mencionado, página 183, donde luego de hacer un análisis exhaustivo de la jurisprudencia chilena, concluye que la reparación siempre debe ser integral porque se debe prestar atención a la persona de la víctima y no el Estado victimario y, además, en el ámbito interno, el Estado tiene la

obligación de evitar cualquiera interpretación que impida en pleno cumplimiento que signifique la reparación integral de la víctima. Que finalmente, hay que considerar el artículo de Alejandro Vergara Blanco, publicado en el Diario El Mercurio, el 30 de mayo de 2013, titulado “Ley Natural, Reglas o Principios Jurídicos: ¿Dónde está el Derecho?”. El autor acota que el derecho es aquel que sufre o goza cada sociedad en su tiempo, no aquel ideal de cada filósofo del derecho y añade, a propósito de un fallo de la Corte Suprema, de los consumidores de las empresas del comercio detallista, y se pregunta ¿Cuál era el Derecho? ¿El que provenía de una antigua ley supuestamente obedecida? ¿El de alguna Ley Natural? O ¿El que dijo la sentencia de la Corte Suprema? Y añade que la respuesta social fue esta última, pues todos los actores adquirieron la convicción de que sólo después de tal sentencia, habían cambiado las reglas. Continúa, ¿La Corte Suprema aplicó las reglas, la ley natural o un principio jurídico? Y se responde indicando que la respuesta es esta última, aplicó un principio jurídico y expresó que eso no es ni positivismo, ni lus Naturalismo, es Derecho. En el caso en estudio, dictado por la Corte Suprema, sentencia rol 1424-2013, de 1 de abril de 2014, ya el máximo Tribunal, lo que hizo, como en muchos otros casos, aplicó un principio jurídico ya establecido en la comunidad jurídica internacional, específicamente en la Convención Americana en su artículo 63, el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, como también lo ha manifestado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es, realizado un daño por el Estado y acreditado éste, la víctima debe ser reparada íntegramente. Finalmente, el mismo Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, establece el principio ex aequo et bono (De acuerdo con lo correcto y lo bueno).

e. Que respecto a la responsabilidad civil del Estado, este Tribunal se ceñirá a las sentencias antes aludidas dictadas por este Ministro Visitador y en especial a la sentencia de la Sala Penal de la Excma. Corte Suprema, de fecha 1 de abril de 2014, rol N° 1424-13, que en su considerando décimo, en síntesis y en lo pertinente, señala que la responsabilidad del Estado, que se pretende hacer efectiva deriva, por un lado, de la comisión de hechos ilícitos por parte de sus agentes y, por el otro, de normas constitucionales precisas y de leyes de igual rango, que han sido incorporadas al Ordenamiento Jurídico Nacional, como lo son las obligaciones contempladas por los instrumentos internacionales que recogen los

principios generales del Derecho Humanitario, entre los cuales se encuentra aquel relativo a la obligación de indemnizar los daños producidos por la violación de los derechos humanos. En consecuencia, se procede a rechazar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile.

f. Que siguiendo la misma línea de la sentencia citada, en cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas, sobre esta materia este Tribunal estará a lo que ha resuelto en fallos precedentes en los últimos años, tratándose de cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas y al estándar que ha dispuesto además la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la sentencia citada y los promedios habituales fijados por los Tribunales superiores de justicia en el último tiempo. Sobre este punto la Excma. Corte Suprema ha tenido la oportunidad de pronunciarse en la causa rol N°5572-2029, caratulados Schuster Pinto Macarena y otros, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios contra Fisco de Chile, en sentencia del 29 de mayo de 2020, a propósito de la tragedia ocurrida en la isla Juan Fernández, que ante un hecho trágico de esta naturaleza para los actores (viuda e hijos), fijó la suma de \$150.000.000 para cada uno.

g. Que el fallo de 05 de agosto de 2021, rol 82-2021, sentencia de remplazo que en expresa en su considerando Décimo Quinto:...“Que la responsabilidad del Estado Administrador, a partir una interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7° y 38 de la Constitución Política de la República en relación a los artículos 4° y 42 del D.F.L N°1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (en adelante Ley N°18.575 actualizada), ha evolucionado hasta llegar a un estado pacífico, en cuanto a sostener que dicho instituto se funda exclusivamente en las referidas normas y tiene como factor de imputación la “falta de servicio”, que se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo, lo hace en forma irregular y/o lo hace tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria. Es importante precisar que la norma del inciso segundo del artículo 21 de la Ley N° 18.575 actualizada, no excluye la aplicación del concepto de falta de servicio y el

consecuente régimen de responsabilidad de Derecho Público a las Fuerzas Armadas, toda vez que tal norma no afecta la disposición del artículo 4°, piedra angular de la responsabilidad de los órganos del Estado, por lo que a su respecto debe atenderse a la concepción de la Administración que expresa el inciso segundo del artículo 1° del mencionado cuerpo de leyes, de forma tal que, sin duda alguna, este régimen de responsabilidad se aplica a las Fuerzas Armadas, como a las de Orden y Seguridad Pública”. En este sentido, en su parte resolutive “se revoca la sentencia apelada de 13 de septiembre de 2018 dictada, en cuanto rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio y, en su lugar, se declara que la acoge sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar a favor de cada uno de los actores la suma de \$250.000.000 por concepto de daño moral, la que deberá reajustarse conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha en que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada y el mes anterior al pago efectivo, e intereses desde que esta sentencia quede firme”.

h. Que razonado lo anterior, éste sentenciador, sobre las indemnizaciones reclamadas, estará a una ponderación acorde con los daños ocasionados que se desprenden del mérito del proceso y del ilícito cometido. Teniendo presente que aquí se trata de actuaciones de agentes del Estado que han cometido Delitos de Lesa Humanidad. Habiendo por otro lado, la Excma. Corte Suprema fijado nuevo estándar sobre las indemnizaciones y la actuación del Estado para casos por falta de servicio. En consecuencia, aparece justo y razonable que se otorgue un monto conforme al mérito del proceso y al daño ocasionado.

D. Improcedencia del pago de reajustes e intereses con anterioridad a que la sentencia definitiva quede ejecutoriada. Que como ha venido razonando este Tribunal en las sentencias citadas anteriormente, efectivamente como lo plantea el Fisco de Chile, para el caso de que se condene a pagar a los actores una indemnización determinada, este pago debe devengarse desde que la sentencia se encuentra firme o ejecutoriada y el demandado se encuentre en mora.

F. Respecto de las costas de la causa: Que no obstante el fallo de la Corte IDH caso “**Órdenes Guerra y otros versus Chile**” de fecha 29 de Noviembre de 2018. Este demandado sigue insistiendo repetidamente que deben rechazar estas acciones, que no se debe pagar a las víctimas, invocando además la

prescripción; ahora bien los últimos fallos que rechazan la prescripción por parte de la Excm. Corte Suprema. Luego si ha sido vencido en el juicio, debe pagar las costas.

35°) Que con el fin de probar el daño moral sufrido por los demandantes civiles, desde esa fecha hasta la actualidad, como consecuencia de los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos en contra de las víctimas de Pedro Ñirripil Paillal, Juan Segundo Tralcal Colileo, Ceferino Millalén Peralta, Manuel Martínez Ulloa, Octavio Renato Catalán Lincoleo, Tomas Raúl Catalán Lincoleo y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, se presentaron los siguientes antecedentes:

A. Informe psicológico de Juana del Carmen Millalén Lepilao Tralcal confeccionado por la psicóloga Nicole Osses Jara que en lo pertinente concluye que: “sintomatología depresiva infantil, ansiedad de separación, trauma complejo del desarrollo”, rolante **de fs. 1.222 a fs. 1.228 (Tomo V)**.

B. Informe psicológico de Juan Segundo Tralcal Colileo de **fs. 1.229 a fs. 1.233 (Tomo V)**, confeccionado por la psicóloga Nicole Osses Jara, que en lo pertinente concluye que: “la recogida de antecedentes es fidedigna y que el evaluado vive eventos traumáticos que impactan a la fecha en su desempeño social y salud mental. Presenta una reducción acusada del interés o a la participación en actividades significativas.”

C. Informe psicológico de Daniel Manuel Navarro Campos de **fs. 1234 a fs. 1.239 (Tomo V)**, confeccionado por la psicóloga Nicole Osses Jara, que en lo pertinente concluye que: “es posible apreciar sintomatología depresiva asociada a los eventos estresantes de maltrato severo que vienen a representar la vulneración de los derechos fundamentales de un ser humano y daño moral y psicológico, así como sintomatología de estrés pos trauma.”

D. Declaración del testigo Luis Alberto Gaminio Villagrán de **fs. 1243 a fs. 1244 (Tomo V)**, debidamente examinado y libre de tacha que es conteste en deponer que conoce a Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, describe que fue maltratado, golpeado y su tío Sergio Navarro es detenido desaparecido. El niño quedo sólo con los animales viviendo, así que el deponente lo iba a buscar para llevarlo a su casa y darle comida. Asevera que conoce a Domingo Campos Collao, porque él salía al campo y maltrataba gente. Pero no existía enemistad.

E. Declaración de los testigos Jorge Antonio Mila Maricura de **fs. 1245 (Tomo V)** y Oscar Segundo Lepilao- Tralcal Guajardo **de fs. 1246 (Tomo V)**, quienes debidamente examinados y libres de tacha exponen que el primero de ellos depone que conoce a Pedro Ñirripil Paillal, Juan Segundo Tralcal Colileo, quienes fueron perseguidos por el régimen militar en el año 1973. Así también conoce a Juana del Carmen Millalén Lepilao Tralcal, Juan Segundo Tralcal y Daniel Edgardo Navarro Campos, todos golpeados, ya sea por militares, carabineros e investigaciones. Dice que tenía contacto social porque eran del mismo sector. Espeta que la machi Juana Millalén fue perseguida por ser hija de Juan Segundo Tralcal. El segundo deponente dice que conoce Pedro Ñirripil Paillal, Juan Segundo Tralcal Colileo y Juana del Carmen Millalén Lepilao Tralcal, a los cuales conoce por ser de la misma comunidad, a saber Blanco Lepin. Espeta que ellos fueron perseguidos constantemente y hasta el día de hoy están traumatados.

F. Informe psicológico de Pedro Ñirripil Paillal de **fs. 1248 a fs. 1.252 (Tomo V)**, confeccionado por la psicóloga Nicole Osses Jara que en lo pertinente concluye que: “Se aprecia sintomatología de trastorno de estrés por trauma”

G. Declaración de Nicole Osses Jara debidamente examinada y libre de tacha que en lo pertinente expone que: Pedro Ñirripil Paillal, Juan Segundo Tralcal Colileo, Juan del Carmen Millalén Lepilao Tralcal y Daniel Manuel Edgardo Navarro los conoce por una relación profesional. Refiere que de los antecedentes recogidos dan cuenta de un impacto negativo a causa de tortura, detención ilegal, desaparición e instancias de subyugación que afectaron la dinámica biopsicosocial de los evaluados.

H. Certificados de nacimientos emitidos por el Registro Civil e Identificación acompañados a la demanda civil que a continuación se desglosan de la siguiente manera:

a. Certificado de nacimiento de Juana del Carmen Millalén Lepilao- Tralcal de **fs. 1166 (Tomo V)** que consta sus padres son Ceferino Millalén Peralta y Rosa del Carmen Lepilao Tralcal Guajardo.

b. Certificado de nacimiento de Pedro Ñirripil Paillal que consta nació el 25 de febrero de 1940, **rolante de fs. 1167 (Tomo V)**.

c. Certificado de nacimiento de Juan Segundo Tralcal Colileo de **fs. 1168 (Tomo V)**, de fecha 10 de julio de 1944.

d. Certificado de nacimiento de Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos de fs. 1169 (Tomo V) de fecha 7 de noviembre de 1957.

36°) Que tal como se razonó también en los considerandos respecto de la declaración indagatoria y análisis de la defensa, si bien están acreditados los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos en contra de Juan Tralcal Colileo y de Ceferino Millalén peralta, el tribunal igualmente puede pronunciarse sobre la indemnización civil. Así se ha pronunciado la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco en causa rol penal N°382-2021 del 2 de mayo de 2022. Que en su considerando decimo octavo señala: “Al respecto consideraremos lo analizado por nuestra Excelentísima Corte Suprema en la causa rol C 25.048-2015 que señala que el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil establece una regla general en materia de cosa juzgada criminal en sede civil: no se podrá hacer valer la misma, sino en los casos excepcionales que establece la misma norma. Uno de los referidos casos es el de la no existencia del delito o cuasidelito que ha sido materia del proceso, siempre que la absolución o sobreseimiento no provenga de circunstancias que eximan de responsabilidad penal. Resulta procedente, respecto a nuestro caso, tener presente lo señalado por Stoeihrel Maes (De las Disposiciones Comunes a Todo procedimiento y de los Incidentes , Editorial Jurídica, año 1995), quien analiza la norma del artículo 179 N° 1 distinguiendo cuatro situaciones que podrían ocurrir, la que nos interesa se refiere a que a pesar de existir los hechos y de estar probados, concurren respecto del autor circunstancias eximentes de responsabilidad penal. En nuestro caso, concurre la absolución del condenado, es decir, se encuentra acreditado el delito, que éste fue cometido por agentes del Estado, pero no se ha podido condenar a o los autores y en este caso, al cómplice. En esta situación, el mismo artículo 179 N° 1 se ha encargado de señalar que no se producirá el efecto de cosa juzgada. La Excma. Corte Suprema estimó acoger la casación en el fondo, en la causa en comento, estableciendo que no correspondía acoger la excepción de cosa juzgada, toda vez que el hecho invocado existió, fue probado y era apto para fundamentar una acción indemnizatoria, ya que, a pesar de no configurar un delito penal, si podría llegar a configurar un ilícito civil.

En el mismo sentido podemos mencionar la sentencia dictada en causa rol 6.345-2011, del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Chile Chico, seguida por el Homicidio Calificado de José Ananías Zapata Carrasco

37°) Que ponderando tales documentos y testigos, teniendo además presente que de acuerdo a lo expuesto latamente en esta sentencia, el daño moral que reclaman los actores, provocado por los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos de Pedro Ñirripil Paillal, Ceferino Millalén Peralta, Juan Tralcal Colileo y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, por agentes del Estado de dotación de la Comisaría de Lautaro y dotación de regimientos militares del sector de Lautaro **está plenamente acreditado**. Que en la especie se ha establecido la concurrencia de todos los requisitos que hacen procedentes las indemnizaciones que se demanda, esto es: **a)** la perpetración de los delitos por agentes del Estado; **b)** la existencia de un daño sufrido por los demandantes; y **c)** la concurrencia del nexo causal entre estos y aquellos. Respecto del quantum de la indemnización, si bien tal daño, por su carácter inmaterial, es difícil de cuantificar, no es menos cierto que debe ser considerada la prolongación del dolor sufrido por los actores y considerando la restitución integral, aparece adecuado, congruente y lógico según lo que se ha dicho sobre los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los promedios fijados por los Tribunales superiores de justicia, fijar como indemnización para los actores, por los ilícitos de detención ilegal y apremios ilegítimos de Pedro Ñirripil Paillal, Ceferino Millalén Peralta, Juan Tralcal Colileo y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, cometido por los agentes del Estado, **la suma de:**

A. \$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos) para **Pedro Ñirripil Paillal**, víctima de la presente causa.

B. \$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos) para **Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos**, víctima de la presente causa.

C. \$25.000.000 (veinticinco millones de pesos) para **Juan Segundo Tralcal Colileo**, víctima de la presente causa.-

D. \$15.000.000.- (quince millones de pesos) para **Juana Del Carmen Millalén Lepilao Tralcal**, hija de Ceferino Millalén Peralta.

Lo cual arroja la suma total es **\$120.000.000.- (ciento veinte millones de pesos)**, según el detalle indicado precedentemente.

38°) Que habiéndose fijado la suma a indemnizar y como se ha razonado precedentemente, ésta deberá ser reajustadas en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior que quede ejecutoriada la

sentencia y el mes anterior al de su pago, devengando intereses corrientes por el mismo período, más costas.

ASPECTOS RESOLUTIVOS.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 6, 7, 11 N° 6 y 9, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29,30, 50,56, 61, 68, 69,74,93,94, 148 y 150 N°1 **Código Penal**; artículos 10, 42, 43, 50, 51, 56, 67, 68 y siguientes, 81 a 84, 108 a 120, 121 y siguientes, 424 y siguientes,433, 447 y siguientes, 451 y siguientes, 456 bis, 457, 458 y siguientes, 460, 471 y siguientes, 474 y siguientes, 477 y siguientes, 481 y siguientes, 485 y siguientes, 488 y siguientes, 499, 500 y siguientes del **Código de Procedimiento Penal**; artículos 2.314 y siguientes del **Código Civil**; **Ley 18.575**; artículos 1, 5, 6 y 38 inciso 2° de la **Constitución Política de la República**; **Ley 18.216**; **Ley 19.123** y sus modificaciones posteriores; **Ley 19.980**; **Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra de 1949**, se declara:

EN CUANTO A LA ACCION PENAL:

I.QUE NO HA LUGAR a la excepción de fondo de prescripción de la acción penal interpuesta por el abogado Rodrigo Cortés Carrasco en representación de Domingo Antonio Campos Collao en su presentación de fojas 1.210 y siguientes (Tomo V).

II. QUE NO HA LUGAR a la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por el abogado Rodrigo Cortés Carrasco en representación de Domingo Antonio Campos Collao en su presentación de fojas 1.210 y siguientes (Tomo V).

III. QUE SE ABSUELVE a Domingo Antonio Campos Collao, R.U.N 2.582.797-k ya individualizado de los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos en las personas de Juan Segundo Tralcal Colileo y Ceferino Millalén Peralta,

III. QUE SE CONDENA con costas a **DOMINGO ANTONIO CAMPOS COLLAO, R.U.N 2.582.797-k** ya individualizado por los delitos consumados de detención ilegal y apremios ilegítimos en las personas de Pedro Ñirripil Paillal, Manuel Martínez Ulloa, Octavio Renato Catalán Lincoleo, Tomás Raúl Catalán Lincoleo y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, en su carácter de lesa humanidad, previsto y sancionado en el artículo 148 y 150 N°1 del Código Penal,

vigente a la época de los hechos, perpetrados en la comuna de Lautaro desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante, a las siguientes penas:

a) A la pena única de **3 AÑOS DE RECLUSIÓN MENOR EN SU GRADO MEDIO** y a la accesoria legal de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena **por los delitos de detención ilegal**, indicados previamente en su carácter de lesa humanidad previsto en el artículo 148 del Código penal vigente a la época de los hechos.

b) A la pena única **5 AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO** y a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, por los delitos de apremios ilegítimos, indicados previamente, en su carácter de lesa humanidad previstos y sancionados en el artículo 150 N°1 del Código Penal.

IV. Que al acusado **Domingo Antonio Campos Collao** según se expresó, no se le concederá algún beneficio de la ley N°18.216. En consecuencia, deberá cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, sirviéndole de abono los días que ha estado privado de libertad con motivo de este proceso, lo que se detalla de la siguiente forma:

ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL: Desde el 12 de septiembre de 2024, como consta a **fs.1.118 (Tomo IV)**, cuando es notificado del auto de procesamiento de **fs.1.052 s fs. 1.070 (Tomo IV)**, en virtud del cual se decreta su arresto domiciliario total. La cual quedó suspendida hasta el cumplimiento de condena respectiva en Centro Penitenciario Punta Peuco de Gendarmería de Chile. Por lo cual en la presenta causa no tiene abonos hasta la fecha.

V. Que la pena impuesta al condenado comenzara a regir desde que **se presente o sea habido en la presente causa**. Sin perjuicio que la pena impuesta al condenado Domingo Antonio Campos Collao comenzará a regir a continuación del cumplimiento de la condena privativa. Dese orden de ingreso en su oportunidad, una vez que la sentencia este ejecutoriada.

VI. Que una vez ejecutoriada la sentencia, deberán dejarse sin efecto las medidas cautelares personales impuestas al acusado, oficiándose a los organismos respectivos que fueren procedente.

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL:

VII.- Que **NO HA LUGAR** a las excepciones interpuestas por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Diego Acuña Gálvez, en su presentación de fs. 1190 a fs.1207 (Tomo V), esto es:

A. Falta de legitimación activa de Juana Millalén Lepilao-Tralcal.

B. Improcedencia de la indemnización demandada por Juana Millalén Lepilao-Tralcal, por limitación de la justicia transicional y por haber sido reparada en la forma.

C. Excepción de reparación satisfactiva. Improcedencia de las indemnizaciones reclamadas por haber sido ya reparados los demandantes en conformidad a las leyes de reparación.

D. Excepción de Prescripción extintiva. Sin perjuicio de lo razonado en los párrafos precedentes, respecto del monto de la indemnización y sobre la fecha en que deben aplicarse los reajustes e intereses.

VIII. Que HA LUGAR a la demanda civil interpuesta por el Abogado David Morales Troncoso en representación de 1) Pedro Ñirripil Paillal; 2) Juana del Carmen Millalén Lepilao Tralcal; 3) Juan Tralcal Colileo, 4) Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, de **fs. 1170 a fs. 1179 (Tomo V)**, en contra del Fisco de Chile, a las sumas de:

a) **\$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos)** para **Pedro Ñirripil Paillal**, víctima de la presente causa.

b) **\$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos)** para **Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos**, víctima de la presente causa.

c) **\$25.000.000 (veinticinco millones de pesos)** para **Juan Segundo Tralcal Colileo**, víctima de la presente causa. -

d) **\$15.000.000.- (quince millones de pesos)** para **Juana Del Carmen Millalén Lepilao Tralcal**, hija de Ceferino Millalén Peralta

Lo cual arroja la suma total es **\$120.000.000.- (ciento veinte millones de pesos)**, según se ha indicado precedentemente.

IX. La suma anterior deberá ser **reajustada en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor** entre el mes anterior a que la sentencia quede ejecutoriada y el mes anterior al de su pago; devengando intereses corrientes por el mismo período.

X. Que se condena en costas al FISCO de Chile por haber sido totalmente vencido.

Notifíquese esta sentencia personalmente al sentenciado, teniendo presente que el sentenciado se encuentra recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Colina I, diríjanse los exhortos pertinentes, facultándose al Tribunal para que cite a al sentenciado personalmente, bajo apercibimiento de arresto o se constituya en el recinto penal, realizando todas las diligencias para el oportuno cumplimiento de la notificación de esta sentencia, pronunciándose sobre las peticiones que hiciera el sentenciado en el acto de la notificación, en especial si presentara verbalmente recurso de apelación.

Notifíquese al abogado querellante y al abogado que representa al FISCO de Chile, a través de Receptor de turno del presente mes.

En caso de encontrarse alguno en secretaria del Tribunal, notifíqueseles personalmente.

Regístrese y cúmplase en su oportunidad, con lo que ordena el artículo **509 bis del Código de Procedimiento Penal**, comuníquese a los diferentes Tribunales en que se tramitaren procesos en contra del sentenciado para informarle sobre las decisiones del presente fallo y en su oportunidad, archívese.

Consúltase si no se apelare y archívese en su oportunidad.

Siendo un hecho ocurrido en el año 1973 remítase por la vía más expedita a la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial.

Rol N° 45.376

FIRMADIGITAL

Dictada por don **ÁLVARO MESA LATORRE**, Ministro en Visita Extraordinaria.

Apremios ilegítimos y detención ilegal de Pedro Ñirripil
Paillal y otros.
Sentencia Definitiva fojas 225.-

FIRMADIGITAL

Autoriza don Germán Varas Cicarelli, Secretario de la Ilma. Corte de
Apelaciones de Temuco.

En Temuco, a treinta de mayo de dos mil veinticinco, notifiqué por el estado
diario la resolución precedente (jfc)